

Aprendizajes para la reconciliación : experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras	Título
CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular - Autor/a; OIM, Organización Internacional para las Migraciones - Autor/a;	Autor(es)
Bogotá	Lugar
CINEP/PPP OIM	Editorial/Editor
2015	Fecha
	Colección
Comunidades de paz; Excombatientes; Posconflicto; Colombia;	Temas
Libro	Tipo de documento
" http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20161101061707/20150401.Aprendizajes_reconciliacion.pdf "	URL
Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

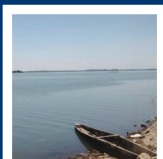
Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar



Aprendizajes para la reconciliación

Experiencias de reconciliación
entre excombatientes
y comunidades receptoras



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



Organización
Internacional
para las
Migraciones

Aprendizajes **para la reconciliación**

Experiencias de reconciliación
entre excombatientes
y comunidades receptoras

Aprendizajes para la reconciliación

Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras

©Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP)

Director general

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Subdirector

Sergio Coronado Delgado

Coordinador equipo de Ciudadanía y Paz

Fernando Sarmiento Santander

Coordinadora del proyecto “Aprendizajes para la convivencia pacífica: experiencias locales de procesos de reconciliación ciudadana entre excombatientes y pobladores en contextos urbanos y rurales”

Magda Beatriz López Cárdenas

Equipo de investigación

Magda Beatriz López Cárdenas

María Alejandra Arias Hernández

Andrea Gómez Ruiz

Camila Carvajal Oquendo

David Rampf

©Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Jefe de Misión

Alejandro Guidi

Coordinador del Programa de Reintegración con Enfoque Comunitario

Camilo Potes Sabogal

Gerente de Gestión del Conflicto y Construcción de Paz

Natalia Delgado

Monitoras de Gestión del Conflicto y Construcción de Paz

Ana María Arciniegas

Ana María Jiménez

Coordinador Unidad de Prensa e Información Pública

Jorge Andrés Gallo

Responsable de Prensa e Información Pública, Programa de Reintegración con Enfoque Comunitario

Jadín Samit Vergara

Equipo de producción editorial

Coordinación editorial

Margareth Figueroa Garzón

Corrección de estilo

Casa Nabú Servicios Editoriales S.A.S.

Diseño y diagramación

Néstor Gantiva

Impresión

National Graphics Ltda.

Fotografías:

CINEP/PPP y OIM

CINEP/ Programa por la Paz (CINEP/PPP)

Carrera 5 # 33B - 02

PBX: (57-1) 2456181

Bogotá, D.C., Colombia

www.cinep.org.co

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Carrera 14 # 93B - 46

PBX: 6397777

Bogotá, D.C., Colombia

www.oim.org.co

Primera edición

Abril de 2015

ISBN: 978-958-644-194-0

Bogotá, D.C., Colombia

Impreso en Colombia / Printed in Colombia

Esta publicación es posible gracias al apoyo del Programa de Reintegración con Enfoque Comunitario de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que cuenta con el respaldo económico del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP) y de los autores, y no necesariamente reflejan la opinión de USAID o de la OIM.

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación para fines educativos u otros fines no comerciales, siempre que se cite la fuente.



Contenido

Agradecimientos.....	11
Introducción.....	13
Capítulo 1.	
Una propuesta para el análisis de experiencias de reconciliación entre comunidades receptoras y colectivos de excombatientes en Colombia.....	19
Analizar las experiencias desde sus mecanismos: ¿qué las potencia?, ¿qué las dificulta?	24
¿Cómo y por qué funcionan o no ciertas experiencias de reconciliación y reintegración?.....	28
Capítulo 2.	
Políticas de reintegración y noción de la reconciliación en Colombia: una mirada histórica.....	31
Política pública de paz: abordajes institucionales en los años 80.....	32
Fortalecimiento democrático y recrudescimiento de la guerra, procesos simultáneos en la década de los 90.....	38
Diálogos, rupturas y énfasis de la reinserción individual de excombatientes.....	42
La nueva institucionalidad, la justicia transicional y los nuevos retos a la reintegración y la reconciliación.....	46
Capítulo 3.	
Experiencias locales de procesos de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras.....	51
Experiencia de Ganchos y Amarras del Valle.....	53
<i>El contexto caleño: violencia, conservadurismo y filantropía.....</i>	55
<i>La historia de la experiencia de Ganchos y Amarras del Valle.....</i>	63
<i>Aprendizajes.....</i>	75
Experiencia de Colectivos del Café.....	78
<i>El contexto de Pereira.....</i>	79
<i>Sobre cómo se logró la convivencia y reconciliación con comunidades a partir de la experiencia de Colectivos del Café.....</i>	93
<i>Aprendizajes.....</i>	97
Proyectos Agropecuarios del Cesar.....	101
<i>Territorio y dinámica de los actores armados.....</i>	106

<i>Institucionalidad y movilización social</i>	108
<i>Experiencia rural del Cesar: episodios y mecanismos</i>	110
<i>Aprendizajes</i>	119
Experiencia del Comité Cívico del Sur de Bolívar.....	123
<i>Contexto de la región</i>	124
<i>El Comité Cívico del Sur de Bolívar: sujeto colectivo de paz y relación en procesos de DDR</i>	131
<i>Aprendizajes</i>	140
Capítulo 4.	
Aprendizajes: claves para un análisis comprensivo de las experiencias de reconciliación y reintegración	145
¿Cómo funcionan los mecanismos de cara a la reconciliación?.....	147
<i>Los espacios de encuentro</i>	148
<i>La disposición</i>	150
<i>Cambio de posturas</i>	151
Sobre efectos adversos de algunos mecanismos.....	153
¿Qué aspectos del contexto pueden afectar las experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras?.....	154
Incidencia de las relaciones de género en las experiencias.....	164
Reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras en Colombia: algunas conclusiones y claves para la acción	169
Bibliografía	179

Mapas, gráficos, tablas e infogramas

Mapas

Mapa 1	Ubicación nacional de las cuatro experiencias.....	52
Mapa 2	Experiencia de Ganchos y Amarras del Valle.....	56
Mapa 3	Experiencia de Colectivos del Café.....	80
Mapa 4	Experiencia Proyectos Agropecuarios del Cesar.....	103
Mapa 5	Experiencia del Comité Cívico del Sur de Bolívar.....	123

Gráficos

Gráfico 1	Acciones Colectivas por la Paz – Cali (1978 – noviembre 2014).....	62
-----------	---	----

Tablas

Tabla 1	Experiencias seleccionadas.....	16
Tabla 2	Mecanismos específicos de las experiencias de reconciliación.....	26
Tabla 3	Población por corregimientos experiencia Sur de Bolívar.....	125
Tabla 4	Mecanismos aplicados al modelo analítico.....	147

Infogramas

Infograma 1	Reconciliación.....	18
Infograma 2	Modelo analítico. Actuación de los mecanismos con miras a la (re)construcción de relaciones entre excombatientes y comunidades receptoras.....	28
Infograma 3	Empresa Ganchos y Amarras del Valle.....	77
Infograma 4	Experiencia de Colectivos del Café en Pereira.....	100
Infograma 5	Experiencia de Proyectos Agropecuarios del Cesar.....	122
Infograma 6	Experiencia del Comité Cívico del Sur de Bolívar.....	144

Acrónimos y abreviaturas

ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACR	Agencia Colombiana para la Reintegración
ADO	Autodefensas Obreras
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
BACRIM	Bandas Criminales
BCB	Bloque Central Bolívar
CCSB	Comité Cívico Sur de Bolívar
CINEP/PPP	Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DDR	Desarme, Desmovilización, Reintegración
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EPL	Ejército Popular de Liberación
EMPAGROC	Empresa Agropecuaria del Cesar
ERPAC	Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
ICTJ	Centro Internacional para la Justicia Transicional
JAC	Juntas de Acción Comunal
M-19	Movimiento 19 de Abril
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OPF	Organización Femenina Popular
Oppdh DIH	Observatorio de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH)
OWC	Frente Oscar William Calvo (EPL)
PIB	Producto Interno Bruto
PDPMM	Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PRT	Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRVC	Programa de Reincorporación a la Vida Civil
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
SIDOC	Siderúrgica De Occidente
SOPRASAR	Empresa comunitaria de producción agropecuaria del Cesar
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UP	Unión Patriótica
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Agradecimientos

La presente investigación no habría sido posible sin la contribución de todas las personas, organizaciones sociales e instituciones que se nos unieron en este camino, a ellos queremos expresarles nuestro profundo agradecimiento.

A los miembros de Colectivos del Café de Pereira, a la empresa Ganchos y Amarras del Valle, al Comité Cívico del Sur de Bolívar y a los Proyectos Agropecuarios del Cesar: Empagroc, Soprasar y Tres Estrellas; por su disposición y capacidad para compartir sus experiencias. Sin duda, su apoyo fue fundamental en esta investigación, la cual tiene además el propósito de hacer visibles sus esfuerzos y retornar la reflexión acumulada a través de esta publicación.

Del mismo modo, expresamos nuestra gratitud a la Fundación Cultura Democrática-Fucude, a la Fundación Carvajal, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, a la Escuela Taller de Calzado y a la Decanatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica en la ciudad de Pereira. En Cali, a la Fundación Paz y Bien, al Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, a la Universidad ICESI, a la Asesoría de Paz de la Alcaldía de Cali y a la Agencia Colombiana para la Reintegración.

Finalmente, agradecemos a Álvaro Villarraga, Abimael Sánchez y Enzo Nussio por sus aportes para enriquecer nuestra mirada sobre los procesos de reintegración, y a Fernán González por su ejercicio de lectura juiciosa y retroalimentación de los primeros borradores de esta investigación, que esperamos sea un aporte enriquecedor en la construcción de una reflexión profunda y aterrizada para entender el papel de las experiencias regionales con miras a la construcción de paz.

Introducción

En un escenario de posconflicto, ¿qué hace que algunas experiencias de reintegración de excombatientes puedan avanzar o no hacia acciones de reconciliación? Este es el principal cuestionamiento que se plantea la presente investigación, y el cual, a su vez, permite indagar sobre los factores que han facilitado o inhibido la (re)construcción de relaciones pacíficas y de confianza entre colectivos de desmovilizados y sus comunidades receptoras¹.

Teniendo esta indagación como punto de partida, vale decir que la presente investigación busca contribuir a los actuales procesos de reconciliación y reintegración en Colombia, lo que constituye, en sí, un desafío vigente no solo para el Estado, sino para el conjunto de la sociedad colombiana que se encuentra enfrentada a un posible escenario de posconflicto.

Para este proyecto se utilizó un enfoque metodológico principalmente cualitativo. Para lograrlo se acudió, a fuentes secundarias (publicaciones académicas, registros de prensa y bases de datos, entre otras) y a fuentes primarias: entrevistas semiestructuradas, talleres, grupos focales y encuentros con actores claves en las regiones y en todo el plano nacional.

La principal herramienta de la investigación fue el estudio de caso. Para este propósito, se parte del reconocimiento de la experiencia como unidad social de análisis, cuyos aprendizajes son útiles para la generación de conocimiento colectivo y como inspiración de iniciativas sociales y de los procesos de diseño e implementación de políticas públicas.

La opción metodológica que se desarrollará es el análisis de experiencias regionales las cuales atañen, en primera medida, a la propuesta de una comprensión compleja

¹ Se entiende aquí la comunidad receptora como el conjunto de personas, redes, entidades privadas o instituciones estatales de un territorio en el que se da el proceso de reinserción/reintegración de excombatientes tras su desmovilización y desarme (ACR, 2013).

del conflicto armado y a la construcción de paz en Colombia. Esta comprensión compleja revela esencialmente que si el conflicto colombiano ha tenido desarrollos diferenciales a lo largo del territorio durante la historia, la manera de abordar estos conflictos y las alternativas para transformarlos merecen una perspectiva semejante².

Por ello, el análisis de experiencias tiene un doble propósito en el marco de la presente investigación. El primero reside en el planteamiento de unos niveles micro y meso que consisten en contribuir a la comprensión de cada experiencia en sí misma y su lugar en la dinámica de reconciliación en las zonas de origen. El segundo radica en la propuesta de un nivel macro, el cual consiste en establecer algunos rasgos comunes y continuidades que permitan hacer generalizaciones analíticas y recomendaciones políticas sobre cómo las iniciativas colectivas, derivadas de procesos de desmovilización, pueden redundar en procesos de convivencia pacífica y reconciliación en Colombia.

La estructura del presente documento corresponde, en gran medida, con la ruta metodológica que diseñamos para la investigación. En primer lugar, se encuentra un recorrido sobre el debate teórico alrededor del concepto de *reconciliación* y, asimismo, cómo se entiende en el marco de la presente investigación. También se pasa por la propuesta de un modelo analítico para comprender cómo una experiencia de reintegración puede llegar a la coexistencia, la convivencia pacífica o la reconciliación en una comunidad receptora.

La ventaja del modelo analítico que se propone en el primer capítulo consiste en un abordaje simultáneo de, por un lado, el desarrollo de cada experiencia y, por el otro, las dinámicas de contexto que las enmarcan, lo cual conduce a una reflexión sobre cómo los procesos de reconciliación afectan los *espacios de encuentro* y la *disposición* de los actores.

Con base en conceptos propuestos y desarrollados por McAdam, Tarrow y Tilly (2005), se utilizaron como recursos de observación una serie de mecanismos, definidos como un conjunto de acontecimientos que de manera recurrente logran transformar las relaciones entre los actores de las experiencias y todo su conjunto. Teniendo en cuenta la contextualización de cada experiencia y también la reconstrucción cronológica de cada una de ellas, se procedió a la identificación de los mecanismos que han facilitado o inhibido su desarrollo.

² Esta propuesta de comprensión compleja de la paz y el conflicto en los territorios de Colombia está anidada en la tradición investigativa del CINEP/PPP, particularmente a partir de los trabajos de los equipos Iniciativas de Paz y Conflicto, Violencia y Estado.

En el segundo capítulo el debate teórico es complementado con una mirada histórica de la relación entre los procesos de reintegración (reinserción) y la noción de reconciliación en el país. Tal recorrido permite identificar las principales coyunturas que ha atravesado esta relación, así como los desarrollos institucionales y los actores involucrados. El recorrido histórico permite una mirada panorámica que anticipa varios elementos del contexto, los cuales incidieron indiscutiblemente en las experiencias regionales focalizadas en el presente estudio.

El tercer capítulo expone las cuatro experiencias de reintegración y reconciliación seleccionadas para el análisis de la presente investigación. Aquí se abordan avances tangibles en los territorios que permiten afirmar que la *reconciliación* ha dejado de ser una apuesta exclusivamente discursiva, nominal y abstracta, para ser un proceso real y palpable que se cimienta en la creación de escenarios propicios para el restablecimiento de relaciones interrumpidas o determinadas por la violencia, incluso en medio de las hostilidades armadas.

En este punto es importante advertir que el análisis de experiencias que se plantea en este estudio no parte de una clasificación tradicional entre experiencias exitosas y no exitosas, sino que se basa en un enfoque apreciativo y en una concepción propia y compleja de la reconciliación. Lo anterior se concreta en el reconocimiento de las diversas iniciativas de reintegración y reconciliación en el país y los desarrollos diferenciales que puede tomar la construcción/reconstrucción de relaciones entre excombatientes y sus comunidades receptoras a través del tiempo ³.

La exposición de cada una de las experiencias cuenta con una contextualización histórica, una descripción de la trayectoria y, finalmente, un análisis de los principales mecanismos y aprendizajes que de ellas se derivan. A continuación, se presentan las experiencias analizadas, las cuales fueron seleccionadas conjuntamente por los socios del proyecto a partir de los siguientes criterios: 1. Las experiencias debían haberse desarrollado en un marco institucional y corresponder a procesos de carácter grupal o colectivo o donde confluyeran varios excombatientes; 2. Deberían ser considerados los procesos de reinserción/reintegración ocurridos desde 1990, tanto con grupos guerrilleros como con paramilitares; 3. Las experiencias tendrían que involucrar tanto las diferencias como las similitudes de las dinámicas urbanas y rurales; 4. Deberían ser abordadas desde un enfoque de género que reconozca la afectación diferenciada de las mujeres en el conflicto y su participación en la construcción de paz, en este caso de acciones de reconciliación.

³ A lo largo del presente texto se emplearán los conceptos de experiencia, *acción colectiva* o *iniciativa* para referirnos al objeto de análisis de la investigación. Lo anterior sin detrimento de una comprensión más estricta y profunda que pueda tener cada uno de esos conceptos.

En la Tabla 1, que se expone a continuación, se resume la información general de los cuatro estudios de caso seleccionados ⁴ de acuerdo con los criterios definidos anteriormente.

Tabla 1
Experiencias seleccionadas

Experiencia	Tipo de iniciativa	Grupo armado de origen de desmovilizados	Año	Comunidad receptora/ Zona de reintegración	Tipo de desmovilización	Participación de mujeres
Proyectos agropecuarios del Cesar	Reinserción	Guerrilla / EPL Ejército Popular de Liberación	1991	La Mesa (Valledupar), Becerril y Chiriguaná/ Cesar	Colectiva	Directa
Colectivos del Café	Reinserción	Guerrilla / EPL Ejército Popular de Liberación	1991	Pereira, Risaralda	Colectiva	Directa
Comité Cívico del Sur de Bolívar	Sociedad civil	Paramilitares BCB-AUC	2006	Simití, Bolívar	Colectiva	Directa
Ganchos y Amarras del Valle	Reintegración económica	Guerrilla y paramilitares Paramilitares (Farc y AUC)	2002-2006	Cali, Valle del Cauca	Individual y colectiva	Indirecta

Por otro lado, en el cuarto capítulo se encuentra un análisis comprensivo de las experiencias abordadas, allí también se despliega el análisis multinivel descrito al inicio de esta introducción. La observación micro de cada experiencia, de su dinámica endógena, dio pistas sobre *mecanismos específicos*, inherentes a los actores, que permitieron su desarrollo en el tiempo. Por su parte, la observación del nivel meso que se hizo con base en una mirada simultánea entre la contextualización y la dinámica micro de la experiencia, permitió identificar los mecanismos ambientales que hacen parte de su contexto y que han incidido igualmente en sus trayectorias⁵.

⁴ El carácter de las experiencias, descrito en la tabla, pone en evidencia importantes diferencias históricas, geográficas, sociales e incluso en sus marcos jurídicos, que podrían pensarse como obstáculo para el contraste, forma o método de los estudios de caso. No obstante, este fue el obstáculo que intentó superarse con el modelo analítico en el que se establece aquello que puede compararse y aquello que no, advirtiendo que más que un ejercicio de comparación se trata de un análisis comprensivo de las experiencias.

⁵ El diálogo con el enfoque de género, respecto al modelo propuesto, es muy dinámico dado el carácter histórico que se propuso: 1. Hacer un análisis de los roles desempeñados por las mujeres y su relación con la trayectoria y los mecanismos de cada experiencia; 2. Los aprendizajes alrededor de las desigualdades estructurales entre géneros, las cuales se profundizan en etapas de conflicto o posconflicto; y 3. La visibilización de las diferentes necesidades de los roles de las mujeres de cara a la reconciliación.

En el capítulo de conclusiones y recomendaciones, y posterior a unos resultados de análisis en los niveles micro y meso de las experiencias que revelan las causas de sus avances y sus obstáculos, se reconocen sus principales aprendizajes. Estos, al hacer explícitas las «claves para la acción» permiten su traducción en una suerte de recomendación política. Es aquí donde se desarrolla el nivel macro de la presente investigación.

Para finalizar, se resaltan las contribuciones hacia una definición más compleja de *reconciliación*, la cual debe ser coherente con la situación del país y con una invitación a ampliar y fortalecer la comprensión del enfoque comunitario, enfoque que ha tenido varios desarrollos en el debate para la implementación de procesos de DDR durante la última década (UNDP, 2005).

Asimismo, el recorrido aquí expuesto desemboca en el reconocimiento de los retos que plantea el panorama actual del país de cara a la reconciliación, en la medida que las negociaciones que se llevan a cabo entre el gobierno colombiano y las Farc en la Habana, así como los diálogos exploratorios con el ELN, plantean la necesidad de discutir las implicaciones que tienen los procesos DDR frente a la consolidación de la paz en los territorios, ya no como un conjunto de medidas que hacen parte de una estrategia contrainsurgente de pacificación –como sucedió en algunos gobiernos precedentes-, sino como un proceso que tenga una incidencia clara en lo referido a la construcción de la paz con un sentido integral. Tal reto debería tomar como punto de partida a las experiencias previas, con el fin de contemplar las lecciones aprendidas de la historia, para evitar así cometer los errores del pasado.

Infograma 1

Reconciliación

Es tanto una meta como un proceso, e implica la construcción o reconstrucción de relaciones que en un tiempo previo, por causas de conflicto y violencia, estaban fracturadas, debilitadas, eran tensas o simplemente inexistentes.

Dimensión interpersonal

Son procesos individuales o de contextos interpersonales, entre actores directamente implicados en el conflicto.



Dimensión política

Implica la (re)construcción de confianzas entre la ciudadanía y las instituciones.



Dimensión social o colectiva

Se concentra en el consenso colectivo en vez de las responsabilidades individuales.



Características

Espontánea

Las acciones de reconciliación se construyen en escenarios que propician cambios de imaginarios y posturas frente "al otro", pero no constituyen un proceso que responda a una vía de acción concreta y establecida.

Dinámica

Las acciones de reconciliación pueden ser coyunturales y su existencia no garantiza en sí misma su sostenibilidad.

Parcial

Las acciones de reconciliación pueden darse entre algunos y no todos los miembros o grupos de una sociedad.

Alcances

Reconciliación

Convivencia pacífica

Coexistencia

Implica la aceptación de las diferencias en el seno de una sociedad y pasa por el reconocimiento de la existencia de un proyecto colectivo.

Reconciliación

El cambio de relaciones entre los miembros de una comunidad en el nivel interpersonal, la construcción de procesos colectivos que impliquen el fortalecimiento del tejido social, así como el restablecimiento o la construcción de la confianza en el Estado, daría cuenta de la consolidación de la reconciliación en una sociedad.

Supone la ausencia de violencia directa en un escenario de cohabitación de un espacio geográfico.

Los alcances son avances parciales en el proceso de reconciliación, ya que son escenarios conducentes a la transformación de posturas frente al "otro" (adversario, victimario, excombatiente, víctima, etc.), y contribuyen al cambio de relaciones. Esto alcances NO constituyen un proceso escalonado, tampoco lineal, ni es regular. A pesar de lo anterior la reconciliación como meta sí requiere que existan ambos alcances.

Capítulo 1.

Una propuesta para el análisis de experiencias de reconciliación entre comunidades receptoras y colectivos de excombatientes en Colombia



En el presente capítulo se realizará, en primer lugar, una aproximación al concepto de reconciliación, el cual es fundamental para esta investigación, y, posteriormente, se explicará la propuesta metodológica con la que se desarrollará dicho concepto en relación con las experiencias seleccionadas y sus avances hacia acciones de reconciliación.

Uno de los retos principales de esta investigación consistió en establecer una definición del concepto *reconciliación*. La indagación realizada sobre este aspecto evidenció que no existe una única concepción del término, y que su utilización en escenarios de conflicto armado, y en sociedades divididas y polarizadas como la colombiana, trae consigo implicaciones éticas y políticas que han hecho de su uso y estudio un ejercicio complejo. Lo anterior está relacionado, por un lado, con el uso diversificado y discursivo de este concepto a lo largo de la historia del país⁶, y, por otro lado, con las posibilidades de interpretación en su dimensión individual. Ante este escenario, fue necesario definir de manera concreta sus características más relevantes, así como las dimensiones en las cuales pueden existir acciones de reconciliación.

Los hallazgos de este estudio, así como todo el proceso de análisis descrito en el presente libro, tienen cimiento en una noción de *reconciliación* que consiste en la construcción o reconstrucción de relaciones que en un tiempo previo, por causas de conflicto, fueron fracturadas, debilitadas, o simplemente eran inexistentes, y

⁶ Estas variaciones del concepto son el propósito del próximo capítulo.



La *reconciliación* consiste en la construcción o reconstrucción de relaciones que en un tiempo previo, por causas de conflicto, fueron fracturadas, debilitadas, o simplemente eran inexistentes

que están encaminadas a la concreción de un escenario social que prescindiera de la violencia. Desde esta perspectiva, la reconciliación se configura como:

i) Una meta, en tanto implica la recuperación o la construcción de relaciones fracturadas o inexistentes, y en esa medida es un proceso de largo alcance que requiere la reforma profunda de ciertos imaginarios sociales y el cambio de creencias arraigadas; de modo que necesita de acciones convergentes y sostenidas en el tiempo, con el fin de establecer un nuevo consenso social que garantice que la violencia del pasado no se repetirá (Beristain, 2005, p. 16).

ii) Un proceso de construcción de espacios de encuentro (De Greiff, 2007, p. 53) (Chayes y Minow, 2003) y de generación de disposición entre en los miembros de una sociedad, (antiguos adversarios, victimarios, víctimas, etcétera)⁷, para asumir e integrar el pasado y el futuro con el fin de afrontar el presente (PNUD, 2007, p. 7). En otras palabras, se reconoce aquí que la reconciliación no es solamente un escenario del futuro en el cual se aspira alcanzar el consenso social nombrado anteriormente, sino que además es posible entrelazar acciones de reconciliación en escenarios en los que la violencia persiste.

Así pues, esas acciones concretan un proceso de reconciliación, permitiendo afirmar que ésta puede ser, por un lado, parcial (pues puede existir únicamente entre algunos miembros de la comunidad) y, por otro lado, puede ser *dinámica* (en tanto su mutabilidad no garantiza perpetuidad). En este sentido, puede decirse que la reconciliación es espontánea, ya que si bien es posible propiciar escenarios en los cuales se cambien las posturas de las personas o grupos, y la opción por establecer relaciones distintas debe ser deliberada, la reconciliación no se genera por imposición⁸ y tampoco puede ser regulada por el Estado. Bajo esa misma lógica, se sostiene que el acto de reconciliación tiene lugar en tres dimensiones: interpersonal, social y política.

La dimensión **interpersonal o individual** refiere a las acciones de reconciliación que tienen lugar en interacciones directas, es decir que involucran a individuos que se relacionan entre sí. También puede referir «al sentimiento de los individuos frente a quienes culpan de los acontecimientos que pertenecen al fuero interno individual» (Rettberg, 2014, p. 4). Complementando esta definición, Gibson (2001) asegura que la dimensión individual incluye «procesos individuales o de contextos interpersonales entre la víctima y el perpetrador», entre los excombatientes y los

⁷ Véase el capítulo 4.

⁸ Estas características de la reconciliación constituyen uno de los hallazgos de la presente investigación. El cimiento de su categorización se encuentra en las conclusiones de este libro.

La reconciliación puede ser parcial, es dinámica y espontánea. Se da en tres dimensiones: interpersonal, social y política; y la coexistencia y la convivencia pacífica, son sus alcances previos



miembros no-víctimas de las comunidades receptoras, o entre excombatientes y adversarios. Este nivel puede asociarse a valores éticos o religiosos, o incluso a procesos relacionados con la superación de los traumas (Méndez, 2011, p. 2). Debe mencionarse que también puede estar condicionada por la satisfacción de las víctimas respecto a los procesos de verdad, justicia y reparación.

Rettberg señala que la **dimensión social o colectiva** de la reconciliación «se concentra en el consenso colectivo en vez de las responsabilidades individuales» (Méndez, 2011, p. 2). Se enfrentan en esta dimensión «verdades mutuas entre los bandos antes en contienda y esta confrontación puede ser objeto de políticas públicas» (Rettberg, 2014, p. 4). La dimensión social o colectiva parte del supuesto de que víctimas y victimarios no logran encontrar espacios comunes ni consensos, para ello son necesarios los escenarios en los cuales prime la coexistencia pacífica a través de una cultura política respetuosa de los derechos humanos. Así, además de existir un componente individual crucial en la reconciliación, existe una dimensión colectiva que demanda el cuestionamiento de las actitudes, los prejuicios y los estereotipos negativos que se desarrollaron alrededor de la figura del «enemigo» durante la guerra (Bloomfield, Barnes y Huyse, 2003, p. 13).

Por su parte la **dimensión política** aplica en el sentido de la (re)construcción de confianzas entre las y los ciudadanos y las instituciones (Fundación Social, 2006). Entonces, la reconciliación pretende dar solución a las causas estructurales del conflicto a través del fortalecimiento del atributo garantista del Estado respecto a los derechos humanos, entre ellos las condiciones socioeconómicas y los derechos civiles y políticos.

En relación con lo anterior, y partiendo del principio de que la reconciliación como proceso sucede siempre en contextos específicos que plantean condiciones concretas a su desarrollo, es posible establecer también algunos de sus alcances parciales. Estos alcances son la *coexistencia* y la *convivencia pacífica*, que si bien no son aspectos que permitan alcanzar la reconciliación como meta, sí son entendidos aquí como actos de un proceso en la medida que promueven la creación de espacios de encuentro y motivan cambios de relación pacífica en la disposición de los sujetos. Estos alcances parciales de la reconciliación suceden por determinantes del contexto, como, por ejemplo, la persistencia de escenarios de violencia directa o estructural.

En este sentido, la coexistencia, entendida como alcance parcial del proceso de reconciliación, puede tener lugar en el nivel interpersonal o individual de la reconciliación. Es considerado un avance en la medida en que es condición

necesaria —más no suficiente— para lograr la reconciliación como meta, y plantea la potencialidad de avanzar en términos de la construcción de un escenario de convivencia pues supone, en el escenario social, la inexistencia de una violencia directa. En este sentido, es un estadio necesario en el proceso de la reconciliación.

Sin embargo, la coexistencia como un avance de la reconciliación debe ser comprendida cuidadosamente, en la medida que no implica obligatoriamente un cambio en los imaginarios sobre «el otro». De allí que deba tenerse en cuenta que en algunos contextos, tanto las víctimas como el conjunto de las comunidades receptoras se han visto forzadas a cohabitar un espacio geográfico con excombatientes y/o victimarios; así que es posible que en estos escenarios la violencia directa haya cesado, pero pueden persistir odios, resentimientos, prejuicios y estereotipos, así como segregación física (Prieto, s.f, p. 33). De este modo, es probable también que dicha coexistencia sea posible por desconocimiento de los antecedentes y la procedencia de las personas con quienes se cohabita. Móviles como el del anonimato, mediante el cual los excombatientes cohabitan un espacio con una comunidad sin que sus miembros sepan sus antecedentes, serían el cimiento de una convivencia muy alejada de la reconciliación final, pero conveniente ya que previene, por un lado, agresiones entre sus miembros y, por otro, la estigmatización; factor determinante de una nueva violencia. Solo en esa medida la coexistencia puede entenderse como un alcance de la reconciliación como proceso.

Por otro lado, la *convivencia pacífica* trasciende la coexistencia pues implica la aceptación de las diferencias en el seno de una sociedad y pasa por el reconocimiento de la existencia de un proyecto colectivo (PNUD, 2007). La convivencia pacífica se configura como un escenario que procura respeto, tolerancia y garantías democráticas, y en el que, sin embargo, las acciones no están dirigidas necesariamente a la superación y transformación de las causas estructurales del conflicto (UARIV, 2013).

Los cambios de postura de los sujetos que conviven pacíficamente promueven la construcción o la reconstrucción del tejido social, entendido aquí como el resultado de las relaciones y acciones entre los individuos, las familias y las comunidades, de manera que se retroalimentan a través de una estructura de vías de comunicación. Esta relación permite la identificación de los individuos como parte de un grupo, o bien posibilita el establecimiento de las reglas condicionantes de la interacción. Un tejido social fuerte es sinónimo de la existencia de relaciones solidarias, enmarcadas en el respeto a los derechos de los miembros del grupo y la condición necesaria para construir un ambiente propicio para la creación de metas colectivas y comunes (Subsecretaría de Prevención y participación ciudadana, 2011).

La reconciliación considerada como una meta en sí misma ya no representa una serie de actos, sino que se refiere a una situación, la cual está caracterizada por la construcción de la reconciliación en sus tres dimensiones: interpersonal, social y política. En ese sentido, el cambio de relaciones entre los miembros de una comunidad en el nivel interpersonal, la construcción de procesos colectivos que impliquen el fortalecimiento de un tejido social, así como el restablecimiento o la construcción de la confianza en el Estado, darían cuenta de una reconciliación concreta en una sociedad marcada por la violencia.

Por otra parte, es importante señalar, sobre este trabajo de investigación, que la observación micro y meso de las experiencias converge con el enfoque de comunidades receptoras; dicho enfoque ha tenido varios desarrollos en el debate para la implementación de procesos de DDR durante la última década (UNDP, 2005). En él se destaca que los procesos de reintegración de excombatientes pueden trascender de una dimensión individual centrada en el desmovilizado, hacia la búsqueda de la recomposición del tejido social mediante el desarrollo de capacidades comunitarias para lograr la reinserción de excombatientes a la vida civil (Caramés, 2005, p. 2) ⁹.

Este enfoque comunitario ha sido tomado como referente para la presente investigación con el propósito de llevarlo a una propuesta teórica límite, la cual plantea que el enfoque comunitario busca incluso la transformación de las causas estructurales de un conflicto, sobre el cual se busca llegar a procesos de rehabilitación, readaptación y reconciliación. Si bien desde diversas corrientes se han señalado varias de sus restricciones¹⁰, la complejidad regional del caso colombiano resulta idónea para su implementación.

9 Desde la perspectiva de Caramés (2005), la implementación del enfoque comunitario se caracteriza por una definición geográfica, conformada tanto por habitantes de esas zonas como por sus autoridades e instituciones. En relación con esto, es necesario el reconocimiento de estrategias participativas que referencien las necesidades y expectativas tanto de desmovilizados como de la comunidad receptora, pues el enfoque comunitario tiene sus bases en las gestiones tanto de los actores locales, como de los sistemas descentralizados.

10 Dentro de las limitaciones del enfoque comunitario se ha advertido sobre el riesgo de marginación de actores armados por falta de cobertura geográfica y atención directa a excombatientes y su consecuente generación de inseguridad. Asimismo se señala que la definición de «comunidad receptora» se hace en función de la localización de los desmovilizados.

Analizar las experiencias desde sus mecanismos: ¿qué las potencia?, ¿qué las dificulta?

Para tener un mayor y efectivo acercamiento a los procesos de reconciliación, es necesario reconocer las experiencias de reintegración como una modalidad de acciones colectivas dirigidas a la construcción de paz (García-Durán, 2008)¹¹. Dicho reconocimiento fue el lugar de partida de la presente investigación, la cual, para avanzar en el análisis de los cambios políticos, se sustenta en algunos elementos de la propuesta metodológica de McAdam, Tarrow y Tilly (2005). En aras de alcanzar una observación a profundidad de las dinámicas y las relaciones, los autores mencionados utilizaron como recursos los episodios y los mecanismos, los cuales son tomados como elementos de observación en cada una de las experiencias.

Los episodios son una herramienta narrativa que facilita la descripción de cada una de las experiencias, en ese mismo sentido, proporciona elementos que permiten agrupar analíticamente la transformación de las relaciones entre ciertos actores y la forma de comportamiento de sus mecanismos en un momento específico. Los episodios no corresponden a una secuencia cronológica obvia o lineal de las experiencias, sino a momentos específicos de procesos e interacciones, los cuales están marcados por las transformaciones dadas en las relaciones entre sus actores (McAdam *et al*, 2005, p. 32). Así pues, los procesos de desmovilización y reintegración son un ejemplo de episodio, también lo es la organización de actores que dieron origen a una iniciativa o la incursión de grupos armados cuya imposición marca una inflexión en el comportamiento de los actores del territorio.

Las distancias históricas y los marcos jurídicos existentes en los diferentes procesos de desmovilización y reintegración, sumados a las complejas dinámicas locales que atraviesan las cuatro experiencias en el contexto colombiano, podrían suponer una barrera para el análisis comparativo. Sin embargo, tales barreras parecen agotarse ante la posibilidad de identificar series de acontecimientos que transforman las relaciones y que facilitan o inhiben tales experiencias. Esto es lo que denominamos mecanismos.

Los mecanismos, por su parte, permiten identificar factores que potencian o inhiben¹² las experiencias, pero más allá de ello, y lo que es relevante para

11 Según García-Durán, dentro de las dimensiones para la construcción de paz en los distintos momentos del conflicto, las experiencias pueden ser clasificadas en aquellas que buscan su contención (*peacekeeping*), la negociación (*peacemaking*) o su mantenimiento y prevención de la violencia (*peacebuilding*). En esta última, se ubican los procesos de reintegración de excombatientes así como los de reconciliación (Datapaz CINEP/PPP, 2008).

12 Los mecanismos, según McAdam, Tarrow y Tilly, se definen como «tipos delimitados de acontecimientos que cambian las relaciones entre conjuntos especificados de elementos de maneras idénticas o muy similares en toda una diversidad de situaciones» (McAdam *et al*, 2005, p. 27).

Los episodios facilitan la descripción de cada una de las experiencias. Los mecanismos permiten identificar factores que potencian o inhiben las experiencias



esta investigación, tienen la capacidad de determinar aquello que incide en el establecimiento de procesos de convivencia pacífica y reconciliación entre excombatientes y sus comunidades receptoras, esto durante diferentes episodios de su historia.

Las experiencias seleccionadas en Cali, Pereira, sur de Bolívar y Cesar consisten en procesos de desmovilización, desarme y reintegración (grupales e individuales de guerrillas y paramilitares dados en los años 90 y la primera década del año 2000). En estos momentos específicos hubo una serie de configuraciones sociales evidenciadas en acciones colectivas que tuvieron distintos niveles de interacción con la institucionalidad. Estos a su vez se conectan con los niveles micro, meso y macro de análisis de la presente investigación, los cuales revelan distintas formas de operación de los mecanismos que condujeron a la transformación de relaciones. También permitieron el reconocimiento de condiciones conducentes a procesos de reconciliación (individual, social y política) y sus diferentes alcances (coexistencia, convivencia pacífica o reconciliación).

Los mecanismos, desde la perspectiva de McAdam, Tarrow y Tilly (2005), suelen manifestarse en tres tipologías: cognitivos, relacionales y ambientales. Los mecanismos cognitivos se caracterizan por transformar las percepciones, posturas, interpretaciones o las conciencias individuales y colectivas. Por ejemplo, las acciones de formación política dentro de organizaciones sociales y sus experiencias suelen dar elementos cognitivos a los miembros nuevos y esto les ayuda a interpretar la realidad, como también les da herramientas que pretenden transformarla.

Por otra parte, están los mecanismos relacionales, los cuales alteran las conexiones y las interacciones previamente establecidas. El ejemplo más recurrente en las experiencias, además señalado con frecuencia en el texto *Dinámica de la contienda política* (2005), es la *intermediación*, mecanismo en el cual se vinculan partes previamente desconectadas y en el que la conjunción desencadena una acción colectiva determinada, bien sea en un sujeto o en un grupo de actores. Como ejemplo de este mecanismo podemos referirnos al papel de la iglesia católica o de actores como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, cuyas acciones de acompañamiento e intercesión han incrementado la visibilización de las interacciones entre las iniciativas locales y su capacidad de conectarse con otros para gestionar demandas: «La intermediación logra crear nuevos actores colectivos potenciales» (McAdam *et al*, 2005, p.174). En el marco de esta investigación, y

con el fin de facilitar la comprensión, enunciaremos los mecanismos cognitivos y relacionales como mecanismos específicos.

A continuación, se presenta la Tabla 2 que relaciona las definiciones de los mecanismos específicos (relacionales y cognitivos) identificados en las cuatro experiencias.

Tabla 2
Mecanismos específicos de las experiencias de reconciliación

Mecanismo	Definición
Difusión	Transferencia de información desde el interior de la experiencia que la visibiliza y propaga.
Creación de nuevos actores e identidades colectivas	Emergencia de un nuevo actor y de dispositivos que refuerzan los atributos que la diferencian.
Intermediación	Conexión, a través de un tercero, de dos o más enclaves sociales antes desconectados.
Formación de identidad política	Transforma la percepción, postura, conciencia y acción ante la realidad social. Proporciona herramientas cognitivas, políticas o prácticas que permiten potenciar la acción colectiva.
Compromiso	Mecanismo en el que personas, que individualmente preferirían no asumir los riesgos de la acción colectiva, se encuentran incapaces de retirarse sin herir a los demás, cuya solidaridad valoran pero realizan acciones al precio de sufrir graves pérdidas.
Cambio de identidad	Transformación de la respuesta a la pregunta sobre ¿quién eres?, generando simultáneamente cambios en las interacciones.
Mediación	Intervención de un tercero en la resolución de un conflicto o disputa.
Atribución de oportunidad o amenaza colectiva	Identificación colectiva de circunstancias de ventaja o de riesgo y que tiene efecto cohesionador o de convergencia.
Lanzar señales	Exposición de signos que son interpretados consistentemente y que permiten modular la conducta de acuerdo a situaciones de riesgo o de confianza.
Atribución de similitud	Identificación deliberada de semejanza.
Convergencia de actores	En escenarios de poca colaboración, descoordinación o polarización, actores menos polémicos o menos radicales propenden por aliarse.
Interacción	Continuo de acción recíproca e influencia.

El nivel micro de análisis de las cuatro experiencias se revela cómo estas comprenden mecanismos complejos de creación de identidades, organización y cohesión interna que derivan, directa o indirectamente, en procesos de convivencia pacífica y reconciliación interna en sus comunidades receptoras. Del mismo modo, permite identificar cómo aspectos subjetivos de excombatientes y actores sociales pueden afectar las trayectorias de las experiencias.

A partir de ello toman sentido los niveles meso y macro de análisis de las experiencias de la presente investigación. La mirada micro de las experiencias locales quedaría incompleta sin el contexto de dinámicas locales, regionales y nacionales en las cuales se desarrollan. Aquí vale afirmar que las experiencias no son herméticas sino que interactúan y son condicionadas por sus contextos, es de allí que varios de los mecanismos que las potencian u obstaculizan sean proporcionados por estos; por eso se denominan mecanismos ambientales.

Los análisis meso y macro logran explicar por qué no todas las iniciativas funcionan en todos los territorios, aún con la existencia y participación de actores que despliegan o están afectados por un mismo conjunto de mecanismos. Factores como la dinámica de integración territorial y social, la configuración de las instituciones, la política local y regional, así como la dinámica del conflicto armado y la violencia urbana, tienen una repercusión importante en la trayectoria de las experiencias (González, Bolívar y Vásquez, 2003).

Todos los mecanismos ambientales hacen parte del contexto, pero este, en un ejercicio inverso, no se constituye en su totalidad por mecanismos ambientales que favorecen u obstaculizan una experiencia de reintegración y reconciliación. Dichos mecanismos parten de una relación de influencias o condiciones externas asociadas a procesos de cambio social que tienen injerencia en la acción colectiva y operan de manera directa sobre esta. Tal es el caso del auge y/o las crisis financieras que son determinantes al momento de tratar los recursos con los que pueden embarcarse los actores en una acción colectiva; los procesos de urbanización y dinámicas de poblamiento; la capacidad de las comunidades receptoras (establecidas) para integrar a sujetos nuevos y marginales (Heinich, 1991, p. 86). Otros de los elementos que influyen en los procesos mencionados son la dinámica e intensidad del conflicto armado, la estructura agraria, la propiedad de las tierras y otros recursos, las reformas institucionales, la capacidad del Estado local, el tejido social y la movilización social. Todos estos pueden convertirse en mecanismos ambientales que favorecen o no el desarrollo de procesos reconciliación con excombatientes¹³.

¹³ Véase el capítulo 4.

¿Cómo y por qué funcionan o no ciertas experiencias de reconciliación y reintegración?

Una vez identificados los mecanismos clave (específicos y ambientales), la presente investigación busca, en un segundo paso analítico, explicar la manera en la cual estos inciden en el establecimiento de procesos de construcción o reconstrucción de relaciones entre excombatientes y sus comunidades receptoras. Para tal motivo, se ha desarrollado un modelo que será expuesto a continuación, y que permite entender de qué manera los mecanismos de cada experiencia intervienen, directa e indirectamente, y establecen un determinado nivel de reconciliación.

Infograma 2 Modelo analítico



Al partir de la definición de trabajo anteriormente presentada, se puede identificar que cada proceso de reconciliación se basa en un cambio de posturas frente «al otro», es decir que la relación se traslada de rechazo total a una neutralidad o favorabilidad, o viceversa. Tal cambio de posturas es motivado por una serie de argumentos ¹⁴ en pro o en contra que, dependiendo de un espacio de encuentro y de disposición ¹⁵, son acogidos por los actores. Para recibir argumentos nuevos, estos deben, por un lado, estar dispuestos a recibir tales insumos y, por otro, contar con un espacio de encuentro (físico o inmaterial) en el cual se gestan y comparten argumentos que contienen información respecto al «otro» ¹⁶. Dichos argumentos pueden ser producto de una interacción directa (encuentro físico) o la recepción unilateral (deliberada o no) de información.

Al favorecer u obstaculizar el proceso de reconciliación, cada mecanismo puede producir argumentos o influir de alguna manera los aspectos o variables claves del modelo expuesto anteriormente. En este sentido, el mecanismo de intermediación puede, por ejemplo, propiciar el espacio de encuentro al implicar la confluencia de más actores involucrados. A su vez, puede promover mayor disposición por parte de los mismos para así recibir argumentos y reconsiderar eventualmente su postura frente al otro.

Adicionalmente, los mecanismos ambientales dialogan de forma transversal tanto con las variables del modelo como con los mecanismos específicos. Así, la persistencia del conflicto armado (como mecanismo ambiental) puede influir directamente tanto en la consolidación o inhibición de espacios de encuentro como en la disposición de los actores. De igual manera, dicho mecanismo puede, eventualmente, promover la opción por el anonimato por parte de los excombatientes, asunto que, a su vez, obstaculiza el uso del dispositivo específico de difusión.

14 El concepto «argumentos» es definido como: insumos o móviles que alimentan la percepción y la reflexión frente al otro. Los argumentos pueden ser: observaciones, experiencias, potencialidades, explicaciones, etc.

15 La variable de «disposición» es definida como: voluntad de recibir argumentos para, eventualmente, reconsiderar la percepción frente al otro (cambio de posturas).

16 Ambas variables son imprescindibles para el cambio de posturas, esto implica que no existe una jerarquía entre estas.

Capítulo 2.

Políticas de reintegración y noción de la reconciliación en Colombia: una mirada histórica



Las cuatro experiencias analizadas en esta investigación dan cuenta de procesos de reincorporación que han sido influenciados, directa o indirectamente, por la evolución de las políticas de inserción y reintegración en los últimos treinta años, al igual que la persistencia del conflicto armado, entre otros aspectos. En el ejercicio de entender el desarrollo de este proceso histórico es posible rastrear, de forma transversal, los cambios y continuidades en las nociones de reconciliación que han surgido de forma paralela a estos procesos, haciendo uso tanto de los recursos retóricos de la política pública como de los insumos del contexto social y político.

Esta contextualización intentará dar cuenta entonces de: i) los procesos políticos derivados de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y los actores armados; ii) las estrategias institucionales que se gestaron en estos procesos de cara a la reintegración de excombatientes; y iii) las coyunturas sociales y políticas que enmarcaron la implementación de dichos mecanismos propios de la justicia transicional hasta la actualidad. Se tratará la noción de reconciliación implícita en cada proceso, procurando establecer la forma como se han abordado en el panorama nacional. Con esto se busca posicionar al lector en el contexto general de desarrollo de las cuatro experiencias estudiadas en esta investigación.

En función de lo anterior, el desarrollo del contexto se dividirá en cuatro momentos: el primero, describirá las características de la política de inserción (reintegración) de los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco; en el segundo, serán narrados los acuerdos de paz adelantados con varios grupos guerrilleros durante los inicios de la década del 90, haciendo énfasis en el proceso emprendido entre el EPL y el Gobierno nacional, con el fin de establecer las particularidades del panorama



Las experiencias de procesos de paz en Colombia pueden rastrearse desde la década de los 80, partiendo de la iniciativa tomada por la presidencia de Belisario Betancur

social y político de la época e ilustrar los alcances que tuvo la noción reconciliación nacional; como tercer punto, se hará un esbozo general de la política de paz de los gobiernos de la segunda mitad de la década del 90 hasta el 2010, dándole un acento particular al proceso de desmovilización de las AUC (2003-2006); y, para finalizar, se plantearán algunos retos que existen para la reintegración de excombatientes en el panorama nacional actual, abordando de manera general, por un lado, las características más relevantes del programa de reintegración vigente desde el año 2011, y por el otro, los escenarios sociopolíticos que posicionan el debate en torno a las miradas de la reconciliación en función de los nuevos diálogos de paz emprendidos entre el Gobierno nacional y parte importante de la insurgencia armada.

Política pública de paz: abordaje institucionales en los años 80

Las experiencias de procesos de paz en Colombia pueden rastrearse desde la década de los 80, partiendo de la iniciativa tomada por la presidencia de Belisario Betancur para gestionar una salida negociada al conflicto armado mediante una política de paz. Dicha disposición implicó la introducción de nuevos elementos al discurso político colombiano: en primer lugar, se reconoció a la oposición armada como un actor político y se tomó la decisión de emprender un proceso de apertura democrática (Chernick, 1996); en segundo lugar, se incorporó la referencia directa a las causas objetivas y las causas subjetivas de la violencia (Villaraga, 2008, p. 58); y en tercer lugar, el Gobierno se comprometió a asumir la responsabilidad del Estado de darle sustento real al proceso.

La propuesta de paz descrita promovió la instauración de un diálogo nacional ampliamente participativo, la aprobación de una ley de amnistía¹⁷ y la consolidación de las comisiones de paz encargadas de adelantar las negociaciones con las guerrillas. Entre los logros de estas comisiones merece rescatar la firma de los acuerdos de tregua parcial con el M-19, las Farc, el EPL, la ADO y algunos sectores del ELN. Sin embargo, con excepción de la tregua firmada con las Farc en el municipio de La Uribe, en el departamento del Meta, estos acuerdos se rompieron en menos de un año (García-Durán, 2011, pp. 100-101).

El sustento esbozado se tradujo en una política de paz cuya intencionalidad aparente se dirigió tanto a las necesidades individuales de los revolucionarios (condiciones subjetivas) como a las causas políticas y estructurales de la violencia (condiciones objetivas). En ese sentido, los procesos derivados de la amnistía y los apoyos dirigidos al restablecimiento del proyecto de vida de los excombatientes atenderían a ese componente subjetivo de la violencia; de la misma forma, la apertura democrática, sumada al programa de desarrollo contemplado en el Plan Nacional de Rehabilitación, estarían enfocados a mitigar las causas estructurales de la violencia política, a saber, la ausencia del Estado, la exclusión política y las inequidades económicas¹⁸ (Leal-Buitrago, 1999, p. 3).

Esta aproximación a la coyuntura política promovió la creación de un andamiaje institucional que orientó los alcances de la reincorporación de los excombatientes. La amnistía, piedra angular de dicha estructura, implicó la libertad de la mayoría de los presos de las guerrillas y fue relacionada con delitos políticos y conexos, con excepción de los crímenes atroces contemplados en los principios y normas humanitarias¹⁹, e incluyó beneficios económicos y acceso a programas especiales del Gobierno enfocados en propiciar la integración social y económica de los amnistiados (Villaraga, 2008, pp. 61-64). Estas medidas institucionales, la existencia de un escenario de participación política en apariencia incluyente y el énfasis en el reconocimiento político de la insurgencia, propició indirectamente la consolidación de la Unión Patriótica (UP) en 1985 (Turriago, Bustamante, 2003, pp. 6-7).

A pesar de esto, la iniciativa de Betancur no obtuvo un respaldo político y social generalizado debido a la ausencia de directrices y metas claras, su distancia de la institucionalidad y el mismo hecho de carecer del apoyo de algunos sectores como las Fuerzas Militares y los partidos políticos tradicionales²⁰. Además, el conflicto armado se agudizó durante este período, pues estas dinámicas de violencia estuvieron «íntimamente relacionad[a]s con la emergencia de un nuevo actor, el

18 «El presidente Betancur estableció el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) como parte de la estrategia de paz de su gobierno, como una forma de hacerle frente a las causas objetivas de la violencia y establecer relaciones armónicas entre el Estado y la sociedad. Tenía como objetivo aumentar la inversión social del Estado y su presencia en zonas rurales, para así disminuir el apoyo a la guerrilla» (Conciliation Resources, s.f.).

19 «La Comisión de Paz dio a conocer en septiembre de 1984 información de la Presidencia de la República, en la que estimó en más de 1500 los amnistiados, según la cual se avanzaba en proporcionarles auxilios de sostenimiento inmediato, apoyo para la obtención de la documentación, vinculación a atención básica en salud, acceso a crédito para programas educativos y auxilios extraordinarios por calamidades» (Villaraga, 2008, p. 64).

20 «Peor aún, contaba con amplias resistencias en el bipartidismo. Como lo anotaba el mismo Belisario, con ellos era imposible avanzar pero tampoco se podía prescindir de ellos. De esta manera, el Presidente recurrió a un pequeño núcleo de colaboradores como Bernardo Ramírez, Antonio Duque y Jhon Agudelo Ríos, e incorporó al Gobierno a reconocidas figuras del bipartidismo, pero marginó a los directorios políticos. Esas fórmulas irritaron a los jefes de los partidos. Por ello el proceso de paz chocó desde un comienzo con “enemigos de paz” agazapados en todos los rincones del Estado». (Ramírez, en Medina y Sánchez, p. 277).

paramilitarismo²¹; y la presencia de unos recursos financieros sin antecedentes provenientes del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión» (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015, p. 51).

Por otro lado, de forma paralela a la firma de los acuerdos antes enunciados, las Farc continuaron con su expansión hacia las regiones cercanas a sus zonas de influencia histórica. Este crecimiento ocurrió simultáneamente con la migración de muchos militantes de la lucha armada de izquierda hacia la lucha política legal bajo el manto de la UP, lo cual generó una «suerte de desconfianzas, que se veían reforzadas por la ambigüedad de algunos de [los militantes de la UP] frente a la opción armada» (González, 2014, p. 384). Este aspecto podría indicar una disposición parcial de la guerrilla hacia la construcción de alternativas a la violencia, o al restablecimiento de relaciones de interlocución que pudiesen derivar en acciones concretas en favor de la reconciliación.

Enmarcado en este contexto nacional, acaeció el inicio del genocidio político de este partido, hecho en sí mismo detestable, que marcaría no solo uno de los períodos más violentos de la historia reciente de nuestro país, sino que, además (y entre otras graves consecuencias), sería un obstáculo determinante para la realización de la iniciativa de pacificación emprendida por el Gobierno de la época y el que lo sucedió.

Asimismo, en ese tiempo se inició en el país un proceso de descentralización política, que derivó en la aprobación de la elección popular de alcaldes en 1986, acto que se haría efectivo por vez primera en 1988. En este proceso, «sectores ganaderos y empresariales, y grupos de los partidos liberal y conservador manifestaron su rechazo a la posibilidad de que las alcaldías escaparan a su control. La campaña contra la UP adquirió la forma de pronunciamientos públicos en los que se invitaba a que ninguna personalidad o tendencia política hiciera alianzas con el “proselitismo armado”. La advertencia sobre las consecuencias que podrían tener los pactos electorales con la nueva colectividad sirvió para abonar el terreno de los actos de violencia» (Cepeda, s.f.).

Más aún, la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia, en 1985, representarían el fin «real y simbólico de los esfuerzos de paz de Betancur. Este episodio puso de manifiesto [...] el peso que las soluciones de fuerza seguían teniendo para muchos sectores de la sociedad, incluidos los militares, los terratenientes y líderes políticos regionales, los paramilitares y también los grupos guerrilleros» (García, 2006, p.

21 En un estadio aún primitivo.

Hubo un cambio de énfasis en la política de paz emprendida por el Gobierno Barco, en el cual se asumió como central el concepto de reconciliación



187). Todo este panorama evidenció la inexistencia de un escenario de encuentro propicio para la reconciliación nacional, en la medida que no existía una genuina disposición de varios sectores de la sociedad que se habían enfocado en construir alternativas a la violencia. Las iniciativas de paz fueron fracturadas por la defensa de intereses concretos a nivel nacional y local, lo que en últimas se tradujo en un escalamiento del conflicto.

En este contexto, en 1986, Virgilio Barco fue elegido presidente. Su Gobierno «asumió como política de paz el propósito de superar la pobreza y la exclusión social para acabar con las razones objetivas de la violencia, y promovió una estrategia sustentada en presupuestos de reconciliación, rehabilitación y normalización» (Villarraga, 2009, p. 71).

Según la perspectiva de Mauricio García-Durán, el manejo de la paz del Gobierno Barco se desarrolló en dos etapas: en la primera, continuó la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación con los mismos objetivos del Gobierno anterior, apuntándole a la construcción de una reconciliación política. En la segunda (a partir de 1988), se hizo la presentación de la iniciativa de paz y la apertura de nuevos diálogos con la guerrilla del M-19 (Conciliation Resources, s.f).

Por otro lado, la tregua firmada con las Farc en el gobierno anterior se rompió, las guerrillas se fortalecieron y se aliaron en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Además, el panorama político nacional se hizo más complejo, debido a la expansión del narcotráfico y la perpetración de varios atentados terroristas dirigidos a evitar las extradiciones a los Estados Unidos (Villarraga, 2009, p. 71).

En este contexto, se gestaron varias iniciativas políticas que transcurrieron mientras que una serie de episodios trágicos tenían lugar en las zonas rurales y urbanas del país. Hubo un cambio de énfasis en la política de paz emprendida por el Gobierno Barco, en el cual se asumió como central el concepto de reconciliación, pues el foco de atención se dirigió no solo a la iniciativa de desmovilizar a la insurgencia, sino también a atender las demandas sociales que servían como base del conflicto. Se entendió que este énfasis era necesario para recuperar la convivencia pacífica (Villarraga, 2009, p. 71). De forma consecuente con ese cambio de discurso, el Gobierno creó la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, en la cual se consideraba que el logro de la paz incluía no solo al Estado y los grupos alzados en armas, sino también a toda la sociedad (Ossa, en Villarraga, 2009, p. 30). La *rehabilitación* se entendió, en este contexto institucional, como un concepto atado a la *normalización*, que consistía en propiciar las condiciones necesarias para «restablecer la normalidad de la vida civil, es decir, la presencia de las instituciones propias de un Estado de Derecho, especialmente la justicia, con el fin de garantizar



El Gobierno aumentó la presión militar mientras consolidaba un desarrollo institucional proclive a la reconciliación, lo que impidió la consolidación de escenarios de coexistencia

que los conflictos se resolvieran conforme a las normas que deberían regular el funcionamiento de una sociedad que efectivamente se acogiera a procedimientos democráticos» (Ossa, en Villarraga, 2009, p. 30).

Sin embargo, el Gobierno optó simultáneamente por aumentar la presión militar a las guerrillas, lo que impidió la consolidación de escenarios de coexistencia: mientras, por un lado, emprendía el desarrollo institucional y discursivo mencionado anteriormente, el cual buscaba emprender procesos de reconciliación nacional, por otro lado rechazaba a la subversión armada, en la medida que, según esta perspectiva, la paz no podía ser asimilada con el cese al fuego, ni sería coexistente a la presencia de grupos armados ilegales. La alusión que Virgilio Barco hizo a la reconciliación partía de una condición mínima, a saber, que existieran demostraciones tangibles de las guerrillas en relación con su voluntad política para la desmovilización (Discurso presidencial, enero 12 de 1989). Lo anterior explica por qué la política de paz en este contexto consideró que «las reformas y las políticas gubernamentales no tomaran como referente a las minorías armadas al margen de la ley sino al mandato ciudadano entregado al presidente y a las aspiraciones del conjunto de la población» (Villarraga, 2009, p. 76).

La posible incoherencia derivada de este abordaje, a la vez belicista y proclive al diálogo, así como el recrudecimiento de la violencia, la agudización del exterminio de la UP²² y el rompimiento de las negociaciones con las guerrillas fueron la demostración de las fallas más graves en el abordaje de la política de paz durante ese Gobierno de cara a su apuesta por la reconciliación nacional en distintos sentidos. El objetivo principal de la agenda de paz del Gobierno Barco «no era negociar una solución al conflicto armado, sino legitimar el Estado y deslegitimar la guerrilla. Es decir, para Barco podía haber negociaciones, pero ya no entre dos partes, sino entre un Estado que conscientemente representaba a la ciudadanía y unos grupos guerrilleros que cada vez eran menos legítimos, pero que podrían aspirar a participar en la vida política del país. La estrategia se resumió en el lema de “mano tendida y pulso firme”» (Chernick, 1996).

Adicionalmente, la ausencia de garantías para la participación política legal de los miembros de los grupos insurgentes que ingresaron a la UP y su estigmatización por

²² Pese al supuesto apoyo explícito dado por la administración Barco a la participación política de la Unión Patriótica, es posible establecer que la ausencia de garantías de seguridad brindada a sus miembros durante la época, la polarización política y el presupuesto de que para la UP, que «constituía una dificultad la persistencia de la guerrilla que le dio origen, al no prosperar el proceso de paz que posibilitara la reintegración de sus miembros a la vida civil» (Villarraga, 2009, p. 85), fueron algunos de los aspectos que ocasionaron la barbarie del genocidio. En este sentido, se profundizó en algunos sectores de la sociedad el señalamiento de que, supuestamente, la UP era un partido político legal, con brazo armado ilegal.

parte de algunos sectores de la sociedad daría como resultado el recrudecimiento de la polarización política del país. La falta de protección para los excombatientes insertados en la lucha política legal contrastó con el alto grado de apoyo social con el que contó el partido político en cuestión durante las elecciones de 1988. Su visibilización fue, asimismo, una oportunidad en términos de participación política y una amenaza en términos de seguridad, pues se puso de manifiesto la inexistencia de un ambiente integralmente propicio para reintegración civil y política de excombatientes.

No obstante, la política de paz promovida por el Gobierno y la agenda política nacional de la época dieron un nuevo impulso a la política local, fortalecida, entre otras cosas, por los avances que se dieron en términos de descentralización del poder del Estado y por el aumento de la protesta social, lo cual derivó en la consolidación de fuerzas políticas alternativas en algunas regiones. Todo esto surgió por una creciente necesidad de paz y se tradujo en la eclosión de diálogos regionales²³ y la confluencia de distintos actores en distintos debates de la arena política dirigidos a «articular consensos y promover un mejor nivel de diálogo con los grupos guerrilleros presentes en las respectivas regiones» (García-Durán, 2011, p. 106).

Adicionalmente, según Turriago y Bustamante (2003, pp. 15-19), la política de paz del Gobierno Barco se concretaría en la formulación y puesta en marcha de la iniciativa para la paz en septiembre de 1988, y aunque el país y los grupos insurgentes tomaron diversas posiciones al respecto, esta postura institucional fue la base para el inicio y la culminación exitosa de los diálogos con el M-19, el EPL, el Movimiento Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

De este modo, la iniciativa para la paz pretendía propiciar «la reincorporación a la plenitud de la normalidad ciudadana de quienes han escogido el camino de la subversión armada [...] [logrando] la disolución de los grupos armados, su desarme y reincorporación a la sociedad, dentro de un contexto de garantías efectivas y específicas». Además, esta iniciativa definió los términos que regirían el proceso, así como unos principios generales ya esbozados: los alzados en armas debían demostrar su voluntad de paz, las violaciones a los derechos humanos y el

23 «La Iniciativa preveía la realización de diálogos regionales para la convivencia, con el fin escuchar a la sociedad civil frente: a) la solución a factores locales de perturbación; b) la solución a casos específicos de violencia regional; c) la realización de los diálogos, y d) lucha contra todas las formas de violencia. Asimismo, señalaba un plazo perentorio para su aplicación y, por tanto, para que la insurgencia se acogiera a ella. El término fue fijado para la jornada electoral de marzo de 1990. No obstante, la iniciativa se aplicó en una segunda oportunidad con los grupos que a ella se acogieron, durante la administración de César Gaviria, en el horizonte de participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991» (Turriago y Bustamante, 2003, pp. 14-15).

terrorismo tenían que suspenderse, se establecería un diálogo directo para acordar procedimientos de reincorporación, se adelantarían audiencias para recoger opiniones sobre reajuste institucional, se concedería el indulto a quienes cesaran definitivamente en las acciones subversivas, se adelantarían diálogos regionales de la sociedad civil por la paz, se levantaría el estado de sitio y no se suspendería la lucha contra el terrorismo y contra quienes persistieran en la subversión (Turriago y Bustamante, 2003, pp. 13-14).

Primero, se anunció la puesta en marcha del plan hacia la dejación de armas e incorporación del M-19 a la vida civil y el plan de seguridad y protección. Mientras el Congreso aprobaba el proyecto de ley de indulto²⁴, el Gobierno tramitó el proyecto de reforma constitucional. Después, la Registraduría Nacional inscribió las listas de los desmovilizados del M-19 para las elecciones de 1990. El 9 de marzo se realizaría el acto simbólico de «dejación voluntaria de armas», en el caserío Santo Domingo, Cauca. Por medio de este hecho, los integrantes del M-19 se reinsertaron a la vida civil y su proyecto inauguró su participación activa en la política colombiana a través del Movimiento Alianza Democrática M-19. El candidato presidencial del movimiento para las elecciones 1990, Carlos Pizarro, sería asesinado unas semanas después de haber firmado la paz, en plena campaña electoral (Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, *Hechos de paz*, s.f.).

Fortalecimiento democrático y recrudescimiento de la guerra, procesos simultáneos en la década de los 90

Los comicios presidenciales de 1990 finalmente fueron ganados por César Gaviria. Fue durante su Gobierno que se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, que coincidió con el desarrollo de una grave crisis política y social derivada de una creciente ola de violencia. «El momento reflejó la culminación de dos procesos contradictorios que había experimentado el país desde comienzos de los años 80: uno era un proceso de reformas y democratización, el otro, la gran profundización de la violencia en el país. Los resultados fueron un país realmente más democrático, aunque sustancialmente más violento» (Chernick, 1996).

Ese mismo año, se firmó el acuerdo entre el Gobierno y el EPL, que contemplaba la participación de dos voceros de este grupo en la Asamblea Nacional Constituyente y la garantía de las condiciones necesarias para la promoción de su proyecto político. El movimiento Esperanza, Paz y Libertad sería fundado por una parte de

El EPL plasmó en su acuerdo de paz el concepto de «reencuentro» en lugar de hablar de reinserción



sus excombatientes y la otra parte participaría en la conformación de la Alianza Democrática M-19 (Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, *Hechos de paz*, s.f.)²⁵. En consecuencia con la naturaleza de los acuerdos y para mantener una postura favorable a la negociación, el EPL plasmó en su acuerdo de paz el concepto de «reencuentro» en lugar de hablar de reinserción, «en el entendido de que se trataba de un proceso de reencuentro social y político, y de una mutua aproximación al nuevo marco constitucional y legal que constituía la base del propio proceso de paz» (Villarraga, 2013). El plan de reencuentro planteaba, entonces, que la inserción del EPL a la vida política, económica y social del país era un acto de reconciliación dentro de un proyecto político diseñado para validar la construcción de un diálogo democrático.

La inserción del EPL a la vida política, económica y social del país es un acto de reconciliación dentro de un proyecto político diseñado para validar la convivencia democrática hacia una sociedad más justa y equitativa. El Gobierno y el EPL concuerdan en que este proceso debe generar una corriente de convivencia y la ampliación de la democracia. Para asegurar que tanto la difusión del proceso de paz con el EPL como los proyectos de reinserción cívica y productiva de su fuerza, tengan el necesario respaldo de la ciudadanía, de las organizaciones civiles, empresariales, y para que las tareas que habrán de emprenderse con estos objetivos cuenten con el apoyo de los gobiernos seccionales (Acuerdo de Paz entre el *Gobierno nacional y el Ejército Popular de Liberación*, 15 de febrero de 1991).

No obstante, los excombatientes fueron víctimas de asesinatos, persecuciones, amenazas y desplazamientos, y, adicionalmente, la condición de reintegrarse en los territorios en medio del recrudecimiento de la guerra promovió casos de reincidencia o de rearme, aunque con los matices regionales propios del desarrollo del conflicto a nivel local, de los tiempos y las características de los actores involucrados (Fundación Cultura Democrática, 2006).

En el Urabá, región de influencia histórica del EPL y zona de vital importancia para la expansión del proyecto paramilitar, los excombatientes y su proyecto político y social fueron víctimas de varios hostigamientos realizados por las Farc, por un grupo disidente del mismo EPL y por la contrainsurgencia (Centro de Memoria, Paz

25 «Dejaron definitivamente las armas el primero de marzo y ahora están en la fase de reencuentro, de reinserción. Es un reto para estas dos mil mujeres y hombres miembros del EPL y para la sociedad colombiana que los acoge de nuevo como ciudadanos. Bienvenidos. Para ellos esa transición es vivida con nostalgia pero también con incertidumbre frente al futuro. Sin embargo han votado firmemente en favor de paz y de la reconstrucción de Colombia. Y han creado un partido político que mantiene sus siglas pero cambia su contenido: Esperanza, Paz, Libertad» (El Tiempo, s.f.).



La última fase del programa de reinserción se enfocó en la proyección de la socialización hacia las comunidades de las regiones por medio de programas que beneficiaran a la población no desmovilizada

y Reconciliación, s.f.). De los 2200 desmovilizados, 500 murieron; algunos de ellos se aliaron con los paramilitares de Carlos Castaño contra las Farc y Caraballo, otros se rearmaron, para defenderse, en los Comandos Populares²⁶ (*Semana*, 2011, febrero). Varios casos de reintegración fueron minados de esta forma por la ausencia de garantías y condiciones de seguridad en las zonas rurales.

Por otro lado, a propósito de la reintegración, el Gobierno creó el Programa de Reinserción Económica y Social y, en 1990, el Consejo Nacional de Normalización, vinculado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), encargado de supervisar y coordinar los programas y asignar los recursos provenientes del Fondo para la Paz a los Consejos Regionales de Normalización. En 1991, se creó la Oficina Nacional de Reinserción, que meses después sería trasladada a la denominada Dirección del Programa Presidencial para la Reinserción, adscrita al DAPRE, para finalmente reintegrarse al PNR (Turriago y Bustamante 2004, pp. 25-27).

Los excombatientes indultados recibieron un auxilio de mantenimiento, atención en salud, acceso a créditos productivos y asistencia técnica; sin embargo, dichos beneficios no fueron sostenibles y hubo una ausencia de acompañamiento del Estado en el desarrollo de los proyectos productivos. Así, surgieron proyectos empresariales colectivos e individuales, tanto rurales como urbanos, que se vieron afectados a pesar de haber sido apoyados por el programa de reinserción, por la ausencia de una estrategia acertada, lo cual es muestra del «predominio de un enfoque hacia la individualización; las falencias en la asesoría, y el seguimiento y notorias dificultades en el contexto macroeconómico» (Franco, 2000, pp. 128-130, citado en Villarraga, 2013).

La última fase del programa de reinserción se enfocó en la proyección de la socialización hacia las comunidades de las regiones por medio de programas que beneficiaran a la población no desmovilizada (Franco, 2000, p. 132), lo que permitió la realización de proyectos relacionados con la promoción de políticas de paz y convivencia, derechos humanos, desarrollo local y participación ciudadana. Al respecto, existe cierto consenso en torno a señalar el éxito de los programas de capacitación y educación, con énfasis en resolución pacífica de conflictos²⁷ (Villarraga, 2013). Las cooperativas, empresas, asociaciones y ONG creadas o promovidas con el concurso de los desmovilizados constituyeron un valioso

26 Surgió un grupo rearmado de desmovilizados y no desmovilizados —los Comandos Populares—, que, tras acciones defensivas, incurrió en violaciones contra la población civil similares a las causadas en la región en esos años por militares, paramilitares y guerrillas (Villarraga y Plazas, 1994).

27 «El programa de validación de bachillerato, con énfasis en resolución pacífica de conflictos, se extendió a una franja importante de la población de escasos recursos. Algunos grupos desmovilizados lograron acceso a programas comunitarios y colectivos de vivienda» (Villarraga, 2013).

aporte social y político en las regiones (Franco 2000, citado en Villarraga, 2013). Esta coyuntura promovió la eclosión de múltiples expresiones de concertación social y política a nivel local y regional, y propició, para muchos excombatientes, el nicho idóneo para continuar con su lucha política en la legalidad.

Este hecho en particular, sumado a los avances logrados gracias a los procesos de paz firmados con los otros grupos guerrilleros en la época, podría ser un indicador de que este es el momento de la historia política reciente de Colombia en el que han existido mejores condiciones para rastrear actos de reconciliación. Lo anterior, si se tiene en cuenta que varios sectores de la sociedad colombiana transformaron sus percepciones y nociones frente a los excombatientes, a pesar de la persistencia y el recrudecimiento del conflicto armado. Adicionalmente, la materialización del énfasis dado por los grupos desmovilizados en el desarrollo de los acuerdos a los procesos de participación política, tanto en el marco de las elecciones de cuerpos colegiados y de alcaldías como para la Asamblea Nacional Constituyente, puso de manifiesto un esfuerzo positivo emprendido por parte de la institucionalidad, en la medida que implicó «poner en marcha los compromisos suscritos en los acuerdos de paz en torno a la favorabilidad política: aplicación del indulto; montaje de los esquemas de seguridad; legalización de las nuevas organizaciones políticas; promoción de los procesos a través de los medios de comunicación y ejecución de los programas de rehabilitación» (Turriago y Bustamante, 2003, p. 29).

De esta manera, los actos de reconciliación que pueden rastrearse a lo largo de la época ilustran que:

La reconciliación en contextos de conflicto que aún está por resolverse, y de violencia que aún no cesa, [...] imprime una particularidad; es a la vez: i) un horizonte o punto de llegada sea cual sea la imagen que se tenga del resultado, y, ii) una parte importante en el proceso de superación de las causas que han generado los conflictos y la violencia. Esto quiere decir que en estos contextos, la reconciliación es parte de un proceso de acercamiento de quienes están o han estado enfrentados, que involucra el diálogo comunitario, social, político, y procesos de concertación y negociación de en torno a los intereses y necesidades de la población. Deja entonces de ser un momento en la etapa post-conflicto, que aún está por abrirse camino, para ser un elemento más en la superación del mismo. (Fernández, 2013)

A pesar de todo el avance que los acuerdos pudieron significar en términos de la construcción de la paz y la reconciliación, la política de Gaviria presentaría la misma incoherencia evidenciada en la política de Barco: después del ataque a Casa

Verde, el 9 de diciembre de 1990, el mismo día que se producían las elecciones de los integrantes de la Constituyente, el presidente declaró y emprendió la «guerra integral» contra la guerrilla; esta estrategia fue interrumpida transitoriamente por los diálogos de Tlaxcala, en México, con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en 1992. Para entonces, el conflicto social y armado había adquirido nuevas dimensiones que superaban sus causas históricas iniciales (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015)²⁸. En términos de Álvaro Villarraga:

hay que reconocer que hubo voluntarismo y cortoplacismo al pretender conseguir la paz a partir de unos acuerdos políticos que [...] no se asociaron con una estrategia de Estado que comprometiera acciones estructurales y de largo plazo, ni con una dinámica de amplio consenso nacional que consiguiera algo más que una respuesta coyuntural de apoyo. (2009, 90)

A pesar del cortoplacismo de las políticas de paz observadas desde los años 80, la fluctuante infraestructura institucional que acompañó los procesos de reintegración de excombatientes se mantendría sin mayores reformas durante varios años. Esto puede deberse a que no hubo procesos de paz que culminaran en desmovilizaciones colectivas, ni existió algún proceso político con niveles de acción colectiva e incidencia social que se tradujera en un mayor número de desmovilizaciones.

Diálogos, rupturas y énfasis de la reinserción individual de excombatientes

El recrudescimiento de la guerra entre el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín, la reacomodación de la guerrilla en varias de las zonas de influencia que habían sido controladas por los grupos desmovilizados, la consolidación de grupos paramilitares a partir de la recomposición de sus filas, nutridas en muchos casos por excombatientes de grupos insurgentes, y la crisis de gobernabilidad del Estado, que venía gestándose simultáneamente con los procesos de descentralización, fueron algunas de las complejas dinámicas que vivió el país durante el segundo lustro de los años 90.

El Gobierno Samper intentó construir un modelo de negociación con la guerrilla y reformar parcialmente el proceso de desmovilizaciones individuales²⁹, pero toda

28 Otra arista de la incoherencia develada es la inauguración y consolidación del modelo neoliberal en la economía nacional, cuyas consecuencias, en términos de la profundización de la crisis en el agro y las áreas rurales en general, determinarían el fracaso de muchos de los proyectos productivos emprendidos por los desmovilizados, tal y como se hará evidente en la sistematización de las experiencias rurales analizadas en esta investigación.

29 Decreto Presidencial 1385 de 1994, «Por el cual se expiden normas sobre concesión de beneficios a quienes abandonen voluntariamente las organizaciones subversivas».

Fue entre 1996 y 2005 que la guerra en Colombia alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de victimización



su iniciativa de paz quedaría relegada por el peso del proceso 8000. Merecen ser rescatados de este contexto las aproximaciones y acuerdos realizados con el ELN en Maguncia, Alemania.

Más adelante, durante la presidencia de Andrés Pastrana, el Gobierno nacional propició un nuevo acercamiento a la guerrilla de las Farc. Según Álvaro Villarraga, «su programa fue una síntesis de los consensos y propuestas nacionales existentes, en el que planteó priorizar la búsqueda de la paz en la agenda pública, pero de forma que se visibilizara de inmediato el proceso a través de hechos decisivos» (Verdad Abierta, 2012). La búsqueda de estos hechos de paz definitivos implicó la inexistencia de una «elaboración política y programática» coherente, que le diera dirección a la política de paz, entre otras cosas, «porque inicialmente no estaba presupuestada como aspecto central de su Gobierno y luego porque se asumió como hecho político para posicionar la campaña electoral» (Verdad Abierta, 2012). Después de varios sucesos que bombardearon la base de confianza en el proceso, los diálogos tendrían una ruptura definitiva en el año 2002.

Fue entre 1996 y 2005 que la guerra en Colombia alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de victimización. «[E]l conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local. Se trata de un período en el que la relación entre actores armados con la población civil se transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación y la agresión, la muerte y el destierro» (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 156). La violencia adquirió así un carácter masivo, cuya expresión característica pasó por la generalización de las masacres, el recrudecimiento del desplazamiento forzado y el despojo, en otras palabras, «los repertorios de violencia registraron su mayor grado de expansión en la historia del conflicto armado colombiano» (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 156). El cambio de las formas como se relacionaban los actores armados con la población civil en los territorios rurales sería determinante, no solo de cara a las impresionantes consecuencias que tuvo en materia de violación a los derechos humanos, sino también en proyección a los procesos de desmovilización que se emprenderían de ahí en adelante en el país.

En consecuencia, durante esta época las movilizaciones sociales expresaron una creciente deslegitimación de la insurgencia armada (García-Durán, 2011, p. 111), al tiempo que se reportó una legitimación del proyecto paramilitar por parte de élites locales en algunas zonas del país (aspecto que propiciaría, entre otras cosas, la unificación de los grupos paramilitares de todo el país en el proyecto de las AUC



La reinserción se enmarcó en la lógica de lucha contra el terrorismo existente en la base de la Seguridad Democrática, dándole un giro discursivo a la guerra y a la reintegración

durante 1997), y crecía la intimidación a las comunidades de las zonas rurales por cada uno de los bandos, debido a procesos de estigmatización y complejidades propias de una disputa violenta de esas magnitudes. Esto determinaría un escenario de profundas polarizaciones en torno a los combatientes de los grupos armados en el seno de la población civil, que profundizaron los resentimientos y odios arraigados en la sociedad colombiana.

En este contexto, 2505 personas se acogieron a los programas de desmovilización en forma individual (Villarraga, 2013). Los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana (1998-2002), y el primer mandato de Uribe (2002-2010) mantuvieron este mecanismo legal de acceso a beneficios de la reintegración de guerrilleros desertores. El Gobierno Pastrana rebautizaría la oficina con el nombre de Dirección General para la Reinserción (Decreto 2546 de 1999), que tenía como funciones principales coordinar y dirigir el programa de reinserción para la desmovilización de los grupos guerrilleros y coordinar asuntos referentes a acuerdos de paz. Esta institución se mantendría vigente hasta el año 2003.

Así como sucedió con el conflicto armado, resulta importante mencionar que los procesos de reinserción se enmarcaron, desde el 2001, en la lógica de lucha contra el terrorismo que nutrió a la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe y que le daría un nuevo giro discursivo a la guerra en Colombia. Su postura se mostraba cada vez menos dispuesta a tolerar las acciones de los «grupos terroristas», que solían ser justificadas en causas políticas. Este giro hizo aún más profunda la polarización que había traído consigo el escalamiento del conflicto desde la expansión de las AUC (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 172). Además, con este hecho suprimió discursivamente el estatus político de los grupos alzados en armas, y en ese sentido, su política de reintegración de excombatientes se enfocó casi que exclusivamente en establecer condiciones económicas personales, que le permitieran al desmovilizado sobrevivir en la vida civil de forma individual.

El Gobierno Uribe introdujo una reforma a la ley sobre orden público que permitió que los procesos de diálogo y negociación para la paz incluyeran a los grupos paramilitares, apelando a la denominación de «grupos armados ilegales», y equiparando legalmente el tratamiento a las organizaciones guerrilleras y paramilitares. El discurso oficial cuestionó la política y los procesos de paz desarrollados con anterioridad, pues negó la existencia del conflicto armado interno, calificó indistintamente a guerrilleros y paramilitares como terroristas, y cerró la posibilidad de emprender una política de negociación con la insurgencia,

tal y como ya fue mencionado. De tal forma, la «política de paz» estimuló las deserciones individuales, fortaleció la ofensiva militar y, con ella, la exigencia a todos los grupos armados ilegales de cesar las hostilidades de manera unilateral como condición mínima para establecer negociaciones, a cambio de acceder al programa de reincorporación y el beneficio de indulto (Granada, Restrepo y Vargas 2009, citados en Villarraga, 2013).

Se aprobaría entonces la Ley 782 de 2002 para conceder beneficios jurídicos a los desmovilizados para los delitos de concierto para delinquir simple, utilización ilegal de uniformes e insignias, instigación para delinquir, así como fabricación, tráfico y porte de armas y municiones. Quienes habían sido responsabilizados de delitos no contemplados en la mencionada ley y que fueron cometidos en el marco de la pertenencia a un grupo armado ilegal, antes del 25 de julio de 2005, fueron postulados posteriormente a los beneficios de la Ley 975 de 2005, en la cual se contemplarían por primera vez, de manera explícita, mecanismos propios de la justicia transicional en el país. Sobre este punto, se volverá más adelante (Observatorio DDR, Universidad Nacional, 2012).

La aplicación de esta política de reintegración estuvo reforzada inicialmente por el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del Interior, creado en 2003, que surgiría de una renovación institucional que heredó las nociones fundamentales de los programas de inserción y reincorporación que le precedieron. Sin embargo, los altos grados de improvisación, la carente articulación interinstitucional y la escasa vinculación de los entes territoriales durante su vigencia fueron algunos de los obstáculos que debió afrontar la política de reintegración de la época (ACR, s.f.). Adicionalmente, el programa implicó el desarrollo de distintas formas de dependencia en los beneficiarios, derivadas de una concepción pasiva y receptora del desmovilizado, lo que obstaculizó su empoderamiento y reintegración en el contexto social de reubicación.

Mientras que esto sucedía con el programa a cargo de las desmovilizaciones individuales, desde el año 2003 se llevaron a cabo las negociaciones en Santa Fe de Ralito con los altos mandos de las AUC. Las negociaciones culminarían en el año 2005, y con ellas se iniciaría un nuevo proceso de desmovilizaciones colectivas. Así, entre 2003 y 2006 se desarrolló el proceso de desmovilización de más de 32.000 paramilitares (García-Durán, 2011, p. 112). Dichas negociaciones, acuerdos y desmovilizaciones tuvieron la ya mencionada Ley 782 de 2002 como base normativa. Desde ese entonces, se proyectó acudir a los estándares de la justicia transicional para facilitar el tránsito de una situación de conflicto armado hacia la consecución de la paz (Observatorio DDR Universidad Nacional, 2012).

Ante esta coyuntura, se diseñó y aprobó la denominada ley de justicia y paz³⁰ como parte del proceso de desmovilización. Esta ley ofrecía una reducción de penas a cambio de la confesión completa y de «la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización» (ICTJ, s.f.). La principal premisa de la ley de justicia y paz fue conseguir un equilibrio entre una desmovilización efectiva de los grupos armados y la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas (ICTJ, s.f.).

Con las desmovilizaciones colectivas derivadas de las mesas de negociación en Santa Fe de Ralito, y en medio de la construcción de instituciones cimentadas en la ley de justicia y paz, el PRVC enfrentó problemas de cobertura y acceso, articulación institucional, acompañamiento a excombatientes y oferta de servicios básicos, en lo que se consideraba la etapa más crítica del proceso de desmovilización; lo anterior, teniendo en cuenta que el número de desmovilizados acogidos al programa fue creciendo de forma sustancial, copando la capacidad de respuesta y cobertura de la institucionalidad que asumía el proceso. Esta coyuntura se hizo más compleja por la existencia de un limbo jurídico, derivado de la existencia de miles de desmovilizados que no fueron cobijados por los beneficios de la Ley 975, y que se solucionarían con la expedición de la Ley 1424 en el año 2011. Sobre este punto se hará énfasis más adelante.

Este tipo de inconvenientes derivó en una progresiva transformación del proceso de reintegración sobre el camino. De este modo, el PRVC, asumido como un programa de reinserción enfocado en el corto plazo, fue reemplazado y asumido por la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, creada en septiembre de 2006. La transición enunciada afectaría la ejecución del programa, en la medida que provocó algunos problemas administrativos derivados del «poco fortalecimiento de las oficinas locales responsables del tema y la falta de articulación de la oferta nacional con las administraciones municipales y el sector privado» (MAPP-OEA, 2006, p. 3).

La nueva institucionalidad, la justicia transicional y los nuevos retos a la reintegración y la reconciliación

La Alta Consejería para la Reintegración sería también reformada en 2011, durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ya que, a pesar de presentar mejoras en contraste con la gestión emprendida por el PRVC, no logró ser autónoma en relación con su dependencia del Ministerio del Interior. Uno de

³⁰ Ley 975 de 2005.

El programa implicó el desarrollo de distintas formas de dependencia en los beneficiarios, derivadas de una concepción pasiva y receptora del desmovilizado, lo que obstaculizó su empoderamiento y reintegración en el contexto social de reubicación



los cambios más significativos que introdujo la ACR fue el paso de la reinserción a la reintegración. Según su perspectiva institucional, «la reintegración es una oferta de seis años y medio que el Estado colombiano le[s] ofrece a las personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales que quieren reintegrarse a la vida social y económica. La reintegración busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación, y fomentar la corresponsabilidad de los actores externos» (ACR, s.f. b).

Esta reforma institucional y el proceso de reintegración que se consolidó tuvieron origen a partir de la sanción de la Ley 1424 de 2011, en la cual se contemplan algunas «disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones» (Ley 1424 de 2011). Esta ley beneficiaría a cerca de 25.000 desmovilizados de grupos armados ilegales, cuya situación jurídica no había sido definida, y que pagarían sus penas sin ir a la cárcel, siempre y cuando no hubieran cometido delitos de lesa humanidad y no estuviesen postulados a la ley de justicia y paz.

La ley contempla, además, que es condición necesaria para el desmovilizado beneficiario de sus preceptos ser participante activo o culminar formalmente el proceso de reintegración de la ACR, no haber incurrido en delitos con posterioridad a su desmovilización, participar de las actividades de servicio social y reparación que establezca la Alta Consejería para la Reintegración y firmar el acuerdo de contribución a la verdad histórica, en donde se compromete a facilitar el esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley, el contexto general de su participación y a garantizar la no repetición de hechos violentos, así como la reparación, ante el Alto Consejero Presidencial Para la Reintegración (*El Tiempo*, 2011, junio).

En términos de la reintegración económica, los programas brindados por la agencia demuestran que no ha habido, desde la década del 80, cambios relevantes en materia de subsidios y programas de esta naturaleza para el desmovilizado. La reintegración económica continúa buscando que se promueva la participación de los excombatientes en el mercado laboral, bien sea como empleados o como emprendedores de su propio plan de negocio, y en ese sentido, tienen acceso a créditos, capacitaciones, capital semilla, etcétera.

Sin embargo, y a diferencia de los programas de reintegración colectiva que tuvieron lugar durante los años 90³¹, la reintegración política es la dimensión olvidada de la política actual de reintegración, en la medida que no provee mecanismos suficientes para que los excombatientes «enfrenten la necesidad de abrazar valores democráticos como el pluralismo y la tolerancia, adaptarse a la discusión política entre iguales como criterio de participación política de calidad en la esfera pública, y tomar responsabilidad de los derechos y deberes ciudadanos como la participación electoral» (IEGAP, 2013). En contraste, el componente de la reintegración comunitaria pareciera ser novedoso. Tiene como objetivo, según la fuente oficial, «construir vínculos entre la comunidad de manera contextualizada, entre excombatientes participantes de la ruta de reintegración y sus comunidades receptoras, así como entre estas comunidades y las instituciones locales». De este modo, la ACR intenta, por lo menos en el discurso, fortalecer los espacios para el encuentro de los actores sociales en torno a la deliberación de los asuntos públicos que permitan la reconstrucción de la confianza entre los miembros de las comunidades y el Estado (ACR, s.f.).

Sin embargo, más allá de una mención nominal, no es suficientemente explícito en qué sentido se relaciona con las estrategias de reintegración comunitaria en los términos de procurar la reconciliación. Componentes como el servicio social no están necesariamente orientados a propiciar espacios de encuentro entre la comunidad receptora y los participantes del programa, en la medida que sus objetivos (implementar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de quienes acogen a las personas que se están reintegrando³²) no se traducen de forma obligatoria en la consolidación de interacciones y en la construcción de relaciones entre los participantes del programa y los miembros de la comunidad receptora. Por último, resulta imprescindible hacer mención a la Ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras, que beneficia a todos quienes a partir del primero de enero de 1985 hayan sufrido daños con ocasión del conflicto armado, incluidos miembros de la Fuerza Pública y extranjeros, y a cualquiera que a partir del 10 de enero de 1991 hubiese perdido los terrenos que poseía o explotaba como consecuencia de hechos violentos del conflicto (*Semana*, s.f.). Desde la perspectiva del Gobierno:

31 Como fue esbozado líneas arriba, en el énfasis dado a la reintegración política de excombatientes de las guerrillas se gestaron distintos espacios de encuentro que propiciaron avances claros y concretos en términos de la reconciliación. A pesar de que los fenómenos políticos que influyeron en ambos procesos de desmovilización son radicalmente distintos, al igual que la identidad política de los grupos armados que se desmovilizaron, vale la pena hacer visibles las posibles implicaciones que podría traer consigo la no priorización de la reintegración política de los excombatientes en la estructura institucional vigente, de cara a la consolidación de escenarios propicios a la reconciliación.

32 Información disponible en la infografía *Acciones benéficas de personas en reintegración con comunidades que los acogen* SERVICIO SOCIAL (ACR, s.f.).


[Esta ley] constituye un hito en la defensa y garantía de los derechos humanos en Colombia, que se ciñe a los estándares internacionales y que además expresa la voluntad de una sociedad que se congregó para debatir y concertar una ley incluyente, viable y responsable, que es hoy la esperanza para el logro de la reconciliación nacional y la prosperidad para todos. Una reconciliación que permita el restablecimiento de la confianza, que busca la reconstrucción de vínculos y el pensar en un futuro compartido. (Ley 1448 de 2011)

Para ello, se ha erigido un engranaje institucional enfocado en responder a las necesidades específicas de la población víctima de la violencia, orientado a garantizar los derechos a la verdad, la justicia, y la reparación.

El análisis del contexto nacional permite afirmar entonces que la reconciliación plantearía la necesidad de establecer un equilibrio entre la política de reparación de las víctimas y la política de reintegración de los desmovilizados, para propiciar de este modo un ambiente idóneo con el fin de emprender estos procesos de reconocimiento, que son esencialmente subjetivos, y, de esta manera, trascender del silenciamiento de las armas para construir un tejido social fuerte. Sin embargo, la fluctuación institucional y el diseño de las políticas públicas no han garantizado, hasta ahora, ni el fin del conflicto armado, ni la construcción de escenarios propicios para una reconciliación nacional.

Pablo de Greiff (2008) sostenía que la reconciliación es una idea compleja pero reducible a unos mínimos básicos, y en esta perspectiva parece enfocarse el Estado y su oferta institucional. Vista así, «no contempla la reconciliación definida en los extremos desde lo personal hasta lo político, sino que se concentra únicamente en las medidas que constituyen una política de justicia transicional, dentro de ellas: la justicia penal, el esclarecimiento de la verdad, las reparaciones y la reforma institucional». Entonces, una sociedad reconciliada será la que se desprenda del éxito en la aplicación de estas medidas. Se trata de una visión que se concentra en condiciones objetivas e ignora la dimensión subjetiva de la reconciliación, la cual involucra un cambio de actitudes. Esta reconciliación descartaría la posibilidad de iniciativas de reconciliación independientes de las medidas de justicia.

Al contemplar esta noción de reconciliación, y para terminar este apartado, es preciso insistir en que, gracias a la inclusión dentro del contexto político y jurídico nacional del concepto de justicia transicional, cuyo objetivo medular consiste en



proporcionar a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, fomentando la confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de derecho (ICTJ, s.f.), los alcances de la reconciliación llamaron la atención de la política pública, más allá de su apelación discursiva. A partir de la visibilización de las víctimas en el debate jurídico del país, y a partir del diseño y la implementación de políticas de reparación, la noción de reconciliación ha representado un concepto mucho menos abstracto y subjetivo. Se teje un consenso, por lo menos nominal, en torno a sus implicaciones prácticas y a los alcances de su construcción conceptual.

Tal y como se verá a continuación, en el desarrollo de los procesos nacionales descritos en este contexto general, se enmarcaron las experiencias objeto de esta investigación. Esto permite no solo posicionar, en el contexto nacional, las particularidades de las experiencias en cuestión, sino que también así se defiende la tesis de que, para los territorios, los retos inherentes a los procesos de reintegración de excombatientes no son una novedad.

A pesar de que el contexto y las experiencias analizadas en esta investigación dan cuenta de los precedentes de la reintegración y de la capacidad que al respecto existe en estos territorios, conviene decir que el contexto nacional actual plantea nuevos retos y potencialidades en materia de la construcción de una nueva noción de reconciliación. Las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc en la ciudad de La Habana, y los diálogos exploratorios con el ELN, plantean la necesidad de discutir las implicaciones de los procesos de DDR de cara a la construcción de sociedad, ya no como un conjunto de medidas que hacen parte de un estrategia contrainsurgente de pacificación, como sucedió en algunos gobiernos anteriores, sino como un proceso que tenga una incidencia clara en lo referido a la construcción de la paz nacional con un sentido de integralidad. Para salvar este obstáculo, se debería tomar como punto de partida las experiencias previas, con el fin de contemplar las lecciones aprendidas de la historia y evitar así que se cometan los mismos errores del pasado.

Las experiencias que se describirán en el capítulo 3 dan cuenta de avances que permiten afirmar que la reconciliación dejó de ser una apuesta exclusivamente discursiva, nominal y abstracta, para ser un proceso que existe en realidad y que se cimienta en la creación de escenarios propicios para el restablecimiento de relaciones interrumpidas o determinadas por la violencia, incluso en medio de las hostilidades armadas.

Capítulo 3.

Experiencias locales de procesos de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras



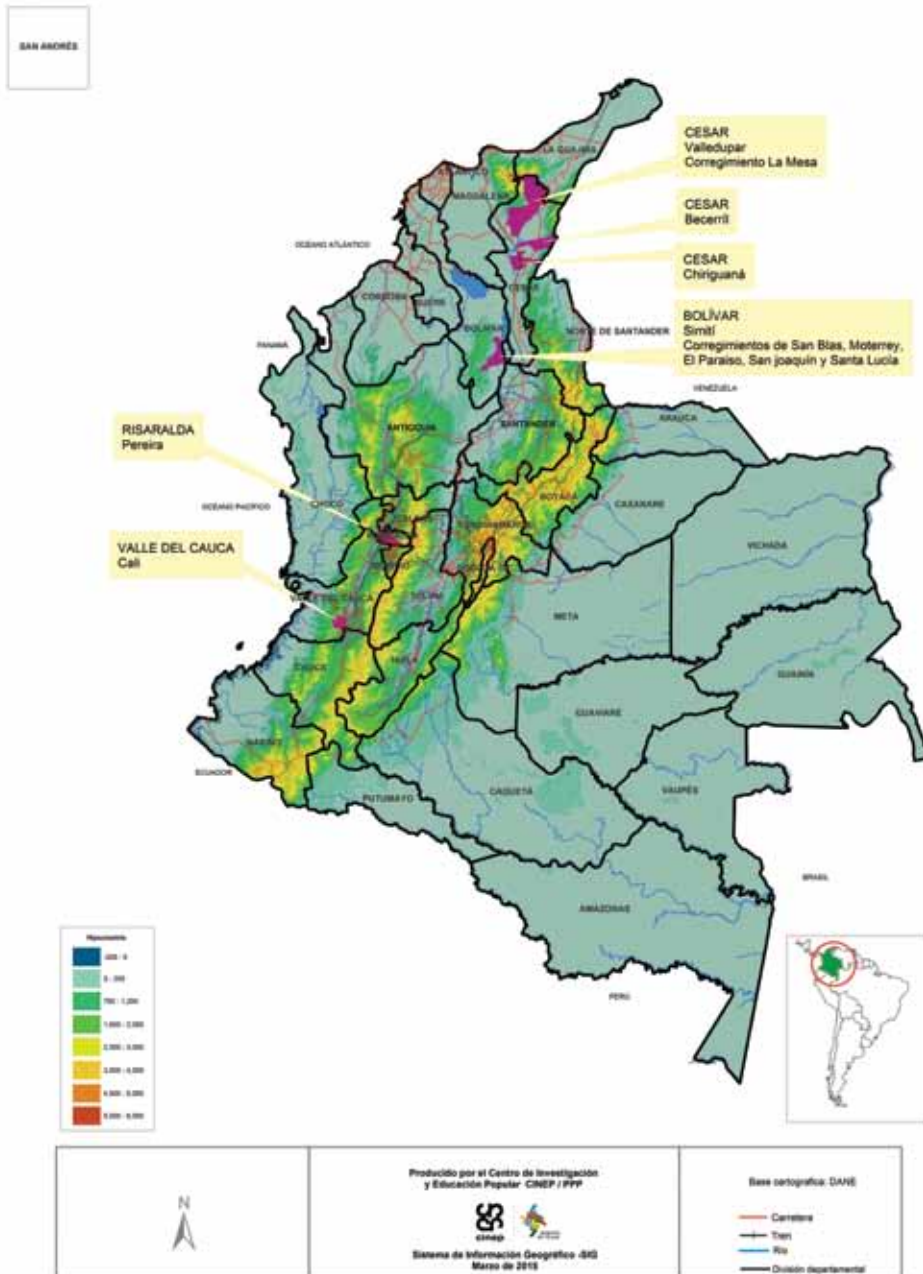
Las experiencias que se encuentran a continuación son acciones colectivas derivadas de procesos de reintegración de excombatientes, que han constituido de maneras distintas, y desde diversas perspectivas, avances en términos de reconciliación. El objetivo de este apartado es mostrar cuáles de los componentes de las experiencias en mención permitieron generar dichos avances. En ese orden de ideas, el capítulo expondrá una descripción del contexto en el cual tienen lugar las experiencias, así como también una reseña de las mismas, junto con el análisis de los mecanismos que han facilitado su funcionamiento y sostenibilidad, para terminar con una selección de aprendizajes respecto a los procesos de reconciliación.

Las cuatro experiencias, localizadas en los departamentos de Cesar, Valle del Cauca, Risaralda y Bolívar (ver Mapa 1), la manera como se han construido relaciones entre algunos sectores de la comunidad receptora y los excombatientes que se acogieron a procesos de desmovilización, para así contemplar cómo, en cada uno de los casos, la influencia del contexto, la confluencia de actores y la activación de ciertos mecanismos se tradujo directa o indirectamente en acciones de reconciliación.

Finalmente, es importante resaltar que, a pesar de que los procesos descritos a continuación dan cuenta de realidades locales e históricas específicas, es posible extraer algunos aprendizajes sobre la forma en la cual se han construido espacios de encuentro generadores de acciones de reconciliación.

Mapa 1

Ubicación nacional de las cuatro experiencias



Experiencia de Ganchos y Amarras del Valle

Ganchos y Amarras del Valle es una empresa privada ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, dedicada a la fabricación de distintos tipos de artículos para la fijación de tejas. Esta empresa surgió en 2010, producto de una iniciativa conjunta entre Eternit, la Fundación Carvajal³³, Coltabaco, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Siderúrgica De Occidente (SIDOC) y la Alta Consejería para la Reintegración, ahora Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), como parte del objetivo para «generar nuevas alternativas para población desmovilizada de grupos armados ilegales» (El Tiempo, 2012).

Esta empresa está compuesta por diez desmovilizados³⁴, seis de los cuales pertenecían a los bloques Calima y Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y cuatro son desertores de la guerrilla de las Farc. Estos excombatientes asociados son los dueños de la empresa, han ejercido progresivamente mayores funciones técnicas y se han involucrado activamente en las decisiones gerenciales. De los diez integrantes, nueve han culminado satisfactoriamente el proceso de reintegración con la Agencia Colombiana para la Reintegración (en adelante ACR).

La Fundación Carvajal ha sido una de las entidades más cercanas al proyecto de generación de empleo para excombatientes en el Valle del Cauca. Concretamente, ha sido vital para el surgimiento y sostenimiento de Ganchos y Amarras, pues realizó los estudios de viabilidad y estableció una serie de acuerdos con la ACR para la selección de los desmovilizados beneficiarios del proyecto³⁵. Igualmente, ha actuado como prestamista garantizando el sostenimiento de la iniciativa.

Por otro lado, la decisión de los integrantes de Ganchos y Amarras de asentarse en Cali estuvo fundamentada en las posibilidades y facilidades que ofrecía la ciudad en cuanto a la mayor probabilidad de mejoras en los niveles de calidad de vida, y en términos de seguridad por la condición de anonimato proporcionada por las grandes urbes. Adicionalmente, el asentamiento de algunas familias de los desmovilizados que ya vivían en dicha ciudad y la facilidad para el acceso a

33 La Fundación Carvajal surgió de la donación de un porcentaje de las acciones del grupo Carvajal S.A que hizo la familia Carvajal (hoy el 23,5 %) convirtiéndola en su mayor accionista (Fundación Carvajal).

34 Actualmente, uno se encuentra retirado temporalmente por motivos personales.

35 Los criterios de selección se construyeron conjuntamente entre la ACR y la Fundación Carvajal (Gerente Ganchos y Amarras, junio 2014).

los programas de reintegración ofrecidos por la ACR³⁶ fueron razones vitales para ubicarse allí, pues permitieron la reintegración efectiva de la mayoría de excombatientes participantes en esta experiencia.

Hay que tener en cuenta que el carácter filantrópico de la élite valluna, con arraigos profundos en la religión católica, y el contexto histórico de la sociedad caleña son factores culturales que han facilitado la emergencia de este tipo de experiencias (Escorcía, 1981). El hecho mismo de que la Fundación Carvajal —creada por una de las familias más adineradas del Valle— haya decidido invertir en la generación de alternativas de empleo para desmovilizados en el departamento es una manifestación de las preocupaciones ante problemáticas tales como la atención y generación de oportunidades para este sector poblacional. Asimismo, en Cali se encuentran otro tipo de iniciativas sociales provenientes de sectores adinerados de la sociedad, por ejemplo, Vallenpaz³⁷.

La convergencia de actores privados y estatales que se ha generado a partir de este tipo de experiencias es una muestra de acciones concretas de corresponsabilidad para asumir los retos de la reintegración económica de excombatientes en los territorios. La mediación y el acompañamiento de las instituciones estatales y de sectores de la sociedad, en este caso de un sector del empresariado, han sido clave para el sostenimiento de la experiencia de Ganchos y Amarras.

Sin embargo, más allá de la reintegración económica que se evidencia claramente en esta experiencia, se plantean retos en la construcción de relaciones entre excombatientes y de estos con sus comunidades receptoras. Igualmente, se deja entrever la idea de que la «comunidad receptora», lejos de ser un conjunto social claramente definido, está constituida por un grupo heterogéneo de actores, en la cual los excombatientes establecen relaciones diferenciadas y, en esa medida, se dan o no se dan acciones hacia la reconciliación. La anterior situación expone, en el caso de Cali, unas amplias brechas entre las concepciones de reconciliación entre comunidades receptoras y los excombatientes que allí habitan.

36 Estos criterios fueron comentados durante el taller de retrospectiva con los miembros de Ganchos y Amarras.

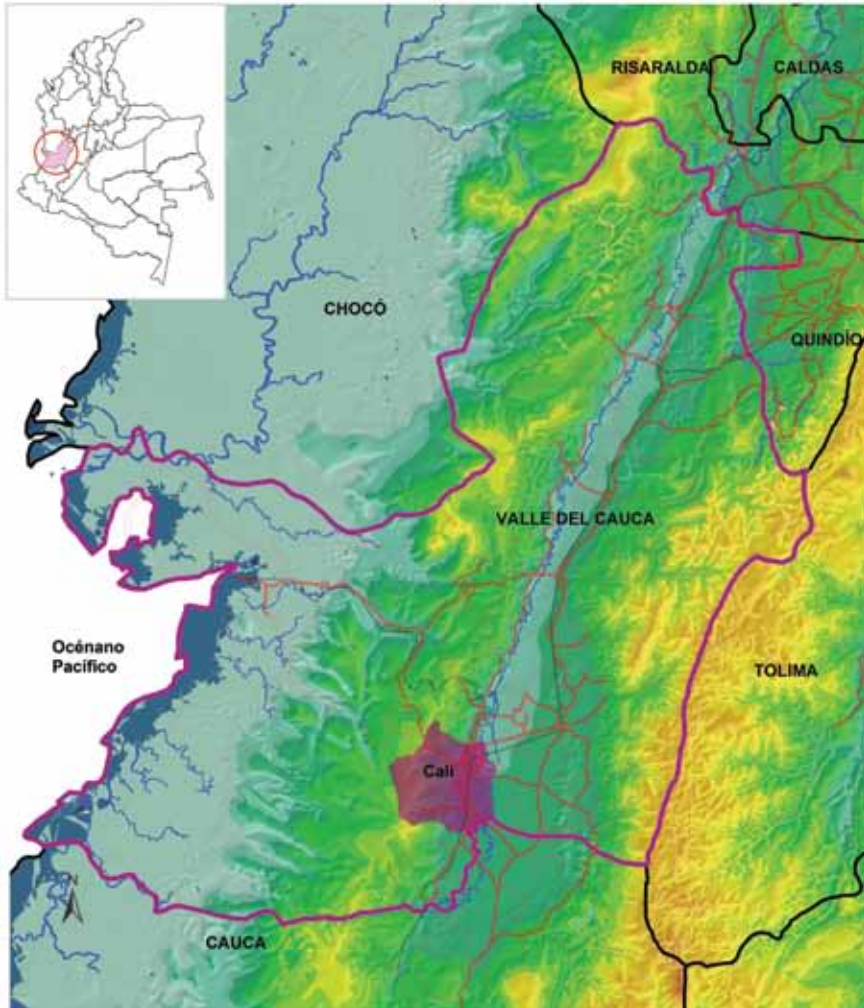
37 Rodrigo Guerrero Velasco alcalde de Cali para el periodo 2012-2015 fue director de la Fundación Carvajal y asesoró directamente el diseño de Vallenpaz. Asimismo, ha asesorado iniciativas como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Plan Colombia. Para mayor información sobre Vallenpaz revisar: http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68307/1/vallenpaz_convergencia_acciones.pdf

La experiencia de Ganchos y Amarras demuestra los alcances diferenciados de la reconciliación entre un grupo de desmovilizados y los diversos sectores de su comunidad receptora: una reintegración económica atravesada por un proceso de reconciliación con un sector del empresariado caleño; una reconciliación interpersonal entre un grupo de excombatientes, que anteriormente eran adversarios, y una mera coexistencia con la comunidad receptora en los barrios de residencia.

El contexto caleño: violencia, conservadurismo y filantropía

Santiago de Cali es la capital del Valle del Cauca, departamento ubicado en el suroccidente del país con costas sobre el Océano Pacífico. La ciudad cuenta con 560,3 km² de extensión y topográficamente está rodeada por tres regiones naturales: la región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental; la región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo. Por último, la región de la Costa Pacífica sede del principal puerto de Colombia, Buenaventura. Según el Censo de 2005, en ese año la ciudad tenía 2.068.386 habitantes, lo que la hacía la tercera ciudad más poblada de Colombia. Del mismo modo, el DANE asegura en sus proyecciones de población que para el año 2015 Cali contará con cerca de 2.369.829 habitantes. De este total 1.115.019 son hombres, es decir el 48,04%, y 1.218.194 son mujeres, lo que corresponde al 51,4% de la población total (DANE, Boletín Censo General 2005 Perfil Cali, 2010). Al respecto se puede observar el Mapa 2 expuesto a continuación:

Mapa 2
Experiencia de Ganchos y Amarras del Valle



<p>■ Municipio de intervención</p> <p>■ Departamento del Valle del Cauca</p>	<p>Producido por el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP / PPP</p>  <p>Sistema de Información Geográfica - SIG Marzo de 2015</p>	<p>Base cartográfica: DAHE</p> <p>— Carretera</p> <p>— Carretera</p> <p>— Carretera sin pavimento</p> <p>— Tren</p> <p>— Río</p> <p>— División departamental</p>
--	--	--

Cali es una ciudad caracterizada por una dinámica social históricamente estratificada y jerarquizada, lo que podría considerarse como una herencia de la economía esclavista de la Colonia



Cali presenta altos índices de pobreza, problemáticas sociales complejas como discriminación racial³⁸, violencia e inseguridad, y, actualmente, es uno de los grandes centros receptores de población desplazada del país. Al respecto, el Informe de Riesgo N°002- 14 de la Defensoría del Pueblo, correspondiente a febrero de 2014, asegura que en Cali han confluído distintos factores que inciden en el recrudecimiento de la violencia ligada al conflicto armado interno. La presencia de milicias de la guerrilla en sus sectores aledaños, así como la presencia de estructuras armadas después de la desmovilización de las AUC, hacen parte de una «situación que ha mantenido en un nivel alto los índices de violencia y la afectación sobre la población, particularmente de aquella ubicada en las zonas hondamente vulnerables donde se concentran los mayores índices de pobreza y de presencia de víctimas de la violencia [...]» (Personería Municipal Santiago de Cali, 2014).

Adicionalmente, Cali es una ciudad caracterizada por una dinámica social históricamente estratificada y jerarquizada, lo que podría considerarse como una herencia de la economía esclavista de la Colonia. Esta dinámica social estuvo fuertemente influenciada por elementos ideológicos y legales calcados de la sociedad española:

Esta sociedad colonial, al igual que la de su metrópolis era una sociedad de jerarquías sociales basadas en la existencia de estamentos cuya característica era la desigualdad jurídicamente reconocida y sancionada [...] pero en América se hacía presente un importante elemento de estratificación y diferenciación que no estaba en la sociedad europea, por lo menos abiertamente: el factor racial. (Escorcía, 1981)

Según Escorcía (1981), este factor racial permanecería rígido en las estructuras de la sociedad caleña. Dentro de esta misma dinámica colonial, se instauraron fuertes características de una población conservadora, católica y patriarcal que perduran hasta hoy, luego de la abolición de la esclavitud en 1851 y la desamortización de los bienes eclesiásticos en 1861 (Grajales, 2012).

En contraste con lo anterior, el crecimiento económico y el carácter empresarial de la sociedad caleña comenzaron a sobresalir a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en la medida en que los empresarios empezaron a especializarse y diversificaron la producción, con el fin de maximizar los ingresos. Los principales negocios de la época eran la crianza y venta de ganado, la importación de artículos

38 Según el Censo de 2005, del total de la población del Municipio de Cali el 26,4% se autoreconoció como población negra (Censo Nacional 2005, DANE 2005).

de consumo para las élites —especialmente—, almacenes y venta de rancho y licores, droguerías, otorgamiento de crédito y actividades bancarias e industrias manufactureras (Benítez, 2012). En todo este proceso de formación de las élites empresariales caleñas resalta el papel de la iglesia católica, ya que, como algunos autores aseguran «históricamente ha jalonado el desarrollo y la construcción de ciudadanía, así como ha sido co-responsable de situaciones injustas ya sea por indiferencia o aprobación» (Grajales, 2012).

Una mirada a la violencia en Cali

Paralelo a este crecimiento industrial y empresarial, se empezó a configurar un contexto violento en el Valle del Cauca desde los años cuarenta y cincuenta, momento en el cual llegaron personas desplazadas por la violencia de otros departamentos (Eje Cafetero). Una parte de esta población se involucró en la disputa por el territorio, con la intención de defender y promover o el conservadurismo o el liberalismo (Banco de Datos de Violencia Política, 2013). A este primer proceso migratorio de la década de los años 50, se le sumó la migración de población, en la década de los 70, gran parte de ella damnificada del maremoto de Tumaco ocurrido en 1979 (Negrete, 2012).

Estos procesos migratorios dieron pie a la formación de centros de asentamiento ilegales, en terrenos que se convertirían posteriormente en barrios legales, gracias al trabajo colectivo de los inmigrantes que encontraron ahí un lugar para reconstruir sus proyectos de vida. En dichos espacios confluyó la recepción de distintos procesos migratorios y así se dio origen a sectores poblacionales surgidos desde la década del treinta, entre los que se encuentran el Distrito de Aguablanca, La Ladera, Siloé y más recientemente Potrero Grande. Dichos sectores comparten algunas características tales como las condiciones de vulnerabilidad y el origen de sus pobladores de procesos como el desplazamiento por desastres naturales o por la violencia en las regiones de Tumaco, Chocó, Cauca, Huila.

Debido a que muchos de los migrantes que han llegado a esta zona son afrocolombianos, se convirtieron en el grupo poblacional mayoritario de estos distritos. Al respecto Urrea Giraldo (1999), asegura que la participación de población afrocolombiana, al igual que otros grupos de población no afrocolombianos, tiene «como contexto socio-histórico el conflicto social de la continua demanda de tierras para vivir de sectores populares desde finales de la década del 40, prolongándose en varias etapas de urbanización hasta las décadas recientes». El proceso de migración hacia estas zonas no ha cesado hasta el presente, lo que podría indicar que en los períodos de llegada a partir de la década del 70 «las condiciones de inserción urbana [de la población migrante] al lado de un mecanismo de discriminación

racial los ha colocado en una situación mayor de segregación, vía urbanización todavía precaria» (Negrete, 2012).

Por otro lado, simultáneamente al auge empresarial caleño, los problemas sociales se hicieron evidentes a finales de los años 70 y comienzos de los 80 cuando hizo su aparición el tráfico ilegal de cocaína en el país, que encontró en las zonas más vulnerables de Cali (antes mencionadas), el personal idóneo y los espacios propicios para solidificar un mercado ilegal que cambiaría el modo de vida de muchos caleños y dio pie a una «cultura del sicariato» que configuró una imagen negativa de estos distritos.

Así las cosas, Benjamín Herrera Zuleta fue el pionero del tráfico de estupefacientes en el Valle del Cauca y llegó a ser conocido como «El Papa negro de la cocaína» (El Espectador, 2012). Luego de este episodio aparecieron los capos que conformarían el Cartel de Cali y no solo controlarían el tráfico ilegal de cocaína, sino que serían reconocidos por el lavado de dinero en Colombia y en Estados Unidos (El Espectador, 2012).

A finales de la década de los 80, las Farc crearon el Frente 30 que actuaba en la zona rural de los municipios de Buenaventura, Dagua y Calima. Municipios en los que este grupo armado inició un proceso de consolidación territorial, para, una década después, incrementar su accionar con el fortalecimiento del Frente 6, que concentró sus operaciones en el Norte del Cauca y amplió su eje de acción hacia la cordillera Central. Durante los años siguientes, las Farc fortalecieron su trabajo de estructuras urbanas en la ciudad de Cali y creó el frente urbano Manuel Cepeda Vargas. Igualmente, entre 1988 y 1999, el Frente 30 comenzó su expansión hacia el área urbana de Buenaventura y el margen oriental de la cordillera Occidental, gracias al posicionamiento del Frente 6 y del Bloque Central del sur del Tolima (Fundación Social, 2011). Al tiempo que las Farc se fortalecían, el ELN se asentó en el Valle del Cauca a mediados de los ochenta con el frente Luis Carlos Cárdenas, que operaba en los municipios de Riofrío, El Dovio y Trujillo (Fundación Social, 2011). De igual manera, entre 1985 y 1986, el grupo guerrillero M-19 tuvo presencia activa en la ciudad y como respuesta a esta incursión el Estado desarrolló acciones militares propias de la guerra urbana en estos distritos.

Para la década de los 80 y los 90 en Cali ya se hacía evidente una inestabilidad institucional, influenciada en parte por la llegada del narcotráfico. Tal y como asegura Andrea Otero (2012) «en los últimos 20 años, tres alcaldes de la ciudad fueron destituidos por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en sus mandatos o en la forma como fueron electos. Ellos fueron Mauricio Guzmán



Para la década de los 80 y los 90 en Cali ya se hacía evidente una inestabilidad institucional, influenciada en parte por la llegada del narcotráfico

Cuevas (enero 1995 a agosto 1997), Apolinar Salcedo (Enero 2004 a mayo 2007) y Jorge Iván Ospina Gómez (Enero 2008 a diciembre 2011)». Esto ha fomentado la desconfianza en las instituciones caleñas, ya que se percibe un clima político pobre y proclive a la corrupción.

En medio de la configuración de un ambiente de violencia, inseguridad y desconfianza de la sociedad caleña en la institucionalidad, mientras los grupos insurgentes incursionaban en el departamento del Valle del Cauca, el Cartel de Cali aprovechó el escaso control territorial del Estado en las costas del Océano Pacífico y consolidó rutas de exportación de cocaína en esta zona, que actualmente se encuentran en disputa³⁹. Tal y como asegura Guzmán Barney (2013):

Entre 1993 y 1996 [...] la tasa de homicidios por cien mil habitantes llegó a 121, en medio del auge del cartel de Cali y la detención posterior de sus principales capos: Durante el ascenso del cartel, Cali vivía en plena prosperidad económica: era la danza de los millones. La élite del poder local aceptó convivir con la poderosa organización criminal en grados diversos. Fue evidente su penetración en las esferas del Estado y en las actividades económicas legales.

Pero la violencia en Cali estaba lejos de encontrar su pico más alto. Con el desmonte y la detención y desaparición de los jefes del Cartel de Cali, el negocio del narcotráfico continuó con «personas no conocidas que segmentaron la organización y multiplicaron el número de empresarios ilegales, menos visibles que en épocas anteriores» (Guzmán Barney, 2013). En ese período comprendido entre 1996 y 2002 se consolidó en primer lugar el Cartel del Norte del Valle, que estuvo fuertemente relacionado con la llegada del fenómeno paramilitar al departamento del Valle del Cauca.

Esta consolidación tuvo como objetivo el control del territorio y el control político y social, que directa o indirectamente producía el desplazamiento de la población civil en especial con hechos violentos como las masacres (Personería Municipal de Santiago de Cali, 2014). En esta misma etapa, algunos empresarios agrícolas agenciaron y financiaron la violencia para reprimir a los trabajadores

39 A comienzos de 1988 el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín entraron en una guerra por las diferencias en los métodos de actuar en confrontación con el Estado, el Cartel de Cali colaboró en numerosas ocasiones con el Estado en su lucha contra Pablo Escobar. Así las cosas, "cuando cayó abatido Pablo Escobar en Medellín en diciembre de 1993, las autoridades colombianas enfilaron baterías para dismantelar al Cartel de Cali. En ese contexto, el Estado unió fuerzas para capturar a sus capos, hecho que tuvo lugar entre los años 1995 y 1996, catapultando a la fama al entonces director de la Policía, general Rosso José Serrano" (El Espectador, 2012). En medio de este fenómeno de violencia en el Valle del Cauca, la cultura del sicariato y la violencia urbana se incrustaron en las juventudes más vulnerables del departamento y sobre todo de Cali.

sindicalizados o con el fin de despojar la tierra apta para actividades agropecuarias. Así, aumentaron los desplazamientos masivos, y desde 1999 se comenzó a expandir el proyecto paramilitar desde la Costa Atlántica y el Urabá hacia zonas del suroccidente del país, entre ellas el departamento del Valle del Cauca, en municipios como Buenaventura, Tuluá, El Dovio, Trujillo, entre otros, por parte de la estructura armada del Bloque Calima (Personería Municipal de Santiago de Cali, 2014).

Específicamente, el Bloque Calima fue conformado por 50 hombres provenientes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que luego pasó a ser una estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De acuerdo con el borrador de versión libre que preparó Vicente Castaño antes de su desaparición, la presencia de paramilitares fue solicitada por personas influyentes del departamento, que «desfilaron más de dos años por los corredores de las ACCU implorando la presencia de las Autodefensas [Sic]» (Verdad Abierta, 2012). Esta presencia era solicitada para combatir la presencia de la guerrilla de las Farc y el ELN que actuaban en la región.

En 2002, con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se inició la desmovilización y el desarme de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas desmovilizaciones iniciaron el 25 de noviembre de 2003 (Medellín, bloque Cacique Nutibara) y finalizaron el 15 de agosto de 2006 (Bloque Elmer Cárdenas: «En 38 actos se desmovilizaron 31.671 de los integrantes de los grupos irregulares» (Verdad Abierta).

En medio de esta ola creciente de violencia y en rechazo a estas acciones, en Cali la movilización por la paz tuvo un comportamiento que corresponde con la tendencia nacional específicamente en el primer pico de 1998⁴⁰. Esta movilización tuvo dos picos, uno en 1998 y otro en 2004, que convergen con la intensificación de la violencia y del desplazamiento forzado. Fuentes oficiales y no oficiales coinciden en que estas variaciones se relacionan con el incremento de acciones violentas y el periodo de negociación con los grupos paramilitares⁴¹.

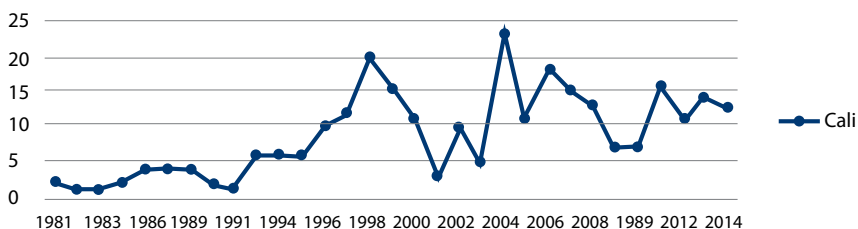
40 Ver al respecto: *Movimiento por la paz en Colombia: 1978-2003*. Mauricio García-Durán, 2006, p. 117.

41 La Unidad de Víctimas y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) coincidieron recientemente en esta afirmación (Elespectador.com, 2014).



Los procesos migratorios y la violencia configuran espacios que dificultan la reconciliación, e inciden negativamente en las posturas de las comunidades frente a los excombatientes y viceversa

Gráfico 1
Acciones Colectivas por la Paz – Cali (1978 – noviembre 2014)



Fuente: Datapaz, CINEP/PPP, 2015

En concordancia con la etapa de negociación entre grupos paramilitares y el Gobierno, en Cali se observa un aumento importante de las Acciones Colectivas por la Paz, específicamente en 2004. No se puede asegurar que existe una correlación entre estas dos situaciones, pero sí una coincidencia importante que podría reflejar el carácter propositivo que caracteriza la movilización por la paz en Cali. Por ejemplo, de un total 273 Acciones Colectivas por la Paz (en adelante ACP), la mayoría (120) se concentran en motivaciones de paz positiva, entendida como «la generación de una relación armoniosa y ella se consigue cuando dos o más entidades en conflicto emprenden proyectos juntos y los beneficios que genera ese proyecto son repartidos equitativamente» (Romero Castillo, Evan, 2010). Concretamente, las acciones de promoción de la paz y de búsqueda de alternativas para la paz han predominado en la movilización por la paz en Cali⁴².

Por último, de los elementos contextuales antes referenciados es necesario recalcar la relevancia de algunos que actuaron como mecanismos ambientales (ver marco teórico) que incidieron en la experiencia de Ganchos y Amarras del Valle. Los procesos migratorios y la violencia han configurado espacios en los que confluyen problemáticas sociales distintas que dificultan procesos de reconstrucción de relaciones, pero, sobre todo, inciden fuertemente en las posturas de comunidades frente a excombatientes y viceversa. En medio de este escenario complejo, el carácter paternalista de un sector empresarial, permeado por una tradición

42 **Promoción de la paz:** Cuando el motivo de la acción colectiva es realizar acciones que favorecen una posición positiva con relación a la construcción de la paz, o promover acciones pedagógicas en esa dirección en forma abstracta o general (sin explicitar cuál es el contenido de la misma) (García-Durán, 2006, p. 341). **Búsqueda de alternativas para la paz:** Cuando el motivo de la acción colectiva es discutir, formular o implementar propuestas, estrategias o alternativas que buscan avanzar la paz (en términos más amplios que un proceso de negociación) (García-Durán, 2006, p. 341).

Según cifras de la ACR, en el Valle del Cauca, 2.559 personas se han desmovilizado de grupos armados



católica y conservadora ha materializado esfuerzos importantes para solventar estas problemáticas confluyentes en varios sectores vulnerables de la ciudad de Cali. Sin embargo, la ciudad sigue siendo escenario de altos índices de violencia y segregación social, lo cual dificulta que surjan escenarios de encuentro seguros que faciliten acciones de reconciliación entre desmovilizados y comunidades receptoras.

La historia de la experiencia de Ganchos y Amarras del Valle

El proceso de desmovilización: orígenes de la experiencia

Según cifras de la ACR, en el Valle del Cauca 2.559 personas se han desmovilizado de grupos armados. De ellas, 2.437 han ingresado al Proceso de Reintegración, desde el 2003 hasta mayo de 2014. Cerca del 17% son mujeres y el 83% son hombres (estos porcentajes se reflejan en la conformación del equipo de Ganchos y Amarras, que no cuenta con la participación de desmovilizadas). Asimismo, son más de mil las personas que decidieron residir en la capital del Valle para rehacer sus vidas, es decir, el 57, 92% de la población desmovilizada del departamento reside en Cali⁴³.

Entre las más de mil personas que decidieron recorrer la ruta de reintegración con la ACR en Cali, se encuentran los 10 dueños de Ganchos y Amarras. Como ha sido enunciado anteriormente, los desmovilizados de la experiencia participaron en grupos de las AUC (desmovilización colectiva) y de las Farc (desmovilización individual). Los miembros de esta empresa nacieron en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño y fueron combatientes de rangos medios en su mayoría.

En un primer momento, tanto para los excombatientes de grupos paramilitares como de grupos insurgentes, el proceso de desarme y desmovilización representó una incertidumbre basada en la desconfianza en el programa ofrecido por el Gobierno: «empezó a crecer mucha zozobra, no sabíamos realmente qué era lo que quería el Gobierno con nosotros, si realmente nos quería ayudar o simplemente era una trampa para querernos dar de baja, como decíamos nosotros [...]» (Entrevista 1). Cabe recordar que, si bien el programa de atención a desmovilizados en el país

43 Información tomada de *brochure: Reintegración en Colombia: Hechos y Datos Valle del Cauca. Enero – Diciembre 2013*

inició a finales de 2002, para el 2005 y 2006 la implementación del programa de reintegración se encontraba adaptándose a las necesidades de los desmovilizados y a la ejecución del mismo en la esfera local. Este programa de reintegración no solo permitía que los desmovilizados se reencontraran con ciertos sectores de la sociedad como empresarios y funcionarios estatales, sino también propiciaba el reencuentro con otros excombatientes de grupos adversarios que habían combatido tal como ellos.

El ambiente de incertidumbre mencionado anteriormente estuvo acompañado por la preferencia de anonimato de los excombatientes y por algunos momentos de recelo, no solo por pertenecer a bandos anteriormente enfrentados, sino también por el origen de la política del Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC). El Programa enunciado proporcionaba una diferenciación monetaria entre los desmovilizados desertores y aquellos que hicieron parte de las desmovilizaciones colectivas: «entonces a ellos les llegaba una bonificación mucho mayor que la que nos llegaba a nosotros, [...] entonces yo miraba eso, que era muy poquito lo que nos daban a nosotros y a los demás por qué tanto» (Participante grupo focal 1).

Cabe resaltar que las motivaciones de los excombatientes para ingresar al proceso de desmovilización varían entre los hoy socios de Ganchos y Amarras. La mayoría identifica en sus núcleos familiares cercanos, sus esposas y sus hijos un motivo para comprometerse con el proceso de reintegración hasta llegar al momento del recibir formación para el trabajo.

Mientras los primeros desmovilizados se acercaban a la etapa de formación para el trabajo que contempla el proceso de reintegración, la ACR, la Fundación Carvajal, SIDOC y OIM confluyeron en la preocupación por apoyar esta etapa del proceso. Específicamente la Fundación Carvajal maneja sus intervenciones a partir de cuatro líneas de trabajo: generación de ingresos, educación, vivienda y entorno, y desarrollo social. Fue precisamente bajo la línea de generación de ingresos que incluyó un proyecto para la *Reintegración a la vida civil de actores de los procesos de desmovilización armada en el Valle del Cauca* en asocio con la Alta Consejería para la Reintegración (ACR). El objetivo de dicho asocio fue vincular a 200 beneficiarios del proceso de desmovilización y a sus familias a la sociedad civil colombiana, a través de la puesta en marcha de actividades económicas sostenibles y de la interacción social y cultural con las comunidades donde viven. (Fundación Carvajal)

Así las cosas, en 2010 el proyecto en el que confluían intereses y necesidades de la ACR, Fundación Carvajal, SIDOC y OIM comenzó a diseñarse. Durante los primeros meses del año se hicieron los respectivos estudios de viabilidad, junto con el

plan de negocios de una empresa de metalmecánica. Entre marzo y diciembre de 2011, los excombatientes en proceso de reintegración seleccionados para formar la experiencia tuvieron una serie de capacitaciones técnicas en este oficio, específicamente en la fabricación de ganchos y amarras para fijación de tejados. En esos meses de 2011, el proceso de consolidación de la empresa tuvo inconvenientes administrativos que los excombatientes describían como momentos de incertidumbre y desconfianza en la ACR, en la Fundación Carvajal y en las promesas que les habían hecho. «En ese tiempo se pensaba que sinceramente ese programa no iba a dar resultado... nos tenían de aquí para allá...» (Participante grupo focal 1). Pero en diciembre de 2011, la empresa logró aprobar los estatutos y alquilaron la bodega en la que actualmente funcionan.

Durante estos tiempos intervinieron, además de las entidades encargadas de la implementación de la política de reintegración, distintas personas que se acercaron al proyecto de empleabilidad de desmovilizados mostrando su interés en apoyar este tipo de iniciativas. Por ejemplo, la bodega que se alquiló para el funcionamiento de la fábrica es propiedad de un señor que, al conocer la procedencia de los trabajadores que iban a ocupar su bodega, decidió apoyarlos no solo al confiar en ellos, sino al ofrecerles un precio mucho menor en el alquiler, gesto que le fue útil a Ganchos y Amarras del Valle para despegar económicamente.

Durante todo el proceso de reintegración los desmovilizados dueños de Ganchos y Amarras contaron con acompañamiento psicosocial por parte de la ACR, acompañamiento que incluía a sus familias a partir de un enfoque de reintegración comunitaria en el que ellos prestaron un servicio social a la comunidad. Pero a decir verdad, no hubo un establecimiento de relaciones con las comunidades en las que vivían, debido a la preferencia del anonimato por parte los excombatientes.

La consolidación de una reconciliación entre excombatientes

Desde el comienzo de las capacitaciones técnicas que recibieron los desmovilizados en proceso de reintegración que harían parte de Ganchos y Amarras, fue propiciado un espacio de encuentro que resultó en un proceso de reconciliación entre excombatientes. Este proceso de convivencia y reconciliación se comenzó a gestar a comienzos de 2011. Los socios de Ganchos y Amarras del Valle aseguran que entre marzo y diciembre de ese año hubo prevenciones entre ellos ya que, debido a sus precedentes personales, se sentían inseguros. Dichas desconfianzas estaban fundamentadas en el hecho de haber pertenecido a grupos armados ilegales antes enfrentados, lo cual incrementaba los temores y las inseguridades de retaliaciones entre ellos. Al respecto, uno de los reintegrados que hizo parte de un grupo paramilitar aseguró que al comienzo durante las capacitaciones: «Siempre



La construcción de una cotidianidad compartida ayudó a la superación de prevenciones, a la apertura y la construcción de nuevas relaciones en el marco del fortalecimiento de la experiencia de Ganchos y Amarras del Valle

decíamos en qué momento estos manes planean atacar» (Entrevista 1) refiriéndose a aquellos reintegrados que habían pertenecido a grupos insurgentes y que hacían parte de los 10 beneficiarios del proyecto.

Esta situación se transformó durante el transcurso de los días de las capacitaciones y la consolidación de la experiencia, debido en gran parte al acompañamiento de la asesora psicosocial de la ACR y la asesora psicosocial de la Fundación Carvajal, y por medio de talleres de integración y afianzamiento de confianza en el otro. Asimismo, la construcción de una cotidianidad compartida ayudó a la superación de prevenciones y a la apertura a la construcción de nuevas relaciones en el marco del fortalecimiento de la experiencia de Ganchos y Amarras del Valle.

A pesar de que al interior de Ganchos y Amarras las relaciones mejoraban día a día entre excombatientes, con el gerente (persona externa contratada por la Fundación Carvajal) y con las asesoras psicosociales, las relaciones con cada una de las comunidades receptoras en los barrios no han sido tan prolifas como al interior de la empresa. Esta situación ha estado mediada por la preferencia del anonimato por parte de los excombatientes como mecanismo de autoprotección ante una posible estigmatización en sus comunidades, debido a que, entre los años 2008 y 2011, el contexto de violencia en Cali se intensificó drásticamente, particularmente en el centro urbano, situación que afectó la percepción de seguridad que en 2010 cayó siete puntos —pasó de 37 a 30— (Acero Velásquez, 2011).

Algunas corrientes de opinión⁴⁴ aseguraban que este incremento en los niveles de inseguridad se relacionaba con la concentración de excombatientes desmovilizados durante los acuerdos de 2005 con grupos paramilitares radicados en Cali, que decidieron reincidir en acciones criminales. Según el Centro de Memoria Histórica, esto se fundamenta en que después de las desmovilizaciones colectivas de las AUC en el Valle del Cauca, se fortalecieron o surgieron grupos armados como Los Rastrojos, Los Machos, Las Águilas Negras y Nueva Generación, entre otros, a la vez que las Farc y el ELN se desplegaron en varias zonas, redefiniendo así la cartografía del conflicto armado (Hernández Mercado, 2014). A propósito, uno de los miembros de Ganchos y Amarras afirmó: «uno trataba de controlarse un poco y de no desviarse mucho, pero la mayoría de compañeros al ver que no había trabajo y solamente recibían una ayuda, más de uno cogía y se iba. Entonces aquí en Cali la delincuencia se ha desatado más por parte de los desmovilizados» (Participante

44 Incluso antes de la desmovilización este temor ya era expresado por organizaciones internacionales como el PNUD que aseguraba que «Ante la falta de opciones y por los fracasos productivos, la población reinsertada es “mano de obra calificada” para ser otra vez reclutada por grupos armados ilegales, por la delincuencia común o los carteles de la droga» (Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas PNUD, 2005).

Se construyó un ambiente de convivencia entre los miembros de la empresa y se generaron nuevas relaciones basadas en la confianza que han desembocado en el surgimiento de relaciones de trabajo en equipo y algunas relaciones de amistad



grupo focal 1). Lo anterior no pretende generalizar y atribuir a desmovilizados reincidentes toda la situación de inseguridad que se estaba proliferando en Cali durante la época, pero sí establece un tipo de relación entre el rearme o reincidencia de este segmento de la población y el aumento de violencia.

A partir de esta etapa de consolidación de la empresa se evidencia el cambio en el tipo de relaciones al interior de la experiencia y las pocas relaciones entre excombatientes y otros sectores de su comunidad receptora. Durante el año 2010 y 2011, se construyó un ambiente de convivencia entre los miembros de la empresa y se generaron nuevas relaciones basadas en la confianza que han desembocado en el surgimiento de relaciones de trabajo en equipo y algunas relaciones de amistad. Este es un indicativo de lo que podría reconocerse como una reconciliación entre excombatientes. Este proceso de reconstrucción de relaciones ha pasado por dinámicas en las que cada socio de Ganchos y Amarras ha compartido su experiencia en el grupo armado, sus temores y sus percepciones sobre el proceso de reintegración. Sin embargo, a lo largo de la experiencia han surgido conflictos internos⁴⁵ que han sido mediados por el gerente y las asesoras psicosociales (ACR-Fundación Carvajal), quienes les han enseñado distintos mecanismos de resolución pacífica de sus conflictos y promueven constantemente el respeto por los estatutos internos de la empresa⁴⁶.

A partir de este proceso de convivencia y reconciliación interna, se ha fortalecido la empresa y se ha consolidado no solo como una experiencia de reintegración y reconciliación entre excombatientes, sino como una evidencia del establecimiento de relaciones sólidas entre excombatientes y sectores empresariales. Se ha logrado establecer relaciones comerciales sólidas, por ejemplo, con Eternit, que si bien desde un comienzo ha apoyado la iniciativa, debido a la calidad de los productos que fabrican los desmovilizados, han designado a Ganchos y Amarras en la categoría de proveedor tipo A, es decir, proveedor único de cierto tipo de ganchos y amarras para tejados a nivel nacional. Esta designación ha implicado que gran parte del personal de Eternit conozca la experiencia y su procedencia, haciéndose participe de este tipo de procesos de reintegración y reconciliación en el país.

Por otra parte, las relaciones comerciales no han sido solamente con aquellos actores (empresas) que han financiado la iniciativa. Actualmente, Ganchos y

⁴⁵ Por ejemplo el cumplimiento de los turnos de trabajo, las horas de llegada y salida y las horas de descanso durante el día eran algunas de las grandes discordias que se presentaba entre los desmovilizados.

⁴⁶ Precisamente algunos conflictos han girado en torno a la aplicación exigente de los estatutos internos de la empresa y a las diferencias sobre la forma en la que algunos miembros asumían el respeto por las normas acordadas conjuntamente en los estatutos.

Amarras cuenta con un asesor comercial (financiado por Fundación Carvajal) que se encarga de conseguir otro tipo de clientes como ferreterías medianas o pequeñas que puedan comercializar sus productos. En este proceso de consecución de nuevos clientes, el asesor comercial enfatiza el origen de la empresa y promueve el apoyo a la empresa como un proceso de construcción de paz en el país: «claro... yo les comento de dónde vienen estos muchachos y de dónde viene Ganchos y Amarras» (Entrevista 2).

Es importante anotar que el caso de Ganchos y Amarras evidencia acciones de reconciliación entre los miembros de la experiencia con un sector del empresariado caleño. Se habla de reconciliación en el sentido que trasciende la transacción económica o filantropía hacia la reconstrucción de relaciones. Evidentemente el papel de la Fundación Carvajal obedece a una actuación tradicional de apoyo a sectores vulnerables, pero la trayectoria de la iniciativa ha involucrado a nuevos actores de la élite empresarial caleña, que también ha sido víctima directa de las Farc. Este es el caso de la Siderúrgica de Occidente (SIDOC), cuyo presidente y propietario Maurice Armitage, sufrió dos secuestros y manifestó perdonar a las Farc por el hecho (El Tiempo, 2014).

La inauguración: un paso forzoso al reconocimiento público

En 2012, cuando se publicaron los resultados de la encuesta de seguridad y convivencia ciudadana, cuyos datos fueron recogidos durante los años anteriores, se comprobó que «en Cali-Palmira, el 70,5% de la población de 15 años y más se [sentía] insegura en su ciudad» (DANE, 2012). Podría decirse que la percepción de inseguridad afectó también la calidad de vida de los desmovilizados y de las comunidades receptoras. Para algunos desmovilizados entrevistados, dicha situación representaba un riesgo para su seguridad y, en este sentido, generaba temor. En el caso de excombatientes de la guerrilla el temor se fundamenta en que son declarados objetivo militar cuando desertan del grupo armado, y asimismo tanto excombatientes individuales como colectivos pueden ser buscados para pertenecer nuevamente a los nuevos grupos criminales. Al respecto, un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, plantea que el 36% de los desmovilizados han sido abordados por grupos criminales para ser reclutados y el 10% ha estado tentado a aceptar la oferta (Fundación Ideas para la Paz, 2014).

De la misma forma, mientras aumentaba la percepción de inseguridad en Cali, la ciudad seguía teniendo problemas fuertes de victimización y como ha sucedido históricamente, seguía siendo una ciudad receptora de desplazados. Para 2012, la ciudad reportó un total de 28.085 denuncias de desplazamiento forzoso, es decir,

del total de hechos victimizantes reportados por la Unidad de Víctimas en Cali para el 2012, el 84% correspondía a desplazamiento (Red Nacional de Información). Esta alta recepción de desplazados víctimas del conflicto armado en regiones aledañas, el aumento de los índices de violencia y una estigmatización hacia los desmovilizados en la ciudad configuraron un escenario poco favorable para el establecimiento de relaciones entre víctimas y excombatientes.

Dicho escenario se evidenciaba más en los sectores en los que vivían desmovilizados, sectores a los que en muchos casos llegaron los desplazados por la violencia, específicamente hablamos de algunos barrios en el distrito de Aguablanca, Siloé y Ladera, lugares en los que coincide todo tipo de población vulnerable. Por tal motivo, la mayoría de víctimas no mostraba disponibilidad para aceptar a excombatientes, ya que los relacionaban directamente con la violencia de la que habían sido víctimas (Grupo focal con organización de víctimas de Cali, 2014).

Así las cosas, en octubre de 2012, se llevó a cabo un evento público y ampliamente difundido de inauguración de la empresa, que contó con la presencia del director de la ACR, USAID y algunos actores locales, pero en su mayoría medios de comunicación. Teniendo en cuenta que los excombatientes desde su desmovilización han preferido el anonimato y la mesura en cuanto a la publicidad de la empresa, hoy aseguran que, a pesar de que este evento no tuvo consecuencias en términos de su seguridad, sí consideran que este fue un hecho que permitió que los vecinos del barrio donde se ubica la fábrica conocieran abruptamente su procedencia. Esa manera de dar a conocer la experiencia no fue del agrado de todos los miembros de Ganchos y Amarras, algunos de los cuales consideraron que fue una inauguración muy visible en un contexto en el que ellos aún se sentían inseguros.

A pesar de la conmoción interna que generó el evento y de que en un primer momento se angustiaron ante la situación de que sus vecinos supieran su proveniencia y el contexto del que había surgido la empresa, reconocieron que esta situación no afectó su cotidianidad y sobre todo no generó discriminaciones ni señalamientos por parte de los trabajadores de las fábricas aledañas, siguieron con sus vidas normalmente: «cuando se dieron cuenta de todo, pues igual todo siguió normal, con nosotros nadie se ha metido, nosotros no hemos tenido problemas con nadie» (Participante grupo focal 1).

A partir de la inauguración pública de Ganchos y Amarras se ha venido configurando el presente de la empresa, es decir, el periodo comprendido entre 2013 y 2014. A



Algunos de los miembros de Ganchos y Amarras aseguran que se han encontrado con víctimas suyas en sus barrios y su reacción ha sido esconderse por temor a señalamientos

partir de 2012, han trabajado fuertemente para alcanzar un punto de equilibrio después de varios años de tener déficit al final de los años contables. Este trabajo se ha realizado gracias al empoderamiento de los desmovilizados frente a la empresa, pues si bien aún no han prescindido del apoyo técnico y financiero de la Fundación Carvajal, reconocen que se sienten más comprometidos con su empresa, gracias a la estabilidad que les ha provisto y que se ve reflejada en la calidad de vida de ellos y de sus familias.

Igualmente, la inauguración logró reducir el temor que representaba el reconocimiento público para los miembros de Ganchos y Amarras (aunque solamente en el barrio donde se ubica la fábrica, más no en sus comunidades y/o barrios), esto les ha permitido sentirse orgullosos de pertenecer a esta experiencia y ser un referente de reconciliación entre excombatientes y un ejemplo de reintegración para los demás desmovilizados en el país. Aunque con la inauguración se dejaron de lado las prevenciones por parte de los miembros de Ganchos y Amarras y por parte de los funcionarios de las fábricas vecinas a la bodega donde funciona, en lo que respecta a la relación con las comunidades donde viven los desmovilizados no hay resultados satisfactorios, en parte porque siguen latentes las condiciones de violencia, de desplazamiento y de victimización, que inevitablemente aumentan las prevenciones y estigmatizaciones fundamentadas en el miedo por parte de las comunidades.

En lo referente a la perspectiva de las víctimas, se entrevistó a comunidades perjudicadas por el conflicto armado, dichas comunidades viven ahora con desmovilizados y, no solo se corroboró que muchas de estas víctimas ignoran la presencia de desmovilizados en sus comunidades, sino que también se rehúsan a la posibilidad de convivir con ellos en el presente o en un futuro cercano. Aseguran que son contextos mediados por la presencia de bandas delincuenciales que ejercen acciones violentas sobre la comunidad, que imponen su orden y sus reglas para el manejo de narcotráfico y narcomenudeo en los barrios donde viven.

Este contexto violento no permite que ni las víctimas ni los excombatientes quieran cambiar la situación de simple coexistencia en sus barrios. Algunos de los miembros de Ganchos y Amarras aseguran que se han encontrado con víctimas suyas en sus barrios y su reacción ha sido esconderse por temor a señalamientos y por no querer enfrentar a sus víctimas, ya que consideran que esos hechos son cosas del pasado y que se deben dejar en el pasado: «Toca es esconderse pues... es que uno no sabe la reacción que vayan a tomar... entonces es mejor evitarlos...» (Participante grupo focal 1). Asimismo, hubo víctimas que identificaron a los actores materiales de la violencia por la que fueron desplazados de otras zonas del país viviendo en

Un primer mecanismo que ha permitido el sostenimiento de la experiencia ha sido la convergencia de varios actores



sus barrios, frente a lo cual aseguran que «Pues yo sí he visto uno [desmovilizado], allá de mi pueblo, que él es comandante...lo he visto...pero qué...uno no puede hablar porque él también me ha visto a mí...» (Participante grupo focal 2).

La anterior situación ha sido una constante desde la desmovilización de los socios de la empresa, lo cual devela que si bien se puede hablar de una reconciliación al interior de la experiencia, en lo referente a la reconciliación con las comunidades receptoras, se puede hablar de una situación de coexistencia con tintes de violencia latente que dificultan fuertemente la reconstrucción de lazos entre estos dos sectores de la sociedad.

Entre el acompañamiento institucional y empresarial: aciertos y tropiezos

A continuación, se identifican aquellos elementos puntuales que permitieron o inhibieron que, a partir de esta experiencia de reintegración, surgieran procesos de convivencia pacífica y de reconciliación. Estos elementos se entenderán como mecanismos determinantes para que en el contexto de Cali esta experiencia prosperara y permaneciera en el transcurso de cuatro años.

Aciertos

Un primer mecanismo que ha permitido el sostenimiento de la experiencia ha sido la convergencia de varios actores. Entre estos actores se encuentra la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), la Fundación Carvajal, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID, Siderúrgica de Occidente (SIDOC) y Eternit. La confluencia de los intereses de estos actores en el contexto caleño permitió que prosperara un proyecto conjunto y asimismo permitió su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Cada actor ha jugado un papel fundamental en el funcionamiento de la empresa, y ha incidido indirectamente en una construcción de convivencia y reconciliación al interior de la experiencia, al mismo tiempo, han logrado reconciliar sectores sociales en Cali con excombatientes. De esta manera se ha construido un referente de procesos de reintegración y de reconstrucción de relaciones entre excombatientes y sectores de la sociedad con los que antes no se tenía ningún tipo de relación.

En esta convergencia de actores resalta el papel desempeñado por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y especialmente el de la Fundación Carvajal, entidad que ha estado acompañando de manera cercana todo el proceso. Este acompañamiento ha logrado la vinculación de dos o más sectores sociales

antes desconectados —Intermediación (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2005)—. Este interés por propiciar encuentros entre sectores de la sociedad proviene del contexto propio de una cultura conservadora, patriarcal y caritativa, que encuentra en estas oportunidades una forma más de «ayudar» a sus conciudadanos con distintas condiciones de vulnerabilidad en espacios socialmente segregados y mediados por la violencia.

El apoyo de la Fundación Carvajal ha sido multifacético, ya que en cada etapa de formación de la experiencia ha prestado el apoyo requerido. Por ejemplo, ha acompañado el desarrollo económico de la experiencia, pero también ha involucrado su propio personal como una forma de mediar no solo en los procesos económicos, sino en los procesos de intermediación al interior y exterior de Ganchos y Amarras. Esta acción ha facilitado el uso combinado de recursos de la empresa en espacios diferentes y ha permitido la creación de nuevos actores colectivos (McAdam et al., 2003, p. 157). La mediación al interior de la experiencia ha estado a cargo del gerente y de la asesora psicosocial de Fundación Carvajal, y ha permitido el proceso de reconstrucción de confianza entre los excombatientes que hoy son dueños de Ganchos y Amarras, personas que con el paso de los años han alcanzado la reconciliación, lo cual ha permitido el surgimiento de un actor colectivo con el fin de sostener la empresa. En este proceso de mediación ha sobresalido el rol ejercido por las mujeres, pues son parte clave de los procesos de reconstrucción de confianza al interior de la experiencia. Además, los excombatientes identifican en sus esposas y en sus familias factores determinantes para su permanencia en el proceso de reintegración y en la superación de conflictos que hayan podido surgir en este proceso.

Por su lado, el rol de mediación ejercido por los hombres que han asesorado gerencial y comercialmente la empresa ha girado en torno a la intervención en relaciones laborales y comerciales con otros sectores de la sociedad caleña. Por su parte, el asesor comercial ha ejercido un rol difusor con posibles nuevos compradores de los productos que se fabrican en Ganchos y Amarras, fortaleciendo la imagen de esta empresa y enaltecendo su origen como una experiencia de reintegración y convivencia que se ha consolidado como ejemplo de la corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad en procesos de reintegración y reconciliación en Cali.

En este sentido, se encuentra un mecanismo de difusión que incluye cualquier transferencia de información a través de las líneas de comunicación existentes. Este mecanismo ha sido recurrente desde el inicio de la experiencia y ha buscado promover el apoyo de la mayoría de sectores de la sociedad y, sobre todo, de aquellos que pueden contribuir directamente a esta experiencia de reintegración

y fortalecerla. En este proceso de difusión han participado directamente aquellos actores iniciales como las empresas involucradas y la Agencia Colombiana para la Reintegración, y los medios de comunicación han jugado un papel primordial en la transmisión de esta experiencia.

La actual alcaldía de Cali, y específicamente la Asesoría de Paz, han desarrollado acciones que buscan romper con la estigmatización de desmovilizados y de víctimas en la ciudad. Algunas de estas acciones consisten en eventos deportivos y culturales:

Aquí hicimos un evento muy bonito, que fue muy mediático. Metimos 25.000 personas vestidas de blanco al estadio, metimos todos los desmovilizados de Cali con sus familias [...] eran alrededor de 4mil víctimas y 4mil personas entre soldados y policías, lo que pasa es que ninguno iba uniformado, todos iban con camisetas blancas [...] fue un tema donde además de ser transmitido en vivo, hubo un par de desmovilizados que cogieron un micrófono y frente a 25 mil personas pidieron perdón por sus actos. (Entrevista 3)

Si bien no es posible determinar el impacto de este tipo de acciones, es una evidencia de las acciones del Gobierno local de cara a las políticas de DDR y justicia transicional en el territorio.

Dificultades

Tal como se han dado aciertos, se han identificado obstáculos durante la trayectoria de la experiencia de Ganchos y Amarras, sobre todo en lo referente a la relación entre comunidades receptoras y excombatientes. Así como se ha dicho que los mecanismos de difusión han sido un aliciente para la experiencia y para su reconocimiento como un ejemplo de reconciliación entre excombatientes, estos mecanismos han condensado algunos obstáculos responsables de frenar las oportunidades de reconstrucción de relaciones entre comunidades receptoras (compuestas en gran parte por víctimas del conflicto) y excombatientes. Principalmente en un contexto como el caleño en el que aún confluyen factores de violencia urbana organizada y en el que permanecen características de una sociedad segregada y mediada por estigmas hacia diferentes grupos poblacionales, incluidos los desmovilizados.

A partir de esta experiencia, se ha corroborado que desde la perspectiva de un sector de comunidades receptoras entrevistadas, víctimas además del conflicto armado y que viven en sectores como Agua Blanca, atribuyen más amenazas



Varios de los excombatientes entrevistados manifiestan tener disposición para entablar en un futuro relaciones con sus comunidades de llegada y aseguran que la reconciliación depende de una decisión de las personas que allí habitan

que oportunidades a algún proceso de reconstrucción de relaciones con excombatientes. Cuando una persona de estas mismas comunidades fue consultada sobre la posibilidad de que llegaran desmovilizados, aseguró que: «no, yo preferiría devolverme de donde me sacaron a tener que verlos por acá» (Participante grupo focal 2). En gran medida esta respuesta está anidada en el temor que representa compartir con exmiembros de los grupos que los victimizaron y desplazaron así como también por la impunidad que desde su perspectiva representa verlos en libertad y no pagando sus delitos en la cárcel.

Esta perspectiva se ha visto reforzada por el temor con el que viven las comunidades receptoras por el continuo accionar de actores armados y bandas delincuenciales que refuerzan los estigmas y la desconfianza hacia las personas desmovilizadas. Igualmente, en las entrevistas a víctimas de la comunidad receptora, estas manifiestan una sensación de inequidad entre los beneficios gubernamentales que reciben y los que les proporcionan a los desmovilizados: «ellos [los desmovilizados] tienen mejores condiciones, aunque vivimos en el mismo barrio» (Participante grupo focal 2).

Por otra parte, el trabajo de entes gubernamentales y no gubernamentales con población vulnerable en Cali, entre ella excombatientes y víctimas, se hace por separado, lo cual, si bien corresponde con una lógica de intervención diferencial, también perpetúa la simple coexistencia presentada en estos sectores e inhibe procesos más profundos de convivencia pacífica y reconciliación. Lo anterior plantea retos en términos de la concordancia de esfuerzos tanto del sector empresarial como de organizaciones sociales y de carácter gubernamental.

Otro mecanismo que ha inhibido la generación de espacios de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras es la contradicción de conceptos sobre reconciliación que tienen los sectores sociales involucrados. Para los excombatientes este término se asocia más con el perdón y con el olvido, con dejar atrás el pasado de violencia; asimismo, delegan en las víctimas el poder de reconciliarse: «yo en mi caso, también si llegamos a hablar pues pedir perdón [a las víctimas] pero yo ya no puedo confiar más en esa persona, ni esa persona tampoco puede confiar [...] es que nosotros como desmovilizados no podemos confiar en nadie, ni aquí, ni con los vecinos, ni con nadie» (Participante grupo focal 1).

En el caso de los excombatientes entrevistados, varios de ellos manifiestan disposición para entablar en un futuro relaciones con sus comunidades de llegada, y como se dijo anteriormente, aseguran que es una decisión propia de las personas que allí habitan: «depende de la comunidad, de las personas, se requiere tiempo...

El acompañamiento brindado por la Fundación Carvajal, Eternit y la ACR, ha sido financiero, técnico y psicosocial



uno tiene que hacerse querer porque hay algunos que no respetan, que llegan a meter miedo, lo importante es hacerse querer» (Participante grupo focal 1).

Asimismo aseguran que «a esa gente son disculpas, pero el sentimiento queda, yo me sentiría muy bien con el hecho de pedir perdón y ya que ellos miren en qué posición estarían» (Participante Taller Ganchos y Amarras, septiembre 2014).

La anterior visión de reconciliación contrasta con la de las víctimas entrevistadas quienes, no obstante, coinciden en sus sentimientos de desconfianza y zozobra en los barrios donde coexisten con excombatientes. Para ellos, la reconciliación solo podrá darse una vez el proceso de verdad, justicia y reparación culmine satisfactoriamente.

Por último, para los presidentes de la Fundación Carvajal (Diario El País, 2014) y de la Siderúrgica de Occidente (Diario El Tiempo, 2014) la reconciliación es un proceso que en algún momento de la historia tendrá que darse, pero que requiere esfuerzos conjuntos y más proactivos por parte de toda la sociedad. Estas posiciones encontradas en algunos puntos sobre cómo puede darse la reconciliación a partir de esta experiencia no han permitido que se reconstruyan relaciones entre excombatientes y víctimas. Un sector de las empresas privadas, la institucionalidad y los excombatientes han concurrido en un espacio de encuentro que con motivo de la reintegración económica ha logrado también restablecer confianzas y cambiar posturas entre actores, facilitando acciones de reconciliación. Por su parte, no existen espacios de encuentro entre excombatientes y comunidades receptoras de los barrios de residencia, solo un encuentro cotidiano en el territorio, en el que, de manera intencionada o no, no existe un reconocimiento mutuo, que permita un verdadero proceso de reconciliación.

Aprendizajes

La identificación de los mecanismos desplegados en la experiencia de Ganchos y Amarras permite establecer algunas pistas que pueden fortalecer los procesos de reintegración y las posibilidades de alcanzar escenarios de convivencia pacífica y reconciliación en contextos similares.

Uno de los elementos clave para la consolidación interna de esta experiencia ha sido el acompañamiento institucional y de empresas que han apoyado directamente su sostenimiento. El acompañamiento se ha expresado tanto en apoyo financiero como en lo técnico y psicosocial por parte de la Fundación Carvajal, Eternit, la ACR, entre otros.

Lo anterior evidencia la importancia de la convergencia de actores públicos y privados de cara a la sostenibilidad de procesos de reintegración y sus posibilidades hacia otros procesos de reconciliación. Es necesario que el conjunto de la comunidad receptora de excombatientes sea parte activa tanto del proceso de reintegración como de un eventual proceso de reconciliación, siempre acompañados por la institucionalidad.

En el caso de Cali, se ha evidenciado una actitud de corresponsabilidad por parte de un sector de las élites caleñas que ha facilitado los procesos de reintegración económica de excombatientes. Esta situación, que es una ventaja para la institucionalidad caleña en términos de la implementación de políticas del sector, se vuelve un desafío para los gobiernos locales de otros territorios en los que por el contrario el grueso de sus élites se resiste o son indiferentes en el apoyo a iniciativas de reintegración de excombatientes. Este tipo de acompañamiento en otras regiones con menor presencia de actores armados puede generar realmente procesos de convivencia pacífica entre excombatientes y comunidades receptoras.

Por otro lado, esta experiencia evidencia los obstáculos ambientales o estructurales para una convivencia pacífica entre excombatientes y comunidades receptoras, en particular por víctimas y comunidades vulnerables, en contextos caracterizados por la violencia, la segregación y la pobreza. El abordaje de problemáticas como la violencia, la sensación de inequidad entre las políticas de atención a población desmovilizada, desplazada y vulnerable, así como la persistente impunidad, alimenta argumentos en contra de acciones de reconciliación por parte de las comunidades receptoras. Por tal razón, es fundamental comprender y dar solución a los problemas que afectan directamente la generación de espacios de encuentro, así como la disposición de los actores en favor de acciones de reconciliación.

Infograma 3

Empresa Ganchos y Amarras Cali

2010

Empresa dedicada a la fabricación de artículos para la fijación de tejas. Compuesta por 10 participantes del programa de la ACR, seis de los cuales pertenecían a los bloques Calima y Metro de las AUC, y cuatro son desertores de la guerrilla de las FARC. De los 10 integrantes, nueve han culminado satisfactoriamente el proceso de reintegración con ACR.

Proceso de desmovilización

La política de reintegración permitió la consolidación de un proyecto productivo, que le permitiría al excombatiente restablecer su proyecto de vida. La Fundación Carvajal, la ACR, SIDOC y OIM, unieron esfuerzos para apoyar la iniciativa.

Reconciliación entre excombatientes

Los excombatientes, antes adversarios, trabajaron conjuntamente en el espacio propiciado por la empresa.

A partir de la inauguración

Los escenarios de violencia, los rasgos segregacionistas de algunos sectores de la sociedad caleña y las precarias condiciones de vida hicieron que no hubiese un consenso en torno a la visibilización de la experiencia. Los excombatientes continúan optando por el anonimato. A partir de 2012 han trabajado para alcanzar un punto de equilibrio después de varios años de déficit contable en la empresa.

Episodios

Aspectos del contexto que condicionan a la experiencia, y que permitieron avances en términos de la Reconciliación

Mecanismos Ambientales

Estas características del contexto propiciaron una mejor disposición de algunos sectores del empresariado y de los excombatientes mismos, lo que condujo a ciertos avances en términos de la Reconciliación.

La persistencia de estas problemáticas motivó a los excombatientes a optar por el anonimato de cara a las comunidades de los barrios en los que habitan.

Desarrollo empresarial

Política de reintegración

Violencia urbana

Dinámica de poblamiento y segregación social

Factores de las experiencias que permitieron avances en términos de la Reconciliación

Mecanismos Específicos

Intermediación (Fundación Carvajal)

Mediación (ACR)

Convergencia de actores (Fundación Carvajal / ACR)

Difusión

La activación de dichos mecanismos se tradujo en unos avances parciales en el proceso de la reconciliación

Coexistencia con la comunidad receptora.

Reconciliación interpersonal entre los trabajadores de la empresa, antes adversarios.

Reconciliación social con un sector del empresariado caleño.

Experiencia de Colectivos del Café

Colectivos del Café es una cooperativa que ofrece servicios de transporte de pasajeros por carretera en zonas del Eje Cafetero (Pereira, Cartago, Manizales). La empresa fue fundada en 1992 por 52 personas desmovilizadas del Frente Oscar William Calvo⁴⁷ del Ejército Popular de Liberación (EPL), quienes, como parte de su proceso de reinserción⁴⁸, —denominado en su proyecto como reencuentro—, decidieron asociarse para vincularse a un mercado que era relativamente incipiente en Pereira: el de colectivos de transporte (buses medianos con capacidad aproximada de 18 pasajeros en promedio).

En 1991, 60 excombatientes firmaron un acta de compromiso para establecer una cooperativa de transportes, a los pocos meses se retiraron ocho, la cooperativa está compuesta actualmente por 25⁴⁹ socios, 11 mujeres y 14 hombres. En 1992, comenzaron a capacitarse en temas administrativos y gerenciales⁵⁰, asimismo siguieron ejerciendo la política en el departamento⁵¹ sin dejar de lado la formación profesional del personal que trabajaría allí. En este momento, Colectivos del Café cuenta con cuatro mujeres que trabajan directamente en sus instalaciones y 54 familias son beneficiarias de la cooperativa.

La cooperativa cuenta con 20 cupos propios asignados por el Ministerio de Transporte que les otorgó la licencia de transportar pasajeros desde y hacia Pereira, Manizales y Cartago. Pero no todos los cupos de los buses son de exmiembros del⁵² EPL, pues con el tiempo surgió la necesidad económica de abrir la cooperativa a personas externas para sus sostenibilidad.

47 En Risaralda se desmovilizaron un total de 184 personas incluyendo hombres y mujeres provenientes de los frentes Aldemar Londoño del Putumayo, los frentes del Norte del Tolima, del Valle del Cauca y en su mayoría del Oscar William Calvo. (Arrieta, 2006).

48 El EPL calificó su proceso como *reencuentro con la sociedad*, sus miembros difieren en que se les considere como como proceso de inserción o reintegración.

49 Han sido diferentes motivos los que han reducido el número de socios, entre ellos las crisis económicas que han tenido y que las expectativas que se tenían con el negocio no fueron satisfechas. El hecho de que algunos socios se hayan retirado no implicó en ningún momento que el capital que invirtieron en Colectivos del Café les fuera devuelto. Una de las condiciones es que el capital de la cooperativa es de la cooperativa y, por lo tanto, aquellos que se retiren no podrán recibir dinero que haga parte del capital de la empresa.

50 Como parte del proceso de inserción el Gobierno ofreció educación para los desmovilizados. En el caso de los miembros de Colectivos del Café, una de los cursos que más se promovió fue con las mujeres para que se capacitaran como taquilleras: uno de los cargos que más se necesita en una empresa de transportes.

51 Marino Álzate, actual gerente de Colectivos del Café fue diputado de la Asamblea por la Alianza Democrática M-19 y los reinsertados del EPL participaron activamente en su campaña.

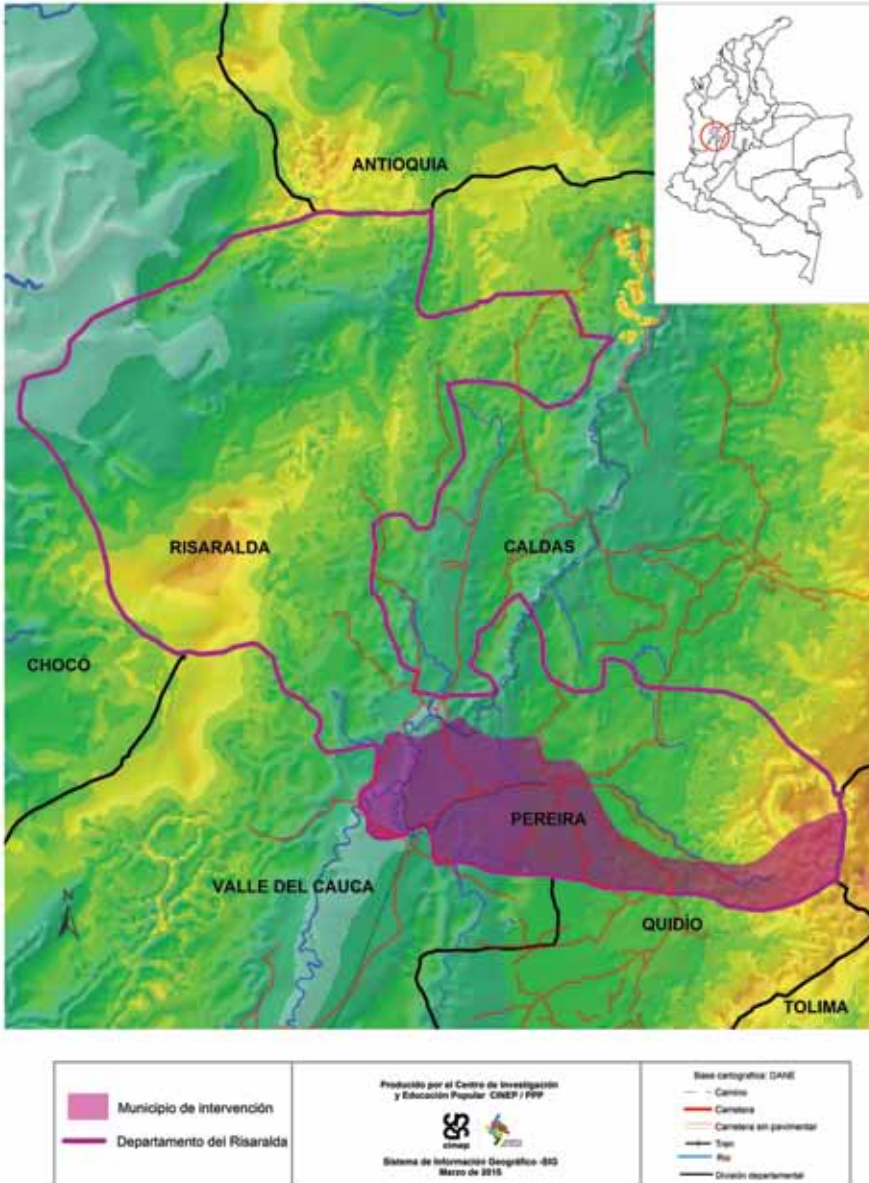
52 Se usa el término «reinserción» teniendo en cuenta el marco jurídico que cobijó las desmovilizaciones del EPL. Asimismo, ellos prefieren ser reconocidos como reinsertados y no reintegrados, porque consideran que el factor de participación política que tuvieron con el proceso de inserción es una gran diferencia con el proceso actual de reintegración de excombatientes.

La experiencia de Colectivos del Café permite la identificación de mecanismos que han permitido o facilitado el funcionamiento y mantenimiento de la experiencia, como un proceso de reinserción económica que avanzó hacia acciones de reconciliación en su comunidad receptora. Algunos de esos mecanismos están relacionados con el contexto, pero en su gran mayoría han sido elementos propios de la experiencia, lo cual la hace muy endógena, pero al mismo tiempo tiene relevancia en el entendimiento de procesos de reconciliación que se dan en comunidades receptoras y que no han sido victimizadas directamente. No obstante, la experiencia de Colectivos del Café, evidencia particularidades proporcionadas por el momento histórico y político que vivía el país en los 90, aspectos estructurales que facilitaron el reencuentro de estos miembros del EPL con este sector de la comunidad pereirana.

El contexto de Pereira

Pereira está ubicada en el centro-occidente del país y limita con los departamentos de Antioquia, Tolima, Caldas, Chocó, Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Según proyecciones de población del DANE para el 2015, Pereira contará con un total de 469.644 habitantes. En 2005 el 52,2 % de la población eran mujeres y el 47,8 % eran hombres (DANE, Boletín Censo General 2005 Perfil Pereira, 2010). En la población pereirana el género femenino predomina. La proporción dentro del total de habitantes es de 52,45 %, relación superior a la existente en el departamento de Risaralda en 1,15 puntos porcentuales.

Mapa 3
Experiencia de Colectivos del Café



Aspectos sociales y económicos

Pereira es un municipio, en su mayoría, receptor de población migrante. El 48,8% de la población de Pereira había nacido en otro municipio o en otro país, según el censo de 2005. El 13% de la población de cinco años y más, que residía en el momento del censo en el municipio, procedía de otro lugar del departamento y el 0,8%, de otro país. Igualmente, Pereira es el segundo municipio de Colombia con mayor intensidad migratoria, según el mismo censo. Esto constata «que el crecimiento poblacional de Pereira se ha sustentado en alta medida en procesos migratorios históricos, que al momento del censo conservaban su dinámica» (Ministerio del Trabajo & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2013). No obstante, el área metropolitana de Pereira ha tenido las más altas tasas de desempleo urbanas en Colombia durante los últimos años, por lo tanto, se «ha venido generando en el mismo sentido condiciones de empleo precario que se han venido reflejando en el subempleo, como problema subsidiario de la desocupación laboral» (Alcaldía de Pereira, 2014).

La ciudad fue fundada en 1863 por un grupo de ciudadanos de Cartago, vecina población de la región del Gran Cauca. Durante la historia de su formación la ciudad ha tenido recepción importante de migrantes provenientes de departamentos como Antioquia, Caldas, Quindío. Desde 1870 y, como resultado de las guerras civiles de 1876 y 1885, la región hoy conocida como Pereira recibió una oleada de inmigrantes provenientes de Antioquia (Rodríguez Becerra, 1993, p. 6). Los primeros migrantes tenían características similares a los pobladores originales, en cuanto a las ocupaciones e indumentarias, «todos eran campesinos o al menos descendientes de ellos» (Luis Duque Gómez, 1963, p. 5) por lo que esta similitud de costumbres y características de pobladores originales y migrantes desde la segunda mitad del siglo XIX, «ha significado que la ciudad desde el punto de vista de la hospitalidad hacia el forastero ha sido y es, la ciudad sin puertas para quienes provienen de otras regiones del país. [La migración] ha sido favorecida por la localización geográfica de la ciudad y ha contribuido a reforzar el carácter abierto de la sociedad pereirana» (Luis Duque Gómez, 1963).

En cuanto a la economía, para el siglo XIX se reconoce como primitiva con predominancia de agricultura, ganadería y comercio. A comienzos del siglo XX, junto con la ganadería, se consolidó el mercado del café y la caña de azúcar, renglones que desplazarían gradualmente al oro, al caucho y al cacao. El café, que había sido introducido en la región en 1865, solamente se tornó en el pilar fundamental de la economía caldense a principios del siglo XX, sin que esto significara que la caña de azúcar y la ganadería dejaran de ser economías regionalmente representativas,



Hay quienes aseguran que el EPL nunca constituyó una amenaza real y latente para la clase dirigente del Eje Cafetero

especialmente en Pereira. Durante la primera mitad del siglo XX, los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío tenían las mayores fincas cafeteras del país y lograron posicionar el café colombiano, internacionalmente reconocido por su alta calidad. Para 1980, en Pereira, «las fincas menores de 4 hectáreas representaban el 80% del total de explotaciones, pero únicamente cubrían el 38% de la superficie y apenas si lograban contribuir con el 33% de la producción» (Arango Gaviria, 1989). Esto denota que a pesar de que Pereira hace parte de la reconocida zona cafetera en Colombia, el aporte a la economía nacional del café no era tan representativo como el de otras zonas, por lo que su auge económico no fue tan notorio.

Actores armados en Risaralda y Pereira

En el departamento de Risaralda ha coincidido la presencia de distintos grupos armados, mayoritariamente en las zonas rurales. En primer lugar, se encuentra el Ejército Popular de Liberación (EPL) grupo que hizo su incursión en la década de los 80, cuando el Frente Carlos Alberto Morales, después conocido como Frente Oscar William Calvo, comenzó sus operaciones en el Eje Cafetero, específicamente tenía injerencia en los departamentos de Risaralda, en el oriente de Caldas y en el suroeste de Antioquia. (Comisión de la Superación de la Violencia, 1992, pág. 71).

El año 1988 se reconoce como el año de la más fuerte ofensiva en contra del EPL y de su base social en el departamento de Risaralda:

Tras el secuestro y asesinato del cafetero Hernán Londoño⁵³ por parte de esta organización, el Batallón San Mateo de Pereira, apoyado según algunas fuentes por grupos paramilitares financiados por la clase dirigente regional, desató una contraofensiva que incluyó detenciones ilegales, torturas, desapariciones y asesinatos en el resguardo indígena de San Lorenzo en Riosucio, Caldas (donde se encontró el cuerpo del secuestrado), y detenciones ilegales y torturas en la misma ciudad de Pereira. (Comisión de la Superación de la Violencia, 1992, p. 72).

Sin embargo, hay quienes aseguran que el EPL nunca se constituyó o se reconoció como una amenaza real y latente para la clase dirigente del Eje Cafetero:

Los fortines guerrilleros fueron ante todo los municipios periféricos de la zona cafetera en los límites con el Chocó [...] Quizá por ello la guerrilla fue percibida por buena parte de la clase dirigente como un problema

Uno de los más grandes
fenómenos generadores de
violencia en la ciudad de Pereira
fue, y ha sido, el narcotráfico



marginal; y tan pronto como se pasó de límite, como en el secuestro de Hernán Londoño, a esta clase social le fue posible cerrar las filas y enfrentarlo con éxito a través de las Fuerzas Armadas o de grupos paramilitares o de autodefensa. (Comisión de la Superación de la Violencia, 1992, p. 72)

Al respecto, puede enunciarse el grupo paramilitar «Los Magníficos», que desplegó acciones en la región con el fin de neutralizar al EPL y fue sostenido por algunos miembros de la clase dirigente risaraldense. Posteriormente, aunque la mayoría del Frente Oscar William Calvo se desmovilizó, en el departamento siguió actuando una estructura disidente de dicha organización, que concentró sus acciones en los departamentos de Risaralda y Caldas. Durante 2006 ocurrieron varios hechos que provocaron la desarticulación de este grupo⁵⁴.

Por otro lado, las Farc, por medio de la injerencia de los frentes 47 y 50, buscaban consolidar un corredor que les permitiera, por un lado, asegurar la salida al mar a través de Chocó, a través de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, y por otro, facilitar un paso permanente entre el sur y el norte del país (Martínez Herrera, 2006). Asimismo, la compañía Aurelio Rodríguez ha actuado históricamente en la zona Norte de Mistrató, Pueblo Rico, Guática y Quinchía (Observatorio DDHH de la Vicepresidencia de la República de Colombia, 2007). La columna Jacobo Arenas lo hacía en las áreas urbanas.

Es relevante anotar que uno de los más grandes fenómenos generadores de violencia en la ciudad de Pereira fue, y ha sido, el narcotráfico. Para el año 1999, «los análisis realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señalaban la fuerte influencia del narcotráfico y sus múltiples actores en el departamento de Risaralda. Destacaban los elevados índices de homicidio en el norte del Departamento del Valle del Cauca, el sur de Risaralda, y el occidente de Caldas» (Martínez Herrera, 2006). Según Martínez Herrera (2006), las bonanzas generadas por el cultivo del café y amapola, la creciente presencia de laboratorios para el tratamiento de sustancias ilícitas y la compra de terrenos por parte de narcotraficantes, provenientes fundamentalmente del Valle del Cauca, generaron escenarios de violencia en los cuales estos nuevos actores ejercían regulación sin la mediación estatal.

54 «El primer hecho, fue la muerte en combate de alias «Leytor», comandante del frente, en un choque armado registrado el 8 de julio de 2006, con tropas del Batallón San Mateo del Ejército en Quinchía. Posteriormente fue capturado alias «Leo», presunto sucesor de Leytor y finalmente, el 23 de julio, se presentó la desmovilización de varios de sus integrantes, gracias a la presión de la Fuerza Pública, lo que condujo a su desarticulación». (Observatorio DDHH de la Vicepresidencia de la República de Colombia, 2007)

Así las cosas, se fortaleció un foco mafioso en la ciudad de Pereira, al mismo tiempo receptora de las familias que surgieron de las dinámicas, guerras y desmantelamientos de los carteles del Valle y Medellín, y que buscaron refugio en la zona pero sin abandonar los nexos con la ilegalidad; así se origina el Cartel de Pereira. Dadas estas nuevas condiciones, durante la administración de Ernesto Samper, se conforman las *convivir* de Guática, Belén de Umbría y Pereira. Estas *convivir* precedieron la entrada del paramilitarismo en el departamento y sumado a distintos factores ocasionaron un aumento de la violencia en el departamento (Nuñez, 2007). El fenómeno paramilitar hizo su incursión en el departamento de Risaralda en el año 2000. Dicha entrada estuvo a cargo del Bloque Central Bolívar en cabeza del Frente Cacique Pipintá, que tenía injerencia en el norte de Caldas y extendía su accionar hasta Risaralda, y el frente Héroe y Mártires de Guática, que actuaba en el norte del departamento y en Chocó (Observatorio DDHH de la Vicepresidencia de la República de Colombia, 2007).

En medio de este contexto violento, aunque la movilización social en Pereira ha sido baja en cuanto al número de hechos, el sindicalismo y el movimiento estudiantil ganaban gran reconocimiento. En cuanto al sindicalismo y al movimiento obrero en la región, los antecedentes se remontan a la Ley 83 de 1931, por medio de la cual se conformaron distintas agremiaciones de trabajadores «en el caso de Pereira aparecieron sindicatos de latoneros, sastres, zapateros, lustrabotas, carpinteros, matarifes y oficios varios» (Gómez, 2013). Fue así como, a partir de la labor de distintos líderes como Ignacio Torres Giraldo y Julio Restrepo Toro⁵⁵ quienes comenzaron a propagar algunas ideas *marxistas* en Pereira a comienzos del siglo XIX, los partidos políticos Comunista y Liberal ofrecieron a los sectores trabajadores una adscripción a partir de ofrecimientos como cursos sindicales y reformas laborales que los favorecieran (Gómez, 2013). Sin embargo, podría decirse que la sociedad pereirana se considera conservadora en su mayoría, pero la organización sindical al igual que la estudiantil goza de fuertes redes que, si bien no son grandes en número, tienen un impacto importante en las dinámicas sociales del municipio. Específicamente en cuanto al movimiento estudiantil-universitario en la coyuntura entre 1980 y 1983, se presentaron fuertes conflictos en las universidades Libre y Tecnológica que ocasionaron el cierre de las instituciones, la cancelación de períodos académicos

55 Ignacio Torres Giraldo fue «líder sindical antioqueño (Medellín, 1892 - Palmira, 1968). Descendiente de colonizadores paisas que poblaron el Valle del Cauca, Ignacio Torres Giraldo se vinculó desde muy joven a la actividad productiva como obrero, y al sindicalismo, en el cual inicialmente tuvo una marcada tendencia liberal radical, luego obrero-socialista, posteriormente comunista y en sus últimos años marxista independiente. En 1913, cuando apenas contaba con 21 años, Torres Giraldo vivía en Pereira y participaba políticamente del lado de la izquierda liberal. Dos años después participó en la fundación del Instituto Manuel Murillo Toro, de tendencia radical, centro docente en el que trabajó entre 1915 y 1917, y simultáneamente colaboraba en los periódicos El Surco, órgano del colegio, y El Martillo, de tendencia abiertamente revolucionaria». (Rueda Enciso, 1978). Julio Restrepo Toro: Reconocido abogado comunista en Pereira).

y expulsión masiva de profesores y estudiantes. Dichas universidades han jugado roles protagónicos en la movilización estudiantil en Pereira.

Finalmente, en el contexto enunciado anteriormente resaltan algunos elementos contextuales que han ejercido funciones de mecanismos ambientales influenciando la trayectoria de la experiencia de Colectivos del Café. El bajo impacto de la violencia ejercida por los excombatientes del EPL en Pereira, además de la fortaleza de las instituciones encargadas de acompañar la reinserción fueron vitales para el proceso de los desmovilizados y el surgimiento de la empresa. Igualmente, la formación de la población pereirana, acostumbrada de cierto modo a la recepción de migrantes de distintas regiones del país y la cercanía que sentían los desmovilizados del EPL con algunos sectores de la comunidad pereirana, fueron características del contexto que influyeron en una mayor disposición para entablar relaciones con los excombatientes que llegaban a formar parte de sus comunidades.

La desmovilización e inicio del proceso de reinserción del EPL: un primer paso hacia el reencuentro con la sociedad pereirana

Los factores antes enunciados configuraron un contexto en el que decidieron desmovilizarse y reinsertarse un número cercano a los 200 combatientes del Frente Oscar William Calvo (OWC) del EPL, 60 de los cuales conformaron la Cooperativa de transportes Colectivos del Café.

En marzo de 1991, la desmovilización del Frente Oscar William Calvo (OWC) se llevó a cabo en el corregimiento de Villa Claret, municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda. Este momento fue el primer paso hacia un reencuentro con la sociedad después de varios años de permanencia en el grupo armado. La confianza en los comandantes que habían negociado con el Gobierno logró que los excombatientes de rangos medios y bajos creyeran en la propuesta de desmovilización que se había acordado entre el EPL y el Gobierno nacional. Asimismo, la presencia institucional y de las Fuerzas Militares reforzó la confianza del grupo de desmovilizados en los ofrecimientos del Gobierno para su proceso de reinserción.

Precisamente el por qué se identifica a las Fuerzas Militares como un actor con el que se construyó confianza durante el proceso de desmovilización reside en que durante la permanencia en el campamento de Villa Claret —durante las negociaciones en 1991— fueron estas las que facilitaron la llegada de alimentos y garantizaron la seguridad a los combatientes del EPL. Durante la permanencia en el campamento de Villa Claret, se dieron a conocer algunos de los acuerdos a los que habían llegado con el Gobierno; sin embargo, hoy en día los comandantes



Los excombatientes entrevistados decidieron asentarse en Pereira por su pujanza económica, así como por el trabajo político sólido que tenían en el lugar

aseguran que el proceso de socialización de la reinserción fue superficial, por lo que muchos excombatientes sufrieron más que otros una vez comenzaron el proceso de reinserción (Entrevista 1).

Este hecho hizo que en un primer momento de la desmovilización los excombatientes sintieran desconfianza en el proceso de reinserción, pero al ver que las demás entidades del Gobierno involucradas (Gobernación, SENA, ejército, Consejería de Paz de Presidencia) sí acompañaron el proceso, volvieron a creer y apostaron por la reinserción a la vida civil.

Los miembros excombatientes entrevistados de esta cooperativa aseguraron que decidieron asentarse en Pereira, porque consideraban que en la parte urbana de este municipio era donde tenían un trabajo político sólido. Esta decisión fue concertada entre los líderes del Frente OWC y luego fue compartida con los excombatientes que quisieron hacer parte de la experiencia. Las mujeres desmovilizadas entrevistadas aseguraron que estos momentos fueron difíciles porque algunas iban a ser madres solteras y esto dificultaba las posibilidades de estudio y trabajo, pero encontraron en la propuesta de Colectivos del Café la mejor opción para salir adelante.

Por otro lado, Pereira era la ciudad intermedia con la que sentían más cercanía y simpatía los exmiembros del Frente OWC, ya que había sido la ciudad más cercana para suplir dotaciones y alimentos cuando estaban en las filas del EPL. A la par, consideraban que a pesar de ser una sociedad conservadora, debido al carácter abierto característico de Pereira, ellos podrían tener mejores posibilidades para su proceso de reinserción. Para el momento, Pereira era considerada por el EPL como la ciudad más pujante económicamente del Eje Cafetero (Quindío, Caldas y Risaralda), tal y como aseguró Marino Alzate (excomandante del Frente OWC y actual gerente de Colectivos del Café) «la dinámica política, social y económica de este departamento que era sobresaliente con respecto a los otros dos departamentos que es el caso de Quindío y Caldas» (Participante grupo focal 2) y por esta razón se motivaron aún más a asentarse en la ciudad.

Una vez llegaron a esta ciudad, el proceso de reconstrucción de confianza por parte de las comunidades que recibieron a los excombatientes pasó por una etapa de prevención hacia los desmovilizados y al impacto que pudiera tener la presencia de exguerrilleros en sus comunidades. Esas prevenciones se alimentaban del temor que inspiraba la connotación de ser guerrillero y haber portado un arma, de esta manera, los prejuicios eran constantes y expresados por miembros de la comunidad que tenía contacto directo con los desmovilizados que harían parte de Colectivos del Café.

El proceso educativo permitió la construcción de confianza en los desmovilizados, la constancia y el respeto frente a los compromisos adquiridos por parte de las personas desmovilizadas



Un ejemplo concreto de esta situación se dio entre profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira (en adelante UTP) y los excombatientes. Como parte del programa de nivelación bachiller al que podían acceder los desmovilizados del EPL, la UTP presentó un proyecto para un programa único y especializado de nivelación bachiller para los desmovilizados. Esta iniciativa estuvo liderada por una de las decanas de la Facultad de Ciencias de la Educación, quien hoy asegura que fue una experiencia productiva, exitosa y sobre todo concertada con las necesidades y los contextos de los que provenían los excombatientes (Entrevista 2). Pero a pesar de esto, hubo personal de la Universidad que no creía en la experiencia ni en que los excombatientes fueran a responder al esfuerzo del Gobierno y de la UTP, aseguraban que «el que es, no deja de ser» refiriéndose a las personas desmovilizadas, negando de entrada la posibilidad de que los excombatientes demostraran su compromiso con el proceso de reinserción.

Lo anterior denota las primeras prevenciones y temores que surgieron en un sector de comunidad receptora que entró en contacto con desmovilizados del EPL. En este caso, la comunidad educativa evidenciaba las dos posiciones adversas respecto al proceso de reinserción. Por un lado, el apoyo a los desmovilizados en proceso de nivelación académica por parte de los profesores que les dictaban clases en la UTP; y por otro lado, el escepticismo sobre el verdadero cambio que pudieran presentar los desmovilizados del EPL. Pero en este caso, esas prevenciones no estaban relacionadas con un impacto directo de la violencia ejercida por el EPL en Pereira, sino que se alimentaban de representaciones sociales sobre el significado de haber pertenecido a la guerrilla, como grupo armado.

No obstante, con el tiempo, el proceso educativo permitió la construcción de confianza en los desmovilizados, la constancia y el respeto frente a los compromisos adquiridos por parte de las personas desmovilizadas redujo progresivamente los temores y estigmas hacia esta población. Fue el primer paso al reencuentro con sectores de la sociedad pereirana. Sin embargo, la relación de los excombatientes con el resto de miembros de la UTP fue muy superficial, ya que los desmovilizados y los estudiantes de la UTP no compartían los mismos espacios de aprendizaje (en parte debido a la particularidad del programa ofrecido a excombatientes) ni los mismos horarios de clases. Sí se compartieron espacios comunes como cafeterías o bibliotecas, y aunque no se entablaron relaciones cercanas de reconstrucción de confianza, tampoco hubo incidentes de convivencia al interior de la Universidad entre estudiantes y personas desmovilizadas (Entrevista 2).

El proceso de construcción de confianza en esta oportunidad se vivió de manera diferenciada entre hombres y mujeres excombatientes. Adicional al proceso de aprendizaje y a las dificultades que esto representaba en general para los excombatientes, las mujeres tuvieron que vivir otro proceso de adaptación, incluso más radical que el de los hombres. Aquellas costumbres de convivencia (vocabulario, comportamiento, formas de expresión, etcétera.) que habían construido durante la permanencia en el EPL, fueron modificadas drásticamente en el proceso de adaptación a la vida civil (Entrevista 2).

Aunque hombres y mujeres desmovilizadas contaban con las mismas oportunidades frente a capacitaciones técnicas y oferta laboral y educativa, desde este primer episodio se vislumbran algunas diferencias en los procesos de reinserción de hombres y mujeres. Las mujeres modificaron comportamientos que para la comunidad receptora eran considerados impropios, por lo que para ellas esta etapa significó no solo una reconstrucción de sus vidas en proceso de reinserción, sino una modificación del imaginario de lo que «debía ser» una mujer reinsertada para que fuera aceptada por las comunidades receptoras, acostumbradas a estereotipos del comportamiento femenino distintos a los que ellas conocieron en las filas del EPL.

Al mismo tiempo que se daba un proceso de confianza entre la comunidad educativa de la UTP y aquellos desmovilizados que harían parte de Colectivos del Café, se dio un proceso de construcción y afianzamiento de las expectativas y la confianza de los desmovilizados en el Gobierno y en las instituciones que lo representaban: «el Gobierno a nosotros como reinsertados nos dio muchas oportunidades. La gente quería estudiar, abrieron cupos en el SENA, en las universidades. Lo que pasa es que hay muchos que no aprovechamos» (Participante grupo focal 1).

El inicio de operaciones de Colectivos del Café: el encuentro con clientes y la resolución de conflictos con otras empresas transportadoras

Paralelo al proceso de formación y nivelación académica que vivió este grupo de excombatientes, aquellos que habían sido comandantes del Frente OWC propusieron la formación de una cooperativa como opción económica ya que «la unión hace la fuerza, entre más nos juntemos y juntemos toda la plata, más fácil nos queda enfrentar esta etapa» (Entrevista 1). Así las cosas, entre 52 excombatientes juntaron capital y dieron inicio a la experiencia de la cooperativa de transportes Colectivos del Café. Corpes de Occidente (corporación regional de planificación) fue el ente gubernamental (ya extinto) que financió y apoyó el diseño del proyecto y los estudios de viabilidad. Asimismo, fue el ente que estuvo a cargo de la redacción de la solicitud de licencia de transporte ante el Ministerio de Transporte para que Colectivos del Café comenzara operaciones.

A finales de 1992, y la primera mitad de 1993, se hicieron todos los trámites respectivos para la solicitud de la licencia de transporte público ante el Ministerio de Transporte, pero dentro de los requisitos para que se otorgara la licencia de operaciones, existía el derecho de oposición de las demás empresas transportadoras que ya ocupaban las rutas que Colectivos del Café aspiraba a transitar. A partir del anuncio de la entrada de una nueva empresa transportadora varias empresas materializaron su oposición aduciendo que esta nueva empresa generaría más competencia en la terminal de transportes por la alta oferta en las rutas que estaban solicitando Colectivos del Café al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRA) del Ministerio de Transporte. Aunque en el derecho de oposición, las empresas aducían únicamente razones económicas, la procedencia de Colectivos del Café como resultado de un proceso de desmovilización y reinserción sí fue utilizada para desprestigiarlos entre las mismas empresas y una parte de la comunidad del terminal de transportes de Pereira.

Ante esta acción de las demás empresas, los líderes de Colectivos del Café decidieron reunirse con una de las empresas opositoras con mayor influencia en la terminal de transportes para comunicar que ellos solo querían trabajar honestamente como parte de su proceso de reinserción. El vocero de la empresa les contestó que el tema era únicamente económico, ya que la entrada de Colectivos iba a implicar un gasto nuevo en la mejora del servicio de las otras empresas con el fin de no perder clientes con la nueva competencia (Participante grupo focal 2). Ante la negativa de las demás empresas transportadoras de aceptar la entrada de otra empresa y el retraso en los pagos de los créditos que habían adquirido para compra de buses,



Durante el proceso de consolidación de la empresa se presentaron algunas crisis al interior del grupo de excombatientes, debido a la incertidumbre alrededor de la cooperativa y la decisión de invertir sus subsidios de reinserción en esa empresa

los miembros de Colectivos del Café se tomaron la Cruz Roja y la sede del INTRA (Ministerio de Transporte) en Pereira⁵⁶, exigiendo que el Gobierno expidiera la licencia para poder garantizarles su acceso al trabajo tal y como se había prometido en los acuerdos de paz. Ante esta toma en septiembre de 1993, el Gobierno expidió la licencia tres días después.

En contra del deseo de las demás empresas transportadoras del terminal de transportes de Pereira, el 3 de diciembre de 1993 entraron en funcionamiento siete microbuses de transporte de Colectivos del Café a cubrir las rutas que les había asignado el Ministerio de Transporte. Las dificultades que se presentaron para la expedición de la licencia evidencian el tipo de relacionamiento con la comunidad receptora, compuesta en este episodio por los miembros y dueños de empresas transportadoras de la terminal. Estas relaciones estuvieron mediadas por recelos empresariales y prevenciones motivadas por las consecuencias económicas de la entrada de una nueva empresa, además de aquellas prevenciones hacia excombatientes que ingresaran a sus mercados y comunidades. Los miembros de Colectivos del Café aseguraron que, a pesar de esto, no recuerdan haber sido víctimas de señalamientos negativos por ser desmovilizados del EPL, pero sí recuerdan la reacción que tuvieron los trabajadores de la terminal cuando se enteraron de que eran excombatientes; aseguran que su presencia generaba cierta curiosidad, sin que esto implicara que no hubiera temor por la desconfianza que generaba el haber sido parte de una guerrilla.

Durante el proceso de consolidación de la empresa y la consecución de los permisos para los colectivos de transporte, se presentaron algunas crisis al interior del grupo de excombatientes. Estas crisis estuvieron mediadas por un ambiente de incertidumbre sobre el acierto o desacierto que habían tenido al tomar la decisión de formar la cooperativa e invertir sus subsidios de reinserción en esa empresa. Los miembros de Colectivos del Café aseguran que en esos momentos se sentían frenados por el Gobierno y rechazados por la comunidad con la que iban a tener que convivir en el proyecto económico que habían elegido. Pero a pesar de estos inconvenientes, consideran que haber logrado la expedición de la licencia y haber comenzado a transportar clientes fue uno de los mayores logros de sus vidas: «el 3 de diciembre arrancó el proyecto como tal, por ende es una fecha muy importante, nosotros cada año celebramos» (Participante grupo focal 1).

⁵⁶ En los medios este evento fue relatado de la siguiente manera: «el EPL de Risaralda iniciaron ayer acciones de protesta, con desfile de una flotilla de vehículos colectivos por las calles de Pereira y ocupación de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de Pereira. El movimiento de los reinsertados habría sido motivado por la dilación de una licencia de operación, pedida para la flotilla de colectivos conseguidos bajo los programas de asistencia económica del Gobierno nacional, pero cuyo trámite por parte del Intra lleva un año de papeleos» (El Tiempo, 1993).

En 1995, debido a la falta de experiencia en el manejo financiero, llegó la primera crisis para la empresa. Este aspecto implicó la apertura de la experiencia a socios externos, propiciando la creación de nuevos espacios de convivencia con otros actores



Una vez comenzaron a operar los colectivos, la mayoría de socios de Colectivos del Café desarrollaron un papel en la empresa. El gerente de ese momento fue un excomandante, algunos hombres pudieron asumir como conductores y algunas mujeres ocuparon cargos de taquilleras y coordinadoras de ruta. Estos cargos fueron asumidos gracias a las capacitaciones previas que habían recibido.

Cabe resaltar que el rol que desempeñaron las mujeres excombatientes dentro de Colectivos del Café fue asumido luego de un proceso de transformación de actitudes y adaptación: sus formas de expresión y sus lenguajes corporales y orales se adaptaron a un ambiente servicial al público como el requerido por una empresa de prestación de servicio de transporte, en el que la atención al cliente primaba en la fidelización: «entonces el hecho de la preparación fue fundamental, nos enseñaron que realmente nosotros íbamos a servir, a ofrecer, entonces todo eso fue logrando que nosotras fuéramos desarrollando esa actitud [...]» (Participante grupo focal 1). Asimismo, los hombres asumieron en su mayoría roles como los de conductores de los colectivos y de personal administrativo o gerencial.

Las crisis económicas y la inclusión de nuevos socios a Colectivos del Café

Luego de que en 1993 Colectivos del Café comenzó sus operaciones comerciales, el negocio se mantuvo próspero hasta 1995, cuando debido a la falta de experiencia en el manejo financiero llegó la primera crisis. En ese momento, con el fin de sortear las dificultades, Colectivos del Café tomó la determinación de abrir la participación de la empresa y permitir la asignación de algunos de sus 20 cupos de colectivos a dueños de buses externos que quisieran invertir bajo la figura de afiliados. Es decir que se dio la oportunidad a personas no desmovilizadas de inscribir sus buses en la cooperativa de transportes sin que fueran socios de la misma. Este hecho en particular fue el primer encuentro importante de Colectivos del Café (como empresa no como individuos) con ciudadanos que nada tenían que ver con el proceso de reinserción de excombatientes del EPL en Pereira.

Las mujeres excombatientes entrevistadas definieron este momento así: «inicialmente hubo mucho celo pero a la vez un aprendizaje, también trabajar en equipo, el permitir como el hecho de que se participe fue en el momento lo que nos dio como la salida a esa situación» (Participante grupo focal 1). Esto indica que la apertura de la cooperativa, si bien fue una necesidad económica para la subsistencia de la empresa, se convirtió en un mecanismo para la creación de nuevos espacios de convivencia con actores con los que antes no se tenía contacto alguno y no se compartía una identidad de grupo. En el presente, comparten con todos los socios

y afiliados en fechas especiales como Navidad y los aniversarios empresariales. La confianza se ha construido a partir del respeto por los compromisos comerciales y financieros entre los socios de la cooperativa y los afiliados. La procedencia de la empresa y su origen en el proceso de desmovilización del EPL no ha sido un tema de discusión, más bien, las relaciones establecidas se han basado en la imagen que ha construido la empresa Colectivos del Café.

En 2001 se consolidó una alianza comercial con la empresa de transportes Transoccidental. Esta alianza se concretó con el fin de adquirir y administrar conjuntamente diez buses más, pero a diferencia de los colectivos que venían manejándose en Colectivos del Café, los buses nuevos tenían una capacidad mayor para transportar pasajeros. Precisamente, Transoccidental había sido una de las empresas opositoras a la entrada de Colectivos del Café a la terminal de transporte, pero al ver el número de clientes que había consolidado Colectivos del Café aceptó que se hiciera una alianza que beneficiaría a las dos empresas. La adquisición de estos nuevos buses fue considerada como un paso de crecimiento económico y personal «[...] entonces claro, con ese gusto porque para nosotros era un paso de crecimiento, era pasar de carros pequeños a carros grandes y ya no 20 carros, sino 30» (Participante grupo focal 1).

Sumado a este acontecimiento de crecimiento e innovación al interior de Colectivos del Café, en 2004 diseñaron un plan de transporte VIP cuyo público objetivo eran los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira que necesitan transportarse todos los días desde Cartago y Manizales. La innovación y adaptación de los servicios acorde con el principio de una buena atención al cliente permitió que Colectivos del Café sorteara distintas crisis y lograra permanecer en el tiempo como una de las empresas de transporte más reconocidas en Pereira.

Desde 2002, Colectivos del Café y sobre todo las mujeres más activas de la cooperativa pusieron empeño en diseñar y construir un tecnicentro⁵⁷ en el que se encontraban las oficinas de la empresa, se tenía un lavadero de los carros y se prestaba servicio técnico. Para las mujeres de Colectivos del Café, ese proyecto del tecnicentro tenía todo el empeño y el corazón porque fue un espacio que les permitió comenzar, retomar o finalizar sus capacitaciones y empezar a asumir cargos dentro del área administrativa que antes solo podían asumir personas externas que sí contaban con la formación requerida.

⁵⁷ El tecnicentro fue un proyecto que resultó en un local en el que coincidían distintos espacios funcionales para Colectivos del Café. Incluía atención técnico-mecánica de los buses, las oficinas administrativas, lavadero de buses.

En 2012, tuvieron que vender este inmueble debido a una nueva crisis económica, y fue esta la crisis que mayor impacto causó en las mujeres, ya que creyeron que era el fin de la experiencia que se había construido a partir de Colectivos del Café. Tal vez el episodio importante no fue la venta del tecnicentro, sino la inminente pérdida de lo que realmente lograron en esos años como empresa y como individuos. En el caso de las mujeres, este espacio les permitió sentirse empoderadas de su empresa y querer mejorar para sacarla adelante, por eso la venta del tecnicentro la recuerdan como un hecho importante que marcó la historia de Colectivos del Café.

Sobre cómo se logró la convivencia y reconciliación con comunidades a partir de la experiencia de Colectivos del Café

Durante 21 años, Colectivos del Café se ha consolidado como una de las empresas transportadoras con mayor reconocimiento en Pereira. Pocos clientes conocen el origen de la empresa que los transporta, solo les importa el servicio que brindan y la comodidad que ofrecen sus buses. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira son clientes frecuentes⁵⁸. Este escenario de reconciliación ha sido posible gracias a distintos mecanismos que se han identificado en su trayectoria y que, paso a paso, han modelado unos aprendizajes hacia procesos de convivencia pacífica y reconciliación entre aquellos que fueron combatientes del EPL y las comunidades a las que llegaron a recorrer sus procesos de reencuentro.

En primer lugar, es importante decir que esta experiencia se derivó del proceso de desmovilización y reinserción del EPL en Colombia, específicamente de excombatientes que operaban en zonas rurales del departamento de Risaralda. En segundo lugar, el proceso anterior se vio facilitado por un escenario de mayor tolerancia hacia las ideologías de izquierda que profesaba el EPL incluso después de su desmovilización, por lo que encontraron un asidero político en la legalidad tal y como se había plasmado en los acuerdos y la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991.

Igualmente, el bajo impacto de la violencia ejercida por el EPL en Pereira, sumado a la dinámica de poblamiento histórico de Pereira reconocida por su carácter abierto a la recepción de población externa fueron factores determinantes en el desarrollo de la experiencia de Colectivos del Café.

58 Varios de los entrevistados aseguraron que el hecho de que desmovilizados fueran los dueños y trabajadores de esta empresa era conocido aunque sus dueños no promulgaban esta condición. Entre los que sabían que Colectivos del Café se encontraba un profesor de matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira y aseguró que él fue uno de los que promovió un mayor apoyo a la empresa porque había que apoyar los procesos de paz y brindarle oportunidades a los reinsertados. (Entrevista Profesor, Pereira junio de 2014)

Durante la trayectoria de Colectivos del Café distintos sectores de la comunidad receptora apreciaron su compromiso frente a los acuerdos firmados con el Gobierno durante el proceso de paz. Las señales que los miembros de Colectivos del Café enviaron a los distintos sectores de su comunidad receptora, fueron apreciadas por esta (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, p. 28) y se constituyeron como el primer paso hacia la aceptación de los excombatientes y a entablar relaciones con ellos, ya fueran comerciales o educativas, pero enmarcadas en la línea de una construcción de convivencia pacífica.

De igual manera, durante la trayectoria de la experiencia, los comportamientos de quienes habían sido comandantes en el EPL fueron promovidos y apreciados como ejemplos a seguir por el resto de miembros de Colectivos del Café. Estas «señales» fueron interpretadas como unos códigos que se debían alcanzar en el proceso de reinserción y si no se replicaban estos comportamientos había consecuencias. Dentro de tales consecuencias se encontraba ser denunciados y expulsados de las listas de desmovilizados, por lo que eran declarados prófugos de la justicia y perdían todos los beneficios del programa de reinserción.

A pesar de que al comienzo de la experiencia las personas desmovilizadas hablaban del temor que representaba divulgar que eran excombatientes en las comunidades y en los barrios en los que vivían por miedo al rechazo, los líderes del proceso de reinserción les recalcan que aunque hubiera temores se debía respetar el compromiso y la oportunidad que les había dado el Gobierno, que a medida que los desmovilizados dieran muestras de un cambio, la sociedad los iba a aceptar. El presidente de la Fundación Progresar y excomandante del Frente OWC del EPL aseguró que promovían vehementemente el respeto y el deber que asumieron en los acuerdos: «nos tocó lamentablemente muchachos que retornaron a las armas y nos tocó expulsarlos de los listados porque ese era el compromiso con el Gobierno» (Entrevista 1). Además de respetar los compromisos, reconocieron que a partir de unos cambios en los comportamientos que tenían con los clientes iniciales de Colectivos del Café, las relaciones cambiaron y cada vez el calificativo de guerrilleros se difuminaba más.

La fundación Progresar ejerció un mecanismo de intermediación entre el total de desmovilizados asentados en Pereira y los entes estatales encargados de funciones como la carnetización de salud, los trámites ante el SENA y el seguimiento a los procesos de reinserción de cada uno de los miembros de Colectivos del Café que habían participado en el proceso de desmovilización.

El reto de la reinserción se
asumió colectivamente, y
esto ha fundamentado el
sostenimiento de la experiencia



Este mecanismo también permitió una reconstrucción de confianza mutua entre el Ejército y los excombatientes del EPL. Durante el comienzo del proceso de reinserción de excombatientes del EPL, estos aseguraron que sabían que el Ejército les hacía seguimiento para comprobar la veracidad de la reinserción. Igualmente los dos comandantes líderes de la experiencia de Colectivos del Café temían por su seguridad, por represalias que pudiera haber⁵⁹ en contra de los comandantes. El Ejército, al ver que el compromiso de los excombatientes (los comandantes específicamente) estaba siendo respetado, tuvo una relación se tornó menos tensa y se pudieron dar espacios de conversación pública en los que se reconstruyó poco a poco una confianza mutua⁶⁰.

Por su parte, las mujeres desmovilizadas de la experiencia también hicieron uso del mecanismo de lanzar señales durante toda la trayectoria de Colectivos del Café. Las transformaciones de sus comportamientos y formas de expresión al comienzo del proceso de reinserción incidieron directamente en la consolidación de la experiencia de la empresa de transportes.

Teniendo en cuenta el compromiso con el proceso de reinserción antes mencionado, los excombatientes lograron cambiar su identidad (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, p. 29). Este cambio de identidad comenzó por el autoreconocimiento de los excombatientes como ciudadanos con una condición de desmovilizados que iba a ser temporal, por lo mismo quisieron demostrarle a las comunidades que este era un estado que iba a ser superado y afrontado con compromiso. El reto de la reinserción se asumió colectivamente, y el mantenimiento de estas redes ha sido hasta el día de hoy un pilar para el sostenimiento de la experiencia.

Para pasar a otro de los mecanismos exitosos de esta experiencia, cabe resaltar el hecho de que muchos estudiantes de la UTP vivan en Cartago o Manizales, pues esto hace que requieran servicio de transporte intermunicipal para desplazarse de sus casas a la universidad y viceversa, y asimismo el hecho de que la terminal de transportes quede cerca a la sede de la universidad facilitó que los estudiantes conocieran la empresa de Colectivos del Café. Una vez los primeros estudiantes conocieron la procedencia de Colectivos del Café comenzaron a comentar la necesidad de apoyar el proceso de reinserción en espacios como la Asamblea Estudiantil, que precisamente buscaba la promoción del bienestar estudiantil mediante el apoyo a procesos democráticos.

59 Los comandantes aseguran que esos temores se dieron por la creencia de que el impacto del secuestro de algunos miembros de la élite pereirana quisiera ser vengado, pero nunca sufrieron ningún atentado, ni amenaza ni intimidaciones.

60 Al respecto, uno de los comandantes del frente OWC aseguró: «yo voy pero nos tenemos que sentar... nos reunimos con el ejército, con la policía, con el DAS, de frente a hablar [...] yo quiero volver acá, acá están los muchachos, queremos aportar en este camino de la reinserción, de la reconciliación pero yo escondido no puedo estar acá, (entonces el ejército le dijo) tenga un esquema de seguridad». (Entrevista Carlos Mario Franco, junio 2014)

Al respecto, uno de los profesores de la Universidad que estuvo presente en ese espacio recuerda que en 1994 los estudiantes expusieron los motivos para apoyar a la empresa, entre estos, que la iniciativa había sido resultado de un proceso democrático (lo cual los estudiantes admiraban) y que eran reinsertados que requerían un apoyo para salir adelante en un nuevo camino. Actualmente, el mismo catedrático asegura que desde que conoció la cooperativa de transportes han pasado 23 años y que ellos «empezaron con pocas busetas y luego fueron incrementando, ha sido duro, han ido cambiando, han tenido sus altibajos por tipos de gerentes que tienen [...]» (Entrevista 3). Esto permitió que los estudiantes sintieran que debían ser parte de un proceso democrático en el país, y que debían apoyar activamente la reinsertión de excombatientes del EPL que habían decidido seguir su lucha ideológica desde la legalidad. Cabe mencionar que esta universidad ha sido reconocida por luchas y manifestaciones contestatarias y que fue dentro de la misma que muchos de los hoy socios de Colectivos del Café pudieron recibir educación y nivelación en primaria y bachillerato.

La formación de identidad política, que implica «cambios en la conciencia de las personas implicadas, tanto como en las demás partes, respecto a tales identidades, pero también implica alteraciones en las conexiones entre las personas y los grupos afectados» (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2005, pág. 30) fue un mecanismo usado por los miembros de Colectivos del Café que resultó importante para la trayectoria de la experiencia. En la línea de cambio de identidad mencionada anteriormente, la formación de nuevas identidades o el afianzamiento de identidades previamente existentes incentivó la acción colectiva de los actores (Sarmiento Santander, 2012). Mediante el proceso de reinsertión se cambiaron identidades de los excombatientes que se transformaron en ciudadanos respetuosos de un proceso de reinsertión al cual se habían comprometido con el Gobierno y con la sociedad. Teniendo en cuenta esto, la experiencia de Colectivos del Café permitió que sus integrantes transformaran el tipo de relación existente con los entes del Gobierno, ya que gracias al respeto de los compromisos por parte de ambos, estos dos enclaves sociales pasaron de ser los enemigos a ser los aliados vitales para el proceso que en ese momento emprendían desde la civilidad.

Bajo la misma dinámica de mostrar respeto por los compromisos, cambió la relación con las comunidades que los recibirían en el centro urbano de Pereira. Aunque como se ha dicho anteriormente los reinsertados consideraban que la población en Pereira no fue directamente afectada por el accionar del EPL, los excombatientes argumentaron que «el tema se manejaba con discreción no porque nos diera pena sino para no despertar susceptibilidades en la gente» (Entrevista 4). Al igual que la identidad de los reinsertados cambió con la desmovilización, la identidad y el

papel que ejercieron algunos miembros de la comunidad se transformó y logró así modificar el imaginario que se tenía de aquellos que habían pertenecido a un grupo armado como el EPL.

Un mecanismo que tuvo mayor relevancia en el comienzo de la historia de Colectivos del Café fue el de difusión (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2005, pág. 74). Durante esa etapa la comunidad receptora fue testigo de la determinación de los desmovilizados para salir adelante con la cooperativa de transportes y para dejar atrás sus historias como combatientes del EPL. De esta manera, los miembros de la experiencia hicieron público su compromiso con el Gobierno y su decisión de rehacer sus vidas desde la legalidad, en ese orden de ideas, la comunidad (específicamente la comunidad de la terminal y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira) fue partícipe de una divulgación de la experiencia en sus redes y así se consolidó una imagen de la empresa como una empresa de transportes producto de un proceso de paz; asimismo, su imagen se hizo más sólida por medio de un proceso de difusión del buen servicio y del cubrimiento efectivo de las rutas asignadas, así, se configuró una imagen netamente comercial y el calificativo de empresa de reinsertados se difuminó con el paso de los años.

Aprendizajes

Frente a los aprendizajes sobre reconciliación y convivencia pacífica esta experiencia permite evidenciar algunas lecciones sobre elementos clave para una reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras.

En primer lugar, esta experiencia puede ser considerada como una iniciativa de reconciliación social y política según la propuesta del marco teórico de la presente investigación. Teniendo en cuenta que la reconstrucción de relaciones entre excombatientes y la comunidad receptora no contempló la participación de población víctima directamente afectada por el accionar del EPL, se entiende que no hubo una re-construcción de relaciones interpersonales previamente fracturadas, sino que se generaron procesos de construcción de nuevos vínculos entre desmovilizados y comunidad receptora, en particular sectores como los transportadores y la Universidad Tecnológica de Pereira.

Esta generación de nuevos vínculos permitió que la reconciliación política se materializara, ya que a partir de los espacios de encuentro que se generaron desde esta experiencia en Pereira, se forjó la construcción de nuevas confianzas entre las comunidades y las instituciones locales. Entre otros ejemplos esa construcción de nuevas relaciones con la institucionalidad se manifestó en alcanzar cargos públicos del departamento a través de elección popular.



Es posible advertir que actualmente la garantía, la protección de los derechos de las víctimas y el acompañamiento psicosocial son una condición *sine qua non* en escenarios de DDR y justicia transicional

Asimismo, esta experiencia hace explícita la importancia que para un proceso de reconciliación tienen los lazos previos del grupo que se desmoviliza con su comunidad receptora; es decir, si se trata de un proceso de recomposición de relaciones o construcción de nuevos lazos, —este último es el caso de Colectivos del Café— la experiencia señala que aspectos como la capacidad de integración de migrantes, afinidades ideológicas en algunos sectores, acompañamiento institucional y bajos niveles de victimización pueden facilitar no solo el proceso de reintegración, sino el de reconciliación social y política.

No obstante, en este caso de desmovilización y reinserción del EPL, los procesos de reparación de víctimas, el descubrimiento y reconocimiento de la verdad sobre los hechos victimizantes no fueron relevantes, es decir, en términos coloquiales las heridas no fueron cerradas, ni los daños resarcidos, ni los hechos esclarecidos. Eso sucedió tanto con víctimas del EPL como con familiares de miembros del EPL que fueron desaparecidos o asesinados. Esta situación es reconocida por un miembro de Colectivos del Café «faltaron cosas, indudablemente fue un proceso que no tuvo reparación, no tuvo verdad tampoco, eso quedó ahí. Diríamos que en términos generales sí [hubo reconciliación] [...] pero todo se logró a través de ganancia de confianza mutua [...]» (Taller de Retrospectiva, Septiembre de 2014).

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible advertir que actualmente la garantía, la protección de los derechos de las víctimas y el acompañamiento psicosocial son una condición *sine qua non* en escenarios de DDR y justicia transicional. Desde esta atmósfera, la reconciliación interpersonal puede tomar más relevancia, si bien corresponde a la subjetividad de los actores implicados.

Por otra parte, es importante señalar la injerencia del mantenimiento de la estructura del EPL en su proceso de reinserción social en Pereira, lo cual tiene una relación no solo con la sostenibilidad de la experiencia, sino indirectamente con sus posibilidades hacia la reconciliación social y política. La permanencia de dicha estructura permitió que el proceso de reinserción fuera menos traumático, sobre todo para aquellos combatientes que no conocían la vida en ciudad y que no tenían conocimientos académicos. Esta condición permitió que algunos reinsertados encontraran en Colectivos del Café una continuidad del grupo familiar que habían construido durante su permanencia en el EPL. Esta característica les permitió acondicionarse socialmente y económicamente de manera satisfactoria. Asimismo, el respeto por los compromisos de reinserción y el mantenimiento de sus vidas dentro de la legalidad estuvo acompañado por el apoyo que sintieron de sus compañeros y en la travesía conjunta que ha significado la consolidación de la cooperativa.

El papel ejercido desde la universidad refleja el potencial de los centros educativos para comprender realidades complejas y desplegar acciones concretas que contribuyan a la convivencia pacífica y a la reconciliación



La experiencia de Colectivos del Café es un ejemplo de lo acotado por Darío Mejía quien asegura que «en la guerrilla había un valor muy grande, el respeto al mando y del mando al combatiente; había una integración muy grande» (Alape, 1996). De esta manera, la estructura que se había configurado durante la trayectoria del Frente OWC se trasladó en cierta medida a la vida civil, y Colectivos del Café se acopló a dicha estructura. En este traslado de estructura, los liderazgos de las mujeres se vieron particularmente menguados y solo la cualificación educativa les permitió ascender en la jerarquía organizacional.

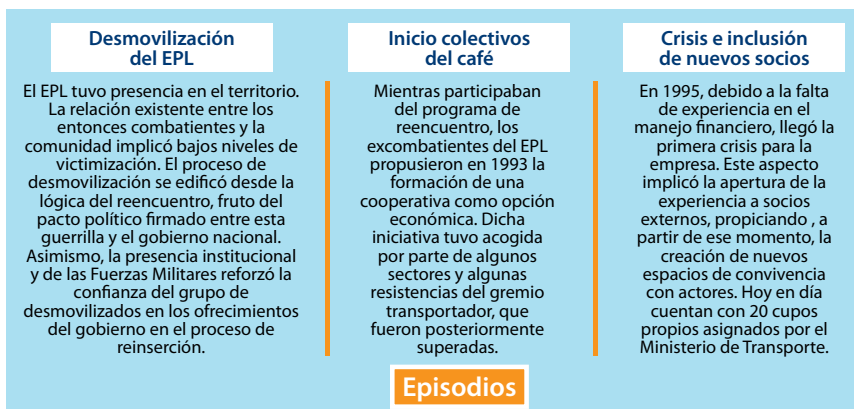
Finalmente, es fundamental reconocer el papel de intermediación de la Universidad Tecnológica de Pereira en el proceso, no solo de reinserción del Frente OWC del EPL, sino también en abrir puertas y propiciar espacios de encuentro hacia la reconciliación social de este grupo armado con el conjunto de la sociedad pereirana. El papel ejercido desde la universidad refleja el potencial de los centros educativos para comprender realidades complejas y desplegar acciones concretas que contribuyan a la convivencia pacífica y a la reconciliación.

Infograma 4

Colectivos del Café Pereira

1992

Colectivos del Café es una cooperativa que ofrece servicios de transporte de pasajeros por carretera en zonas del Eje Cafetero (Pereira, Cartago y Manizales). Fue fundada en 1992 por 52 personas desmovilizadas del Frente Oscar William Calvo del Ejército Popular de Liberación (EPL), como parte de su proceso de reinserción, denominado en su proyecto como reencuentro.



Aspectos del contexto que condicionan a la experiencia, y que permitieron avances en términos de la Reconciliación

Mecanismos Ambientales

Estas características del contexto propiciaron una mejor disposición de algunos sectores de la comunidad receptora para entablar relaciones con los excombatientes participantes de la experiencia.

- Fortaleza de la institucionalidad
- Bajos niveles de victimización
- Dinámica de poblamiento y Recepción de población migrante
- Pacto político con el EPL Programa de reinserción

Factores de las experiencias que permitieron avances en términos de la Reconciliación

Mecanismos Específicos

- Lanzar Señales
- Intermediación (PROGRESAR / UTP)
- Cambio de Identidad
- Difusión (Comunidad de la terminal de transportes / UTP)
- Atribución de similitud (Estudiantes UTP)
- Formación de identidad política

La activación de dichos mecanismos se tradujo en unos avances parciales en el proceso de la reconciliación.



Construcción de nuevas confianzas entre las comunidades y las instituciones locales.

Reconciliación social entre exmiembros del EPL y sectores de la comunidad receptora no víctima gracias a la creación de nuevos vínculos.

Reconciliación política visible en la elección de excombatientes en cargos de elección popular.

Los proyectos que conforman la experiencia son en parte el resultado de los beneficios económicos que recibieron los excombatientes para su reincorporación a la legalidad



Proyectos agropecuarios del Cesar

La experiencia que se describirá a continuación se denomina Proyectos Agropecuarios del Cesar y está conformada por tres proyectos productivos de reinserción del EPL. El abordaje de tres experiencias rurales como un solo caso se justifica por la fuerte interconexión existente entre ellas, en relación con los tres episodios que las enmarcan, derivada de su proceso de desmovilización colectiva realizado en 1991 en el departamento del Cesar. Algunos integrantes desarrollan actualmente una iniciativa política y social visible en el departamento con importantes desafíos en términos de reconciliación y convivencia pacífica.

Los tres proyectos productivos que conforman la experiencia de Proyectos Agropecuarios del Cesar son la Empresa Comunitaria Agropecuaria del Cesar (EMPAGROC), ubicada en el corregimiento de La Mesa; la Empresa Comunitaria de Producción Agropecuaria del Cesar (SOPRASAR), en el municipio Chiriguaná; y Agropecuaria Tres Estrellas, ubicada en el municipio de Becerril. Estas tres empresas se gestan a partir del proceso de paz de 1991, y como uno de los componentes de reinserción⁶¹ económica los excombatientes recibieron beneficios para su incorporación a la legalidad. Los amnistiados fueron beneficiados con programas de entrega de tierras, apoyo para vivienda rural, créditos y algunos compromisos de atención social (Villarraga, 2013). El proceso contemplaba la asignación de tierras a los excombatientes, con el fin de apoyar proyectos productivos. Este componente se realizó coordinadamente entre Programa Nacional para la Reinserción y el INCORA.

Después de su desmovilización, la mayoría de los exmiembros del EPL se concentraron en zonas donde estaban ubicadas sus familias, como es el caso de Chiriguaná, Becerril y en La Mesa (Valledupar). Se debe aclarar que la comunidad receptora no fue victimizada por el accionar del EPL en su momento, pues en la zona Caribe fueron los departamentos de Sucre y Córdoba donde hubo más incidencia política y militar de esta guerrilla. Sin embargo, existió presencia del EPL en algunos municipios del Cesar como Valledupar, Manaure, San Diego, Becerril y San Martín. El perfil de los desmovilizados del EPL que se ubican en el Cesar y que adelantan sus proyectos productivos era variado, es decir, quedaron incluidos en los listados oficiales excombatientes, dirigentes locales del partido (dirigentes sindicales, organizaciones estudiantiles y obreros) y simpatizantes muy cercanos a la organización amplia de masas o al EPL⁶².

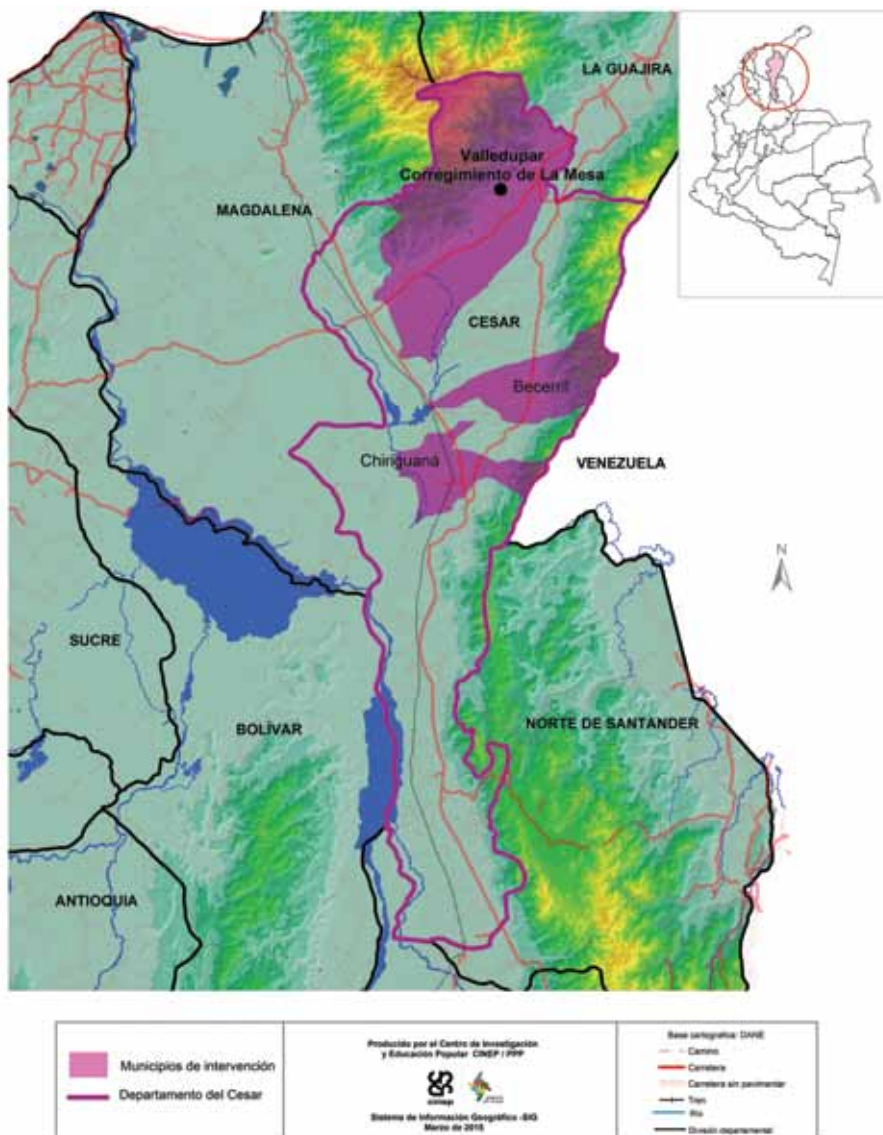
61 Tal como se ha anotado en la introducción y en el caso de Colectivos del Café, el presente estudio reconoce la perspectiva de reencuentro planteada por los exmiembros del EPL y sus diferencias respecto a los conceptos de reinserción y reintegración. No obstante con el fin de facilitar el abordaje en el estudio se utilizarán estos dos últimos conceptos que están ampliamente difundidos en la literatura académica.

62 Entrevista con Ufley Quintero, ex integrante de SOPRASAR. Entrevista 1.

El proceso de reinserción y construcción de relaciones entre los desmovilizados del EPL y la comunidad receptora en Cesar está marcada por tres episodios: 1) La desmovilización del EPL y los comienzos de los proyectos productivos (1991-1996); 2) la entrada paramilitar, los despojos de tierras y el desplazamiento forzado 1996-2006; y 3) la desmovilización paramilitar de 2006 y los procesos de retorno. A partir del análisis de estos episodios y sus mecanismos, serán presentados los avances alcanzados por la experiencia en términos de reconciliación, así como las amenazas que podrían ir en detrimento de dichos progresos.

La entrada paramilitar marcó un cambio de la trayectoria de los Proyectos Agropecuarios del Cesar, pero de nuevo, y justo con la desmovilización paramilitar del Bloque Norte de las AUC⁶³ en 2006, se reactivan mecanismos que conllevan a hablar de procesos de reconciliación. Son comunidades que recibieron dos procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) colectiva diferentes entre sí, por su contexto histórico, jurídico y político, desde la naturaleza de los grupos que lo realizan, así como desde los impactos generados en las comunidades receptoras en la región. El primer proceso de desarme fue realizado por el EPL en 1991 y el segundo por los paramilitares en el 2006, esto plantea escenarios diferenciados de construcción y reconstrucción de relaciones entre los exmiembros del EPL y sus comunidades receptoras en Becerril, Chiriguaná y La Mesa (Valledupar).

Mapa 4
Experiencia Proyectos Agropecuarios del Cesar



Contexto regional

El departamento del Cesar está caracterizado por variedad de climas y paisajes, con extensas llanuras bañadas por los ríos Cesar y Ariguani, en el norte y centro del departamento contrastan complejos montañosos como la Serranía del Perijá, que ocupa toda la franja oriental, y la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada al noroccidente. El centro, muestra sus suelos inundables, cercanos al río Magdalena, y el sur su carácter de zona de intersticio entre el mundo andino y el Caribe. La diversidad de climas y paisajes se expresa en la existencia de tres subregiones (norte, centro y sur), que obedecen a la existencia de ciertos rasgos propios, puesto que cada una de ellas presenta diferencias en términos de su estructura socioeconómica, así como en su relevancia política y su desarrollo institucional⁶⁴ (Barrera, 2014).

La experiencia rural del Cesar se ubica en las subregiones norte (corregimiento de La Mesa, Valledupar) y centro (Becerril y Chiriguana). Esta ecorregión comprende unos 5.700 km² y en ella se encuentran además los municipios de San Diego, Pailitas, La Paz, La Jagua de Ibirico, El Paso, El Copey, Curumaní, Chimichagua, Bosconia, Astrea y Agustín Codazzi. Esta región es el pilar del potencial económico del departamento, con presencia de procesos ganaderos, agrícolas, agroindustriales y mineros. Según el PNUD «en esta ecorregión el recurso natural más importante es el suelo ya que de él mismo dependen en su mayoría los procesos productivos y recíprocamente, de la sostenibilidad de los procesos productivos depende la sostenibilidad de uso del suelo» (PNUD, 2010).

En el Cesar, los principales cultivos comprenden el maíz, la palma africana, el café, el arroz, el cacao, el plátano, el sorgo, el algodón y el frijol. (Meisel y Pérez, 2006). Además, gran porcentaje de tierra de la zona se dedica a actividades agroforestales, silvoagrícolas, agrosilvopastoriles y silvopastoriles.

La subregión norte muestra una predominante tendencia ganadera en las zonas planas y una economía campesina en descomposición ubicada en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, potencial de desarrollo donde las planicies tienen aptitud para la ganadería y la agricultura de riego. La subregión del centro se ubica la mayoría de la minas de carbón, sus municipios reciben una importante cantidad de los recursos que el

⁶⁴ En la subregión norte se ubican los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi, Bosconia, El Copey, El Paso y Astrea., ubicada entre las estribaciones de la Sierra Nevada y de la Serranía del Perijá. La subregión del centro Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguana, Curumaní, Chimichagua, Pailitas y Tamalameque. La subregión del sur San Alberto, San Martín, Río de Oro, Gamarra, Pelaya, González, La Gloria y Aguachica. Ver en Barrera, V. «Las vicisitudes de la integración: Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar», en *Territorio y conflicto en la costa Caribe*, Colección Territorio, Poder y Conflicto, CINEP/PPP, 2014, p. 229.

Estado central les gira por concepto de regalías. Sin embargo, no ha dejado de ser un territorio apto para la agricultura y la ganadería, con un uso del suelo limitado por las periódicas inundaciones alrededor de los complejos cenagosos⁶⁵. (Barrera, 2014)

En general, tres elementos marcan el crecimiento económico de la región: la ganadería vacuna, los cultivos de palma africana (presentes en más del 80% de los municipios del departamento) y la explotación de carbón (extracción de carbón para el año 2011 su participación en el PIB departamental superaba el 47%). Después de la bonanza del algodón en las décadas del 60 y del 70, para inicios de la década del 90 se da una recomposición de la producción agrícola, y es cuando se consolidan cultivos como el cacao y la palma africana con buenas dinámicas de crecimiento. El fin de este periodo se da como el inicio de las exportaciones de carbón en 1995.

El complejo minero comprende a los municipios de la Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril y Chiriguaná. La Drummond Company, empresa privada de origen estadounidense, controla el 60% de la producción del departamento, junto con otras empresas: Prodeco —Glencore— y Colombian Natural Resources (CNR) (CINEP/PPP, Equipo de Tierras y Derecho Territorial, 2014, p. 17). Para Gamarra (2005), la minería ha tenido efectos positivos principalmente gracias a las regalías que resultan muy importantes en las finanzas municipales, teniendo en cuenta que el departamento produce actualmente casi el 51% del carbón nacional. Sin embargo, su inversión no ha sido la más eficaz. Peor aún para «los mismos años que empezaron las exportaciones de carbón, los indicadores de pobreza en el departamento muestran un desmejoramiento de las condiciones de vida en el Cesar» (Gamarra, 2005, p. 59).

El principal conflicto en cuanto al uso de los suelos se da por el exceso de actividades pecuarias y la subutilización de suelos con elevado potencial agrícola. Es claro que el uso de suelos no aptos para actividades pecuarias es una de las principales causas del desbalance agroecológico en el uso de los suelos en la Costa Caribe.

65 En la subregión norte se ubican los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi, Bosconia, El Copey, El Paso y Astrea., ubicada entre las estribaciones de la Sierra Nevada y de la Serranía del Perijá. La subregión del centro Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua, Pailitas y Tamalameque. La subregión del sur San Alberto, San Martín, Río de Oro, Gamarra, Pelaya, González, La Gloria y Aguachica. Ver en Barrera, V. «Las vicisitudes de la integración: Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar», en *Territorio y conflicto en la costa Caribe*, Colección Territorio, Poder y Conflicto, CINEP/PPP, 2014, p. 229.



Las condiciones geográficas en el departamento del Cesar han facilitado el tránsito y movilidad de las estructuras armadas ilegales

Al respecto, Meisel y Pérez (2006) señalan que en la región Caribe «no solamente se están dejando de dedicar tierras aptas para la agricultura con fines pecuarios, sino que se han llevado actividades de adecuación para ocupar tierras que podrían estar siendo dedicadas a actividades agroforestales y de conservación» (Meisel y Pérez, 2006, p. 50).

Territorio y dinámica de los actores armados

La presencia guerrillera en la región Caribe se remonta a 1967, con el arribo del EPL. Además de su incursión en la Guajira, se crearon zonas guerrilleras en Santander y sur de Bolívar, en el Valle del Cauca, Chocó y Risaralda. En la región Caribe, sus principales conquistas políticas y militares se dieron en el Alto Sinú y San Jorge. Una vez controlados los territorios en la región Caribe, el EPL proyecta su accionar al Urabá antioqueño, apoyando en un primer momento las luchas de los trabajadores bananeros. En febrero de 1991, el EPL se desmoviliza con un número de 2.150 combatientes que entregaron 850 armas, el campamento principal se instaló en la población de Juan José, municipio de Montelíbano, Córdoba, allí estaban concentrados la mayor parte de combatientes del EPL en la región (González, 2014).

Las condiciones geográficas en el departamento del Cesar han facilitado el tránsito y movilidad de las estructuras armadas ilegales, la Troncal del Oriente, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá son algunos elementos que atraen la atención de los grupos armados. La importancia estratégica de la Serranía del Perijá radica principalmente en que conecta el nororiente del Cesar y sur de la Guajira con Venezuela, y es utilizado como corredor para el tráfico ilegal de armas y droga, pasando por las zonas rurales de la Jagua de Ibirico, Becerril y Agustín Codazzi (Oppdh DIH, 2007). Posterior a la bonanza algodонера, se dan la bonanza de la marihuana y la minería, las tensiones y conflictos sociales producto de dichos fenómenos fueron regulados en cierta medida por los grupos armados. Así es como dentro de las estructuras de poder en la región se deben señalar los grupos armados además de las fuerzas partidistas (González, 2014).

Como bien señala el PNUD (2011), en el sector rural colombiano confluyen dos grandes conflictos: el conflicto agrario y el conflicto armado interno. En la medida en que la tierra se convierte en un instrumento de guerra y se evidencia la disputa por el territorio, se configura lo que podría denominarse un conflicto rural mayor. El despojo es uno de los fenómenos que evidencia la anterior relación, el Cesar es uno de los diez departamentos del país con mayor despojo, fenómeno que se centra en el microfundio y la pequeña propiedad. A través de los años, las reivindicaciones del sindicalismo, de las comunidades indígenas y de sectores académicos fueron

El dominio territorial de las guerrillas
cambió con la llegada al territorio
de las distintas estructuras paramilitares
provenientes del Magdalena Medio



respondidas por violencia desde la ilegalidad y la legalidad, la misma suerte la tuvieron los movimientos estudiantiles y campesinos.

El departamento del Cesar ha contado con una presencia histórica de las distintas guerrillas, especialmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El ELN inicia su accionar en la década del setenta en el Cesar, y posteriormente en el norte el frente 6 de Diciembre se ubica en Valledupar, El Copey, Bosconi, en La Mojana y los Montes de María, de donde ejercería influencia sobre las sabanas del Gran Bolívar (González, 2014). Actualmente, el ELN opera a través del frente 6 de Diciembre, el frente Camilo Torres que aún conservaba influencia en Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, la Jagua de Ibirico y Chiriguaná, además hace presencia la Compañía Capitán Francisco.

Sobre las Farc, en la década de los ochenta, ingresan al sur departamento con el frente 19. En el 2002, el frente 41 o «Cacique Upar» mantiene su influencia en Balcón del Cesar (Manaure) y La Paz, en el sur del Departamento, también actúa el bloque Magdalena Medio, y el frente 33 aunque no cuenta con una presencia permanente.

El dominio territorial de las guerrillas cambia abruptamente con la llegada al territorio a principios de la década del noventa de las distintas estructuras paramilitares provenientes del Magdalena Medio.

El Bloque Norte de las AUC controló los corredores a la costa Atlántica, Venezuela, Panamá y en particular los que comunicaban con Chocó, el Urabá, Sucre, Bolívar, Atlántico, la Sierra Nevada de Santa Marta, al igual que la Serranía del Perijá en la frontera con Venezuela. Su accionar se extendió desde la Guajira hasta Norte de Santander pasando por el departamento de Cesar (Echandía, 2013).

En este departamento los grupos paramilitares ocuparon prácticamente la totalidad del territorio, Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», al mando del Bloque Norte, contó bajo su mando el frente Mártires del Valle de Upar, cuya influencia cubrió tanto el norte como el centro del Departamento, incluyendo los municipios de Valledupar, El Copey, Manaure, Pueblo Bello, La Paz, La Jagua de Ibirico y San Diego. Bajo el mando de alias «39», este frente ejerció una clara influencia en el corregimiento de La Mesa; los integrantes de EMPAGROC no fueron ajenos a su accionar, y en junio de 2002 tuvieron que salir de la finca Las Marías.

En el sur del departamento se dio la presencia de las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (AUSC), lideradas por Juancho Prada y Roberto Prada, alias «Junior».

Su accionar contó con el beneplácito de las grandes agroindustrias, principalmente la palmera. Se caracterizaron por la desaparición de sus víctimas, varios pobladores coinciden en que la mayoría de los cuerpos fueron arrojados al río Magdalena (Verdad Abierta, 2010), golpearon el movimiento sindical y sentaron las primeras bases de apoyo de los grupos de autodefensa en las partes planas (Oppdh DIH, 2006).

El Bloque Norte y su comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», se desmovilizaron en marzo de 2006 en el corregimiento de La Mesa, que había sido históricamente su base de operaciones. Según fuentes de la Procuraduría, en ese mismo corregimiento surgen las primeras bandas criminales que con constantes cambios de mando, debido a la ofensiva de las Fuerzas Militares, pretenden dominar los corredores estratégicos del narcotráfico que dejaron libres las AUC tras su desmovilización. El OPDDR de la Universidad Nacional señala que en el departamento hacen presencia Los Paisas, Los Rastrojos y Los Urabeños⁶⁶. Como bien señala el Oppdh DIH en la región existen varios corredores de movilidad que le permiten a los grupos armados irregulares comunicarse entre los departamentos de Bolívar, Cesar, Magdalena y La Guajira, así como entre Cesar, Norte de Santander y la frontera con Venezuela.

Institucionalidad y movilización social

Dentro de la institucionalidad, según se pudo apreciar, son característicos los vínculos de la clase política con la llegada del paramilitarismo. Muchos de estos vínculos se dieron luego de la presión de las guerrillas a las familias de tradición política del departamento⁶⁷. Así se comienza por la presión sobre las candidaturas legislativas en el año 2002, que derivarían años después en la condena del senador Mauricio Pimiento, por nexos con el Bloque Norte. Al respecto la Corte Suprema de Justicia señaló: «Los resultados electorales examinados, la evidente intimidación sobre la población y demás actores políticos, la eliminación de eventuales opositores, la no admisión de candidaturas distintas a las acordadas por el grupo paramilitar y la imposibilidad del libre ejercicio de actividades proselitistas» son situaciones reveladoras del concierto para delinquir imputado al senador Pimiento (El Espectador, 2008). Dicha captura se extendió por juntas de acción comunal, alcaldías e incluso la Gobernación del departamento (Misión de Observación Electoral, 2011). Además, en la región existieron alianzas entre fuerzas militares del

⁶⁶ Ver al respecto Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, *DDR y acciones violentas*. Enero 2010.

⁶⁷ Monografía político electoral, Departamento de Cesar, Misión de Observación Electoral y Corporación Nuevo Arco Iris, de 1997 a 2007, publicada en el 2011.

Estado y paramilitares, que se ilustran en la condena al oficial del Ejército, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez por este tipo de vínculos⁶⁸.

Es de destacar que, para las décadas de los 70 y los 80 el departamento presentó una alta presencia de luchas campesinas e indígenas, concentrando el 5,8% del total de las movilizaciones en el país. Se destacaron los municipios de Valledupar y El Copey (Prada, 2002). En las décadas posteriores, el liderazgo campesino se ve mitigado en gran medida por la arremetida paramilitar en la región, así como por la apertura económica de la década del 90. Las movilizaciones sociales y las acciones colectivas por la paz en el departamento del Cesar han correspondido con las múltiples causas del conflicto que se han presentado: los conflictos por la tierra entre campesinos y grandes propietarios, los derechos humanos y el respeto a la población civil, así como la lucha por los intereses laborales y empresariales. A estos podría añadirse, siguiendo a Gutiérrez (2014), el suministro de servicios públicos básicos, el desarrollo regional, el aprovechamiento de recursos acuíferos y el poder político y electoral.

Luego fueron víctimas de los paramilitares (especialmente en los 90 y los primeros años del siglo XXI), quienes de manera directa se empeñaron en reducir liderazgos para que no interfirieran con sus proyectos políticos y económicos. En estos procesos, líderes campesinos, políticos, estudiantiles, sindicales, indígenas y de barrios populares han sido silenciados, asesinados y obligados a desplazarse, a exiliarse o a marginarse de toda actividad, lo que ha terminado por debilitar la organización social y fragmentar el tejido social del territorio⁶⁹ (PNUD, 2010).

La gran mayoría de las acciones colectivas por la paz registradas en las últimas décadas correspondieron a marchas y movilizaciones, con 24 registros. En segundo lugar se registran los encuentros, foros o seminarios con un total de diez hechos. La tercera modalidad fueron los procesos de concertación ciudadana con 5 hechos. Es evidente la significativa participación de Valledupar, el ser centro administrativo departamental así como su tradición de movilización (Datapaz, 2014)⁷⁰.

68 El Coronel Hernán Mejía Gutiérrez fue sentenciado a 19 años de prisión por colaborar con paramilitares desde inicios de los 2000, cuando estuvo como comandante del Batallón La Popa, en la ciudad de Valledupar. Sostuvo encuentros con cabecillas de los paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», y otros como David Hernández, alias «39». Diario el País, Judicial, «Condenan a oficial del Ejército por vínculos con paramilitares» Cali, Colombia. Septiembre 9 del 2013.

69 Las masivas marchas campesinas que se realizaron entre 1985 y 1987 mostraron a esta población como un actor de Cesar dispuesto a reclamar sus derechos. Las marchas tuvieron el respaldo de A Luchar, una corriente política legal nacida en el ELN, el Movimiento Cívico Causa Común y otros movimientos del Cesar. En la marcha de junio de 1987, por ejemplo, más de 10.000 hombres y mujeres campesinos se reunieron en Valledupar y se quedaron días negociando con el Gobierno nacional y departamental la defensa de derechos. PNUD, *Cesar: Análisis de la Conflictividad*, Colombia, 2010.

70 Datapaz, Participación departamental en las Acciones Colectivas por la Paz, Región Caribe 1975-2014, CINEP/PPP, 2014.

Experiencia rural del Cesar: episodios y mecanismos

Tal y como había sido esbozado anteriormente en este documento, la experiencia que se describirá a continuación llamada «Proyectos Agropecuarios del Cesar» se compone de tres empresas derivadas del proceso de desmovilización del EPL. Las tres empresas se gestaron en el marco del programa de reincorporación, y constituyeron escenarios de experiencias productivas rurales. A continuación se hace una descripción de cada una de ellas:

La Empresa Comunitaria Agropecuaria del Cesar (EMPAGROC) surge con la participación de dieciocho desmovilizados con sus respectivas familias. EMPAGROC obtuvo la personería jurídica a finales de 1992, con el fin de adelantar un proyecto productivo bovino. Como parte de la política del Programa Nacional para la Reinserción, el INCORA adjudicó el predio conocido como Las Marías a finales de 1993, este cuenta con aproximadamente 288 hectáreas y se ubica en el corregimiento de La Mesa a diez kilómetros del municipio de Valledupar, Cesar. Aunque la mayoría de proyectos han girado en torno al sector bovino, durante sus más de veinte años de existencia han intentado adelantar otra serie de proyectos de carácter agrícola. Hacia el año 2000, llegan los paramilitares al predio Las Marías, quienes además de apoderarse del ganado desplazan a las familias que lo habitaban. A pesar de esto y de las constantes amenazas en su contra, para el año 2004 algunas familias retornan al predio y continúan con las actividades de la empresa. Actualmente, seis desmovilizados del EPL con sus respectivas familias continúan en Las Marías, adelantan proyectos productivos y participan en actividades sociales en el corregimiento de La Mesa y en Valledupar. Esta tierra se destaca por su riqueza en agua, cultivos de maíz, arroz, piscicultura, ganadería, criaderos de puercos, etcétera. La ganadería vacuna representa la influencia significativa y predominante al interior de EMPAGROC.

Empresa comunitaria de producción agropecuaria del Cesar (SOPRASAR) integrada por veintiocho desmovilizados con sus familias con quienes se ubican en la finca Monterrubio en el municipio de Chiriguaná, que contaba con 795 hectáreas solo funcionó como tal hasta el año 2009 cuando por acuerdo general pero presionados por las circunstancias deciden vender el terreno. La causa fue el asesinato sistemático de seis integrantes de la empresa y las constantes amenazas a los otros miembros⁷¹. En 1997, se presenta el primer desplazamiento por la entrada de paramilitares y en 2002 deciden retornar, pero allí desaparecen a uno

⁷¹ Dentro de los miembros asesinados de SOPRASAR están: José Manuel Gutiérrez, Ángel Milquiades Loperena Montero, Alirio Pérez Vivas (desaparecido en Chiriguaná), Onil Antonio Polo Puerta, Ramiro Alberto López Velásquez (gerente y representante legal de SOPRASAR) y Luis Rodríguez Rincón (asesinado en Maicao).

Las comunidades rurales han tenido que pasar diferentes etapas o episodios que aportan valiosos aprendizajes sobre los pasos a seguir para construir el camino a una verdadera reconciliación



de sus integrantes y asesinan a otro. La ubicación geográfica es estratégica, ya que la finca está en el perímetro de amplia explotación minera del Cesar, cruza la vía férrea, un oleoducto y la carretera, muchos atractivos de los que las mafias han querido apoderarse, además estas son tierras excelentes para la ganadería y la agricultura. Debido al asesinato de dos miembros el 8 de mayo del 2009, ocurre el desplazamiento definitivo. Esta suma de acontecimientos hizo imposible seguir con el proyecto productivo y se tomó la decisión de vender el terreno. Actualmente, el Estado no reconoce la condición de desplazados de estas personas.

Agropecuaria Tres Estrellas, en 1992 el INCORA entrega un terreno de 35 Hectáreas, una finca ubicada en el municipio de Becerril, en un principio conformada por tres desmovilizados y sus familias, pero en acuerdo común desde 1994 hasta la actualidad se mantiene en el proyecto una sola persona. En el 2004, la persona que lidera el proyecto de Tres Estrellas asume como coordinador de planes de retorno, por su capacidad de interacción con la comunidad y gestión con instituciones del Estado, pero solo pudo despeñar este cargo un año por amenazas constantes contra su vida⁷². Actualmente la experiencia empresarial está sustentada en el trabajo con silos de maíz y en la elaboración de concentrados, como aportó a reconstruir un tejido social desde el núcleo que es la familia, y el sentirse perteneciente e identificado a una comunidad gracias a la legalidad.

Las comunidades rurales han tenido que pasar diferentes etapas o episodios que aportan valiosos aprendizajes sobre los pasos a seguir para construir el camino a una verdadera reconciliación como hilo conductor para la reconstrucción del tejido social. Con el fin de describir los mecanismos desarrollados por la experiencia rural del Cesar, es importante tener en cuenta el antes y el después de la entrada paramilitar. La violencia paramilitar es un episodio que marca la trayectoria de la experiencia rural del Cesar, ya que antes de la entrada paramilitar existían mecanismos que posibilitaron un ambiente propicio para la convivencia pacífica y se dieron pautas para llegar a un ambiente de reconciliación. Se suma la precaria presencia del Estado durante estos episodios en las comunidades, igual que en la garantía y seguimiento de los compromisos adquiridos en los procesos de desmovilización que tuvieron lugar en la década del 90, complejizando la construcción de procesos de reconciliación.

⁷² El SAT (Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo) advirtió en su momento sobre el riesgo que corría en su integridad y seguridad. El 12 de enero del 2005 tras un atentado en la finca, el señor Evelio Aguirre gravemente herido tiene que salir de la región y solo retorna hasta el año 2010.

La desmovilización del EPL y el comienzo de los proyectos productivos (1991-1996)

Antes de empezar a explicar cómo fue el proceso en la creación de lazos comunitarios entre desmovilizados del EPL y las comunidades receptoras es oportuno orientarse en qué escenario se presentaba esta experiencia, en especial los elementos relacionados con el conflicto armado y las situaciones políticas, económicas y sociales que estaban enfrentando las comunidades rurales del Cesar.

Durante la primera mitad de la década de 1990 las acciones referidas a combates, ataques, incursiones y hostigamientos por parte de la guerrilla son evidentes y se manifestaron con fuerza, como resultado de la intención del ELN de incidir en las administraciones locales a través de la implementación de la estrategia denominada «Campamentos de la Nueva Colombia», que consistía en secuestrar a las autoridades locales para que estas les rindieran cuentas sobre sus respectivas administraciones. Entre 1993 y 1997 un total de 111 funcionarios públicos locales (alcaldes, concejales, tesoreros, personeros, etc.) renunciaron a sus cargos alegando falta de garantías ante las amenazas que pesaban sobre muchos de ellos de parte del ELN. (CINEP/PPP, 2014, p. 287)

En esta época hablamos de comunidades rurales afectadas por los combates entre las fuerzas militares y la guerrilla, en especial con el ELN, además del accionar de esta en temas de secuestros, extorsiones y amenazas. En la década de 1990 se ven ante un escenario agrícola cambiante, una caída del número de hectáreas cosechadas en el departamento. De acuerdo con Gamarra, «en 1990 los agricultores del departamento cosechaban más de 265 mil hectáreas, doce años más tarde solo se cosechaban un poco más de la mitad de esas tierras (134.673 hectáreas)» (Gamarra, 2005, p. 56). Esto denota la preponderancia de un modelo agroindustrial respecto de la economía campesina, en 1990 los dos cultivos transitorios de la región (algodón y sorgo) mostraron una tendencia a la baja, mientras en el de palma de aceite asomaba una tendencia al aumento de manera sostenida (Barrera, 2014, p. 263).

No fue fácil empezar procesos de reinserción tanto para las comunidades receptoras como para los desmovilizados del EPL. No obstante, el proceso contó con el apoyo de diferentes sectores, muchos de los cuales lo hacían en el marco del programa de reinserción. La Universidad Popular del Cesar (UPC) elaboró y firmó un acuerdo para facilitar el ingreso a la universidad y adelantar estudios de pregrado; el SENA con

cursos de capacitación y formación laboral y agropecuaria, asignó profesionales en áreas específicas y prestó maquinarias para adelantar los trabajos en los proyectos agropecuarios⁷³.

Sin la intermediación de la fundación PROGRESAR⁷⁴, los programas educativos contemplados en el programa de reinserción no hubieran dado los efectos positivos que se generaron en la comunidad receptora. La estrategia se denominó Programa de Educación para la Convivencia Pacífica, y consistió en la provisión de una oferta educativa ampliamente incluyente, que permitió que más de 3.000 personas (tanto de la comunidad receptora como de la población excombatiente) obtuvieran el título de bachiller. En este proceso, la fundación PROGRESAR actuó como intermediador, y SOPRASAR asumió su liderazgo. Los programas académicos tuvieron un acento especial en educación para la paz y en proveer herramientas para la promoción de una convivencia pacífica⁷⁵.

Este énfasis significó un aporte en el proceso para la reconstrucción del tejido social, en el que los valores son el motor en la construcción de un proceso conjunto. El mecanismo de intermediación por parte de la fundación fue importante en la formación no solo de los desmovilizados del EPL, sino en la forma en la que se involucró a la comunidad al ver multiplicado el alcance logrado con el Programa de Educación para la Convivencia Pacífica, elemento importante en crear espacios de reconciliación con las comunidades receptoras.

Por su parte, gracias al mecanismo de formación y difusión fue posible la aceptación por parte de las comunidades receptoras, tal como fue el caso de La Mesa, corregimiento de Valledupar:

El trabajo que en La Mesa ha venido ejerciendo un grupo de líderes y que nos formamos de diferentes matices, incluyendo indígenas, ha logrado una convivencia diferente y una voluntad de la gente de no volver a la guerra. (Desmovilizado del EPL y miembro de EMPAGROC, entrevista 3)

73 Por otra parte, también se manifestó en su momento el acompañamiento de las alcaldías locales de Chiriguana, Becerril y Valledupar la Gobernación del Cesar, el Fondo ganadero del Cesar, el Banco Ganadero, la Caja de Crédito Agrario industrial y minero y el Banco Central Hipotecario (BCH).

74 La fundación PROGRESAR, surge como alternativa para facilitar la reinserción política, económica y social desde los desmovilizados del EPL.

75 «Para cambiar el término de reinserción por reintegración, que tiene unos cambios brutales, pero que lo que se necesita es la reinserción, no la reintegración, en ese proceso de reinserción, nos tocó un trabajo de socialización y un trabajo de reconstrucción de los intereses de la gente nuestra, de los que eran simplemente combatientes» (desmovilizado del EPL y miembro de SOPRASAR, 2014) (Entrevista 2).



La ausencia de acompañamiento técnico sometió a las experiencias a un alto grado de improvisación, obstaculizando su sostenibilidad y generando conflictos internos

Fue allí donde se valoró el trabajo de liderazgos femeninos de desmovilizadas, y se construyeron conjuntamente con la comunidad los cimientos de redes comunitarias que giraban en torno a temas de educación y prevención del reclutamiento de niñas y niños. Se realizó un proyecto con los niños, niñas y jóvenes de la escuela «Azúcar Buena», en el cual se involucraron diferentes instituciones con el propósito de sacarlos de la guerra⁷⁶.

Siguiendo con la formación de liderazgos, en el caso de Becerril, a través de los fondos de reinserción, se consiguió un acueducto interveredal que cubría en ese momento una necesidad colectiva de la comunidad. Además, el señor Evelio Aguirre, que es el único miembro que en la actualidad permanece al frente de la empresa Tres Estrellas, asume como coordinador de planes de retorno. Su capacidad de gestionar y mediar con las instituciones del Estado y la comunidad fue valorada en función a sus aportes de agenciar demandas de las comunidades, pero solo pudo despeñar este cargo durante un año por amenazas constantes contra su vida.

Durante esta etapa la mayoría de los desmovilizados del EPL fueron testigos de un cambio positivo en su transición a la legalidad, en términos de su contribución a la reconstrucción de su propio núcleo familiar y a un tejido social en sus comunidades receptoras. En este contexto, algunos lograron terminar sus estudios y otros realizaron estudios superiores, para fortalecer en algunos casos los liderazgos que habían adquirido dentro de la militancia, con el fin de ponerlos al servicio de las comunidades.

Aunque se dio un acompañamiento por parte del SENA y de la Universidad (UC), la ausencia de acompañamiento técnico constante sometió a las experiencias a un alto grado de improvisación, situación que instauró obstáculos de cara a su sostenibilidad y con ello conflictos y divisiones internas. Sin embargo, dentro de la mecánica del ensayo y el error se estaba aprendiendo y se daba la oportunidad para que las comunidades receptoras pudieran involucrarse, en especial en EMPAGROC y la empresa Tres Estrellas.

Entrada paramilitar, despojos y desplazamiento forzado 1996-2002

El proceso de reinserción de estos exmiembros del EPL estuvo en gran parte facilitado por la oferta institucional y los espacios de encuentro propiciados por las acciones de formación con sus comunidades receptoras. Es evidente que si bien estas dos subregiones del Cesar habían sido zonas de operación del EPL, no se evidenciaron procesos relevantes de rechazo hacia este proceso de reinserción. Al tiempo que se intentaban sortear toda clase de dificultades técnicas, los proyectos agropecuarios lograron recomponer los vínculos con las comunidades de estos tres municipios.

Sin embargo, con la incursión paramilitar se fracturó toda clase de proceso en las comunidades, obstaculizando el desarrollo de las iniciativas previamente descritas. En ese contexto, no hubo distinción entre desmovilizados del EPL y comunidades, todos eran una sola comunidad victimizada por la acción del paramilitarismo.

De modo determinante, el mecanismo de cambio de identidad de actores se desarrolla en esta etapa, en la medida en que los excombatientes del EPL pasaron de ser desmovilizados a definirse como víctimas. La presencia paramilitar ocasionó graves daños a las comunidades, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desapariciones, asesinatos, desplazamientos, violaciones sexuales, reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, lo que implicó también una grave fractura del tejido social de las comunidades. La experiencia rural de Cesar no fue ajena a tales violaciones: el paramilitarismo desarticuló un proyecto productivo y truncó el trabajo social que venían desarrollando los excombatientes del EPL con las comunidades. Muchos tuvieron que desplazarse y algunos no tuvieron otra opción que coexistir con las nuevas circunstancias en su territorio. De este modo, el mecanismo de atribución de amenaza colectiva motivó a las comunidades receptoras de la experiencia rural del Cesar a interactuar de una manera distinta con los excombatientes en proyección a una amenaza común personificada en los paramilitares. Absolutamente todos los integrantes de la experiencia rural del Cesar y sus familias fueron victimizados y sus procesos truncados.

Los procesos adelantados por SOPRASAR y Tres Estrellas fueron inmediatamente interrumpidos con la incursión de grupos paramilitares, debido a las amenazas constantes, los atentados y asesinatos contra sus miembros, lo cual ocasionó que, en última instancia, tuvieran que desplazarse. El 22 de septiembre de 1996 se da el primer desplazamiento colectivo de los miembros de SOPRASAR, de sus familias y

de todos los que habitan la finca en Chiriguaná⁷⁷, asesinan a seis de sus miembros y amenazan a la mayoría de los restantes⁷⁸.

Como caso particular, la tranquila vida de las familias campesinas del corregimiento de La Mesa se acabó el sábado 23 de septiembre del 1999, con la llegada del primer grupo paramilitar⁷⁹ al corregimiento. La Mesa fue el punto de partida del control de la región, desde allí comenzaron a pedirle dinero a los dueños de fincas, campesinos, comerciantes; se convirtió en todo un sometimiento paramilitar (Verdad Abierta, 2013). En este episodio el mecanismo de la represión surtió un efecto adverso para el proceso de reconciliación ya que truncó los avances que se estaban desarrollando en las comunidades.

La gente le tenía pánico a La Mesa. La Mesa era como la última lágrima. En La Mesa les tocó vivir con las normas que creó un paraestado, porque ellos allá no tenían nadie que los mandara, o sea allá no se metía policía ni nada. Ellos decían: «el sábado todo el mundo barre la plaza, el domingo las mujeres hacen esto...». O sea, la gente tenía que acatar las normas que ellos dijeran. Alias “39” fue un tipo muy terrible y en el 2001 hubo un desplazamiento masivo». (Residente de La Mesa)⁸⁰

Ante este panorama, dos mujeres del proceso de desmovilización del EPL, concretamente de EMPAGROC entablaron acciones de mediación, para persuadir a los paramilitares de los hostigamientos contra la población civil⁸¹. Según varios testimonios, las mujeres lograron «desarmar a los paramilitares con las palabras»⁸². La mediación de las mujeres se estableció como un medio de coexistencia de la comunidad con los paramilitares al no tener otra opción en un escenario de precaria presencia del Estado, cuyos representantes en el territorio eran permisivos con del paramilitarismo⁸³.

77 El frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte inició su actividad criminal en el Cesar, en una correría que los llevó a los municipios de Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Becerril y Agustín Codazzi, cometiendo homicidios, torturas, desapariciones forzadas, secuestro y hurtos. (Verdad Abierta, 2013).

78 Con motivo del primer desplazamiento en 1997, el señor José Manuel Gutiérrez Díaz se traslada a San Juan del Cesar, donde vivía su familia, allí montó una pequeña colmena pero los paramilitares lo asesinaron. Ángel Milquiades Loperena (Indígena Wiwa, tesorero de su organización indígena) fue asesinado cuando cumplía actividades de su organización y estaba convocando a una Asamblea indígena. Alirio Pérez Vivas fue desaparecido en Chiriguaná, Onil Antonio Polo y Ramiro Alberto Lope Velásquez fueron asesinados en el Predio Monterrubio, el día 8 de mayo de 2009. Luis Rodríguez Rincón, a raíz del último desplazamiento, se trasladó a trabajar a Maicao en La Guajira y allí fue asesinado.

79 Los paramilitares se organizaban en el Cesar de la mano de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, alias «Jorge 40». David Hernández Rojas, alias «39», un ex militar que se convirtió en el terror de los habitantes de Valledupar y sus corregimientos. Verdad Abierta, 2013.

80 Entrevista 5.

81 Dos mujeres líderes fueron desmovilizadas del EPL y miembros del proyecto agropecuario EMPAGROC. Una de ellas, la señora Yolima Castro fallece por causas naturales el 2010. Entrevista 6.

82 Entrevista 7.

83 Entrevista a Abimael Sánchez, coordinador de Acuerdos para la Verdad en el departamento del Cesar. Noviembre 28 de 2014, Entrevista 8..

La incursión de grupos ilegales autodefensas, eso fue lo que a nosotros nos desbandó por completo, acabó con nuestra empresa. El 20 de julio del 2002 entran los paramilitares y hay un desplazamiento masivo y cuyo retorno se da en 2004. Duramos 2 años «por fuera»... para retornar. Los «paras» ya estaban en negociaciones, la Secretaría de Agricultura del departamento, conjuntamente con acción social, «nos insiste» que producto de las negociaciones con ellos, ellos admiten que nosotros retornemos, retornar a un sitio donde todavía estaban ellos. (Desmovilizado EPL y miembro de EMPAGROC, 2014)⁸⁴

Desmovilización paramilitar y retornos

La comunidad hoy por hoy, el pueblo colombiano, tienen que volverse un sujeto activo de esas circunstancias, porque nosotros al final somos responsables si ese proceso se logra, o ese proceso fracasa⁸⁵. (Representante de la Empresa Tres Estrellas, 2014)

El Bloque Norte se desmovilizó en el Corregimiento de La Mesa en el año 2006⁸⁶, para esta época las afectaciones que dejó la incursión paramilitar con la aquiescencia del Estado podían verse claramente. Un panorama devastador, cuyo saldo consistió en comunidades completamente victimizadas y los proyectos agropecuarios de las tres empresas gravemente golpeados. Por un lado, los miembros de SOPRASAR habían sido asesinados y otros amenazados; los sobrevivientes, presionados por el temor, decidieron en el año 2009 vender el predio donde tenía lugar su proyecto, es decir, en Chiriguana. Por otro lado, en Becerril la empresa logró sostenerse gracias a la decisión tomada por el único miembro (de tres que habían empezado) que se mantenía en la empresa, con la decisión de retornar al predio en el año 2010 y retomar las labores productivas emprendidas antes de la incursión del paramilitarismo. En el caso EMPAGROC, finca de Las Marías, en el corregimiento de La Mesa, permanecían seis familias que siguen hasta la actualidad.

Ante este panorama, los miembros de estos proyectos productivos optaron por rescatar y defender aquello que habían logrado, antes de la incursión del paramilitarismo. Posteriormente, aprovechando el proceso de desmovilización

84 Entrevista 8

85 Entrevista realizada al señor Evelio Aguirre del proyecto Tres Esquinas. Noviembre 26 de 2015. Entrevista 9.

86 Desmovilización del Bloque Norte encabezado por Rodrigo Tovar con un número oficial de desmovilizados de 2544, en marzo 2006 en el corregimiento de la Mesa, municipio de Valledupar, Cesar. Ver en documento: Proceso de Paz con las autodefensas Informe Ejecutivo, Oficina Alto Comisionado para la Paz, Diciembre 2006.



Las acciones hacia la reconstrucción del tejido social estuvieron además acompañadas de proyectos de infraestructura y comunicación

de estos últimos, los miembros de estos proyectos productivos reactivaron sus liderazgos y desarrollaron acciones de difusión y agenciamiento con actores externos, principalmente con instituciones del Estado. Tales acciones se desplegaron con el propósito de reconstruir el tejido social que había roto el paramilitarismo, y esto solo fue posible con el trabajo conjunto en las comunidades y la constante interacción con las instituciones del Estado.

Las acciones hacia la reconstrucción del tejido social estuvieron además acompañadas de proyectos de infraestructura y comunicación, como la pavimentación de la carretera que va desde el corregimiento de La Mesa hasta Valledupar, configurando sin duda un logro de la comunidad. Asimismo, se alcanzó la ampliación del colegio y de su oferta académica.

Con el propósito de reconstruir el tejido social y alcanzar un escenario de convivencia pacífica, actualmente algunos miembros de los tres proyectos productivos de reinserción del EPL, personas de la academia y de la sociedad civil, están conformando una alternativa política denominada «Alianza Ciudadana Cesarense». Esta se ha propuesto como ejes: 1. La recuperación de la dignidad humana desde lo político, lo económico y lo social; 2. La búsqueda de la paz en medio del conflicto a partir de la propia experiencia y; 3. Derechos de las víctimas y la relación con la institucionalidad.

Los ejes de la propuesta son la consecuencia de sus propios procesos y aprendizajes, el hecho de que algunos hacen parte de la experiencia rural de Cesar, algunos sean académicos y exista participación activa de la comunidad local, indica que existe un nuevo intercambio de posturas y una construcción de nuevas relaciones. Desde sus trayectos en el conflicto armado buscan recuperar la dignidad humana desde todos sus niveles, y la discusión sobre los derechos de las víctimas y los problemas institucionales que existen para garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición permiten la consolidación de conocimientos prácticos proyectados a proveer a las comunidades herramientas exigibilidad de derechos.

Actualmente, EMPAGROC mantiene su proyecto productivo con seis familias, Tres Estrellas en Becerril siguió el proyecto con una persona y SOPRASAR no pudo continuar su proyecto agropecuario, seis de sus miembros fueron asesinados y total de 28 familias fueron desplazadas en dos oportunidades (1997 y 2009), el Estado aún no les reconoce su condición de víctimas y desplazados.

Sectores de la comunidad receptora transformaron su perspectiva y sus relaciones con este grupo de desmovilizados



Aprendizajes

La experiencia de proyectos agropecuarios del Cesar, constituye una evidencia que sustenta el concepto de reconciliación expuesto en esta investigación. El aspecto más revelador consiste en entender que la reconciliación entre personas desmovilizadas y comunidades receptoras puede ser un proceso dinámico y diferenciado en el tiempo. Asimismo, plantea la importancia que tienen las relaciones previas de la comunidad receptora con el grupo de personas desmovilizadas, como una variable que afecta la disposición de construir o reconstruir relaciones pacíficas.

Al igual que en la experiencia de Colectivos del Café, los desmovilizados del EPL que llegaron a Chiriguaná, Becerril y La Mesa (Valledupar) contaban con mayor empatía por parte de sus comunidades receptoras. Los lazos familiares y el bajo nivel de victimización, incidieron no solo en la decisión del lugar de reinserción, sino como factores que catalizaron la integración con la comunidad receptora y un proceso de construcción de relaciones de confianza y cooperación.

Se puede hablar de reconciliación en la medida en que sectores de la comunidad receptora, incluyendo la institucionalidad de estas tres localidades, transformaron su perspectiva y relaciones con este grupo de desmovilizados, a pesar de que la zona se encontraba fuertemente golpeada por otra guerrilla, el ELN, y que entre 1993 y 1997 un total de 111 funcionarios públicos locales tuvieron que renunciar a sus cargos por amenazas por parte de este grupo insurgente. Igualmente, se hizo observable el papel de varias instituciones gubernamentales en el acompañamiento al proceso de reinserción.

La voluntad política de quienes estaban gobernando las alcaldías locales de alguna forma fortalecía los espacios de encuentro entre desmovilizados y comunidades. Otro hecho que quizás incide a nivel departamental es que la guerrilla del EPL no afectó las finanzas de sectores representativos de la región. La presencia de desmovilizados en la forma de concebir y hacer la política dentro de la legalidad ayudó al proceso no solo de reinserción, sino de convivencia pacífica con la comunidad receptora.

El balance de la experiencia muestra avances importantes en las dimensiones social y política de la reconciliación, no obstante, tanto por la naturaleza del proceso de negociación y desmovilización del EPL en la época, como por la ausencia de víctimas directas dentro de la comunidad receptora, la reconciliación interpersonal no logró relevancia.

Mecanismos como la interacción, la difusión, la formación y la intermediación, sobresalieron en el primer episodio de la experiencia. Las actividades consideradas dentro del programa de reinserción, que también estaban abiertas para los habitantes de la comunidad receptora, propiciaron espacios de encuentro con los desmovilizados facilitando su disposición hacia el grupo de desmovilizados.

Dentro de estos se destacan los proyectos agropecuarios que fueron fuente de empleo para campesinos de la región y los procesos de formación adelantados por la Fundación Progresar.

De otro lado, la irrupción paramilitar no solo fracturó en sentido económico los trayectos que traían cada una de las empresas que hacen parte de los proyectos productivos del Cesar, también obstaculizó el camino que habían emprendido las comunidades con los desmovilizados del EPL, proyectos sociales y educativos. La incursión paramilitar marca una inflexión en la trayectoria de la experiencia, por una parte, de manera paradójica, acelera su proceso de integración difuminando las diferenciaciones bajo la identidad de comunidad víctima del paramilitarismo, por otro lado, amenaza la continuidad de los proyectos productivos y, por supuesto, las demás iniciativas de formación política.

Sin embargo, dentro de un espacio de violencia armada se activó el mecanismo de mediación y el liderazgo femenino específicamente en el caso de La Mesa (EMPAGROC), generando un espacio de coexistencia con la estructura paramilitar que actuaba en la zona. No obstante, se debe hacer la salvedad de que es una coexistencia basada en la coerción ejercida por el poder paramilitar.

Después del proceso de desmovilización paramilitar en el 2006, las comunidades receptoras de Becerril, Chiriguana y La Mesa han establecido un proceso de coexistencia con los excombatientes de dichas estructuras. Por otra parte, se reactivaron los mecanismos que los desmovilizados del EPL en su momento habían emprendido y que por el dominio paramilitar habían sido interrumpidos y victimizados, un ejemplo de ello, es la creación de nuevos actores, la activación de liderazgos, como la «Alianza Ciudadana Cesarense», una iniciativa de la sociedad civil que nace de diversas corrientes sociales de la cual hacen parte miembros de EMPAGROC y SOPRESAR; así como académicos y ciudadanos del común y que buscan, entre otros propósitos, reivindicar los derechos de las comunidades víctimas del conflicto armado.

Para varios de los miembros consultados en las comunidades de Becerril, Chiriguana y La Mesa, la reconciliación es posible solo si se encuentra acompañada

La reconciliación necesita
tiempo para crear confianzas
y para la construcción de lazos
comunitarios



de verdad, justicia y reparación. Se pide ante todo que las comunidades estén involucradas en el diseño e implementación de los procesos de DDR y en todo aquello que involucre acciones hacia la reconciliación. Esta última no debe ser un requisito, sino, como se ha señalado en esta investigación, un producto espontáneo del encuentro entre comunidades receptoras y excombatientes. La reconciliación desde esta perspectiva necesita tiempo para crear confianzas y para la construcción de lazos comunitarios. En realidad la reconciliación es un proceso de constante construcción.

Infograma 5

Proyectos agropecuarios Cesar

Empresa Comunitaria Agropecuaria del Cesar EMPAGROC

1993

Proyecto productivo bovino. Parte del Programa Nacional para la Reinserción. 18 desmovilizados del EPL participaron. Corregimiento La Mesa, Valledupar.

Empresa comunitaria de producción agropecuaria del Cesar SOPRASAR

1993-2009

Proyecto de producción agropecuaria. Municipio de Chiriguaná. 28 desmovilizados del EPL participaron. Tuvo vigencia hasta 2009.

Agropecuaria Tres Estrellas

1994

Experiencia empresarial sustentada en el trabajo con silos de maíz y en la elaboración de concentrados. Municipio de Beceril.

Desmovilización del EPL

Las estrategias contempladas en el programa de reinserción propiciaron una mejor disposición de los exmiembros del EPL y la consolidación de espacios de encuentro con las comunidades receptoras.

Incurción paramilitar

La población excombatiente y las comunidades receptoras fueron victimizadas, algunas despojadas de sus tierras. Los procesos de reinserción y reconciliación emprendidos se vieron fracturados.

Desmovilización del Bloque Norte – AUC

Con la desmovilización paramilitar la comunidad procuró retomar y reconstruir los avances que se habían alcanzado antes de los hechos victimizantes. Los liderazgos de exintegrantes del EPL en estos procesos fueron relevantes.

Episodios

Aspectos del contexto que condicionan a la experiencia, y que permitieron avances en términos de la Reconciliación

Factores de las experiencias que permitieron avances en términos de la Reconciliación

Mecanismos Ambientales

Conflicto armado

Estructura agraria

Pacto político con el EPL Programa de reinserción

Mecanismos Específicos

Intermediación (PROGRESAR)

Atribución de amenaza colectiva

Formación (Universidad Popular del Cesar / SENA)

Cambio de identidad

Mujeres desmovilizadas contribuyeron con la formación de redes comunitarias y lideraron acciones de mediación y formación

La activación de dichos mecanismos se tradujo en unos avances parciales en el proceso de la reconciliación.

En la experiencia rural del Cesar, el Programa de Educación de la Fundación Progresar, resultó ser muy útil para las comunidades receptoras en particular porque actuó de cara al fortalecimiento de la democracia y los liderazgos desde el nivel local.

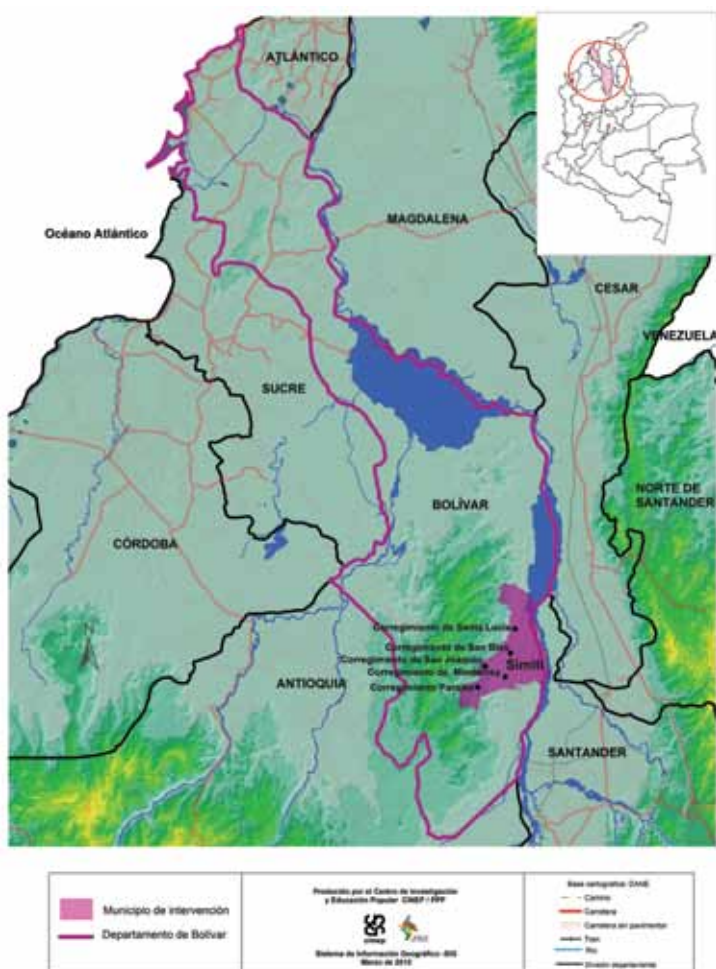
Convivencia pacífica entre exmiembros del EPL y comunidades receptoras.

Los mecanismos específicos usados permitieron construir una relación sólida entre los exmiembros del EPL y la comunidad receptora. Actualmente han emprendido un nuevo proceso denominado "Alianza Ciudadana Cesarence", que se establece como un espacio de participación política.

Experiencia del Comité Cívico del Sur de Bolívar

El Comité Cívico del Sur de Bolívar representa una comunidad de cinco corregimientos del municipio de Simití —San Blas, Monterrey, El Paraíso, San Joaquín y Santa Lucía—, afectados por la acción de todos los actores que han intervenido en el conflicto armado: guerrilla, paramilitares y fuerza pública.

Mapa 5
Experiencia del Comité Cívico del Sur de Bolívar



En medio de una evidente apatía y miedo por asumir roles de liderazgo, luego de la desmovilización del Bloque Central Bolívar algunos integrantes de las Juntas de Acción Comunal —JAC— del corregimiento de Monterrey crearon el Comité Cívico de Monterrey, que posteriormente se convertiría en el Comité Cívico del Sur de Bolívar, un autodenominado *proyecto piloto de paz*, cuya comprensión resulta fundamental en términos de reconciliación y convivencia pacífica en la región del Magdalena medio, especialmente en lo que respecta a excombatientes de las autodefensas⁸⁷.

La desmovilización de los paramilitares del Bloque Central Bolívar se realizó en el municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, el 31 de enero del 2006. A partir de dicha desmovilización se consolida la experiencia del Comité Cívico del Sur de Bolívar, que surge en el 2006 como un espacio de participación y encuentro de líderes y pobladores de los corregimientos de Monterrey, San Blas y El Paraíso, preocupados por la problemática de violencia y abandono del Estado en la zona. San Joaquín y Santa Lucía se unen posteriormente para trabajar juntos en acciones de recuperación, promoción del desarrollo y reconciliación de los pobladores y excombatientes⁸⁸. El comité se entiende como el lugar desde donde se construye un proyecto colectivo de vida campesina.

El objetivo de este apartado es recoger los aprendizajes de la experiencia del Comité Cívico como experiencia de la sociedad civil cuyas acciones han incidido en el proceso de reintegración de excombatientes del Bloque Central Bolívar, pero, fundamentalmente, en la promoción de la convivencia pacífica con lecciones importantes en términos de reconciliación interpersonal, social y política.

Contexto de la región

Para el estudio, se tomará el sur de Bolívar como parte de la subregión denominada Magdalena medio, ubicada entre los departamentos del Cesar, Bolívar, Santander y Antioquia, atravesada por el río Magdalena y emplazada en uno de los valles interandinos más ricos y estratégicos en Colombia, en términos económicos⁸⁹.

87 Fase de construcción participativa del proyecto piloto diagnóstico para contribuir al acceso de las víctimas de Monterrey (Simití – sur de Bolívar) a los procedimientos de restitución de tierras y reparación colectiva e individual diagnóstico realizado en conjunto por el PDPMM y la OIM en el marco de la construcción de una ruta de reparación integral. Convenio de cooperación interinstitucional no. DDR – 371, Abril 30, 2012.

88 Convenio N° DDR 448 DE 2014. CINEP/PPP – OIM, Informe de ejecución N° 02 presentado por CINEP/PPP a OIM, Anexo 1, Experiencia 1. Comité Cívico de Sur de Bolívar – (Zona rural-Población civil, víctimas y excombatientes del paramilitarismo). Mayo a Julio 2014.

89 Para apoyar esta unidad geográfica, se optará por la selección hecha por el Programa de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio –PDPMM–. También en Vilorio, Economía y conflicto en el Cono Sur del Departamento de Bolívar Documento de Trabajo sobre Economía Regional, Banco de la República, 2009.

El sur de Bolívar ha sido el escenario en el que confluyeron distintas formas de violencia durante varios años, que se enmarcaron en las dinámicas de la región del Magdalena medio. Por lo anterior, la experiencia rural del Comité Cívico del Sur de Bolívar se establecerá dentro este contexto regional, teniendo en cuenta su influencia geográfica, su proyección, y la composición de su población. El énfasis de la contextualización de la experiencia en cuestión estará dado en los corregimientos de San Blas, Monterrey, El Paraíso, San Joaquín y Santa Lucía, que pertenecen al municipio de Simití (ver Mapa 5) y que componen el Comité Cívico, como experiencia rural de trabajo.

Históricamente la población rural del sur del Bolívar ha estado, en condiciones de abandono estatal, con poca inversión social, ausencia de servicios públicos, precarias condiciones de salud y educación, pésimo estado de las vías de acceso⁹⁰ (que se ha traducido en condiciones poco idóneas para la comercialización de productos agrícolas), y múltiples afectaciones sociales como secuelas del conflicto armado.

En la Tabla 3 se observan los datos demográficos de los cinco corregimientos que constituyen el Comité, según el diagnóstico realizado en conjunto por el PDPMM y la OIM⁹¹, en el marco de la construcción de una ruta de reparación integral. Estos datos corresponden a la población registrada hasta el año 2013.


Tabla 3
Población por corregimientos - experiencia Sur de Bolívar⁹²

Corregimiento	Hombres	Mujeres	Total
Monterrey	769	681	1450
San Blas	306	250	556
El Paraíso	275	184	459
San Joaquín	313	269	582
Santa Lucía	148	112	260
Total	1811	1496	3307

90 En el año 2009 el sur de Bolívar contaba con apenas 60 kilómetros de vías pavimentadas, siendo la principal ruta Cerro de Burgos – Simití – Santa Rosa del Sur.

91 Fase de construcción participativa del proyecto piloto diagnóstico para contribuir al acceso de las víctimas de cinco corregimientos de Simití – Sur de Bolívar, a los procedimientos de restitución de tierras y reparación colectiva e individual. Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (CDPMM). Informe de avance, abril del 2012.

92 Fuente: PDPMM – OIM, 2013.



La dinámica poblacional determinada por la reciente colonización ha constituido una región social y culturalmente fragmentada, y no ha logrado consolidar simbiosis culturales entre paisas, santandereanos, costeños y cundiboyacenses

La dinámica poblacional muestra una región social y culturalmente fragmentada, «principalmente porque gran parte de la colonización es de carácter reciente y no ha logrado consolidar simbiosis culturales entre paisas, santandereanos, costeños y cundiboyacenses» (De Roux, 1999).

Aspectos económicos y usos del suelo

La pesca artesanal es fundamental, pues de ella depende en gran medida la alimentación y subsistencia de la mayoría de las familias asentadas a la orilla de los ríos que integran el ecosistema regional. Los cultivos de palma africana también están presentes en los corregimientos de San Blas y Monterrey, aspecto relacionado con una estrategia nacional para tener sembradas más de 420.000 hectáreas de esta planta en el país con el fin de fabricar biocombustibles (DNP, 2007). Sin embargo, en la región del sur de Bolívar sobresalen otros cultivos, tales como: arroz, maíz, sorgo, yuca y cacao.

Se pueden identificar dos focos económicos (íntimamente relacionados con la estructura de la propiedad de la tierra), que continúan generando conflictos ligados al accionar de los grupos armados. Por un lado, la extracción de oro en minas a cielo abierto en las inmediaciones del río Boque, y por el otro, el trabajo en plantaciones de palma africana. El mal manejo de los suelos ha repercutido en la pesca artesanal, fundamental para los pobladores de la zona, pues de ella depende en gran medida la alimentación y la subsistencia de la mayoría de las familias asentadas a la orilla de los ríos de la región. Esa labor se ha visto reducida y afectada debido al empleo de técnicas inadecuadas y por el deterioro y la contaminación de las cuencas hídricas (González, 2011), asuntos particularmente evidentes en el corregimiento de Monterrey. Se alerta un daño ambiental considerable, que repercute automáticamente en la vida cotidiana de las comunidades, el uso de las aguas y temas de salud, así como a nivel de subsistencia por la afectación de sus cultivos, y a nivel macro por el daño al ecosistema de la región.

Además, aunque la región del sur de Bolívar debería ser pensada como una subregión de carácter estratégico para el departamento y para el país, en función de sus riquezas petrolera, aurífera, agroforestal y ecológica; la explotación de recursos se ha hecho de manera ilegal en su gran mayoría, de allí que las regalías petroleras y su alcance resulten bastante limitados.

Sobre la estructura agraria, los usos del suelo y la propiedad de la tierra, los cinco corregimientos se caracterizan, principalmente, por la vocación agrícola para siembra de arroz, plátano, yuca, cacao, café, maíz y cítricos; predomina, entonces,

El narcotráfico se intensificó a finales de los 90. La respuesta institucional diseñada para mitigar el problema afectó gravemente la seguridad alimentaria de los pobladores



la agricultura de subsistencia y de consumo familiar. Por lo general, estas son explotaciones campesinas de pequeños productores propietarios, algunas de las cuales se dedican a la ganadería extensiva, como en el caso del corregimiento de Monterrey (González, 2011). En esta síntesis, sin embargo, es obligatorio hacer referencia a los cultivos de coca.

En la década de los 80 se dieron los primeros cultivos de esta planta, pero fue hasta principios de los 90 que se consolidaron, al igual que el procesamiento de base de coca. La cultura del narcotráfico copó la región, y llegó a su punto mayor a finales de los 90 y principios de la presente década. La respuesta institucional diseñada para mitigar el problema consistió en programas de erradicación manual y fumigaciones con glifosato, lo que afectó gravemente la seguridad alimentaria de los pobladores⁹³.

Conforme a lo señalado por Vilorio (2009), el origen de la mayoría de problemas que padece el sur de Bolívar se encuentra en el aislamiento geográfico en que ha permanecido esta subregión en los últimos tiempos. Este abandono estatal ha permitido que la economía de la guerra haya sumado a sus estrategias económicas la explotación minera ilegal, especialmente de oro, que «está expuesto a la depredación de los grupos irregulares y juega a favor del fortalecimiento de sus finanzas» (ACNUR, s.f.).

Sobre las acciones colectivas por la paz

La mayoría de las labores para la búsqueda de la paz se concentraron en los municipios del Magdalena Medio santandereano, principalmente en la ciudad de Barrancabermeja. Algunos ejemplos que ilustran estas iniciativas son, entre otras, la realizada en 1996, en plena arremetida paramilitar, con la movilización de más de 2.000 campesinos del sur de Bolívar al casco urbano de San Pablo, que buscó poner fin a la fumigación de los cicales campesinos y pedir planes de desarrollo alternativos, lo que se tradujo en la creación de un Comité de Defensa de los Derechos Humanos, así como una comisión que focalizaría la administración municipal y la inversión de los dineros públicos (Madariaga, 2006). También se encuentra la movilización realizada en octubre de 1997, donde alrededor de 150 campesinos del sur de Bolívar ocuparon la catedral de Cartagena para denunciar los abusos del paramilitarismo.

93 Sujeto colectivo y ruta de reparación integral Simití, sur de Bolívar. Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), 2013

Sin embargo, ante la continua arremetida paramilitar y el incumplimiento de los acuerdos pactados en la movilización del 1996, se organizó en 1998 «el éxodo campesino que duró 103 días, con más de diez mil campesinos, ocupando escuelas y albergues en Barrancabermeja, San Pablo y la Embajada de los Estados Unidos» (Loingsigh, 2002, p. 43, citado en Madariaga, 2006).

También resalta la marcha denominada «No al Despeje» en el 2000, donde unos diez mil campesinos de Santa Rosa y Simití marcharon en los cascos urbanos de sus localidades contra la posibilidad de que el Gobierno nacional autorizara el despeje de varios municipios de esa zona para que el ELN realizara su convención nacional.

La región, que ha tenido una fuerte tradición de movilización social desde décadas pasadas, sufrió una ola de violencia en contra de líderes sociales y sus organizaciones tras la entrada de grupos paramilitares. A pesar de la fractura del tejido social a causa de esta violencia, se hicieron visibles las acciones de la sociedad civil en toda la región para resistir a esta represión. Para la época, una columna de opinión Alfredo Molano sobre la situación advertía que en «la guerra sucia contra los movimientos sociales se presentaron asesinatos y desapariciones de los líderes organizadores de las movilizaciones. La respuesta de la población de la región fue también la movilización»⁹⁴ (El Espectador, julio 2012).

Institucionalidad, poder y dinámica de los actores armados

Los distintos municipios de la región tienen mayores relaciones de funcionalidad institucional y de servicios con Barrancabermeja —por su cercanía territorial— que con Cartagena, a pesar de ser su centro administrativo y político (González, 2011). Se debe acotar que Simití es un municipio de sexta categoría, con una incapacidad evidente a la hora de cofinanciar proyectos estratégicos en áreas fundamentales como salud, educación e infraestructura (Viloria, 2009). El porcentaje de personas con alguna necesidad básica insatisfecha (NBI) en Simití es del 62 %, lo cual es mucho más evidente en corregimientos como Santa Lucía y El Paraíso, que aún no cuentan los servicios de alumbrado eléctrico, agua potable o alcantarillado.

En el caso de los corregimientos reunidos en el Comité Cívico, los servicios y necesidades giran en torno a los municipios de Santa Rosa del Sur y Simití; lo propio sucede en el ámbito de la comercialización de productos y la participación en mesas comunales. En muchos casos, la institucionalidad se ha limitado a la presencia de la Policía Nacional; sin embargo, esto no garantiza la efectiva presencia estatal.

⁹⁴ De los cultivos ilegales a la minería ilegal en Simití, por Alfredo Molano: radiografía sobre la región del sur de Bolívar. En el diario El Espectador, julio 14 de 2012.


Los grupos armados ilegales han influido en la institucionalidad y las estructuras de poder que se han desarrollado en esta zona. Por una parte, el dominio ejercido por el ELN fue tal que, para el año 1997, se opusieron al proceso de elección de alcaldes y gobernadores en la región. Se hizo la difusión del mensaje, entre todos los candidatos, de abstenerse de participar en las elecciones; además, se secuestró por más de una semana a 68 dirigentes políticos de Simití, San Pablo y Santa Rosa del Sur, todos ellos anunciaron el retiro de sus aspiraciones electorales. También fueron obligados a renunciar candidatos en Puerto Wilches, Aguachica y San Martín (Madariaga, 2006). Esto contó con el amplio rechazo de la población civil y terminó por romper los lazos con las bases sociales que tenía la guerrilla. En el caso del paramilitarismo, el grado de afectación llegó a todos los niveles en lo político, social y económico, punto que se hará referencia más adelante.

La dinámica del conflicto armado ha estado marcada por la presencia y accionar constante de diferentes grupos armados, en un primer momento el Ejército de Liberación Nacional (ELN), posteriormente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), luego las distintas estructuras paramilitares, y de manera diferenciada la Fuerza Pública.

Hasta 1997, el ELN fue la guerrilla más activa en la región, en especial en San Blas y Monterrey. Prácticamente todo el comando central de este grupo pasó por Simití en los primeros años de la década de 1970 y desde 1983 se consolidó a partir de la extracción de recursos del sector petrolero, así como los sectores energéticos, mineros y agropecuarios. Por su parte, las Farc incursionaron militarmente, a partir de 1998, con el frente 24, sobre todo en la serranía de San Lucas y el valle del río Cimitarra, en jurisdicción de los municipios de San Pablo y Cantagallo (Oppdh DIH, 2005).

San Blas y Monterrey se convirtieron en lugares de permanencia y tránsito de estas guerrillas entre las décadas del 80 y del 90. El territorio les proporcionaba condiciones favorables para su financiación mediante el secuestro extorsivo y el control de los cultivos de coca ubicados en el piedemonte de la serranía de San Lucas de los municipios de San Pablo, Simití y Santa Rosa, en el sur de Bolívar.

Fue tan evidente el control territorial del ELN, que en 1999 propuso al gobierno del presidente Andrés Pastrana la ubicación de una «zona de encuentro» en el sur de este departamento para realizar una convención nacional en el marco de los diálogos de paz entre Gobierno nacional y esta guerrilla.



La incursión paramilitar condujo a una escalada de violencia, que implicó un aumento del desplazamiento forzado, los asesinatos y el temor generalizado entre los pobladores de la zona

El panorama cambió con la irrupción de las distintas estructuras paramilitares hacia 1996, comandadas por Carlos Castaño, las cuales se propusieron sacar al ELN de estos territorios. «En 1998 se produjo la primera incursión de un grupo de paramilitares bajo el mando de alias “Julián Bolívar” en el sitio conocido como Cerro de Burgos, a pocos minutos del casco urbano de Simití. Desde entonces, su expansión en el territorio y el incremento de golpes contundentes contra el ELN y la población civil señalada de ser colaboradora, condujo a una escalada de violencia, muerte, desplazamiento forzado y temor generalizado entre los pobladores de la zona»⁹⁵ (Unidad de Restitución, 2014).

En el 2000, alias «Julián Bolívar» y alias «Macaco» conformaron el Bloque Central Bolívar (BCB) y ubicaron sus bases en los corregimientos de San Blas y Monterrey. La intención fue controlar, en su totalidad, las plantaciones de coca y el negocio del procesamiento de cocaína. Una vez controlado el territorio, se generaron alianzas políticas y sociales que regularon la vida cotidiana de los pobladores. En este mismo año, según algunas fuentes, alias «Ernesto Báez» los apoyó con la conformación del Movimiento del No al Despeje, cuya movilización, así como el bloqueo de vías por pobladores, autoridades civiles y líderes sociales condujo al Gobierno nacional a suspender los diálogos de paz y a abortar la propuesta de la zona de encuentro en el sur de Bolívar.

Los paramilitares establecieron el monopolio sobre los insumos para el procesamiento de la base de coca y la gasolina y construyeron laboratorios para procesar compuestos como el permanganato de potasio. Esto les permitió controlar el precio de la base, y aunque introdujeron en la región variedades más productivas de coca, el precio se mantenía estable.

Simultáneamente, en Monterrey se inició el montaje de un proyecto productivo de palma africana, para lo que se creó la cooperativa Coproagrosur en el año 2000; este proyecto se tradujo en adquisición de predios y la organización administrativa de los mismos. Luego de la desmovilización del Bloque Central Bolívar, en 2006, alias «Julián Bolívar» y alias «Macaco», acogidos a la Ley de Justicia y Paz, entregaron bienes para la reparación de las víctimas, donde reconocieron que Coproagrosur y los predios en los que se sembró la palma africana fueron adquiridos cuando tuvieron presencia y control en la región. Actualmente, estos bienes están bajo el control y administración del Fondo de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, recolectará e investigará las solicitudes de restitución de predios de personas que declaren haber sido despojados por el Bloque Central Bolívar⁹⁶.

Actualmente, en la zona está presente el Bloque Magdalena Medio de las Farc, así como las compañías móviles Raúl Eduardo Mahecha y Gerardo Guevara. En los municipios de Bolívar, en particular, hace presencia el frente 24, además de la Compañía Móvil Salvador Díaz, de la misma guerrilla. Por su parte, los frentes Darío Ramírez Castro, Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN se encuentran presentes en el Magdalena medio de Cesar y Bolívar.

En la región también se ha evidenciado la presencia de múltiples bandas criminales como el ERPAC, la Oficina de Envigado, Los Paisas (que lograron la adhesión de las Águilas Negras), Los Rastrojos y Los Urabeños, los Gaitanistas o los de don Mario, los de don Cesar, los Botalones, y otros grupos armados ilegales⁹⁷. Su presencia no solo se da en las áreas rurales con cultivos ilícitos, también controlan el tráfico, las rutas y corredores estratégicos que comunican la región con la costa Caribe y la frontera con Venezuela. Además, controlan el microtráfico en las ciudades, siendo San Pablo y Barrancabermeja las más afectadas por su accionar⁹⁸.

El Comité Cívico del Sur de Bolívar: sujeto colectivo de paz y relación en procesos de DDR

Los episodios con los que se puede entender el trabajo del Comité Cívico y los mecanismos que han operado en su proceso son: i) Antecedentes del Comité Cívico como respuesta comunitaria ante un contexto de violencia; ii) Fortalecimiento y bases del encuentro entre comunidad receptora y excombatientes, y iii) Difusión y fortalecimiento del trabajo y los liderazgos comunitarios.

96 Unidad de Restitución de Tierras, "Arranca proceso de Restitución de Tierras en Simití y San Pablo": jornada que permite a la Unidad verificar cuáles solicitudes son viables para iniciar la investigación administrativa (de acuerdo con lo establecido por la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Las que inicien se someterán a un estudio riguroso que determinará si hubo hechos de despojo o abandono forzado, en qué fecha y bajo qué circunstancias sucedieron, cuáles grupos armados ilegales cometieron violaciones a los derechos humanos contra los reclamantes y terminará con la decisión de incluir o no, el predio reclamado en el Registro de Tierras. municipios de Bolívar, marzo 21 de 2014.

97 Centro de Memoria Histórica, Acuerdos de la Verdad, Informe DAV, Infografía de los nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama post- desmovilización de las AUC, Agosto 12 de 2014.

98 Verdad Abierta, Defensores de Derechos Humanos silenciados por las Bacrim, en www.verdadabierta.com, agosto 20 de 2014.



A partir de la desmovilización paramilitar, el Comité Cívico empezó un proceso propio de reconstrucción del tejido social

Para este trabajo, se tienen en cuenta los mecanismos que han favorecido o no el desarrollo de los procesos gestados entre el Comité Cívico y los excombatientes, contemplando su impacto en las comunidades receptoras. Vale aclarar que «los procesos son cadenas causales, secuencias y combinaciones de mecanismos frecuentemente recurrentes. Los procesos que merece la pena distinguir aquí implican combinaciones y secuencias de mecanismos recurrentes que operan de forma idéntica o de modo muy similar en toda una variedad de situaciones» (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, p. 29). Por lo anterior, los mecanismos se observan como un conjunto de cosas y eventos que permiten cambios en las relaciones.

Aunque no se pretende enfatizar en la descripción de los grados de victimización en las comunidades del sur de Bolívar que participan de la experiencia, sí resulta importante resaltar que estos tuvieron un fuerte impacto en el Comité Cívico y en la singularidad de la experiencia de cara a sus aportes, para comprender cómo se puede avanzar en un territorio en las dimensiones interpersonal, social y política de la reconciliación.

Antecedentes del Comité Cívico como respuesta comunitaria ante un contexto de violencia

La presencia las guerrillas del ELN y las Farc en el sur de Bolívar duró casi dos décadas, en las cuales el conflicto constante entre las fuerzas militares y la guerrilla causó daños a los pobladores de la región. «Se habla de una coexistencia relativamente pacífica de la guerrilla y la comunidad, que imponía sus normas de control social marginalmente ante los pobladores desde el ejercicio de la amenaza de la fuerza constante contra los pobladores. Los grupos guerrilleros tenían una relación más profunda con el territorio, lo que se debía, en parte, a que la mayoría de sus combatientes provenían de esa región, en tanto que los paramilitares que llegaron eran oriundos de Córdoba o Urabá. Además, la guerrilla se había insertado lentamente en el territorio y sus actividades se concentraban en las áreas rurales, mientras que los paramilitares llegaron a ocupar el territorio de manera súbita y actuaron directamente en el casco urbano de Monterrey y de poblaciones aledañas como Simití, San Pablo y Santa Rosa» (Navarro, 2011, p. 36).

El *modus operandi* del paramilitarismo ocasionó una fractura en el tejido social de las comunidades, por cuenta de años de represión, de constantes abusos a los derechos humanos y la transformación de las formas económicas de la región:

«[...] ese fue el punto en donde los paramilitares estaban más arraigados en el momento más cruel de su historia... nosotros antiguamente no podíamos

los de aquí ir hasta el Paraíso, ni los del Paraíso podían venir aquí porque esas fronteras invisibles no nos lo permitían...Entonces eso es lo que es el Comité Cívico, nos ha permitido abrirnos esos espacios a todas aquellas personas que no teníamos acceso antiguamente». (Testimonio de un habitante corregimiento de Santa Lucia y miembro del Comité Cívico, 2014)⁹⁹.

Los cinco corregimientos estuvieron confinados durante la época paramilitar. Los habitantes de San Blas cuentan cómo los comandantes del Ejército pedían permiso a los paramilitares para transitar por sus zonas de influencia o les prestaban apoyo militar y logístico para actuar conjuntamente en la lucha contrainsurgente. Sin embargo, las fronteras invisibles trazadas por la presencia de estos actores se rompieron a partir de la desmovilización paramilitar, acción que marca un antes y después para las comunidades del sur de Bolívar, donde el Bloque Central Bolívar dominó las esferas políticas, económicas y sociales de la zona hasta el año 2006¹⁰⁰.

En ese contexto, el mecanismo de la comunidad de lanzar señales permitió cambiar las relaciones entre los habitantes. Con el hecho de poder movilizarse de San Blas a Monterrey, o de Monterrey a San Blas, la comunidad sintió cómo se abrieron esos espacios que les habían sido privados en el marco del conflicto.

Otro ejemplo que muestra la importancia del mecanismo de lanzar señales es el hecho de haber vuelto a los hábitos comunes como la utilización de la moneda como forma de transacción económica, la comercialización de productos propios de la zona y el acomodarse a las dinámicas económicas propias de la legalidad. El dominio paramilitar llegó a su máxima expresión con la supresión del dinero. Las transacciones se desarrollaban a partir de vales de cambio firmados por los comandantes paramilitares. Con dichos vales se podía hacer mercado, comprar ropa y tomar en los bares, pues todos los sectores económicos estaban bajo el dominio paramilitar y podían, simplemente, descontar sobre el valor adeudado.

A partir de la desmovilización paramilitar, el Comité Cívico empieza un proceso propio de reconstrucción del tejido social, que pasó por restablecer el sentido de pertenencia hacia el territorio a través del mecanismo de la formación. Las iniciativas educativas en las comunidades receptoras, que involucraron a desmovilizados en

99 Entrevista 8.

100 Bloque Central Bolívar (sur de Bolívar). Este Bloque llegó a tener nueve sub-bloques que delinquieron en ocho departamentos, entre ellos Santander y Bolívar donde hubo hasta 11 frentes, Santander, Norte de Santander y Boyacá, y en 2001 se extendió a Risaralda y Caquetá. La desmovilización se llevó a cabo en "La Granja" ubicado en el corregimiento de Buena Vista, municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, en enero 31 de 2006, donde se desmovilizaron 2.519 personas. Cifras oficiales del Alto Comisionado para la Paz. Informe ejecutivo Proceso de paz con las Autodefensas, Diciembre 2006.

proceso de reintegración, sentaron bases sólidas para establecer una verdadera convivencia pacífica. Este proceso se fortaleció gracias a que el PDPMM acompañó en diversas capacitaciones, brindó orientación y promovió la generación de un lenguaje de comunicación.

Es así como el Comité Cívico del Sur de Bolívar se presenta como una expresión organizativa que hoy se reivindica como sujeto colectivo de paz¹⁰¹. «El Comité Cívico fue la plataforma para reactivar liderazgos y además su proceso social ha sido un blindaje contra los grupos armados ilegales». (Líder de Monterrey, 2014)¹⁰².

En la construcción de posibles escenarios de reconciliación, los corregimientos que componen el Comité Cívico han trabajado en la activación de liderazgos, en la construcción conjunta a partir de ideales colectivos, el empoderamiento de sus miembros como sujetos sociales y la consolidación de estrategias enfocadas a rechazar los escenarios de violencia, Para el Comité Cívico, la construcción y el fortalecimiento de la memoria colectiva han contribuido en el proceso de reivindicación de los derechos de la comunidad (importante para los criterios para reparación colectiva consagrados en Ley 1448 de 2011) y en la recuperación de los escenarios colectivos afectados, lo que aporta en la reconstrucción del tejido social:

«Somos comunidad víctima porque compartimos un pasado común, un periodo de violencia que no termina del todo y porque tenemos hoy la decisión de superar unidos, las causas de la violencia. Al reconocer los daños causados, queremos hacer memoria de lo que pasó y buscar justicia, para que no se vuelva a repetir la barbarie». (San Blas, integrante del Comité Cívico)¹⁰³.

Fortalecimiento y bases del encuentro entre comunidad receptora y excombatientes

La experiencia del Comité Cívico está basada en el *mecanismo de interacción*, primero, al interior Comité, lo que facilitó la creación de identidad del mismo y su consolidación como nuevo actor y sujeto político, y segundo, la interacción a nivel externo, que contribuye en la medida en que los lazos y redes con otros actores den una difusión más amplia de la experiencia, al gestionar oportunidades para

101 Sujeto colectivo y ruta de reparación integral Simití, sur de Bolívar. Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio -PDPMM- (2013).

102 Entrevista 2.

103 Entrevista 2.

su fortalecimiento y crear un puente con los excombatientes. Se resalta que en el mismo Comité los desmovilizados encontraron un espacio de orientación, además de un escenario de trabajo conjunto, creando un ambiente propicio para una reintegración en la comunidad.

Inicialmente, el Comité Cívico hizo invitaciones abiertas a reuniones todos los domingos en zonas como San Blas, Monterrey y El Paraíso, Los desmovilizados que asistieron encontraron en estos espacios varios argumentos que les permitieron contemplar la exploración de escenarios de convivencia. En entrevista con un desmovilizado del Bloque Central Bolívar,

«el proceso de aceptación propuesto por la comunidad dependía de la voluntad y el compromiso del desmovilizado, sin embargo, el compromiso de muchos excombatientes quedó en entredicho [...] digamos, una de las exigencias en el Comité Cívico, para acceder a estos proyectos que se estaban dando, era el compromiso, la asistencia. Firmamos asistencia y miramos. Pero no, no había compromiso de los participantes». (Testimonio de un desmovilizado del BCB)¹⁰⁴.

«[...] es muy verraco, la gente no olvida. El perdón y olvido, es una cosa de decir perdón y olvido, pero todo el mundo no está destinado a eso. Entonces, al principio fue muy difícil [...] era muy difícil de que llegara a integrarse» (testimonio de un desmovilizado del BCB)¹⁰⁵.

Así, el Comité Cívico, además de haber activado vínculos previos en sus corregimientos, también aportó en el proceso de reintegración de población desmovilizada al abrir espacios a los participantes. Esta iniciativa se instaura como un acto sincero hacia una construcción de una convivencia pacífica.

Después de la desmovilización del Bloque Central Bolívar, muchos excombatientes se quedaron en la zona. Sin embargo, la persistencia de escenarios de violencia y la presencia de actores armados en este contexto implicó la existencia de casos de desaparición y asesinato de algunos de ellos. De cientos de participantes de la ACR que estaban en un principio en la zona después del proceso de desmovilización solo cerca de 20 desmovilizados continúan allí. Esta situación se tradujo en que, con el tiempo, algunos acudieran al Comité, donde recibieron orientación.

104 Entrevista 4.

105 Entrevista 5.

Gracias al Comité Cívico se abre un espacio de interacción, se da la oportunidad de convivir de forma pacífica

Aquellos desmovilizados que seguían en la ilegalidad terminaron saliendo de los cinco corregimientos, por eso, para sí mismos, el Comité Cívico se convirtió en blindaje contra toda clase de grupos armados ilegales. Los restantes quedaron trabajando en diferentes proyectos (apoyados por la ACR o en coordinación con el Comité).

« [...] con los participantes se logró muy poco. Yo digo que muy poco [...] con los participantes llegar a, por ejemplo, al Paraíso fuimos como tres reuniones. En una reunión alcancé a convidar como dos que se animaron a ir, porque como en el Paraíso se causó mucho daño [...] las autodefensas nada más imagínese usted quemar dos veces ese caserío, quemarlo todo, se dio un daño absoluto ¿sí? Entonces el miedo de llegar allá, miedo a enfrentar, a dar la cara». (Testimonio de un desmovilizado del BCB)¹⁰⁶.

Además, el Comité Cívico le propuso a la ACR ejecutar un proyecto pensando en propiciar la vinculación de los participantes en escenarios de la comunidad. Para los desmovilizados que decidieron quedarse en la zona, el proceso reintegración en un principio tuvo sus dificultades. Haber estado en las filas paramilitares los acostumbró a las armas y comportamientos propios de combatientes, aspecto que no era fácil cambiar automáticamente para reintegrarse a la sociedad; además, llegar a comunidades receptoras que habían sido directamente victimizadas por ellos creó un ambiente incierto para la reconciliación. No obstante, gracias al Comité Cívico se abre un espacio de interacción, se da la oportunidad de convivir de forma pacífica solo en la medida en que los desmovilizados no volvieran a cometer actos delictivos.

Difusión y fortalecimiento del trabajo y los liderazgos comunitarios

El *mecanismo de difusión* ha sido clave para el reconocimiento externo sobre la experiencia de convivencia pacífica del Comité y ha dado herramientas para empezar a trabajar en procesos de reconciliación, entendiendo la difusión como «cualquier transferencia de información a través de cualquiera de las líneas de comunicación existentes» (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005).

En esta experiencia, el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) ha sido el motor y línea de acompañamiento constante para su proceso como mecanismo de intermediación y, además, es quien ha difundido la experiencia a nivel externo. El PDPMM



«en calidad de acompañante del proceso comunitario, reivindica la necesidad de atender los llamados de las víctimas, respetar sus espacios de decisión y apoyarles en el mejoramiento de sus condiciones de desarrollo humano sostenible, como garantías verificables de no repetición». (PDPMM, 2013).

«[EI] PDPMM nos acompañó, y nos dijo ¿qué piensan? Llegó la hora de organizarse, miren [...] Pues, nos mostró el camino para seguir porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros con más de 100 desmovilizados en la región?». (Habitante de San Joaquín y perteneciente al Comité Cívico, 2013)¹⁰⁷.

En este papel de intermediación, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio promueve el empoderamiento de la comunidad víctima del sur de Bolívar (en este caso, los cinco corregimientos ya mencionados), con el fin de apoyar su reconocimiento como sujeto colectivo de reparación, en el marco de la Ley 1448 de 2011 (PDPMM, 2013). Así, la reconciliación no solo es vista en la relación entre el desmovilizado y comunidad receptora, sino que también, en la medida que el Estado garantice lo que está consagrado en las leyes, se dará un ambiente más propicio y duradero de escenarios de reconciliación. Para llegar a este contexto de difusión, el Comité Cívico ha tenido que aprender de sus propias experiencias, manejarse en diversos procesos y episodios que los reivindican como un sujeto en la construcción de paz. Es importante aclarar que «sujeto colectivo de paz» surge como autodenominación propia del Comité Cívico, que se valora ampliamente, sobre todo, en escenarios en procesos de construcción de paz.

El liderazgo de las mujeres ha sido fortalecido gracias al mecanismo de interacción inspirado por el Comité:

«[...] no sé, yo a veces siento que no se reconoce el trabajo que se hace, que a veces opacamos las cosas que hacemos, pero sí, yo digo que desde las personas que entraron a orientarnos, que siempre ha habido la participación de la mujer ahí, mujeres con mucha valentía [...], siempre en todo el acompañamiento psicosocial siempre ha sido con mujeres». (Mujer de San Blas y parte del Comité Cívico, 2014)¹⁰⁸.

Existen mujeres que participan en el Comité Cívico, provenientes de cada corregimiento, que se apropian y trabajan dentro de su espacio (por ejemplo, la

107 Entrevista 6.

108 Entrevista 9.

presidenta de la junta de acción comunal de El Paraíso). Las mujeres aprendieron de sus propias experiencias de vida, sobrevivieron a situaciones de confinamiento y desplazamiento, y afrontaron diversas situaciones en las que fueron violados sus derechos. Lo anterior permite visibilizar que, pese a que existe una convivencia pacífica en la zona, el temor persiste en función del alto grado de victimización al que estuvieron sujetas las mujeres durante los períodos más críticos de la violencia.

Otra sugerencia que sale desde el mismo Comité Cívico es la de seguir trabajando en la reconstrucción del tejido social, y el enfoque de género puede ayudar a dimensionar mejor la tarea:

«La violencia contra la mujer durante el conflicto fue grave pero igual hay que educar para que esa violencia no se traslade dentro de la casa, y una cosa que encontramos es que primero hay una lógica de relacionamiento y de ejercicio del poder a las malas, a la fuerza, de posición, y eso se traduce a la casa, a la cotidianidad, a la relación con los hijos, con la mujer». (Miembro del Comité Cívico, Santa Lucía)¹⁰⁹.

La difusión como mecanismo no ha servido para visibilizar algunas experiencias derivadas de la organización de las mujeres. Las dificultades de desplazamiento por el mal estado de las vías, la poca disponibilidad de medios de movilización y los escasos recursos entorpecen la consolidación de espacios de encuentro entre mujeres. Adicionalmente, como zonas rurales, el trabajo se divide entre el campo y la familia, así que el tiempo para reunirse y organizarse se dificulta.

Sin embargo, existen liderazgos de mujeres que han contribuido al fortalecimiento del mismo Comité Cívico. En la experiencia fueron relatados casos positivos dirigidos a temas de reconstrucción del tejido social, fragmentado por el conflicto armado, cuyos efectos propiciaron una transformación social e inspiraron programas de educación. Un referente es la «Casa Juvenil» ubicada en el corregimiento de Monterrey, cuya directora, con persistencia y con el apoyo del Comité Cívico, ha tenido logros para los corregimientos que componen el Comité. La Casa Juvenil es un centro educativo que persigue dos objetivos: i) permitir acceso a la educación secundaria a los niños y jóvenes de la región, y ii) arrebatar niños a la guerra (prevención del reclutamiento).

Los estudiantes provienen de los cinco corregimientos y se les brinda alojamiento, alimentación y se les da la oportunidad de terminar su bachillerato con énfasis


en educación técnica agropecuaria. La razón: muchos niños y jóvenes no pueden continuar sus estudios cuando terminan su formación básica primaria, pues en sus corregimientos no existen centros de educación secundaria y los padres no cuentan con los recursos necesarios para llevarlos a otra zona y terminar con su bachillerato. Ya son seis promociones de bachilleres que se han graduado de esta institución desde su fundación hasta el presente. La alcaldía de Simití, la ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) y la ACR han contribuido al proyecto. La intención de emprender este tipo de iniciativas reside en mitigar, en particular, dos problemas que afectan actualmente a las comunidades: la drogadicción y explotación sexual de niños, niñas y jóvenes.

En este contexto, la activación de esta clase de mecanismos de difusión, y el hecho de que exista una aprobación social del trabajo del Comité Cívico, puede contribuir a la creación de otros mecanismos que ayuden a mitigar la amenaza de reclutamiento de menores. En este sentido, el impulso y el apoyo a esta clase de procesos son claves, tanto para garantizar la seguridad en la región como para propiciar escenarios la no repetición de hechos violentos, así como para crear bases sólidas para la reconciliación a largo plazo.

«[...] la guerra afecta a las mujeres de distintas formas, porque muchas somos en el sentido de ser la esposa o la madre de fulano, o vivir en carne propia algún hecho; pero también la afecta como sujeta político cuando ella es organizada cuando ella es miembro de una organización, cuando ella tiene una identidad política, cuando ella es militante o cuando ella es parte de un proyecto, de una propuesta alternativa o de un movimiento social como sujeta afectada». (Testimonio de una mujer habitante de San Blas)¹¹⁰.

Por otro lado, el Comité Cívico ha adelantado proyectos productivos para el propio consumo y sostenimiento (como los microhatos ganaderos), en los que han participado algunos desmovilizados, para la siembra de cultivos de arroz, cacao y maíz. Se logró, por gestión del mismo Comité Cívico, la adquisición de materiales y herramientas para trabajo en el campo, el mejoramiento en vías de comunicación, la adecuación de escuelas en los corregimientos, entre otras cosas. En Monterrey, hay un grupo de pequeños agricultores de arroz que desea incursionar en el mercado local, «arroz en grande para el municipio», hacia Santa Rosa, Simití y San Pablo. Pero debido al problema que ocasionó el aislamiento, con respecto a la infraestructura, no existen vías adecuadas para el tránsito de personas y víveres y urge la construcción de un puente entre estos municipios para poder comercializar con facilidad sus productos.

¹¹⁰ Entrevista 11.



El Comité Cívico emergió como una iniciativa desde la sociedad civil, que ha permitido una reconstrucción de las relaciones y una progresiva transformación de los efectos nocivos de la guerra.

«Pues el único cambio que hay es un poquito como la libertad desde la desmovilización es que ya uno puede tomar más decisiones porque antes ellos mandaban acá [...]. Y también la libertad en la economía». (Habitante de San Joaquín y miembro del Comité)¹¹¹.

Con el fin de consolidar su reclamación civilista de paz y obtener garantías de no repetición, la comunidad se organizó en asambleas de delegados de juntas de acción comunal por corregimientos, lo que promovió la participación directa de hombres y mujeres, sin distingo alguno, bajo la única condición de no pertenecer a grupos armados. Con posterioridad, se conformó un equipo técnico con 25 representantes que asumen las tareas de comunicación, organización logística y gestión de recursos. Cuando es preciso, la comunidad delega a personas que los representen y les impone tareas específicas, que deben informar a la Asamblea General. Hoy, unas 600 familias de cinco corregimientos rurales del municipio de Simití están organizadas de esa forma en el Comité Cívico del Sur de Bolívar (PDPMM, 2013). Es decir, esta interacción de participantes fortaleció simultáneamente varios espacios de colaboración civil.

Se debe destacar que en la propuesta de ruta de reparación integral, en desarrollo por el Comité Cívico con respecto a la Ley 1448, se hace una mirada diferencial y focalizada del trabajo como herramienta para una adecuada reparación y rehabilitación con respecto al tema de género y violencia sexual.

Aprendizajes

La violencia sistemática que sufrieron las comunidades del sur de Bolívar, tanto por la acción de grupos guerrilleros como paramilitares, generó relaciones de profunda desconfianza y estigmatización entre sus habitantes¹¹². Ante ese panorama, el trabajo del Comité Cívico emergió como una iniciativa desde la sociedad civil, que ha permitido una reconstrucción de las relaciones y una progresiva transformación de las estigmatizaciones y efectos nocivos de la guerra, sobre todo a partir de su declaración de neutralidad.

¹¹¹ Entrevista 12.

¹¹² El dominio del Bloque Central Bolívar se extendió por toda la región, Julián Bolívar, señaló en una audiencia libre que su base de operaciones se encontraba a escasas horas de la refinería más grande de Colombia y que todas las autoridades sabían lo que él hacía. El pueblo del Paraíso fue quemado tres veces y la única empresa que daba empleo, una constructora vial, fue desvertebrada por los paramilitares tras amenazar al gerente y desaparecer a Edgar Quiroga, representante de la comunidad. Verdad Abierta, agosto 11 de 2011, en www.verdadabierta.com

La creación de espacios de encuentro emanados de las acciones del Comité Cívico ha afectado positivamente la disposición de sus miembros a la construcción y reconstrucción de relaciones pacíficas



En la época de predominio paramilitar en la región, los corregimientos de San Blas y Monterrey, ubicados en las zonas bajas, eran considerados «paramilitares», los otros corregimientos, al estar ubicados en las tierras altas, eran considerados «guerrilleros». La comunicación era, literalmente, imposible; el hecho de movilizarse, es decir, subir o bajar de un corregimiento a otro sin un acompañante, era motivo de asesinato. Toda persona que poseía un arma o uniforme daba una señal de pertenecer a un determinado actor armado, y en el caso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no fue la excepción. Tal situación planteó un reto importante para el Comité Cívico de cara a la restauración de las relaciones entre los miembros de las comunidades de Monterrey, San Blas, El Paraíso, San Joaquín y Santa Lucía.

Se aclara que desde la década de los 80 ya existían las juntas de acción comunal (JAC) en los cinco corregimientos, pero con la llegada paramilitar, el Bloque Central Bolívar impuso sus bases militares, en especial en San Blas y Monterrey, lo que debilitó el accionar de las JAC e impidió toda clase de trabajo a nivel comunitario. Hoy, estas organizaciones comunitarias se reconocen como víctimas colectivas del conflicto, una población cerca de 3500 personas, donde la mayoría fueron víctimas de la violencia armada, que causó daños individuales y colectivos, morales y materiales.

El Comité Cívico se propuso la reconstrucción del tejido social desde el fortalecimiento de su acción colectiva, la formación de la identidad y la promoción de las relaciones entre diferentes actores, tanto de la comunidad (juntas de acción comunal, habitantes y líderes) como aquellos que se vincularon luego del proceso de desmovilización del Bloque Central Bolívar, es decir, los participantes del programa de la ACR, instituciones del Gobierno nacional y organizaciones no gubernamentales.

La creación de espacios de encuentro emanados de las acciones del Comité Cívico ha afectado positivamente la disposición de sus miembros a la construcción y reconstrucción de relaciones pacíficas, lo que permite vislumbrar algunos avances en la reconciliación interpersonal, social y política.

La experiencia del Comité Cívico refleja los desafíos y dificultades de los procesos de reconciliación que se desarrollan entre excombatientes y comunidades receptoras victimizadas. La lección que nos muestra este comité, en este sentido, tiene que ver con el reconocimiento y reivindicación de los derechos de las víctimas, así como la necesidad de consulta y participación de la comunidad receptora en los procesos de reintegración de excombatientes en sus territorios.

Ante la precariedad estatal que caracteriza territorios rurales como el sur de Bolívar, la fortaleza del tejido social y las organizaciones sociales que allí se han cimentado se constituyen en un aliado para la construcción de paz y la convivencia pacífica. El empoderamiento de iniciativas como esta por parte de la sociedad civil a través de mecanismos como la intermediación, la formación y la difusión es tal que logra establecer condiciones a las personas en proceso de reintegración y que deben acoger, so pena de no ser aceptados en la comunidad. A partir de esto, el Comité Cívico ha dado pasos hacia la reconciliación individual y social con el colectivo de desmovilizados de los paramilitares con quienes comparten el territorio.

En cuanto a la reconciliación política, entendida en su definición más amplia de construcción y reconstrucción de relaciones con la institucionalidad, el Comité Cívico y las comunidades que representa en el sur de Bolívar tienen el reto de restablecer su confianza en las autoridades, la cual se encuentra anidada en una historia de abandono y precariedad estatal, y también en la permisividad y omisión del Estado frente a la cadena de violencia que desataron los grupos paramilitares en la región. Los avances hacia el restablecimiento de estas relaciones pueden observarse en situaciones como la estación de policía de Monterrey, que es la única existente entre los cinco corregimientos. Para gran parte de estas comunidades del sur de Bolívar, la estación fue interpretada como una amenaza, en la medida que la cercanía entre las Fuerzas Armadas del Estado y las estructuras paramilitares persistía en la memoria de los habitantes, así como el miedo a potenciales ataques de la guerrilla que pudieran estar dirigidos a la estación. Ante esta situación, el Comité dialogó directamente con la Policía Nacional y le planteó estos temores. La respuesta de la institución se basó en el reconocimiento de la postura de la comunidad, y a partir de ahí se construyó una relación distinta, fundada en el respeto y la legalidad, en la que la comunidad no teme cuestionar el papel que tengan los uniformados con respecto a determinada situación.

Finalmente, es importante enunciar que el proceso organizativo y los avances en términos de convivencia pacífica y reconciliación se encuentran condicionados a algunos factores que pueden amenazar su sostenibilidad como la persistencia del conflicto armado, las disputas por la tierra, el modelo de desarrollo y los recursos naturales (traducidos en problemas de titulación de tierras, impactos de la economía de la palma aceitera y la minería ilegal) y la activación de nuevos actores, tales como bandas criminales relacionadas con la minería ilegal y narcotráfico. Por solo hacer referencia a uno de estos obstáculos, se puede enunciar el Séptimo Encuentro Regional para la Paz en Barrancabermeja, convocado por diversas organizaciones no gubernamentales para pensar el posconflicto en el país. Allí se mencionó el problema de varias personas que viven en esos cinco corregimientos

con carencia de títulos de propiedad. Sus tierras están protegidas por la Ley 2ª de 1959, que determina que están sobre un territorio considerado reserva forestal y no debe ser intervenido por seres humanos. «Al no tener un título eso nos dificulta acceder a un crédito. Los bancos consideran que no hay una garantía para que nos preste». Sin inversión es muy difícil garantizar la paz en las regiones». (Verdad Abierta, 2014).

En esta experiencia, se identifica claramente una preocupación en torno a este tema:

«En Simití existen unos predios de cerca de 1600 hectáreas de palma, que se apropió el Bloque Central Bolívar en la época paramilitar adquiridos con dinero del narcotráfico y a través del despojo a sus dueños, donde se creó una cooperativa, 92 de sus 100 miembros eran combatientes paramilitares. En 2011, como medidas de reparación y que contempla la Ley de Víctimas 1448, la Oficina de Acción Social que oficiaba como directora del Fondo de Reparación, pidió al magistrado de justicia y paz la entrega de las tierras en fiducia civil, lo que permitió desde entonces el traslado del dominio y del proyecto productivo — Coproagrosur—, a favor de la comunidad del Comité Cívico bajo la condición de construir una ruta de reparación colectiva». (PDPMM, 2013).

Esto ha sido motivo de conflicto, pues alias «Julián Bolívar», de forma ilegal a través de terceros, ha intentado acceder a este predio. Esto puede poner en riesgo tanto a las comunidades como al proceso de reintegración de los desmovilizados, de los cuales cerca de 17 todavía trabajan en Coproagrosur. Actualmente, Fundepalma es quien administra este terreno por encargo del mismo el Fondo de Reparaciones.

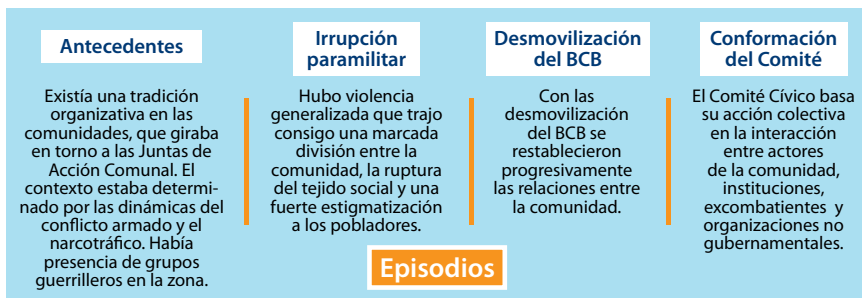
Es oportuno aclarar que las amenazas a las que se hace referencia son llamados de atención a la institucionalidad nacional, a la empresa privada y a los sectores políticos, sociales y económicos para no dejar solo el proceso. Por ello, al hablar en términos de reconciliación deben existir mínimos que propicien espacios para su desarrollo, así como compromisos entre las partes para el establecimiento de un real y efectivo Estado Social de Derecho, además de la garantía del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en comunidades victimizadas.

Infograma 6

Comité Cívico Sur de Bolívar

2006

Es un espacio de participación y encuentro de líderes y pobladores de los corregimientos de Monterrey, San Blas, El Paraíso, San Joaquín y Santa Lucía, enfocado en emprender acciones de recuperación, promoción del desarrollo y reconciliación entre los pobladores y excombatientes. El Comité se entiende como el lugar desde donde se construye un proyecto colectivo de vida campesina.



Aspectos del contexto que condicionan a la experiencia y que permitieron avances en términos de la Reconciliación

Mecanismos Ambientales

Estos mecanismos han propiciado los avances que ha tenido la experiencia en términos de la reconciliación.

Estos mecanismos han entorpecido el funcionamiento de la experiencia tanto en términos de la sostenibilidad económica de los proyectos productivos como en la existencia de garantías de seguridad propicias para excombatientes y comunidades.

Fortaleza del tejido social

Política de reintegración

Conflicto armado

Debilidad institucional

Estructura agraria

Factores de las experiencias que permitieron avances en términos de la Reconciliación

Mecanismos Específicos

Difusión (PDPMM)

Intermediación (PDPMM / ACR /

Formación (PDPMM)

Interacción

La activación de dichos mecanismos se tradujo en unos avances parciales en el proceso de la reconciliación.

Existe una mayor disposición entre comunidades receptoras y exintegrantes de las AUC hacia la (re)construcción de relaciones pacíficas vislumbrando algunos avances en la reconciliación interpersonal, social y política.

Convivencia pacífica, fortalecimiento del tejido social y formación de una identidad colectiva.

El Comité es una experiencia que muestra el potencial empoderamiento de la sociedad civil y el papel activo que puede desempeñar en escenarios de DDR.

Capítulo 4.

Aprendizajes: claves para un análisis comprensivo de las experiencias de reconciliación y reintegración



Las cuatro experiencias expuestas anteriormente son una muestra de las iniciativas que desde los años 90 vienen dándose en diferentes zonas rurales y urbanas del país, las cuales dan cuenta de la manera como las comunidades receptoras y los colectivos de excombatientes que se reintegran en la sociedad abordan el reto de compartir el territorio y construir o reconstruir sus relaciones.

Si bien estas experiencias se han dado en marcos históricos, jurídicos y geográficos muy diversos que podrían obstaculizar la intención de contrastarlas, es posible detectar a través de una mirada comprensiva más que comparativa aquellos que han facilitado o no sus acciones hacia procesos de reconciliación. Es más, estas diferencias serán aprovechadas de cara a la comprensión de los mecanismos ambientales que las han determinado, tal como se verá más adelante en este capítulo.

Los procesos de reconciliación que se identifican en cada una de las experiencias nos muestran una especie de fotografía de las relaciones entre comunidades receptoras y excombatientes con respecto a la construcción o reconstrucción de sus vínculos y la recomposición del tejido social. El contraste de estas experiencias parece mostrar retos muy diferentes entre las que parten de la reconstrucción de relaciones (caso de sur de Bolívar) y aquellas que buscan construirlas (caso de Colectivos del Café), lo cual se explica por las relaciones precedentes entre excombatientes y comunidades receptoras, que pueden estar marcadas por factores como el grado de victimización y la empatía hacia el colectivo de excombatientes y sus propósitos.

Por otra parte, encontramos que en el caso del Cesar la reconciliación de exmiembros del EPL con su comunidad receptora tuvo diferentes alcances en los distintos episodios: coexistencia, convivencia pacífica y reconciliación. Este aspecto revela que en una misma comunidad receptora la reconciliación puede tener variaciones a través del tiempo, lo cual ocurre por los cambios en los mecanismos que allí interactúan.

Encontramos también que un grupo de excombatientes en proceso de reintegración establece en un mismo momento alcances diferenciados de la reconciliación con los diversos actores de la comunidad receptora. Esto se aprecia, por ejemplo, en el caso de Cali, donde los integrantes de la empresa Ganchos y Amarras han restablecido las relaciones con un sector del empresariado, pero se encuentran en una situación de mera coexistencia en sus barrios de residencia, o en el caso del Comité Cívico, que es una experiencia en la que de manera simultánea se dan avances en las tres dimensiones de la reconciliación: interpersonal, social y política.

Lo anterior conduce a que la reconciliación no puede ser entendida ni como un proceso lineal ni como una totalidad, pues, tal como se señaló en el primer capítulo, es *dinámica, parcial y espontánea*. Asimismo, la reconciliación como proceso y como meta sugiere una comprensión compleja que obedece al juego de interacciones entre mecanismos ambientales y específicos de la acción colectiva, los cuales afectan las variables de **espacios de encuentro** y **disposición**. Tal afectación conduce a la recepción de **argumentos**, lo cual puede generar un **cambio de posturas**, paso que es una condición *sine qua non* hacia la reconciliación (ver modelo analítico expuesto en el capítulo 1).

Los mecanismos potencian o frenan, directa o indirectamente, el proceso de construcción y reconstrucción de relaciones no violentas y de confianza entre excombatientes y comunidades receptoras. Los mecanismos identificados en las cuatro experiencias se presentan como un conjunto de acciones recurrentes y transformadoras que han emergido desde el contexto de cada experiencia (mecanismos ambientales) o como resultado de una interacción que se origina dentro de ella (mecanismos específicos). A continuación se expone cómo cada uno de ellos puede ayudar u obstaculizar acciones hacia la reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras.

¿Cómo funcionan los mecanismos de cara a la reconciliación?


En las experiencias de Cali, Pereira, Cesar y sur de Bolívar, acciones como la intermediación, la difusión, la mediación y el cambio de identidad¹¹³ constituyeron mecanismos específicos muy recurrentes. La actuación independiente o combinada de dichos mecanismos logró sentar las bases para procesos de construcción o reconstrucción de relaciones, es decir, de reconciliación, entre comunidades receptoras y excombatientes.

En algunas de las experiencias se fomentó además la disposición de los actores y la generación y sostenimiento de espacios de encuentro; asimismo, se cimentaron argumentos que fueron acogidos por distintos sectores sociales. Todo lo anterior no solo permitió el fortalecimiento de las experiencias en sí mismas, sino también procesos de reconciliación entre sectores de las comunidades receptoras y excombatientes en sus dimensiones interpersonal, social y política. La siguiente tabla enuncia los mecanismos que inciden en la creación de espacios de encuentro, la disposición y la generación o influencia en el cambio de posturas, modelo referenciado anteriormente. De esta manera, a partir de las experiencias analizadas se observa que un mecanismo puede incidir en una o más variables del modelo.

Tabla 4
Mecanismos aplicados al modelo analítico

Espacio de encuentro	Disposición	Generación o influencia en cambio de posturas
<ul style="list-style-type: none"> • Intermediación • Mediación • Apropiación social 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediación • Difusión 	<ul style="list-style-type: none"> • Difusión • Lanzar señales • Cambio de identidad

¹¹³ Ver en el capítulo 1 la definición de los mecanismos específicos.



Los actores intermediadores resultan clave en las experiencias porque proporcionan recursos físicos, económicos, cognitivos o de relaciones

Los espacios de encuentro¹¹⁴

Respecto a la variable de espacio de encuentro se observa que esta se ha visto afectada por mecanismos como los de intermediación, mediación y apropiación social. En primer lugar, el mecanismo de intermediación ha sido desarrollado por distintos actores clave de los territorios tanto en el surgimiento de las experiencias como en el sostenimiento de las mismas; y ha sido activado por actores externos a las experiencias, como por ejemplo el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en el caso del Comité Cívico o la Fundación Carvajal en el caso de Ganchos y Amarras, quienes a través de acciones concretas fomentaron la coordinación y convergencia de actores e intereses diversos.

Los actores intermediadores resultan clave en las experiencias porque proporcionan recursos físicos, económicos, cognitivos o de relaciones, que potencian la acción colectiva y su incidencia en la reconciliación, ya sea en una dimensión de tipo individual, social o política. La acción de intermediación de estos confluó en la generación de espacios de encuentro, como, por ejemplo, reuniones de trabajo en la empresa o encuentros de pobladores.

La labor de intermediación tiene que ver menos con la naturaleza del actor que con el rol que desempeña. En las experiencias observadas, el mecanismo de intermediación lo pudo desarrollar tanto una organización de la sociedad civil o de excombatientes como una empresa privada o una institución del Gobierno: el PDPMM es una organización de la sociedad civil, la Fundación Carvajal, una entidad privada de origen empresarial y la Fundación Progresar, una ONG de excombatientes del EPL. En todos los casos, estos actores facilitaron la creación y el fortalecimiento de la experiencia y la confluencia de esta hacia espacios de encuentro que, de manera intencionada o no, permitían una interacción constructiva entre excombatientes, comunidades receptoras y, en el caso del Comité Cívico, víctimas.

Si bien muchos de los espacios de encuentro y las metodologías propiciadas por los intermediarios no se crearon con el fin de reconciliar a sus miembros, la

¹¹⁴ Los espacios de encuentro pueden ser de carácter físico o inmaterial. Los espacios físicos son observables y están mediados por la interacción presencial de los actores que confluyen en estos. En cambio, los espacios inmateriales son corredores del lenguaje, la comunicación y lo simbólico. Como ejemplo de espacios físicos de encuentro hallados en las experiencias están las asambleas comunitarias, las jornadas de capacitación, la planeación participativa y de agendas locales, así como actividades deportivas, culturales, económicas y sociales. Por su parte, los contenidos educativos en las campañas de sensibilización y los medios de comunicación comunitarios, que promueven una imagen positiva de las comunidades receptoras o excombatientes, pueden ser ejemplos de los espacios inmateriales de encuentro.

La mediación actúa directamente en los espacios, ya sean concretos o inmateriales, y permite un diálogo entre los actores que confluyen en ellos



exposición a los mutuos argumentos y la frecuencia de encuentro con los otros ha tenido relevancia en la transformación de las posturas entre las comunidades receptoras y los excombatientes¹¹⁵.

El uso del mecanismo de intermediación ha sido transversal a las experiencias y ha estado ligado al mecanismo de **formación**. Algunos de los actores que han intermediado en las experiencias han facilitado ejercicios de formación técnica y política, los cuales han incidido en el surgimiento de las experiencias y su sostenimiento. Igualmente, la intermediación de actores de la sociedad civil ha estado fuertemente acompañada de la activación indirecta del mecanismo de **difusión**, que ha fortalecido los espacios de encuentro (al invitar a nuevos actores a participar del espacio) y ha fomentado una apertura y propagación de la experiencia, que al tiempo que refuerza su identidad en aspectos como un «sujeto colectivo de paz» o un modelo de «reintegración exitosa», promueve un mayor compromiso por parte de sus miembros y el cambio hacia posturas más proclives para la reconciliación.

En segundo lugar, para las experiencias de Ganchos y Amarras, en Cali, y Empresa Rural del Cesar, el mecanismo de la **mediación** (entendido como la intervención de un tercero en la resolución de un conflicto o disputa) ha sido crucial para su propio sostenimiento, es decir, para la permanencia de espacios de encuentro concretos.

En el caso del Cesar, el mecanismo de mediación fue activado por mujeres que, en el episodio de irrupción de los paramilitares, interceden ante estos para disuadirlos de agredir a la comunidad. Este mecanismo de mediación promueve a su vez un espacio de encuentro que deriva en una coexistencia de la comunidad receptora, exmiembros del EPL y los paramilitares.

La mediación actúa directamente en los espacios, ya sean concretos o inmateriales, y permite un diálogo entre los actores que confluyen en ellos. Por ejemplo, al interior de la experiencia en Cali se ha activado este mecanismo, lo cual ha influenciado positivamente la construcción de confianza entre excombatientes. Igualmente, este mecanismo ha sido útil en el proceso de establecimiento de relaciones comerciales (espacio inmaterial) que ha promovido la inclusión de nuevos actores que apoyan la empresa.

115 Enzo Nussio y Juan Esteban Ugarriza, en su investigación basada en experimentos sociales sobre reconciliación política, destacan la importancia de ejercicios de deliberación con reglas democráticas, para la transformación de actitudes e interpretaciones hacia la reconciliación. La experiencia de interacción y exposición a los mutuos argumentos puede contribuir a la transformación de actitudes más benévolas y empáticas entre diferentes actores, incluidas víctimas y excombatientes.

Finalmente, se encuentra el mecanismo de **apropiación social**, identificado durante la trayectoria de la experiencia del sur de Bolívar, que a partir del fomento del sentido de pertenencia permitió a la comunidad del Comité Cívico del Sur de Bolívar empoderarse. En este caso se establecieron vínculos que, a través de asambleas comunitarias, jornadas de capacitación, planeación participativa y de agendas locales, así como actividades deportivas, culturales, económicas y sociales, determinaron la construcción de identidades compartidas. Los anteriores pueden constituirse como ejemplos de espacios físicos de encuentro que permiten intercambiar interpretaciones y argumentos entre comunidades receptoras y excombatientes. De igual forma, los contenidos educativos difundidos en las campañas de sensibilización y en los medios de comunicación comunitarios son ejemplos que promueven una imagen positiva de las comunidades receptoras y los excombatientes y que legitiman la acción colectiva.

La disposición¹¹⁶

Frente a la variable de disposición que surge del modelo de análisis propuesto, se concluye que los mecanismos que se han activado directamente en ella son el de **mediación** y el de **difusión**. Estos han logrado influir en la disposición de los distintos actores involucrados en las experiencias de manera directa o indirecta. Asimismo, han sido los mecanismos más relevantes en la promoción de la disposición de sectores de las comunidades receptoras que antes no estaban en contacto con procesos de reconciliación o convivencia pacífica entre excombatientes y las comunidades de las que hacen parte.

La **mediación** ha sido ejercida por distintos actores (representados en su mayoría por mujeres) que han desempeñado roles mediadores útiles en la promoción del diálogo como una solución a los conflictos que han surgido al interior y exterior de las experiencias. En el caso de Cali se ha llevado a cabo al interior de la experiencia y ha conducido al aumento de la disposición de escucha del otro, lo que ha incidido en la decisión de una construcción de confianza entre excombatientes de distintos grupos armados. Esto, eventualmente, ha generado un cambio de posturas frente al otro y ha conducido a lo que se identifica como una reconciliación al interior de Ganchos y Amarras.

Del mismo modo, este mecanismo ha sido útil en el proceso de establecimiento de relaciones comerciales que han logrado incluir nuevos actores dispuestos a hablar y a escuchar sobre cómo se pueden apoyar procesos de reintegración en Cali. La mediación de los conflictos que ha resultado en una resolución pacífica de los

¹¹⁶ Ver en el capítulo 1 la definición de disposición.

mismos se ha configurado como un argumento al interior de la experiencia para la construcción de confianza entre los actores involucrados.

El mecanismo de **difusión** afectó directamente los procesos de reconocimiento externo de tres de las cuatro experiencias (Cali, Pereira, sur de Bolívar), logrando así que en cada una se haya reconstruido un imaginario positivo del otro, específicamente entre comunidades receptoras y excombatientes.

Las experiencias han contado con la participación de actores cercanos que, a partir de este proceso de difusión, han fortalecido sus objetivos económicos o políticos. Los estudiantes en Pereira y la Fundación Carvajal en Cali han difundido positivamente la experiencia de los excombatientes en sus procesos de reinserción y reintegración. Esta difusión positiva de los procesos ha permitido que otros enclaves sociales se acerquen a la experiencia y se permitan conocer más a fondo sus contextos. De esa manera, la disposición de los implicados ha aumentado debido a la recepción de argumentos que se han generado en los espacios de encuentro. En los casos de Cali y Pereira, dicha disposición ha estado orientada a un cambio de postura referente a los excombatientes.

En el caso del sur de Bolívar, este mecanismo ha sido clave principalmente para el reconocimiento, por parte de otros actores locales y nacionales, sobre la incidencia y el proceso que se ha vivido a través de la experiencia del Comité Cívico. Esto ha permitido un acercamiento y un interés por conocer las metodologías y herramientas surgidas desde esta experiencia que han permitido trabajar en procesos de reconciliación. Este acercamiento e interés puede ser provechoso para lograr la disposición por parte de otros actores involucrados o no en procesos de convivencia pacífica y reconciliación.

Cambio de posturas

Se ha identificado que algunos de los mecanismos que generan o influyen en el cambio de posturas son los de **difusión, lanzar señales y cambio de identidad**. Por medio de su activación se han logrado construir argumentos que inciden directamente en un cambio de posturas frente al otro, lo que los hace ser mecanismos relevantes para el proceso de reconciliación.

El mecanismo de **difusión** ha permitido, principalmente a los excombatientes, transformar la percepción sobre aquellos actores que pueden intermediar para facilitar y mejorar el proceso de reintegración. En el sur de Bolívar, por ejemplo, a partir de la experiencia del Comité Cívico, las comunidades encontraron espacios

de participación en las asambleas de delegados de juntas de acción comunal por corregimientos, con la única condición de no pertenecer a grupos armados. Así mismo, a través del proyecto Alianza Ciudadana Cesarense, en el Cesar se espera incluir y recibir el apoyo de otros sectores de la comunidad que se sientan identificados con sus objetivos principales. Este tipo de espacios permiten la confluencia de intereses de las comunidades en su conjunto, indistintamente de si son o no desmovilizados.

El mecanismo de **cambio de identidad**, por su parte, influyó directamente en las experiencias referentes a excombatientes del EPL en Pereira y Cesar. Los miembros de las experiencias que se desmovilizaron del EPL recurrieron a la activación de este para cambiar su condición de desmovilizados y así lograr integrarse en sus comunidades receptoras. Es importante señalar que, si bien este mecanismo ha sido activado en primera instancia por los desmovilizados, ha requerido que confluyan con las comunidades intereses que faciliten ese tránsito hacia una nueva identidad que les permita a estos dos sectores de la sociedad construir relaciones de convivencia pacífica.

En el caso del Cesar, se dio una transición desde la condición de desmovilizados a la condición de víctimas de la incursión paramilitar. Dicha transición permitió una integración con la comunidad receptora, que también fue víctima de la entrada de los grupos paramilitares. Por su parte, para los excombatientes de Pereira el cambio se dio gracias a la concepción temporal de la identidad de desmovilizados y al progresivo reconocimiento como ciudadanos que adquirieron en algunos sectores de la sociedad. En ambos casos, a partir de estos cambios de identidad se han consolidado relaciones de convivencia pacífica y reconciliación con la comunidad receptora, ya que se han generado argumentos creíbles que permiten el cambio de posturas.

En las experiencias recientes de desmovilización, este mecanismo no ha sido identificado principalmente por dos razones: en primer lugar, en los contextos de violencia urbana latente, los excombatientes han tomado la opción por el anonimato, ya que les permite rehacer sus vidas en la legalidad sin hacer pública su condición de desmovilizados debido a los riesgos que esto representa; en segundo lugar, porque, en comunidades empoderadas y con fuerte tejido social, el tránsito de una identidad a otra está dado por el diálogo con las comunidades mismas y no es un mecanismo que permita ni un aumento de disposición ni un refuerzo del espacio de encuentro.

El mecanismo de **lanzar señales** es reconocido como un mecanismo recurrente capaz de generar argumentos para un cambio de posturas. Este facilitó la paulatina construcción de confianza de la comunidad receptora en la comunidad de excombatientes que hacen parte de las experiencias. Igualmente, se configuró un espacio de encuentro en el que el mecanismo fue el eje central de la conjunción de argumentos por parte de ambos sectores sociales, lo que llevó a un cambio de posturas a partir del cual, hoy en día, en el caso específico de Pereira se puede hablar de una convivencia pacífica y reconciliación a partir de la experiencia.

Si bien el lanzamiento de señales fue identificado principalmente en una experiencia, es uno de los mecanismos que incide directamente en la variable de disposición, ya que a través de este tanto las comunidades receptoras como los excombatientes logran entablar canales de comunicación capaces de construir argumentos que promuevan la inclusión de nuevos actores dispuestos a fomentar un cambio de postura frente a otros sectores sociales desconocidos o sobre los cuales se tienen referentes negativos.

Sobre efectos adversos de algunos mecanismos

Así como se han descrito efectos positivos de los mecanismos específicos identificados en las experiencias, también se han encontrado algunos efectos adversos de mecanismos como la difusión y el acompañamiento. En contextos mediados por la violencia latente las percepciones sobre la difusión de eventuales procesos de reconciliación se ven influenciadas negativamente; este es el caso de la experiencia de Cali, en donde la inauguración pública de Ganchos y Amarras fue considerada por sus miembros, en primera instancia, como una amenaza a su seguridad, pues daría pie a posibles estigmatizaciones por parte de la comunidad receptora.

Aunque estos temores no se materializaron, queda la enseñanza de que se debe manejar la difusión de las experiencias de manera cautelosa y se debe hacer un análisis de los posibles pros y contras que conlleve el proceso, puesto que en espacios de encuentro mediados por actores armados se podrían reproducir percepciones negativas que no permiten que las comunidades conozcan o reciban argumentos que los hagan cambiar de postura frente a los otras comunidades participantes de la experiencia.

Por otro lado, aunque no puede negarse la importancia del mecanismo de acompañamiento por parte del Estado y de todos los sectores de la sociedad en procesos de convivencia pacífica y reconciliación que involucran comunidades receptoras y excombatientes, si no se implementa con un principio de temporalidad definida que busque dejar las capacidades instaladas, puede tornarse en un acompañamiento asistencialista de las experiencias, que no lograrán el sostenimiento autónomo y serán frágiles una vez este se retire.

¿Qué aspectos del contexto pueden afectar las experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras?

Las experiencias de reconciliación y reintegración del Cesar, sur de Bolívar, Cali y Pereira mostraron que su creación y funcionamiento no solo dependen de una serie de acontecimientos que emergen y se desenvuelven en su interior, sino también de otros derivados de su contexto.

En el capítulo 3 se realizó una descripción del contexto que permite identificar el ambiente en el que se desenvuelve cada una de las experiencias. Finalmente, se identificaron aquellos aspectos de dicho contexto que afectan de manera directa la creación de espacios de encuentro y la disposición de los actores de cara a un proceso de reconciliación.

Dentro de los mecanismos ambientales comunes a las cuatro experiencias, que procederemos a analizar a continuación, podemos señalar los siguientes:

- Violencia: conflicto armado y violencia urbana.
- Dinámicas de integración y segregación social.
- Reformas institucionales a partir de los procesos de DDR y la justicia transicional: resonancia de las políticas nacionales en lo local y capacidad del Estado local.
- Tejido y movilización social.
- Estructura agraria, conflictos por la tierra y por los recursos (experiencias rurales).

La persistencia del **conflicto armado y la violencia urbana** no son solo una constante de los contextos en los cuales se desarrollan las cuatro experiencias, sino que constituyen un mecanismo que logra condicionar sus alcances. Los procesos

La ausencia de condiciones de seguridad, la persistencia de miedos y estigmatizaciones, y la ausencia de un ambiente propicio para la reintegración política, son algunos de los obstáculos evidentes para concretar avances encaminados a la reconciliación



de DDR que enmarcaron las cuatro experiencias se desarrollaron en medio de las hostilidades del conflicto armado y esto ha tenido varias implicaciones que parecen no depender de las especificidades históricas de cada caso, sino del hecho mismo de que los procesos de desmovilización y el desarrollo de la guerra han ocurrido simultáneamente¹¹⁷. De este modo, la ausencia de condiciones de seguridad idóneas para proteger la nueva vida civil de los excombatientes, la persistencia en las comunidades de miedos estructurales que se traducen en la profundización de estigmatizaciones y desconfianzas y la ausencia de un ambiente propicio para la reintegración política son algunos de los obstáculos evidentes tanto para el cumplimiento de los términos de los acuerdos de paz como para concretar avances encaminados a la reconciliación.

En este sentido, las dinámicas del conflicto armado y la violencia en las ciudades han condicionado las respuestas de los actores sociales de las experiencias y sus decisiones de adaptación, resistencia o desplazamiento forzado, lo cual llama a que opten por acciones individuales o colectivas que les permitan sobrevivir y desplegar cierto tipos de mecanismos (González, 2006). Así, la intensificación del conflicto armado y de la violencia urbana tuvo un doble efecto inhibitorio y creador, para la construcción de espacios de encuentro en las cuatro experiencias. Sin embargo, la naturaleza de estos dos fenómenos y sus diferencias históricas merecen un análisis por separado.

La vulnerabilidad frente al conflicto armado ha sido más evidente en los escenarios rurales de Colombia. El incremento de las acciones violentas por cuenta de los grupos armados, la disputa por el control del territorio y sus economías ilegales incidieron en la interacción, difusión y construcción de la identidad colectiva de las experiencias de Cesar y sur de Bolívar. La experiencia del Comité Cívico y el proceso colectivo del EPL en Cesar, aunque emergieron en dos escenarios históricos distintos, coinciden en la presencia de grupos armados, de manera particular en dos episodios de su dinámica organizativa más reciente: la irrupción del paramilitarismo representada por los bloques Central Bolívar-Sur de Bolívar y Norte de las AUC y la desmovilización de los mismos en el año 2006¹¹⁸. En el caso del Comité Cívico, los

117 En la revisión histórica presente en el segundo capítulo de este libro es posible encontrar evidencias de cómo la persistencia de la violencia armada ha impedido u obstaculizado la consolidación de espacios de reconciliación en el panorama nacional.

118 En 1998, grupos paramilitares comandados por alias «Julián Bolívar» incursionaron por primera vez en el casco urbano de Simití con el objetivo de expulsar al ELN de los territorios del sur de Bolívar. En 2006, luego de su establecimiento, el Bloque Central Bolívar-Sur de Bolívar de las AUC se desmoviliza en el corregimiento de Buena Vista, de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

De manera similar, en septiembre de 1999, hombres vestidos de camuflado bajo las órdenes de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, alias «Jorge 40», irrumpieron en La Mesa, corregimiento de Valledupar. Tras años de predominio en la zona, en marzo de 2006 el Frente Mártires del Cesar, del Bloque Norte de las AUC, se desmovilizó en el mismo corregimiento.

años de disputa de los paramilitares por el territorio del ELN, seguidos a los de su predominio en esta subregión, estuvieron marcados por la represión y todo tipo de atropellos contra la población civil. El proceso de desmovilización aceleró desde el año 2006 la recomposición del tejido social a través de la emergencia de actores como el Comité Cívico y la acción de intermediación del Programa de Desarrollo y Paz, organizaciones de derechos humanos, la cooperación internacional y el Estado.

La experiencia del Cesar muestra cómo el proceso de reinserción (reencuentro) de los exmiembros del EPL, que se venía gestando desde 1991, fue interrumpido por la incursión paramilitar, lo cual de una manera paradójica aceleró su proceso de integración social con la comunidad receptora a través de la atribución de amenaza y de identidad colectiva como víctimas del paramilitarismo¹¹⁹. Adicionalmente, la permanencia de los exmiembros del EPL siempre estuvo condicionada por la persecución hacia sus miembros, quienes fueron objeto de amenazas, desplazamiento forzado, despojo de tierras, desaparición y asesinatos¹²⁰.

Por su parte, el análisis de la experiencia de Cali plantea preocupaciones serias acerca de la repercusión de la violencia urbana en las experiencias de reconciliación. En primera medida, se hace observable su efecto inhibitorio para generar espacios de encuentro en las zonas de residencia de desmovilizados. La persistencia de los grupos armados y de delincuencia organizada (bandas criminales) genera argumentos contraproducentes para la disposición de comunidades y excombatientes urbanos hacia su reconciliación. En su investigación respecto a la presencia de desmovilizados e inseguridad en las ciudades, Enzo Nussio *et al.* (2011,) señala que las comunidades receptoras tienen distorsiones sobre la participación real de excombatientes en las acciones delictivas. Esas distorsiones inciden en la disposición para transformar sus relaciones desde la mera coexistencia hacia la convivencia pacífica y la reconciliación.

Las dinámicas urbanas de hoy están marcadas por las contradicciones transversales que afectan de distintas maneras a diferentes grupos sociales con diversos valores e intereses y variada capacidad para influir sobre su desarrollo y resultado final. «El conflicto urbano generalizado prefigura un ambiente general de poder difuso en el que actores no estatales y privados juegan un papel progresivamente más protagónico a la vez que el monopolio de la fuerza por parte del Estado se resquebraja y se debilita» (Pérez, 2013).

¹¹⁹ La configuración de miembros de este colectivo del EPL como víctimas del paramilitarismo ha estado atravesada por un intenso conflicto con el Estado, que no les ha dado ese estatus dentro del registro de víctimas por sus antecedentes como desmovilizados.



¹²⁰ Ver capítulo 2.

En suma, es importante tener en cuenta el doble efecto del conflicto armado y la violencia en las experiencias de reconciliación: en primer lugar, como inhibidores de la participación de actores en espacios de encuentro, ya sea por las restricciones de movilidad y de circulación que suelen darse bajo el predominio de un actor armado o por argumentos basados en la relación previa del grupo excombatiente con la comunidad receptora, lo cual determina la disposición de los actores; y en segundo lugar, como generador de argumentos para la organización social y la búsqueda de alternativas pacíficas al conflicto. En la medida que la violencia se convierte en una amenaza colectiva, los actores buscan repertorios para mitigarla o suprimirla.

Estos argumentos contraproducentes tienen como una de sus expresiones más comunes la opción por el anonimato por parte de los excombatientes. Si bien la decisión de no identificarse como desmovilizado puede obedecer a causas meramente personales como «querer pasar la página», gran parte de las entrevistas a excombatientes plantearon que esta decisión era para salvaguardar su integridad y la de su familia, así como para evitar caer en situaciones de estigmatización social.

Es importante destacar que durante los 90, la disposición de la comunidad pereirana para un proceso de reinserción y reconciliación con el EPL tuvo unos antecedentes determinantes: el bajo impacto de la violencia del EPL en esta sociedad, el eco de su discurso político reivindicatorio en ciertos sectores sociales de la comunidad y el hecho de que la élite del eje cafetero no considerara al EPL como una amenaza real para el *statu quo* (Comisión de la Superación de la Violencia, 1992). Asimismo, los excombatientes del EPL del Frente Oscar William Calvo tenían mayor disposición hacia un proceso de reconciliación anidada en los argumentos que los llevaron a seleccionar la ciudad de Pereira como sitio de su reencuentro (reinserción) en 1991: era un lugar que conocían y utilizaban como centro de abastecimiento durante su acción armada, tenían allí un trabajo político sólido y, además, era la ciudad más pujante económicamente del Eje Cafetero (Entrevista a Marino Alzate, excomandante del Frente OWC y actual gerente de Colectivos del Café, 2014).

Así pues, desde los inicios de su proceso de reinserción, las acciones de rechazo y estigmatización por parte de otros actores, incluyendo un sector de la comunidad educativa de la UTP y el gremio transportador, fueron cada vez menos frecuentes en la medida en se dieron cada vez más espacios de encuentro, como los procesos de formación dentro del campus y la interacción en la terminal de transporte, lo cual contribuyó a la transformación mutua de las interpretaciones y a una mayor disposición basada en las relaciones cotidianas.



El nivel de animadversión y/o legitimidad existente hacia un grupo de excombatientes puede afectar la disposición de la comunidad receptora y también la generación de espacios de encuentro

Los casos Pereira y Cesar muestran las particularidades de un proceso de reintegración de excombatientes en una comunidad que no fue víctima de su accionar, es decir, en la que el proceso de reconciliación estaría más enfocado en las dimensiones social y política, abandonando casi por completo una interpersonal. Por el contrario, la presencia de víctimas directas en interacción con sus victimarios, como ocurre en la experiencia del sur de Bolívar, genera desafíos impresionantes en términos de la reconciliación interpersonal, en la cual el papel de la reconstrucción de la memoria colectiva ha sido un factor vital en la recomposición del tejido social y los derechos de las víctimas, así como un cimiento para las garantías de no repetición.

A partir de esta diferenciación, surgen interrogantes acerca de la relación existente entre el nivel de victimización de la comunidad receptora con respecto a los excombatientes que se reintegran en ella y las posibilidades de alcanzar una reconciliación no solo política y social, sino también interpersonal. Al respecto, pesará también el nivel de animadversión, desprestigio y legitimidad del grupo excombatiente en un territorio específico, como una variable que puede afectar la disposición de la comunidad receptora y también la generación de espacios dirigidos a la reconciliación¹²¹.

Respecto a las **dinámicas de poblamiento y segregación** social, el caso de Cali muestra paradojas que la ubican en una situación intermedia entre las experiencias de sur de Bolívar, por un lado, y Pereira y Cesar, por el otro. La ciudad de Cali, así como Medellín y Bogotá, suele ser un destino preferente para las personas en proceso de reintegración. Tal decisión tiene que ver fundamentalmente con un cálculo sobre las ventajas para el restablecimiento, materializado en acceso a oportunidades, oferta institucional de los programas de DDR y la mimetización que ofrecen las grandes urbes para los individuos. Paradójicamente, estas motivaciones suelen ser casi las mismas para las víctimas del conflicto armado, en particular personas en situación de desplazamiento forzado, que buscan escapar de la violencia, restablecerse y mimetizarse para evitar su revictimización.

Desde esta lógica, la complejidad de los procesos de urbanización y sus dinámicas de marginalización y segregación social a través de la historia confluyen con la configuración en las ciudades de zonas periféricas en las que cohabitan excombatientes, víctimas de

121 En este sentido, Fernán González (2014) ha señalado que dentro de los mayores desafíos para la reinserción de las Farc, refiriéndose a las posibilidades de su desempeño electoral, está la animadversión y desprestigio creciente en el conjunto de la sociedad colombiana. Tal animadversión ha sido alimentada durante las últimas décadas por sus hostigamientos en los centros urbanos, el frustrado proceso de negociación en el Caguán, su inclusión en la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre y la fuerte campaña contrainsurgente de los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.

El desplazamiento interno y el cambio de lugar de residencia tanto de excombatientes como de víctimas son sumamente frecuentes por distintos aspectos, entre ellos, la seguridad



la violencia y establecidos. A esta situación se suman otros escenarios en los que se tejen las relaciones entre estos tres grupos: el primero es el de coincidencia física entre desmovilizados y sus víctimas directas, lo cual puede parecer poco probable, pero ocurre, tal como se corroboró en la experiencia de Cali; el segundo se da entre víctimas y excombatientes, quienes por su pasado se ubican en bandos opuestos; y el tercero, y más común, es aquel en el que nadie (o pocos) saben quién es quién o quién fue quién.

En este último escenario, las comunidades receptoras que hacen parte de periferias urbanas suelen estar caracterizadas por la poca cohesión social. Estos asentamientos urbanos se encuentran marcados por una limitada interacción debido a brechas que han sido determinadas por la temporalidad en el arribo de los individuos a estos territorios y que suelen tener como consecuencia la discriminación entre grupos establecidos y marginados (Elias, 1998 y Heinich, 1991).

De la misma forma, el desplazamiento interno y el cambio de lugar de residencia tanto de excombatientes como de víctimas son sumamente frecuentes por distintos aspectos, entre ellos, el de seguridad. En consecuencia, las relaciones son muy cortas e inestables, lo cual reduce las posibilidades de concurrencia en espacios de encuentro y la disposición para la reconciliación.

Finalmente, es importante señalar como factor característico de estas dinámicas de integración y segregación social, las lógicas de focalización de las políticas de DDR y justicia transicional, que suelen exacerbar las diferencias entre población víctima, población desmovilizada y comunidad receptora vulnerable. El alivio de estas tensiones y de las percepciones de inequidad por parte de los grupos involucrados son un requisito *sine qua non* para favorecer la disposición de estos actores de cara a un verdadero proceso de reconciliación.

El mecanismo de reformas **institucionales derivadas de acuerdos de paz y los procesos de DDR** se materializó en las transformaciones políticas emanadas de los procesos de desmovilización, desarme y inserción/reintegración ocurridos en el país en los 90 y en el primer lustro del 2000, con la desmovilización de algunas estructuras paramilitares. Aunque esta repercusión pueda parecer muy obvia, es importante reconocer que una transformación institucional no opera de manera automática en los territorios y que no todo proceso de reintegración deriva en una iniciativa colectiva que conduce a la convivencia pacífica o a la reconciliación entre excombatientes y sus comunidades de llegada.

Podemos afirmar, tal y como sostuvimos en el recuento histórico del segundo capítulo, que los procesos de reintegración de excombatientes en Colombia han

estado constreñidos a la lógica de la guerra. Adicionalmente, aseveramos que la fluctuación de la política de reintegración obedeció a la existencia de procesos de paz parciales que dieron pie a reformas institucionales constantes, lo cual se tradujo en una ausencia de estabilidad y sostenibilidad de los programas de reintegración, dándole tintes distintos a cada engranaje institucional y diferentes énfasis determinados por las coyunturas políticas y sociales del momento histórico.

A pesar de que las desmovilizaciones del EPL y de las AUC tienen en común que se han dado en medio de las hostilidades de la guerra, cada proceso ha estado acompañado por un entramado institucional distinto. El programa de los años 90 le dio un énfasis más fuerte a la reintegración política, en contraste con el énfasis dado a la reintegración económica individual de la política pública del PRVC y la ACR hasta el año 2010. A pesar de estos distintos énfasis, ambos procesos de DDR implementaron medidas de reintegración económica que propiciaron, individual o colectivamente, la consolidación de proyectos productivos y programas de empleabilidad. En este contexto institucional se gestaron tres de las cuatro estrategias analizadas en esta investigación, cuya naturaleza era inicialmente económica y derivó en algunos avances en términos de la reconciliación. A pesar de este aspecto, existe un consenso entre los excombatientes participantes de las experiencias de las zonas rurales en torno a cierto abandono institucional en el sostenimiento de los proyectos productivos. Este hecho se ve con más claridad en la experiencia rural del Cesar.

Por otro lado, el acento en alcanzar un proceso de reconciliación fue más evidente en los casos de sur de Bolívar, Cesar y Pereira. En el caso del sur de Bolívar, la reconciliación aparece como una aspiración del Comité Cívico inherente a su identidad como «sujeto colectivo de paz», a la cual se sumó el apoyo institucional de la ACR, que en el proceso de acompañamiento a los desmovilizados del Bloque Central Bolívar, en 2006, identificó las ventajas de fortalecer a este actor para promover eficazmente no solo la reincorporación sino la convivencia pacífica en este territorio. En los casos de Cesar y Pereira, las acciones hacia la reconciliación tenían cimientos políticos en el «Plan de Reencuentro» derivado del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y el EPL, cuyos proyectos de reinserción cívica y productiva constituían, además de un acto de reconciliación, la posibilidad de una apertura democrática (Villarraga, 2013).

Por su parte, la experiencia de Ganchos y Amarras en Cali, de una manera más *sui generis*, logró consolidarse como una experiencia productiva gracias al aval del Gobierno local, pero se alcanzó más fácilmente la reconciliación con una parte del sector empresarial caleño y al interior de la organización que con otros sectores de la comunidad receptora, incluidas las víctimas, con quienes se establecieron relaciones de coexistencia.

Un balance del conjunto de las experiencias parece señalar que existe una relación entre componentes políticos en el proceso de reintegración y el establecimiento de acciones más decididas hacia procesos de reconciliación con toda la comunidad receptora. Esta relación se encuentra anidada tanto en la fortaleza y apuestas de los actores de la sociedad civil como en el contenido de los acuerdos de paz y de la política pública, de cara al papel específico de los excombatientes en acciones de reconciliación interpersonal, social y política en la etapa de posconflicto.

Este mecanismo de reformas o transformaciones institucionales tiene como mecanismos coadyuvantes *la capacidad del Estado local*, así como la presencia de actores locales que hacen *resonancia de las políticas de DDR y justicia transicional en el nivel local*: un andamiaje institucional sólido, sumado a la voluntad política, favorece las acciones de intermediación del Gobierno local para generar espacios de encuentro entre excombatientes y comunidades receptoras. En el caso de Cali, el Gobierno local desarrolló acciones de intermediación con el sector privado, creando un espacio de encuentro que permite no solo la sostenibilidad de la experiencia de Ganchos y Amarras, sino de un proceso de reconciliación entre excombatientes con una parte del sector empresarial caleño. Este espacio ha logrado trascender una relación de transacción económica hacia la transformación de las relaciones y las mutuas interpretaciones entre estos dos actores.

El papel del Gobierno local en la experiencia de Cali contrasta con el de Simití, en el sur de Bolívar. La acción de las instituciones estatales en las zonas más integradas al país con respecto a aquellas más periféricas, como las rurales, corrobora la hipótesis de un Estado en formación cuya presencia diferenciada proviene «del proceso gradual de incorporación de nuevos territorios y poblaciones al Estado-nación en su conjunto, tanto en el ámbito económico como en lo político» (González G, 2014, p. 60).

En este sentido, se debe recordar que Simití es un municipio de sexta categoría, con una incapacidad evidente a la hora de cofinanciar proyectos estratégicos en áreas fundamentales como salud, educación e infraestructura (Viloria, 2009). El porcentaje de personas dentro del municipio con alguna necesidad básica insatisfecha (NBI) es del 62%. Esto es mucho más evidente en corregimientos como Santa Lucía y El Paraíso que aún no cuentan con el servicio de alumbrado eléctrico, agua potable ni de alcantarillado. Como bien señala Viloria (2009), el origen de la mayoría de problemas que padece el sur de Bolívar se encuentra en el aislamiento geográfico en que ha permanecido esta subregión en los últimos tiempos. Para el año 2009, por



La resonancia de la política de reintegración puede incidir en la transformación de la disposición en sectores antes no involucrados con la promoción de la reconciliación

ejemplo, el sur de Bolívar contaba con apenas 60 kilómetros de vías pavimentadas, siendo la principal ruta Cerro de Burgos – Simití – Santa Rosa del Sur¹²².

La función institucional en temas de DDR y justicia transicional en Simití se ha hecho más evidente a partir de la movilización social y capacidad de agencia de su comunidad. Es claro que la presencia del Gobierno nacional a través de la ACR se dio motivada por el proceso de acompañamiento tras la desmovilización del Bloque Central Bolívar, ocurrida en ese territorio. El Gobierno local, por su parte, ha asistido a un proceso de jalamiento en esta dirección un poco forzado, debido a una inercia orgánica y de las estructuras de poder, determinadas en el pasado por la presencia de los distintos actores armados, así como las dinámicas asociadas al narcotráfico y los cultivos ilícitos.

Por otra parte, **el efecto de resonancia** puede ser determinante en un contexto de precariedad estatal en el que un actor local de cualquier naturaleza transmite información que les permite a otros aprovechar la reforma institucional como marco justificatorio e instrumento de sus demandas. Así, al ser difícil la interacción con entes del Estado, el acompañamiento de un tercer actor puede motivar y facilitar la interlocución. En la experiencia rural del Cesar, el Programa de Educación de la Fundación Progresar resultó ser muy útil para las comunidades receptoras, particularmente porque actuó de cara al fortalecimiento de la democracia y los liderazgos desde el nivel local. Del mismo modo, merecen destacarse las acciones de formación proporcionadas por diversos actores nacionales y regionales gestionadas por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, las cuales han sido aprovechadas por el Comité Cívico del sur de Bolívar para cualificar a sus integrantes en la comprensión de sus derechos y, sobre esta interpretación, potenciar su acción colectiva de cara al sistema nacional de justicia transicional.

La resonancia de la política de reintegración puede incidir en la transformación de la disposición en sectores antes no involucrados con la promoción de la reconciliación. En Pereira, a partir del discurso de reencuentro con la sociedad promovido por la Fundación Progresar, se generó en los desmovilizados una disposición hacia las comunidades, desde la cual se fortaleció la generación y sostenibilidad de un espacio de encuentro.

Adicionalmente, en contextos de mayor precariedad estatal, la interacción entre los miembros de la comunidad aumenta propiciando un espacio para que las

¹²² Esta presencia precaria del Estado ha facilitado que la economía de la guerra haya sumado a sus estrategias económicas la explotación minera ilegal, especialmente de oro, que ha “expuesto a la depredación de los grupos irregulares y juega a favor del fortalecimiento de sus finanzas” (ACNUR, s.f.).

personas se organicen, interactúen y busquen una solución a una determinada situación o necesidad, situación que se hizo observable en las dos experiencias rurales. El caso del Comité Cívico del Sur de Bolívar y su autodenominación como «sujeto colectivo de paz» es un claro ejemplo de esta afirmación; de igual forma, en el caso del Cesar las difíciles condiciones de infraestructura y acceso a servicios potenciaron la capacidad de agencia de sus pobladores.

Esta debilidad de la oferta institucional y las problemáticas compartidas, paradójicamente, han favorecido una fuerte **organización, movilización y tejido social** en las experiencias rurales, traducéndose en la construcción de un tejido social más fuerte, fundado en la existencia de relaciones solidarias. No obstante, tal y como fue enunciado líneas arriba, las iniciativas productivas han tenido en común que no han sido económicamente estables, en gran medida, debido al poco acompañamiento y formación técnica que han recibido excombatientes y comunidades receptoras para el manejo de sus proyectos productivos. Es precisamente a partir de esta precariedad y las problemáticas alrededor del sostenimiento económico, el despojo, los terratenientes y la reclamación de tierras, que en las experiencias rurales se han activado mecanismos que han propendido por una mayor presencia institucional que acompañe estos procesos en los que los elementos de convivencia pacífica y reconciliación son reconocidos y liderados por las propias comunidades.

Finalmente, respecto a la **estructura agraria** y los **conflictos por la tierra y por los recursos**, tenemos que, en Colombia, el conflicto armado confluye con el conflicto agrario en la medida en que la tierra no es solo el «objeto» de la posesión de una parcela o un predio destinado a la producción, sino que también se ha convertido en un instrumento de la guerra, del lavado de activos del narcotráfico y, además, genera poder político ligado a la violencia ejercida por grupos armados ilegales. De este modo «la tierra se convierte en un instrumento de guerra y se evidencia la disputa por el territorio, lo cual configura un conflicto rural mayor» (PNUD, 2011, p.180).

Es claro que el corregimiento de La Mesa, en Valledupar, abarca en gran medida la conceptualización del conflicto rural realizada por el PNUD, ya que en este se juntan varias problemáticas. En primer lugar, en la esfera del conflicto agrario es evidente la deuda social y política de los entes locales y nacionales con la región. En esta zona, los conflictos por la tierra son evidentes, y al mismo tiempo latentes, tal como muestra el caso anteriormente señalado de la familia Mestre; En segundo lugar, el despojo y el desplazamiento forzado fueron estrategias empleadas por los grupos paramilitares en la región. Cabe señalar que una extensa propiedad



Los conflictos y la organización social alrededor de la tierra pueden generar o inhibir los espacios de encuentro y la disposición de los actores de cara a la reconciliación

perteneciente al comandante paramilitar «Jorge 40» se ubica sobre la vía que comunica al corregimiento con la ciudad de Valledupar. Por último, además de las diferencias existentes con la población indígena, al igual que en el siglo pasado se presentan conflictos por la tierra con familias tradicionales como los Mestre, quienes recientemente reclaman la propiedad de gran parte del casco urbano del corregimiento.

El caso del sur de Bolívar es similar al anterior puesto que, a pesar de tener un potencial agrícola significativo, no todas las tierras productivas están siendo aprovechadas, en parte por la falta de vías de acceso adecuadas que dificultan una posibilidad clara de comercialización. Además, se deben señalar las disputas por la tierra y el despojo, hechos de violencia que, bajo el lema de «necesito su tierra, váyase» impiden el arraigo del grupo de hogares al territorio, lo cual imposibilita que se constituyan en una comunidad arraigada que ejerza un desarrollo social, económico, político y cultural (PDPMM, 2013).

Es precisamente esta centralidad del conflicto por la tierra lo que lo ubica como un mecanismo ambiental y no como mero contexto de las experiencias de Cesar y sur de Bolívar. Los conflictos y la organización social alrededor de la tierra pueden generar o inhibir los espacios de encuentro y la disposición de los actores de cara a la reconciliación. Las políticas de DDR y justicia transicional que consideran un componente rural pueden ayudar a profundizar o a cerrar esas brechas a través de un mayor equilibrio entre los derechos e intereses de la comunidad receptora y la asistencia prestada a los excombatientes, el fomento de una sensación de inclusión y la mejora de la legitimidad de los programas de DDR (Nussio, 2013).

Incidencia de las relaciones de género en las experiencias

Tal como se ha enunciado de manera preliminar, una de las apuestas del presente proyecto de investigación era el de develar aspectos significativos acerca de la manera diferencial en que las mujeres vivieron las experiencias de reconciliación y reintegración¹²³. Esta aproximación busca identificar cómo las relaciones entre géneros se involucran en los mecanismos que facilitaron o inhibieron el desarrollo de las cuatro experiencias y sus procesos de reconstrucción de relaciones.

¹²³ Ver introducción.

En particular, la investigación indagó sobre tres aspectos del enfoque de género: 1. Sobre los roles desempeñados por las mujeres y su relación con la trayectoria y los mecanismos de cada experiencia; 2. Los aprendizajes alrededor de las desigualdades estructurales entre géneros que se profundizan en etapas de conflicto o posconflicto y que afectan la generación de espacios de encuentro o la disposición; y 3. La visibilización de las diferentes necesidades de los roles de las mujeres de cara a la reconciliación.

Con el fin de responder a estas tres cuestiones, abordaremos en este apartado los dos primeros puntos y en la parte de conclusiones y recomendaciones se desarrollará el tercero, el cual es el resultado de los anteriores.

El enfoque de género resultó muy útil en el análisis histórico que involucró las experiencias analizadas. Desde este enfoque es posible identificar relaciones de poder que se basan en la diferenciación sexual y su incidencia en la conformación de identidades subjetivas y colectivas, así como en la configuración de un «orden simbólico normativo» que atraviesa diversas esferas de lo social a través de la historia (Scott, 2003, p. 56).

Además, como uno de los lentes del análisis histórico de la investigación, el enfoque de género permitió identificar rupturas y continuidades en la asignación y cambio de roles entre hombres y mujeres dentro de las experiencias. Los roles asumidos obedecen a un juego de doble vía entre las decisiones individuales y las contingencias de un contexto que aún sigue estando determinado por patrones de una sociedad profundamente patriarcal.

Con base en ello, el análisis de las experiencias confirma la existencia de brechas estructurales de inequidad entre hombres y mujeres, que van desde barreras para el acceso a la educación, la participación política y la propiedad de la tierra, hasta fenómenos como la violencia basada en género que se vislumbra no solo como estrategia de los actores armados del conflicto, sino como naturalización en el espacio privado y doméstico de los territorios estudiados.

Las reformas institucionales recientes en materia de DDR y justicia transicional, si bien contienen elementos que destacan el enfoque de género, no han logrado materializarse en relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, que le permitan a las mujeres excombatientes, por ejemplo, mantenerse en los procesos de capacitación y formación para el trabajo, en la medida que su rol como madres cabeza de hogar les impide cumplir con la intensidad horaria del programa mientras tienen que dejar solos a sus hijos. Este aspecto fue muy evidente en la experiencia de Pereira, en la cual las entrevistas a mujeres participantes de



Aspectos como la escasa participación de las mujeres en los espacios de visibilización y decisión de las organizaciones suelen ser comunes en las cuatro experiencias de reconciliación

procesos de reintegración de los 90 y de las AUC, de la actualidad, coincidieron en este obstáculo.

La división sexual del trabajo, en la que los hombres suelen tener más dominio sobre tareas en el espacio público y la política, y las mujeres en el espacio doméstico y privado, es una contante que se repite, aunque con matices, en las cuatro experiencias. La característica de tener más responsabilidades en las tareas domésticas y de sostenimiento económico del hogar puede limitar el involucramiento y nivel de compromiso de las mujeres en espacios comunitarios públicos.

En los casos de sur de Bolívar y Cesar, esta división sexual del trabajo fue reforzada en los episodios del predominio de los grupos paramilitares, quienes advertían que «quienes no caminaran derecho tendrían problemas, que las mujeres chismosas y las casadas que fueran infieles serían castigadas» (Verdad Abierta, 2013). Los castigos proporcionados a las mujeres tenían que ver con oficios domésticos y escarnio público, como barrer las calles con un lebrero o raparles la cabeza (Memoria Histórica, 2011).

La mirada histórica permite hacer diferenciaciones respecto a los roles asumidos por las mujeres en los dos grandes periodos de inserción/reintegración de cara a acciones de reconciliación considerados en la presente investigación: los 90 y 2005 y siguientes¹²⁴. En las iniciativas analizadas, las mujeres desempeñan una variedad de roles como pobladoras, excombatientes, víctimas, lideresas, formadoras, madres, apoyo psicosocial y pareja, los cuales se han venido transformando y combinando de acuerdo a los distintos episodios de las experiencias.

Aspectos como la escasa participación de las mujeres en los espacios de visibilización y decisión de las organizaciones suelen ser comunes en las cuatro experiencias: a pesar de que tres de las cuatro experiencias (Pereira, sur de Bolívar y Cesar) cuentan con la participación directa de mujeres, son los hombres quienes tienen mayor visibilidad y se desempeñan en la dirección de la organización. Un contraste de los cuatro estudios de caso, con base en un análisis diferencial de las acciones desarrolladas, muestra que dentro de las experiencias las mujeres estuvieron involucradas de manera particular en los mecanismos específicos de **mediación y formación**. Este análisis surge de una identificación de cómo la relación de género fue determinante para la activación de determinados mecanismos.

¹²⁴ Estas diferencias parecen estar anidadas en el avance en la reivindicación de los derechos y las libertades de las mujeres y de acciones institucionales de cara a la equidad entre géneros. No obstante, las brechas son aún muy amplias.

Es importante destacar que los mecanismos específicos y ambientales incidieron en la transformación de los roles de las mujeres. En este sentido, puede señalarse cómo los episodios de interacción e irrupción de actores armados determinan su cambio a estatus de víctimas (viudas, huérfanas), combatientes/excombatientes o lideresas. Tal transformación en el rol respecto el conflicto sitúa también su disposición frente a un proceso de reconciliación.

En la experiencia de Cesar, en el episodio de la irrupción paramilitar, solo las mujeres lograron una interlocución efectiva con los jefes paramilitares hasta persuadirlos para que respetaran la vida de los líderes y demás miembros de la comunidad a quienes venían hostigando. Esta acción mediadora en un momento de cruenta violencia frenó varias persecuciones, permitió la continuación de su proyecto productivo y fortaleció los liderazgos femeninos, que hasta entonces eran muy débiles. Con ello, la comunidad evidenció que la mediación de las mujeres solía ser más efectiva que la de los hombres, en la medida en que estos seguían siendo considerados como una amenaza para los paramilitares.

El mecanismo de mediación, como lo vimos anteriormente, se activa entre partes en conflicto. Lo que es clave manifestar aquí es que esta acción es direccionada por las mujeres de las experiencias y que su efectividad reside tanto en capacidades subjetivas como en su condición de género. Este mecanismo, además, fue visible en las experiencias de sur de Bolívar y Cali. Asimismo este mecanismo ha podido identificarse en otros territorios como en el Cauca, en los que si bien los actores armados suelen perpetrar todo tipo de violencias contra las mujeres, incluyendo la sexual, suelen también ser persuadidos por ellas para que respeten la vida de sus comunidades y familias. Esta relación basada en género ha sido identificada en investigaciones nacionales (Hernández, 2012) e internacionales (Klein, 2011), que coinciden en el potencial de mediación de las mujeres para la solución del conflicto.

En cuanto al mecanismo de formación, se identificó que las mujeres participantes de las experiencias con frecuencia asumieron funciones relacionadas con la transferencia de conocimientos y desarrollo de habilidades emocionales en los individuos y sus comunidades. Estas funciones ocurrieron recurrentemente en varios de los episodios de las experiencias. Por ejemplo, en los procesos de reinserción y reintegración de excombatientes en los 90 y desde Justicia y Paz, ha sido muy común que el componente formativo estuviera orientado por mujeres y que además fueran los mismos desmovilizados los que preferían que el acompañamiento a su proceso individual y familiar lo llevara una de ellas, manifestando que estas suelen ser más empáticas y generarles mayor confianza (Taller Ganchos y Amarras, 2014). Por su parte, el caso del sur de Bolívar destaca

que iniciativas de formación para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes han sido lideradas por las mujeres, quienes manifiestan la preocupación sobre la creciente utilización y vinculación de esta población por parte de los actores armados.

La función educadora desarrollada por las mujeres de las experiencias, que si bien es posible interpretarla como una división sexual tradicional del trabajo, puede tener una explicación adicional y es la de su conexión natural con la preservación de la vida. Tal manifestación ha tenido un correlato en el movimiento nacional de mujeres por la paz y su consigna de la paz entendida como defensa y cuidado de la vida, el cual ha sido un motor en la génesis y fortalecimiento del Movimiento por la Paz en Colombia (García-Durán, 2006).

Reconciliación

entre excombatientes y comunidades receptoras en Colombia: algunas conclusiones y claves para la acción



El proceso de investigación llevado a cabo reveló la importancia de analizar y comprender cuatro experiencias con avances en reconciliación, tanto en su nivel micro, como en relación con el entorno en el cual se enmarcan. Se pudo observar que el acompañamiento e intermediación de actores estatales y de actores privados es vital para el desarrollo de las experiencias en tanto procesos de reconciliación y de convivencia pacífica. Algunos actores cuentan con mayores capacidades de acompañamiento e intermediación para generar, apoyar y fortalecer procesos que involucren población desmovilizada. Por ejemplo, el sector privado ha brindado grandes apoyos económicos y formativos para algunas de las experiencias, y estos casos deben ser ejemplo de cómo este sector de la sociedad puede participar activamente en la construcción de procesos de reintegración, que a su vez se proyecten como procesos de reconciliación. Igualmente, este acompañamiento ha incidido en el fortalecimiento de liderazgos a través de formación política y ciudadana, lo cual ha contribuido a un reconocimiento de capacidades dentro y fuera de la experiencia, y permite consolidarlo internamente para facilitar su proyección e incidencia en las comunidades receptoras. Por ejemplo, el rol de las mujeres en acciones de mediación en las experiencias se destacó como una oportunidad de sostenibilidad de las mismas, en particular en contextos de alta confrontación armada.

Los cuatro estudios de caso mostraron de una u otra manera acciones de reconciliación dinámica, espontánea y parcial. Dinámica, en la medida en que dichas acciones de reconciliación pueden ser coyunturales y su existencia no garantiza en sí misma su sostenibilidad. En otras palabras, tal y como fue evidenciado por la experiencia rural del Cesar, la formación de un espacio de encuentro entre las comunidades y los excombatientes y los avances en términos de reconciliación que

este implicó en el proceso de reinserción pueden ser modificados por situaciones del contexto como la incursión de actores como los paramilitares: la existencia de espacios de encuentro y acciones de reconciliación no garantiza su permanencia en el tiempo.

En función de lo anterior es posible afirmar que la reconciliación es espontánea, en la medida en que se construye en escenarios que propician cambios de imaginarios y posturas frente al otro, pero no es un proceso que responda a una vía de acción concreta y establecida.

Experiencias como la liderada por el Comité Cívico del Sur de Bolívar demuestran que los espacios de encuentro pueden derivarse de iniciativas de la sociedad civil que cuentan con los grados suficientes de empoderamiento de sus comunidades para asumir las implicaciones de la cohabitación de un territorio con excombatientes, sin la intervención protagónica de la institucionalidad. Así, las acciones de reconciliación existentes en las experiencias del Cesar y el sur de Bolívar, caracterizadas por haber crecido en un contexto de profunda precariedad del Estado, permiten ver que en la institucionalidad no reside la responsabilidad de «decretar la reconciliación», pero sí de propiciar escenarios idóneos para el encuentro y la disposición entre comunidades receptoras y excombatientes,

En consecuencia, con la espontaneidad que se presupone existe en los procesos de reconciliación, la observación de los programas institucionales de reinserción y reintegración de las cuatro experiencias permite concluir que, a pesar de que el acento dado al tipo de reintegración no necesariamente genera escenarios de reconciliación, los procesos adelantados en la política de DDR de los años 90 parecen haber obtenido avances más decididos hacia la consolidación de espacios de encuentro para la reconciliación. Tal es el caso de Cesar y Pereira, que contrastan con las experiencias surgidas en un marco institucional más orientado a promover concretamente la reintegración económica desde una perspectiva individual, como en el caso de Cali.

Por otro lado, la experiencia de Cali demostró que las acciones de reconciliación pueden ser parciales. En correspondencia con una definición de reconciliación menos abstracta y general, resulta conveniente afirmar que los procesos de convivencia existentes entre los excombatientes miembros de la empresa Ganchos y Amarras dan cuenta, en efecto, de acciones de reconciliación concretas en la medida en que han implicado un cambio de relaciones entre antiguos adversarios, a pesar de estar restringidas a los actores que trabajan en la empresa, ya que no han logrado ningún avance en términos de la reconciliación con la comunidad que

habita en sus barrios de residencia. Esta situación se derivó tanto de la persistencia de escenarios de estigmatización y miedo, además de las lógicas de la violencia urbana que han motivado la elección del anonimato de los excombatientes en su proceso de reintegración a la vida civil, como de la naturaleza misma de la empresa, que se enfocó en propiciar la reintegración económica de los excombatientes participantes en Cali.

En relación con la totalidad de la comunidad receptora, la experiencia también da cuenta de una reconciliación parcial, puesto que las relaciones de la empresa con un sector empresarial caleño constituyen un avance en términos de reconciliación con la comunidad receptora, conforme a lo que se entiende aquí como ese conglomerado social que cohabita con excombatientes¹²⁵.

Estas acciones de reconciliación parcial descritas pudieron derivarse del tipo de aproximación del enfoque comunitario implementado por la ACR. Tal y como fue descrito en el capítulo 2, el énfasis en la reintegración individual, íntimamente relacionado con el acento dado a la reintegración económica evidente en el programa de la ACR, puede entenderse a raíz de la naturaleza de los actores armados que se acogieron a los procesos de desmovilización y el grado de relevancia dado a la participación social y política en las negociaciones de paz que inspiraron los cambios institucionales de la política de reintegración.

En términos generales, los hallazgos de la investigación permiten concluir que, de cara a facilitar avances hacia la reconciliación, es necesario garantizar la participación de las comunidades receptoras en los procesos de DDR. Lo anterior, en la medida en que las comunidades no deberían ser forzadas a adaptarse a los programas o proyectos diseñados para la población desmovilizada ni deben sentirse en situación de desventaja en proyección a dichos programas. En esa medida, la construcción de estos procesos debe ser colectiva.

Desde esta perspectiva, el acompañamiento en el proceso de reconstrucción de confianza y relaciones entre las comunidades receptoras y los excombatientes que llegan a ser parte de estas debe ser transversal, pedagógico y concertado. El énfasis debe estar en el aprestamiento de las comunidades receptoras y los participantes del proceso de reintegración, con el fin de divulgar las políticas que buscan ser implementadas en sus territorios, en este caso referentes a la reincorporación de excombatientes y la (re)construcción de relaciones de confianza y respeto. La reconciliación debe ser comprendida como un proceso y una meta integrales, no solo como una (re)construcción de relaciones entre aquellas comunidades receptoras y grupos de desmovilizados.

125 Este conglomerado social es amplio pues está conformado tanto por la sociedad civil como por la institucionalidad.

Adicionalmente, con el objetivo de promover una disposición en las comunidades receptoras frente a la posibilidad de construir escenarios de convivencia pacífica con población desmovilizada, es vital hacer visibles ejemplos sobre los efectos positivos de este tipo de procesos. El reconocimiento y difusión de otras experiencias y las muestras de «cambio» por parte de personas desmovilizadas pueden convertirse en argumentos para emprender procesos de reconciliación.

En la misma línea, es necesario redefinir la noción de comunidad receptora conforme al contexto en el cual tenga lugar la reubicación de excombatientes. Esta necesidad pasa por reconocer que el enfoque comunitario con comunidades que fueron afectadas directamente por el conflicto armado tiene particularidades e implicaciones distintas a las que tendría con comunidades que no lo han sido.

Si bien a la luz de esta investigación la reconciliación se comprende como una meta y como un proceso, las experiencias analizadas evidencian la complejidad de una mezcla de los diferentes alcances de la reconciliación (coexistencia, convivencia pacífica y reconciliación), dependiendo de la incidencia y funcionamiento de los mecanismos en cada una. En esta medida, la incidencia de los mecanismos ambientales y la activación de los mecanismos al interior de los casos estudiados permitieron concluir que la experiencia del sur de Bolívar tuvo avances simultáneos en las tres dimensiones de la reconciliación: interpersonal, social y política; sin embargo, como sus miembros mismos los reconocen, el avance hacia la reconciliación requiere un esfuerzo del día a día y han tenido casos de renuncia de desmovilizados al proceso.

Si bien los avances en términos de la reconciliación no dependen exclusivamente de los procesos de reintegración de excombatientes, el análisis de las experiencias sí permite corroborar que programas más integrales y sostenibles presentan avances más decididos hacia procesos de reconciliación. Desde esta perspectiva, el papel del Estado debe estar enfocado en propiciar no solo las condiciones para que la política pública de reintegración se desarrolle de forma satisfactoria; sino además debe generarlas circunstancias mínimas necesarias para que su impacto en la consolidación de relaciones que puedan conducir a la reconciliación sean sólidas y sostenibles. Estas circunstancias están relacionadas con la mitigación de los mecanismos ambientales que limitan los avances para la reconciliación como, por ejemplo, la continuación de escenarios de violencia, las inequidades estructurales, los grados de polarización y la permanencia de imaginarios de estigmatización, la precariedad institucional, los conflictos por la tierra, las dinámicas de poblamiento y segregación social, así como la falta de garantías a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La relación establecida en el párrafo anterior podría entonces traducirse en unos retos concretos para la institucionalidad actual de la reintegración, específicamente en una proyección de la construcción de escenarios favorables para la reconciliación. Estos retos deben ser abordados tomando como filtro fundamental las dinámicas locales que se establecen de manera diferenciada en los territorios urbanos y rurales, dinámicas que están profundamente condicionadas por los aspectos arriba señalados, entre otros enunciados en el análisis de cada una de las experiencias.

Cuando se reconoce el origen, los objetivos y el contexto de cada experiencia y se sabe con claridad quiénes asumen roles de liderazgo, es posible establecer relaciones con las trayectorias recorridas por ellas, lo que permite establecer si sus logros en convivencia pacífica y reconciliación han sido deliberados o han sido involuntarios. De esta manera, es más factible que las experiencias con un objetivo reconciliador deliberado puedan promover transformaciones de relaciones y un cambio de postura frente al otro de una manera más directa que aquellas experiencias cuyos objetivos estén más enfocados a la reintegración económica, por ejemplo.

En otras palabras, la tesis aquí defendida se inclina a sostener que las experiencias de desmovilización de la década de los años 90, (en este caso las del EPL aquí analizadas), tuvieron lugar en un contexto nacional más propicio a la participación de los excombatientes, derivada en parte de la naturaleza de las guerrillas que se desmovilizaron durante la época; esto se tradujo en la creación de espacios de encuentro como la Asamblea Constituyente y los eventos de formación y beneficios compartidos entre excombatientes y miembros de la comunidad receptora.

En contraste, la política pública resultante del proceso de paz firmado entre el Gobierno y las AUC, así como el énfasis reciente en la reintegración individual que se evidencia en la política de reintegración actual, plantea desafíos que merecen ser analizados para enfrentar la coyuntura de los diálogos adelantados en La Habana entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc.

En esta dirección se señalan dos de los desafíos más evidentes que deja la observación de las experiencias en esta investigación con miras al panorama actual de posibles desmovilizaciones de guerrillas. El primer desafío consiste en que es preciso reconsiderar las implicaciones que podría traer consigo la no priorización de la reintegración política de los excombatientes en la estructura institucional vigente, de cara a la consolidación de escenarios propicios a la reconciliación. Este desafío se encuentra anidado en la incidencia que tiene el contenido de los acuerdos en la consolidación deliberada de espacios de encuentro con las comunidades receptoras así como en la necesidad de que los desmovilizados se encuentren más involucrados y comprometidos participando en la solución de los problemas de sus comunidades.

El segundo desafío consiste en propiciar escenarios hacia la reconciliación social y política sin quebrantar los derechos de las víctimas, los cuales a diferencia del pasado, tienen relevancia en la agenda pública. Adicionalmente, es preciso aliviar no solo la tensión entre la política de reparación a las víctimas y la política de reintegración de los desmovilizados, sino de estas dos con aquellas dirigidas a la población en situación de vulnerabilidad dentro de las comunidades receptoras. En una sociedad caracterizada por una profunda polarización e inequidad social como la colombiana, los avances hacia la reconciliación implicarán no solo (re) construir las relaciones y la confianza, sino cerrar las brechas de la exclusión económica, social y política.

Recomendaciones

- Es fundamental que el Estado reconozca las posibilidades y los límites de su intervención frente a la reconciliación. Dentro de las posibilidades está propiciar garantías y condiciones que promuevan «espacios de encuentro» entre comunidades receptoras y personas en procesos de reintegración, con miras a la reconciliación política, social e interpersonal. No obstante, el límite de esta intervención emerge de la característica *espontánea* de la reconciliación, por lo cual no puede ser regulada, ni impuesta, pasando a un espacio individual fuera del dominio estatal que involucra además la dignidad de las víctimas.
- La reconciliación es un tema transectorial, por tanto, no debe reducirse a la política de reintegración. Requiere el concurso de diferentes sectores estatales. Tal situación también se aplica a los demás actores sociales como la empresa privada, la sociedad civil y la academia.
- Las problemáticas diversas expuestas en los contextos de cada una de las experiencias muestran no solo las particularidades de los territorios, sino también las formas igualmente diversas en las que las comunidades se enfrentan a esas problemáticas. En este sentido, el diseño y formulación de políticas que propendan por la reconciliación deben tener un enfoque territorial muy consecuente con las capacidades locales.
- La garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición plantean un punto de partida que puede facilitar acciones de reconciliación en comunidades receptoras fuertemente golpeadas por el conflicto.
- Los procesos de reintegración deben estar acompañados de estrategias pedagógicas acerca de las implicaciones de los procesos de reintegración dirigidas no solo al conjunto de la comunidad receptora, sino también a los mismos excombatientes. Igualmente, las estrategias pedagógicas pueden contribuir a la transformación de imaginarios y de posturas que reproduzcan la estigmatización y la mutua segregación entre comunidades receptoras y desmovilizadas. Los procesos pedagógicos deben incluir procesos de educación para la convivencia.

- Simultáneamente, las estrategias pedagógicas deben considerar las características de la comunidad receptora, si esta ha sido victimizada, y diferenciar si se trata de procesos de construcción o reconstrucción de relaciones, pues esto supone retos singulares.
- Continuar y fortalecer los procesos de acompañamiento psicosocial, dirigidos a las víctimas y a las personas en proceso de reintegración. Estos constituyen un punto de partida que puede propiciar de manera espontánea hacia la (re)construcción de relaciones entre excombatientes y comunidades receptoras victimizadas.
- Es necesario establecer un equilibrio entre las políticas de reintegración, las políticas de reparación de víctimas y aquellas dirigidas a población vulnerable en las comunidades receptoras. Lo anterior, además, implica instaurar escenarios de articulación en la medida en que la reincorporación de excombatientes no puede prescindir de la recuperación de la justicia y del reconocimiento de los derechos de las víctimas, así como tampoco puede desconocer los requerimientos y las necesidades de la población vulnerable establecida en el territorio.
- También se debe destacar la importancia de ampliar la comprensión del enfoque comunitario de las políticas de reintegración, a través de estrategias de participación más decididas y perdurables en el tiempo en donde los excombatientes participen en la solución de los problemas de sus comunidades receptoras. Componentes como el servicio social pueden ser amplificados para favorecer espacios de encuentro entre la comunidad receptora y los participantes del programa hacia la búsqueda de la construcción y reconstrucción de relaciones sólidas y de largo plazo con las comunidades receptoras.
- La ampliación de la comprensión del enfoque comunitario implica, asimismo, que las políticas de DDR y justicia transicional entiendan la complejidad del conflicto armado en los territorios, así como las particularidades históricas, sociales, políticas y económicas que inciden o inhiben los procesos de reconciliación.
- Apoyar el fortalecimiento de actores que desempeñan el rol de «intermediación» en los territorios. Este rol se evidencia como un elemento fundamental en la emergencia y en la sostenibilidad de experiencias de reconciliación analizadas. Adicionalmente, el fortalecimiento de la sociedad civil en los territorios contribuye al empoderamiento de las comunidades en posibles procesos de posconflicto.

- Incorporar un enfoque de género y de medidas diferenciales en favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes y sectores en condiciones de riesgo y de vulnerabilidad.
- Adoptar por parte de las instituciones estatales y gubernamentales, de forma adecuada y pronta, los informes y requerimientos que genera el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y las alertas del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, coordinado por los Ministerios de Interior y de Justicia, en referencia a procesos de DDR, riesgos en comunidades receptoras y desmovilizados.
- Trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad local de cara a alternativas socioeconómicas y de desarrollo, retorno y un ambiente para el ejercicio de derechos.
- Diferenciar en la atención y en la oferta institucional según sea el entorno rural o urbano de acuerdo con las necesidades y el contexto de la población que allí reside. Para la población rural, tener en cuenta las condiciones de integración regional, conflicto armado, contextos de ilegalidad y acompañar los planes de retorno y de fomento de proyectos agropecuarios y económicos que sean viables y sostenibles con la población urbana, ampliar posibilidades de empleos formales y de conformación de empresas pequeñas con estudios de viabilidad, acompañamiento y supervisión. Vincular al sector privado y a los gremios económicos en la dinamización de estas iniciativas.
- Fortalecer las capacidades y liderazgo de las mujeres para desempeñar roles de mediación en los territorios y en escenarios de toma de decisiones en el marco del conflicto armado. Este aspecto está cobijado por las resoluciones 1325 de 2000 y 1820 de 2008 del Consejo de Seguridad de la ONU, relativas a la participación de la mujer en los procesos de paz, el reconocimiento integral de sus derechos y la adopción de un enfoque de género en procesos de construcción de paz.
- Respetar la autonomía, territorialidad y derechos colectivos de los pueblos indígenas en los procesos de reintegración y reconciliación.
- Desarrollar políticas de prevención y de atención dirigidas a las escuelas y colegios, con el objeto de proteger la niñez del reclutamiento, al igual que de los efectos de la guerra, la violencia y la

delincuencia organizada. Promover la recuperación del tejido social y fomentar la creación de espacios de reconciliación con miras a una transformación de cultura para la paz para el relevo generacional.

- Sobre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, la Fiscalía General de la Nación debe revelar a las víctimas casos de delitos cometidos, ya que por lo regular estos no son reconocidos en las audiencias de versión libre, además debe cumplir con lo demandado en cuanto a colaboración entre la Fiscalía y los desmovilizados para investigar el paradero de los secuestrados y los desaparecidos e informar oportunamente los resultados a los familiares (artículo 35, Ley 975 de 2005).
- A la Defensoría del Pueblo, fortalecer el acompañamiento a las comunidades víctimas y receptoras de población desmovilizada, dadas las condiciones de continuación del conflicto, reactivación de bandas criminales y persistencia de violaciones de derechos humanos.
- En coordinación entre la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, buscar que los desmovilizados entreguen los bienes lícitos e ilícitos a su nombre o de terceros. Resolver la identificación y entrega de las tierras despojadas a los campesinos propietarios o poseedores.
- Considerar las posibilidades de establecer la figura de *holding pattern* o mantenimiento de las estructuras de los grupos armados con miras a la efectividad de futuros procesos de DDR. Como en el caso de Colectivos del Café, existen ventajas organizativas que favorecen el proceso de reintegración y reconciliación comunitaria.
- Es necesario establecer un equilibrio entre las políticas de reintegración y las políticas de reparación de víctimas. Lo anterior, además, implica instaurar escenarios de articulación entre ambos procesos en la medida en que la reincorporación de excombatientes no puede prescindir de la recuperación de la justicia y el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

Bibliografía

Libros

- Acuña, N. (2014). *Pescando en tierra: Una aproximación al proceso organizativo de los pescadores artesanales del Magdalena Medio*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Alonso, M. (1997). *Conflicto armado y configuración regional: El caso del Magdalena medio*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Arango, O. (1989). *Pereira, años 80*. Pereira: Funderalda.
- Arboleda, G. (1956). *Historia de Cali. Desde los orígenes de la ciudad hasta la expiración del periodo colonial*. Cali: Biblioteca de la Universidad del Valle.
- Arcila, M. T. (2003). *Magdalena Medio. Desarrollo regional: una tarea común universidad-región*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Banco de la República (2014). *Boletín económico regional. I trimestre 2014. Costa Caribe*. Bogotá: Banco de la República.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). *Desafíos para la reintegración: Enfoques de género, edad y etnia*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- CINEP/PPP (2005). *Biopedagogía: Sistematización de la estrategia educativa del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena medio*. Bogotá: CINEP/PPP.
- CINEP/PPP (2014). *Minería y conflictos en el Caribe colombiano: Hacia una ecología política de la minería de carbón. Documentos Ocasionales, 78*.

- CINEP/PPP (Ed.). (2006). *Conflictos poderes e identidades en el Magdalena Medio. 1990-2001*. Bogotá: Colciencias – CINEP/PPP.
- Comisión de la Superación de la Violencia. Pacificar la Paz (1992). *Lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz*. Bogotá: Editorial Presencia.
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2007). *Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?* Bogotá: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009). *Memorias en tiempo de guerra: Repertorio de iniciativas*. Bogotá: Punto Aparte.
- Corporación Autónoma de Risaralda - Carder (s.f.). *Diagnóstico de riesgos ambientales municipio de Pereira*. Pereira: Corporación Autónoma de Risaralda – Carder.
- De Greiff, P. (2006). *The Handbook of Reparations*. New York: Oxford University Press.
- De Roux, F. (1996). *Documento central de diagnóstico, conclusiones y recomendaciones*. Bogotá: Programa de Desarrollo y Paz en el Magdalena Medio.
- Duque, L., Friede, J. y Jaramillo, J. (1963). *Historia de Pereira*. Pereira: Edición del Club Rotario de Pereira.
- Echandía, C. (2013). *Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
- Escobedo, R. (2009). *Dinámica de la violencia en el departamento de Córdoba 1967-2008*. Bogotá: Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.
- Fundación Ideas para la Paz (2014). *Retorno a la legalidad o reincidencia de excombatientes en Colombia: Dimensión del fenómeno y factores de riesgo*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
- Fundación Seguridad y Democracia (2005). *Desmovilización del Bloque Calima de las AUC*. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia.
- García-Durán, M. (2006). *Movimiento por la paz en Colombia: 1978-2003*. Bogotá: Ediciones Antropos.
- González, F. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá: Odecofi - CINEP/PPP.
- González, F., Bolívar, I. y Vásquez, T. (2003). *Violencia política en Colombia. De la Nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá: CINEP/PPP.

- Heinich, N. (1991). Norbert Elias. *Historia y cultura en Occidente*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Jaramillo, S., Giha, Y. y Torres, P. (2009). *Transitional Justice and DDR: The Case of Colombia (case study)*. Nueva York: International Center for Transitional Justice.
- Kalyvas, S. (2010). *La lógica de la violencia en la guerra civil*. (P. Piedras, trad.) Madrid: Akal.
- Lederach, J. (1999). *The journey toward reconciliation*. Scottsdale: Herald Press..
- McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, C. (2005). *Dinámica de la contienda política*. Barcelona: Editorial Hacer.
- MOE - CNAI. (2007). *Monografía político electoral. Departamento de Cesar. 1997 a 2007*. Bogotá: MOE - CNAI.
- PNUD (2011). *Colombia rural, razones para la esperanza: Informe nacional de desarrollo humano*. Bogotá: PNUD.
- PNUD (2011). *El Caribe colombiano frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)*. Bogotá: PNUD.
- Rodriguez, M. (1993). *El empresario industrial del viejo Caldas*. Bogota: Uniandes.
- Toro, B. (1994). *La revolución o los hijos: Mujeres y guerrilla. EPL, M-19, Quintín Lame, PRT*. Bogotá: Departamento de Humanidades, Universidad de Los Andes.
- Turriago, G. y Bustamante, J. (2003). *Estudio de los procesos de reinserción en Colombia. 1991-1998*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz - Alfaomega Colombiana S.A.
- Villarraga, A. (2006). *La reinserción en Colombia: experiencias, crisis humanitaria y política pública*. Bogotá: Fundación Cultura Democrática.
- Villarraga, A. y Plazas, N. (1994). *Para reconstruir los sueños: una historia del EPL*. Bogotá: Colcultura - Progresar - Fundación Cultura Democrática.
- Viloria, J. (2009). *Economía y conflicto en el cono sur del departamento de Bolívar*. Cartagena de Indias: Banco de la República - Sucursal Cartagena.

Capítulos de libros

- Acevedo, T. (2011). Estructuras de poder político y electoral. En C. López (Ed.). *Monografía político electoral. Departamento de Santander. 1997 a 2007*. Bogotá: MOE-CNAI.
- Agudelo, D. (2012). La Iglesia católica en Cali durante el siglo XX: Una presencia viva y desconcertante. En VV. AA. *Historia de Cali siglo XX. Tomo II. Política*. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 123-142.
- Arévalo, L. y Guaquetá, M. (2014). La seguridad en Cali: Entre políticas municipales y la degradación del conflicto armado. En VV. AA. *Violencia urbana. Radiografía de una región*. Bogotá: Aguilar. 111-172.
- Ayala, C. (2012) Política y dinamita. La presencia de Cali en la historia colombiana del siglo XX. En VV. AA. *Historia de Cali siglo XX. Tomo II. Política*. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 25-68.
- Barrera, V. (2014). Las vicisitudes de la integración, Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar. En F. González (Ed.). *Territorio y conflicto en la Costa Caribe*. Bogotá: Odecofi – CINEP/PPP.
- Benítez, E. (2012). Cali en la primera mitad del siglo XX: Mentalidades y sensibilidad. En VV. AA. *Historia de Cali siglo XX. Tomo III. Cultura*. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 27-48.
- Beristain, C. M. (2005). Reconciliación luego de conflictos violentos: un marco teórico. En G. Pacheco Oreamuno, L. Acevedo Narea, y G. Galli, (Eds.), *Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social*. Costa Rica: IIDH. 20-38.
- Camacho, M. (1981). Contribución del Valle del Cauca a la epopeya de la Independencia. En Alcaldía de Santiago de Cali (Ed.). *Santiago de Cali: 450 años de historia*. Santiago de Cali: Editorial XYZ. 35-63.
- Delgado, A. (2006). El conflicto laboral en el Magdalena medio. En M. Archila, I. Bolívar, Á. Delgado, et al. (Eds). *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena medio. 1990-2001*. Bogotá: CINEP/PPP - Colciencias.
- Duque, U. (1995). Estado del arte. En PDPMM (Ed.), *Diagnóstico general del Magdalena Medio. Unidad de Convivencia y Paz*. Barrancabermeja: PDPMM.

- Echandía, C. (2008). Dimensiones territoriales del conflicto armado y la violencia en Colombia. En F. González (Ed.). *Hacia la reconstrucción del país: desarrollo, política y territorio en regiones afectadas por el conflicto armado*. Bogotá: CINEP/PPP.
- Escorcia, J. (1981). La sociedad caleña en la primera mitad del siglo XIX. En Alcaldía de Santiago de Cali (Ed.). *Santiago de Cali: 450 años de historia*. Cali: Editorial XYZ. 101-125.
- Fundación Social (2011). Propuesta para la construcción de procesos de reconciliación en el Valle del Cauca. En C. Cortés (Ed.). *Región y reconciliación: claves de política pública desde lo local*. Bogotá: Fundación Social.
- García, M. (2002). Luchas estudiantiles. En M. Archila, Á. Delgado, M. García y E. Prada. *25 años de luchas sociales en Colombia. 1975-2000*. Bogotá: Ediciones Antropos. 167-202.
- García-Durán, M. (2011). La sociedad civil en los procesos de paz en Colombia. En F. Sarmiento (ed.) *Lecciones para la paz negociada. Retrospectiva histórica en Colombia*. Bogotá: Corcas Editores.
- González, F. (2014). Configuración regional y violencia: a modo de introducción. En F. González (Ed.). *Territorio y conflicto en la Costa Caribe*. Bogotá: Odecofi - CINEP/PPP.
- González, J. (2011). El Magdalena medio. En J. González, M. Cardozo, G. Rivas, G. Ruiz, C. Castro, D. Galvis. *Circuitos, centralidades y estándar de vida. Un ensayo de geografía económica. Colección Territorio, Poder y Conflicto*. Bogotá: Odecofi - CINEP/PPP.
- Hernández, L. (2014). Suroccidente (Valle, Cauca, Nariño y Putumayo): Contexto de conflicto armado, violencia y situación de las experiencias de DDR. En Centro de Memoria Histórica. *Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama post acuerdos con AUC*. Bogotá: Centro de Memoria Histórica. 295-445.
- Leal, F. (1999). Pasado y presente de la guerra y la paz. En F. Leal (Ed.). *Los laberintos de la guerra: Utopías e incertidumbres sobre la paz*. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales.
- Madariaga, P. (2006). Región, actores y conflicto: los episodios. En M. Archila, I. Bolívar, Á. Delgado, et al. (Eds). *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena medio. 1990-2001*. Bogotá: CINEP/PPP - Colciencias.

- Nuñez, M. P. (2007). Contexto de violencia y conflicto armado. En C. López (Ed.). *Monografía político electoral. Departamento de Risaralda: 1997 a 2007*. Bogotá: MOE - CNAI.
- Ocampo, J. A. (1981). El desarrollo económico de Cali en el siglo XX. En Alcaldía de Santiago de Cali (Ed.). *Santiago de Cali: 450 años de historia*. Santiago de Cali: Editorial XYZ. 127-148.
- Ossa, C. (2009). El gobierno Barco reveló la magnitud del conflicto y la dificultad de lograr la paz. En A. Villarraga (ed. y comp.). *Se inician acuerdos parciales con las guerrillas. Pacto político con el M-19. Gobierno del presidente Virgilio Barco-Biblioteca de la paz*. Tomo II. Bogotá: Nueva Editorial.
- Prada, E. (2002). Luchas campesinas e indígenas. En M. Archila, Á. Delgado, M. García y E. Prada. *25 años de luchas sociales en Colombia. 1975-2000*. Bogotá: Ediciones Antropos. 121-166.
- Quiroga, D. y Ospina-Posse, T. (2014). Conflicto armado en la región Caribe: un paneo por sus etapas y sus dinámicas en cinco décadas de violencia. En F. González (ed.). *Territorio y conflicto en la Costa Caribe*. Bogotá: Odecofi - CINEP/PPP.
- Rettberg, A. (2014). Encuentro con los otros: perspectivas para la reconciliación en Colombia. En A. M. Ibáñez y D. Mejía (comp.). *Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?* Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Romero, M. (2006). Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia. Una experiencia para no repetir. En F. Leal Buitrago (comp.). *En la encrucijada: Colombia en el siglo XXI*. Bogotá: Norma.
- Sarmiento, F. (2012). Aprendizajes. En F. Sarmiento (comp.). *Educación, desarrollo y paz en el Magdalena medio*. Bogotá: CINEP/PPP. 57-129.
- Villarraga, Á. (2008). Vicisitudes del proceso de paz de Betancur. En Á. Villarraga (ed. y comp.). *Tregua y cese al fuego bilateral. FARC, EPL, M-19 Y ADO. Tomo I. Gobierno del presidente Belisario Betancur-Biblioteca de la paz*. Bogotá: Nueva Editorial.
- Villarraga, Á. (2009). Se inician los acuerdos parciales con las guerrillas. En Villarraga, Á. (ed. y comp.). *Se inician acuerdos parciales con las guerrillas. Pacto político con el M-19. Tomo II. Gobierno del presidente Virgilio Barco-Biblioteca de la paz*. Bogotá: Nueva Editorial.

Artículos en revistas y papers

- Alonso, M. (1992). Conflicto armado y configuración regional: El caso del Magdalena medio. *Estudios Políticos*, 2, 87-112.
- Banco de Datos de Violencia Política (2013). Entre niebla y montaña. *Noche y Niebla*, 48, 69-103.
- Bernal, F. (2004). *Crisis algodonera y violencia en el Departamento del Cesar*. Cuadernos PNUD-MPS, 2.
- Brudholm, T. (2003). The Justices of Truth and Reconciliation. *Hypatia*, 18(2), 189-196.
- Cepeda, I. (2006, septiembre) Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia. *Revista Cetil*, 1(2), 101-112.
- Cruz Rodríguez, E. (2013). "Todos somos hijos del Café": sociología política del Paro Nacional Cafetero. *Entramado*, 9, 138-158.
- Estrada, F. (2011, septiembre). Por los senderos del café. La bebida del diablo: Historia económica y política del café en Colombia. *Credencial Historia (Credencial)*, 261.
- Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos – IEGAP (2013, junio). Desarme, Desmovilización y Reintegración, DDR: una introducción para Colombia. *Cuaderno de Análisis*, 1(13).
- López de la Roche, F. (1993). La reinserción como construcción de una nueva forma de relación social. *Historia Crítica*, 7, 15-19.
- Martínez Herrera, L. A. (2006). Violencia y desplazamiento: Hacia una interpretación de carácter regional y local. El caso de Risaralda y su capital Pereira. *Estudios Fronterizos*, 7(14), 81-112.
- Murillo Amarís, E., S.J. (2012). *Hacia una política pública de reconciliación social: Tipología y casos*. (Investigación doctoral). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
- Murillo, A. (1999, junio). Historia y sociedad en el Magdalena medio. *Controversia*, 174.
- Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, ODDR (2012). *Presencia de organizaciones guerrilleras y 'Bacrim' en territorio colombiano. 2012*. Universidad Nacional de Colombia.

- Orozco, I. (2002). La posguerra colombiana: divagaciones sobre la venganza, la justicia y la reconciliación. *Análisis Político*, 46, 78-99.
- Patiño, O. (1992). Hablan los desmovilizados: cuatro opiniones. *Consenso*, 2, 8.
- PDPMM – OIM (2013). *Fase de construcción participativa del proyecto piloto diagnóstico para contribuir al acceso de las víctimas de monterrey (Simití – sur de Bolívar) a los procedimientos de restitución de tierras y reparación colectiva e individual*. Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
- Pérez Salazar, B. (2013, diciembre). *Violencia urbana en el post conflicto bélico*. Fundación Paz y Reconciliación.
- Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, PDPMM (2013). *Sujeto colectivo y ruta de reparación integral Simití, sur de Bolívar*. Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2008). *Hacia un Valle del Cauca incluyente y pacífico. Informe Regional de Desarrollo Humano 2008*. Cali, Colombia.
- Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD. (2005). *Hechos del callejón*.
- Rozema, R. (2008, agosto). Urban DDR-Processes: Paramilitaries and Criminal Networks in Medellín, Colombia. *Journal of Latin American Studies*, 40(3), 423-452.
- Sampson, S. L. (2003). From Reconciliation to Coexistence. *Public Culture*, 15(1). 181-186.
- Toro Zuluaga, G. (2005, enero-junio). Eje Cafetero colombiano: compleja historia de caficultura, violencia y desplazamiento. *Revista de Ciencias Humanas*, 35, 127-149.
- Turriago, G. (1992). Consolidar el Estado. *Consenso*, 11.
- Uribe, M. V. (1993, septiembre). Apuntes para una sociología del proceso de reinserción del EPL. *Documentos ocasionales. La Paz: más allá de la guerra*, 68, 68-113.
- Villarraga, Á. (2013). Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en Colombia. *Colombia Internacional*, 77, 107-140.

Documentos

- Alcaldía de Cali. (2012). *Proyecto por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2012-2015 del municipio de Santiago de Cali*. Santiago de Cali.
- Alcaldía de Perira (2012). *Indicadores socioeconómicos. Síntesis estadística mensual-febrero 2012*.
- Bonet, J. y Meisel, A. (2006). El legado colonial como determinante como determinante del ingreso per cápita departamental en Colombia. *Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional*, 75.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2010). *Censo general 2005. Perfil Cesar*. Bogotá: DANE.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2010). *Perfil departamental Cesar*. Bogotá: DANE.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2012). *Cali en cifras 2011*.
- Encuentro Comunal por la Vida Digna (2009). *Exigencias del campesinado de la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra*. Barrancabermeja.
- Gamarra, J. (2005). La economía del Cesar después del algodón. *Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional*, 59.
- Gobernación del Cesar (2009). *Política pública para la lucha contra la pobreza: Cesar incluyente, al alcance de todos y en contra de la pobreza*. Valledupar: Gobernación del Cesar.
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC (2012). *Atlas de la distribución de la propiedad Rural en Colombia*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. (2002). *Uso adecuado y conflictos de uso de las tierras en Colombia*. Bogotá: IGAC.
- Meisel, A. y Pérez, G. (2006). Geografía física y poblamiento en la Costa Caribe colombiana. *Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional*, 73.
- Méndez, M. L. (2011). *Revisión de la literatura especializada en reconciliación*. (Documento de trabajo). Bogotá.
- Ministerio del Trabajo - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2013). *Estudio de perfil productivo rural y urbano del municipio de Pereira*. Bogotá.

- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Oppdh DIH (2005). *Panorama actual de Bolívar*. Bogotá: Presidencia de la República.
- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Oppdh DIH (2006). *Dinámica de la confrontación armada en la confluencia entre los Santanderes y el sur del Cesar*. Bogotá: Vicepresidencia de la República.
- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Oppdh DIH (2007a). *Diagnóstico departamental Risaralda*. Bogotá: Vicepresidencia de la República.
- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Oppdh DIH (2007b). *Diagnóstico departamental del Cesar*. Bogotá: Vicepresidencia de la República.
- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Oppdh DIH (2009a). *Diagnóstico de la situación del pueblo indígena kankuamo*. Bogotá: Vicepresidencia de la República.
- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Oppdh DIH (2009b). *Dinámica de las bandas asociadas al narcotráfico después de la desmovilización de las autodefensas: 2005-mediados 2008*. Bogotá.
- Otero, A. (2012). Cali a comienzos del siglo XXI: ¿Crisis o recuperación? *Documentos de Trabajo sobre Economía Regional*, 172, 1-64.
- Personería Municipal de Santiago de Cali (2014). *Informe sobre la situación de la población víctima del conflicto armado en Santiago de Cali 2013-2014*. Santiago de Cali.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. (2010). *Cesar: Análisis de la conflictividad*. Bogotá: PNUD. (Documento de trabajo).
- Saffon, M. P. y Uprimny, R. (2006). *Transitional Justice, Restorative Justice and Reconciliation. Some insights from the Colombian Case. Working paper: "Coming to terms" with Reconciliation: Critical Perspectives on the Practice, Politics, and Ethics of Transitional Justice*. (Working Paper). University of Wisconsin.

Prensa

Diario del Otún (30 de mayo de 2013). Risaralda, atractivo para las Farc. *Diario del Otún*.

Dirección Editorial (junio de 2013). La trágica historia del EPL en Urabá. *Las 2 Orillas*. Recuperado de: <http://www.las2orillas.co/la-tragica-historia-del-epl-en-uraba/>

El Espectador (16 de mayo de 2008). Condenan a Mauricio Pimiento a siete años por parapolítica. *El Espectador*.

El Espectador (16 de mayo de 2008). Condenan a Mauricio Pimiento a siete años por parapolítica. *El Espectador*.

El Espectador (24 de agosto de 2012). Los Capos del Cartel de Cali. *El Espectador*.

El País (09 de septiembre de 2013). Condenan a oficial del Ejército por vínculos con paramilitares. *El País*.

El País (29 de octubre de 2013). En 2013 homicidios en Cali han aumentado un 12 %. *El País*. Recuperado de: <http://www.elpais.com.co>

El Pueblo (03 de agosto de 2014). Cali registra un alto índice de delitos contra sindicalistas. *El Pueblo*.

El Tiempo (09 de septiembre de 1993). Reinsertados protestan. *El Tiempo*.

El Tiempo (27 de octubre de 2012). Fundación Carvajal. Abriéndole caminos a la equidad. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12336944>.

El Tiempo (29 de junio de 2011). Lista reglamentación de ley que beneficia a 25.000 desmovilizados. *EL Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9747935>

ElEspectador.com (10 de junio de 2014). Aunque disminuye el desplazamiento en Colombia sigue al nivel de Siria. *El Espectador*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/aunque-disminuye-el-desplazamiento-colombia-sigue-al-ni-articulo-497551>

Molano, A. (14 de julio de 2012). De los cultivos ilegales a la minería ilegal en Simití. *El Espectador*.

Saavedra, A. M. (16 de febrero de 2014). "Quisiera que se resalte lo bueno de Aguablanca": presidente de la Fundación Carvajal. *El País*.

Zuluaga Gómez, V. (10 de octubre de 2013). Partidos políticos y sindicalismo en Pereira. *La Tarde*.

Referencias en Internet

Acero, H. (21 de febrero de 2011). La criminalidad en aumento: percepciones, cifras y metas. *Razón Pública* [en línea]. Recuperado de: <http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/1827-la-criminalidad-en-aumento-percepciones-cifras-y-metas.html> (último acceso: 2014 de 12 de 4).

ACNUR. (s.f.). Diagnóstico departamental Bolívar. *ACNUR* [en línea]. Recuperado de: http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2166.pdf?view=1

Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR (2014). Reseña histórica. *Agencia Colombiana para la Reintegración* [en línea]. Recuperado de: <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx> (último acceso: 10 de diciembre de 2014).

Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR (2015). Reseña histórica. *Agencia Colombiana para la Reintegración* [en línea]. Recuperado de: <http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx> (último acceso: 24 de enero de 2015).

Alcaldía de Cali (2011). Cali en cifras. *Alcaldía de Cali* [en línea]. Recuperado de: http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_2011_pub (último acceso: 18 de julio de 2014).

Alcaldía de Pereira (2012). Plan de desarrollo municipal Pereira 2012-2015. *Alcaldía de Pereira* [en línea]. Recuperado de: http://portal.pereira.gov.co:7778/PUBLICADOR/PLAN_DESARROLLO/PLAN_DESARROLLO-F.pdf.

Alcaldía de Pereira (2014) Portal Institucional Pereira. *Alcaldía de Pereira* [en línea]. Recuperado de: http://portal.pereira.gov.co:7778/portal/page?_pageid=78,22854&_dad=portal&_schema=PORTAL (último acceso: 27 de 05 de 2014).

Alcaldía de Pereira (30 de mayo de 2014) Contexto socioeconómico de Pereira. *Alcaldía de Pereira* [en línea]. Recuperado de: <http://portal.pereira.gov.co:7778/PUBLICADOR/ASI-SOMOS/ECONOMICA.pdf> (último acceso: 27 de 5 de 2014).

- Cámara de Comercio de Pereira (s.f.) Portal de la Cámara de Comercio de Pereira. *Cámara de Comercio de Pereira* [en línea]. Recuperado de: <http://www.camarapereira.org.co/es/inicio.html>
- Centro de Memoria Histórica (12 de agosto de 2014). Infografía de los nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama post-desmovilización de las AUC. Informes DAV. Acuerdos de la Verdad. *Centro de Memoria Histórica* [en línea]. Recuperado de: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2014/informes-dav>
- Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (s.f.) Hechos de paz. *Centro de Memoria, Paz y Reconciliación* [en línea]. Recuperado de: <http://centromemoria.gov.co/HechosDePaz/>
- Chernick, M. (1996, octubre-diciembre) Aprender del pasado: Breve historia de los procesos de Paz en Colombia (1982-1996). *Colombia Internacional. Edición especial: Seminario sobre procesos de negociación y paz*, 36, 4-8 [en línea] Recuperado de: <http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/241/1.php>
- Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, febrero). Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. *Mesa de Conversaciones* [en línea] Recuperado de: <https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20Comisi%C3%B3n%20Hist%C3%B3rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V%C3%ADctimas.%20La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf>
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (17 de enero de 2006). Definiciones estratégicas. *Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación* [en línea]. Recuperado de: <http://www.cnrr.visiondirecta.com/09e/spip.php?article7>.
- Conciliation Resources (s.f.). Perfiles. *Conciliation Resources* [en línea]. Recuperado de: http://www.c-r.org/sites/default/files/21_Perfiles.pdf
- Corporación Transparencia por Colombia (2010). Índice de transparencia nacional. *Transparencia por Colombia* [en línea]. Recuperado de: http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=497 (último acceso: 29 de 06 de 2014).

Defensoría del Pueblo (11 de abril de 2014). Defensoría advierte alto riesgo para jóvenes en la Comuna Villa Santana de Pereira y nueve barrios de ese sector. *Defensoría del Pueblo* [en línea]. Recuperado de: <http://defensoria.gov.co/es/nube/regiones/983/Defensor%3%ADa-advierte-alto-riesgo-para-j%3%B3venes-en-la-Comuna-Villa-Santana-de-Pereira-y-nueve-barrios-de-ese-sector-Villa-Santana-SAT-amenazas-j%3%B3venes-Derechos-Humanos-Derecho-a-la-Integridad.htm> (último acceso: 15 de 07 de 2014).

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (14 de septiembre de 2010) Boletín censo general 2005 perfil Pereira. *DANE* [en línea]. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/66001T7T000.PDF

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (14 de septiembre de 2010). Boletín censo general 2005 perfil Cali. *DANE* [en línea]. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76001T7T000.PDF (último acceso: 25 de 07 de 2014).

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, *DANE* (14 de septiembre de 2010). Boletín censo general 2005 perfil Pereira. *DANE* [en línea]. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/66001T7T000.PDF (último acceso: 25 de 05 de 2014).

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, *DANE* (2014). Necesidades básicas insatisfechas. *DANE* [en línea]. Recuperado de: 2014. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>

Fernández, C. (2013) Perspectivas y retos de la reconciliación en Colombia. *Red Prodepaz* [en línea] Recuperado de: http://issuu.com/redprodepazsr/docs/reconciliaci__n

Fundación Carvajal (s.f.). Alta Consejería para la Reintegración. *Fundación Carvajal* [en línea]. Recuperado de: http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=37:proyecto-reintegrados-%E2%80%93alta-consejer%C3%ADa-para-la-reintegraci%C3%B3n-acr-y-monsanto-fund&Itemid=11&lang=es

Fundación Carvajal (s.f.). Perfil institucional. *Fundación Carvajal* [en línea]. Recuperado de: http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=10&Itemid=8&lang=es

- Gobernación de Risaralda (2012). Diagnostico Risaralda 2012. *Asamblea Departamental de Risaralda* [en línea]. Recuperado de: <http://www.asamblearisaralda.gov.co/sitio/images/stories/DIAGNOSTICO%20RISARALDA%202012/DIAGNOSTICO%20RISARALDA%202012%20-%20ANEXO.pdf>
- Gobernación del Cesar (2014). Información departamental. *Gobernación del Cesar* [en línea]. Recuperado el 15 de julio de 2014, de: <http://www.cesar.gov.co>.
- Guzmán Barney, Á. (9 de abril de 2013). Cali y el Valle: el Estado local capturado por la mafia. *Razón Pública* [en línea]. Recuperado de: <http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3704-cali-y-el-valle-el-estado-local-capturado-por-la-mafia.html>
- International Center for Transitional Justice, ICTJ (s.f.). ¿Qué es la Justicia Transicional? *International Center for Transitional Justice* [en línea]. Recuperado de: <https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>
- Negrete, J. y Loaiza, A. (19 de marzo de 2012). Caracterización de la comuna 15 en función de su historia, su población, sus problemas sociales y las dinámicas políticas [mensaje en un blog]. Recuperado de: <http://jnegretepaloiazad.blogspot.com/2012/03/caracterizacion-de-la-comuna-15-en.html>
- Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, ODDR (2012). Ley 1424 de 2010: antecedentes, contexto y aplicación en el ámbito de la Justicia Transicional en Colombia. ODDR, *Universidad Nacional de Colombia* [en línea] Recuperado de: http://www.observatorioddr.unal.edu.co/productos_academicos/nuevos/ley1424de2010_antecedentes_contextoyaplicacion_en_el_ambito.pdf
- Personería Municipal Santiago de Cali (20 de octubre de 2014). Informe de seguridad y violencia. *Personería Municipal Santiago de Cali* [en línea]. Recuperado de: http://www.personeriacali.gov.co/sites/default/files/informes/archivos/Informe_de_Seguridad_y_violencia.Informe_de_Seguridad_y_violencia.pdf
- Rueda Enciso, J. E. (s.f.) Torres Giraldo, Ignacio. *Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango* [en línea]. Recuperado de: <http://www.banrepultural.org/blaavirtual/biografias/torrigna.htm> (último acceso: 15 de julio de 2014).
- Sáenz, J. D. (2009, diciembre). Configuración de una élite política en Cali: 1958-1998. *Revista CS*, 4, 147-176. Recuperado de: https://www.icesi.edu.co/revista_cs/images/stories/revistaCS4/articulos/06%20Jose%20D%20Saenz.pdf (último acceso: 09 de 09 de 2014).

Sierra, A. (2011) Hace 20 años se desmovilizó el EPL. *Semana*. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/hace-20-anos-desmovilizo-epl/236034-3>

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2015). Red Nacional de Información. Información al servicio de las víctimas. *Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas* [en línea]. Recuperado de: <http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes>

Urrea Giraldo, F. y Murillo Cruz, F. (1999). Dinámica del poblamiento y algunas características de los asentamientos populares con población afrocolombiana en el oriente de Cali. *Biblioteca Clacso* [en línea]. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/cidse/art4.pdf>

Verdad Abierta (11 de febrero de 2008). La desmovilización: el proceso de paz (2003-2006). *Verdad Abierta* [en línea]. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/244-la-historia/auc/54-periodo4>

Verdad Abierta (27 de octubre de 2011). Las otras masacres de ‘Juancho Prada’ *Verdad Abierta* [en línea]. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/las-victimas/3625-las-otras-masacres-de-juancho-prada>

Verdad Abierta (31 de mayo de 2012). La maquinaria de guerra del Bloque Calima. *Verdad Abierta* [en línea]. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/4033-la-maquinaria-de-guerra-del-bloque-calima-sp-938535506>

Verdad Abierta (12 de noviembre de 2012) Proceso de negociación del Caguán, 1998-2002. *Verdad Abierta* [en línea]. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/4303-proceso-de-negociacion-del-caguan-1998-2002>

Verdad Abierta (22 de agosto de 2013) La historia del ‘Juan Andrés Álvarez’. *Verdad Abierta* [en línea]. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/4803-la-historia-del-juan-andres-alvarez>

Verdad Abierta (16 de octubre de 2013). La Mesa: del sometimiento paramilitar a la libertad. *Verdad Abierta* [en línea]. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/masacres-seccion/4976-la-mesa-del-sometimiento-paramilitar-a-la-libertad>

Verdad Abierta (26 de octubre de 2014). “Colombia no aguanta más”: Padre Francisco de Roux. *Verdad Abierta* [en línea]. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/5489-colombia-no-aguanta-mas-padre-francisco-de-roux>

Bases de datos

CINEP/PPP (1975-2010) Sistema de Información Geográfica.

CINEP/PPP (1994-2015) Archivo Digital de Prensa.

CINEP/PPP (1979-2015) Base de Datos de Acciones Colectivas por la Paz (Datapaz).

CINEP/PPP (1975-2014) Base de Datos de Luchas Sociales.

Entrevistas

Cali:

1. Banco de Datos Cali, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 21 de julio de 2014.
2. Profesor Universidad ICESI Cali, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 21 de julio de 2014.
3. Asesor de Paz de la Alcaldía de Cali, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 21 de julio de 2014.
4. Gerente Ganchos y Amarras del Valle, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 21 de julio de 2014.
5. Profesional Reintegradora de la Agencia Colombiana para la Reintegración, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 22 de julio de 2014.
6. Asesora psicosocial Fundación Carvajal, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 22 de julio de 2014.
7. Asesor Comercial Fundación Carvajal, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 22 de julio de 2014.
8. Profesora Universidad Javeriana de Cali, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 22 de julio de 2014.
9. Presidente Ganchos y Amarras, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 22 de julio de 2014.
10. Profesor Universidad Autónoma de Occidente: entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 10 de septiembre de 2014.
11. Profesor Universidad Autónoma de Occidente (2): entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 10 de septiembre de 2014.

12. Profesora Universidad ICESI, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 10 de septiembre de 2014.
13. Profesor Universidad ICESI, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 10 de septiembre de 2014.
14. Entrevista profesional Fundación Paz y Bien, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 23 de octubre de 2014.
15. Entrevista Víctima Distrito de Aguablanca, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Cali, 23 de octubre de 2014.

Cesar

1. Quintero, U, integrante de SOPRASAR, entrevistadora: Andrea Gómez, Valledupar, 06 de noviembre de 2014.
2. Desmovilizado del EPL y miembro de SOPRASAR, entrevistadora: Andrea Gómez, Valledupar, 06 de noviembre de 2014.
3. Mendoza, E., miembro de EMPAGROC entrevistadora: Andrea Gómez, Valledupar, noviembre 28 de 2014.
4. Sánchez, A., coordinador Acuerdos para la Verdad en el departamento del Cesar, entrevistadora: Andrea Gómez, Valledupar, 28 de noviembre de 2014.
5. Residente, corregimiento La Mesa, entrevistadora: Andrea Gómez, Valledupar, 06 de noviembre de 2014.
6. Castro, M., miembro de EMPAGROC, entrevistadora: Andrea Gómez, Valledupar, 26 de noviembre de 2014.
7. Castro, A., miembro de EMPAGROC, entrevistadora: Andrea Gómez, Valledupar, noviembre 27 de 2014.
8. Molina, T., miembro de EMPAGROC entrevistadores: M. Alejandra Arias & L. Carlos Cote, corregimiento la Mesa, 25 de agosto de 2014.
9. Aguirre, E., miembro de Tres Estrellas, entrevistadora: Andrea Gómez, Valledupar, 27 de noviembre de 2014.
10. Castro, M., miembro de EMPAGROC, entrevistadores: M. Alejandra Arias, & L. Carlos Cote, corregimiento de La Mesa, 25 de agosto de 2014.

11. Sánchez, A., coordinador Acuerdos para la Verdad en el departamento del Cesar, entrevistadora: Andrea Gómez, Valledupar, 28 de noviembre de 2014.
12. Gaitán, O., corregidor del corregimiento de La Mesa, entrevistadores: M. Alejandra Arias, & L. Carlos Cote, corregimiento de La Mesa, 26 de agosto de 2014.
13. Lascarro, M., presidente JAC de La Mesa, entrevistadores: M. Alejandra Arias, & L. Carlos Cote, corregimiento de La Mesa, 26 de agosto de 2014.

Pereira

1. Exgerente Colectivos del Café, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 11 de junio de 2014.
2. Constitucionalista militante del EPL, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 11 de junio de 2014.
3. Abogado Colectivos del Café, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 12 de junio de 2014.
4. Desmovilizada del EPL, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 12 de junio de 2014.
5. Profesor Universidad Tecnológica de Pereira, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 12 de junio de 2014.
6. Desmovilizado del EPL, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 12 de junio de 2014.
7. Gerente Colectivos del Café, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 12 de junio de 2014.
8. Secretaria General Colectivos del Café, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 12 de junio de 2014.
9. Contadora Colectivos del Café, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 12 de junio de 2014.
10. Encargada Encomiendas Colectivos del Café, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 13 de junio de 2014.
11. Director Oficina Regional Agencia Colombiana para la Reintegración, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 17 de septiembre de 2014.

12. Decana Facultad Universidad Tecnológica de Pereira, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 17 de septiembre de 2014.
13. Representante Movimientos sociales Pereira, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 17 de septiembre de 2014.
14. Representante MOVICE, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 17 de septiembre de 2014.
15. Directora Escuela Taller de Calzado, entrevistadoras: María Alejandra Arias Hernandez y Magda López, Pereira, 18 de septiembre de 2014.
16. Asesor Escuela Taller de Calzado, entrevistadoras: María Alejandra Arias Hernandez y Magda López, Pereira, 18 de septiembre de 2014.
17. Sacerdote parroquia en Pereira, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 19 de septiembre de 2014.
18. Funcionario Unidad de Víctimas, entrevistadora: María Alejandra Arias Hernandez, Pereira, 19 de septiembre de 2014.

Sur de Bolívar

1. Desmovilizado del Bloque Central Bolívar, entrevistador: Luis Carlos Cote, corregimiento de Monterrey, Agosto 2014.
2. González, C., miembro del Comité Cívico del Sur de Bolívar, entrevistadora: Andrea Gómez, corregimiento de Monterrey, Bogotá, 20 de noviembre de 2014.
3. Miembro del Comité Cívico del Sur de Bolívar, entrevistador Luis Carlos Cote, corregimiento de San Blas, agosto 2014.
4. Desmovilizado del Bloque Central Bolívar, entrevistador: Luis Carlos Cote, corregimiento de san Blas, agosto 2014.
5. Desmovilizado del Bloque Central Bolívar, entrevistador: Luis Carlos Cote, corregimiento de Monterrey, agosto 2014.
6. Desmovilizado del Bloque Central Bolívar, entrevistador: Luis Carlos Cote, corregimiento de San Blas, agosto 2014.
7. Miembro del Comité Cívico del Sur de Bolívar, entrevistador: Luis Carlos Cote, corregimiento de San Joaquín, agosto 2014.

8. Miembro del Comité Cívico del Sur de Bolívar, entrevistador: Luis Carlos Cote, corregimiento de Santa Lucia, agosto 2014.
9. Mujer miembro del Comité Cívico del Sur de Bolívar, entrevistador: Luis Carlos Cote, corregimiento de San Blas, agosto 2014.
10. Miembro del Comité Cívico del Sur de Bolívar, entrevistador: Luis Carlos Cote, corregimiento de Santa Lucía, agosto 2014.
11. Mujer habitante de San Blas, entrevistador: Luis Carlos Cote, corregimiento de San Blas, agosto 2014.
12. Miembro del Comité Cívico del Sur de Bolívar, entrevistador: Luis Carlos Cote, corregimiento de San Joaquín, agosto 2014.
13. Abdala, A., miembro del Comité Cívico, exdirector ejecutivo de la Asociación de Municipios del Sur de Bolívar, entrevistador: Luis Carlos Cote, agosto 2014.
14. Rincón, E., alcalde de Simití, entrevistador: Luis Carlos Cote, Simití, agosto 2014.
15. Mujer miembro del Comité Cívico del Sur de Bolívar, entrevistador: Luis Carlos Cote, corregimiento Santa Lucía, agosto 2014.
16. Miembro del Comité Cívico del Sur de Bolívar, entrevistador: Luis Carlos Cote, corregimiento de Santa Lucía, agosto 2014.
17. Personero del municipio de Simití, entrevistador: Luis Carlos Cote, Simití, agosto 2014.
18. Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Progreso, entrevistador: Luis Carlos Cote, agosto 2014.
19. "La Organización Femenina Popular", diócesis de Barrancabermeja, entrevistador: Luis Carlos Cote, Barrancabermeja, agosto 2014.
20. Madero, R. Corporación Corponación, entrevistador: Luis Carlos Cote, Barrancabermeja, agosto de 2014.

Entrevistas a académicos y funcionarios

Acevedo, C. Coordinadora Adjunta del Programa de Reintegración con Enfoque Comunitario, Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Entrevistadoras: Magda López, María Alejandra Arias y Andrea Guzmán, noviembre de 2014.

De Andreis, G. Exdirectora Programática de Reintegración de la ACR, consultora experta en DDR. Entrevistadora: Magda López, octubre de 2014.

Nussio, E. Investigador experto en temas de DDR. Entrevistadora: Magda López, noviembre de 2014.

Ugarriza, J. E. Investigador experto en temas de DDR. Entrevistadora: Magda López, septiembre de 2014.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



Organización
Internacional
para las
Migraciones

www.cinep.org.co

www.oim.org.co